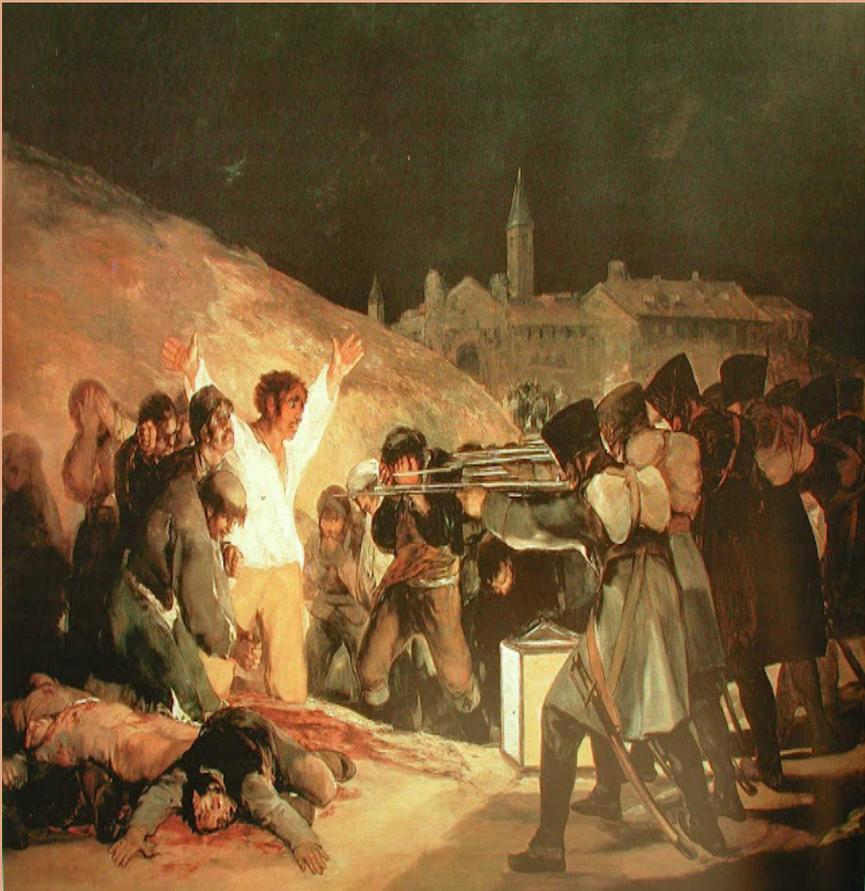


La imbatible Ayotzinapa y el Estado contrainsurgente

Cuauhtémoc Ruiz



Cuauhtémoc Ruiz nació en Acapulco, Guerrero. Aunque se ha desempeñado como profesor y se ha empleado en otros oficios, se ha dedicado siempre a la militancia revolucionaria. Fue director de *Pluma, revista teórica de política y arte* (2006-2016) y del periódico *El Socialista* en distintas épocas. Mediante un largo y documentado ensayo sobre la República Popular China obtuvo un grado universitario. Fue asesor del escritor y cineasta Diego Enrique Osorno en la Comisión de la Verdad de Oaxaca, que investigó las violaciones a los derechos humanos habidos en esa entidad en el año 2006-7. Allí se entrenó en la lectura de expedientes judiciales y en el estudio de crímenes políticos. Ha escrito cientos de artículos sobre política, economía, historia. Entre sus libros están *Sesenta años del sindicato de Euzkadi* (SNRTE, 1995) y *Colosio, sospechosos y encubridores* (Ed. Para leer en libertad, 2019).

**LA IMBATIBLE AYOTZINAPA
Y EL ESTADO CONTRAINSURGENTE**

Cuauhtémoc Ruiz

Ediciones El Socialista
Contacto: cuauhtemocruizortiz@gmail.com
Julio de 2024
Ilustración de portada:
Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808,
de Francisco de Goya.

Diseño gráfico: Fanny González
Correo electrónico: meninaroxa1917@gmail.com

Printed in México
Impreso en México en el mes de julio de 2024
Imprenta Belizar, Calle Fray Juan de Torquemada no. 39.
Colonia Obrera, Ciudad de México.
Todos los derechos reservados
Hecho el depósito que marca la ley
ISBN: En trámite.

ÍNDICE

Prólogo	5 -14
Capítulo I	15-36
Capítulo II	37-56
Capítulo III	57 -81
Capítulo IV	83-91
Capítulo V	93-112
Capítulo VI	113-130
Capítulo VII	131-150
Capítulo VIII	151-177
Capítulo IX	179-208

PRÓLOGO

43 futuros maestros han desaparecido. El México de las armas teme a quienes enseñan a leer.

Juan Villoro

A casi diez años de la Noche de Iguala (septiembre 2014), seis de los cuales corresponden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la sociedad aún no sabe qué pasó con los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, ni por qué razón lo fueron. Están apresados ex funcionarios, narcos y militares, ninguno por estar directamente implicado. No hay un solo condenado. Las relaciones carnales del presidente AMLO con los generales conducen a que Ayotzinapa no tendrá verdad ni justicia. El Grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) que desde hace años vino a colaborar con las investigaciones ha llegado a la misma conclusión:

“Distintas autoridades saben lo que sucedió o tienen información relevante que no ha sido proporcionada”. Aseguran que en el México de hoy persiste “un sistema que avala métodos ilícitos y la permanencia del efecto corruptor que destruye la justicia, invalida la credibilidad y mantiene la impunidad.” Concluye que “las víctimas y familiares, así como la sociedad necesitan el compromiso real con la verdad” y que, al no haberla, se deja “a las víctimas de nuevo en la cuneta de la historia.”

Luego de hacer esta brutal denuncia en su VI y último informe (julio de 2023), este equipo decidió dar por concluidos sus empeños y salió del país.

La prueba Ayotzinapa no ha sido superada por las autoridades. En materia de respeto a los derechos ciudadanos México sigue en la oscuridad y los verdugos caminan despreocupados en las calles.

Empero, hay suficientes pruebas y evidencias para sostener, sin ningún género de duda, quiénes fueron los perpetradores. El rompecabezas está incompleto pero existen las piezas suficientes que delinean los rasgos inconfundibles de la mayoría de los agresores. Nuestra conclusión es enfática-

tica: las corporaciones armadas, ayudadas por narcos, llevaron a cabo una gigantesca represión política, resultado de un plan previa y cuidadosamente elaborado, que fue ejecutado con coordinación, profesionalismo y todos los recursos del aparato estatal: luego de verter sangre en abundancia se abrió paso a las procuradurías, el poder judicial, la prensa de derecha, etcétera, para que obstruyeran el conocimiento de la verdad y para propagar una versión absolutoria de los verdaderos responsables.

El GIEI se preguntó:

¿Cómo es posible que desaparezcan 43 jóvenes en una ciudad como Iguala en la que están presentes dos batallones militares y todas las corporaciones de seguridad, sin el conocimiento o la colaboración de las mismas?

A lo que contestó:

“Para el GIEI es evidente que se dio una **actuación conjunta de autoridades en el ámbito estatal y federal.**” “Cuando el GIEI preguntó a un testigo protegido implicado en los hechos cómo fue eso posible, señaló: ‘Teníamos el control de todo, **la organización era el Estado...**’ ” (1)

Fue el Estado. El ente estatal, máxime si actúa en un entorno de agobiante pobreza y extrema desigualdad, en el que es común la protesta popular, como en el estado de Guerrero, tiene entre sus funciones principales asesinar, secuestrar, desaparecer, torturar, perseguir, aterrorizar, injuriar, humillar, desorganizar y desmoralizar a aquellos sectores de la población que se sublevan o que simplemente son considerados un peligro para el Orden. En Guerrero, de tanto que reprime, podemos decir que el aparato estatal, destacadamente el Ejército, es un *criminal serial*.

Pareciera que la represión política concluyó con la pacífica caída del régimen del PRI, en el año 2,000, y aun antes. Desapareció en 1985 una de las dependencias encargadas de este menester –la Dirección Federal de Seguridad- y se avanzó parcialmente en la democratización electoral y en otros ámbitos, pero los mandarines continuaron usando la violencia ilegal y sistemáticamente. El pico ofensivo fue en los años 70s, con cientos de asesinados-desaparecidos, la mayoría de los cuales eran integrantes de las guerrillas campesinas de Guerrero. Posteriormente Carlos Salinas de Gortari, para afianzarse en la presidencia luego del grosero fraude electoral que cometió el PRI en 1988, escabechó a unos 300. (2). De 1994 en adelante, asustados por el impacto del levantamiento armado de los indígenas neo zapatistas, los gobernantes han recrudecido el uso de la violencia contra los inconformes continua y metódicamente.

En esta mirada a la trayectoria del Leviatán mexicano es igualmente necesario exponer, en su desarrollo y cambios, su *modus operandi* como agente represor. Las muchas dependencias y corporaciones encargadas de aplastar a los que se soliviantan llegaron a Iguala 2014 con una experiencia

de décadas en las ciencias y artes de la sofocación.

El 12 de diciembre de 2011, el gobierno de Guerrero y el federal lanzaron un feroz operativo contra los jóvenes normalistas guerrerenses en la carretera que cruza la ciudad de Chilpancingo, que se saldó con el homicidio de dos estudiantes y de un empleado de una gasolinera, cuatro heridos de bala y 42 detenidos, 16 de los cuales también fueron torturados. Fue una *Iguala en miniatura*. El lance fue un fracaso y el gobernador Ángel Aguirre Rivero pudo caer. El Estado aprendió de sus errores de 2011 y ya no los cometió tres años después. Lo que no cambió en lo esencial en 2014 fue tal *modus operandi*, el conjunto de prácticas, métodos y patrones mediante los cuales ejecuta, como sólo él lo hace, sus crímenes. *Dejó su huella única e inconfundible en Iguala*. Ello lo delata, junto con nuevos yerros que cometió.

También evidencia el carácter represivo del Estado el recuento de hechos violentos contra la población cometidos en Guerrero en el pasado reciente a 2014, que es sorprendente por lo desvergonzado y el alto número de casos. Si a ello añadimos lo ocurrido en la guerra contrainsurgente de los años 70 del siglo pasado en esta entidad, tenemos a un homicida experto y reincidente. La Noche de Iguala fue, para decirlo gráficamente, su crimen número 100. Aquí reportamos algunos de los 99 anteriores (desgraciadamente, hay casos 101, 102, 103...).

Resta explicar por qué los normalistas fueron atacados en 2014, con ganas de exterminarlos. En los años de 2012 a 2015-2016 se vivió en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, una situación que los teóricos del cambio social, como los rusos Vladimir Lenin y León Trotsky, muy probablemente hubiesen caracterizado como *pre revolucionaria*, la antesala de un levantamiento popular contra los gobiernos locales y el poder nacional. Fueron numerosos los analistas políticos que en estas fechas, desde la Academia, la CNDH y el periodismo percibieron que se estaba incubando una situación muy crítica y peligrosa para el statu quo. El espectro de una *Chiapas 1994 o Oaxaca 2006 extendidas a tres o cuatro estados del sur* debió quitar el sueño a los que se benefician de la dominación y a los que tienen como profesión preservarla. Así como los marxistas están atentos a aquellas situaciones en las que podrían desatarse procesos de cambio, lo mismo hacen, desde la trinchera contraria, y con fines opuestos, los “planificadores” de análisis y políticas, bien sea en Washington, Bogotá, Tel Aviv o la Ciudad de México. En esta interpretación, la carnicería de Iguala fue un *golpe preventivo* para eliminar, antes de que tuviera oportunidad de actuar, la escuela de Ayotzínapa, que era vista como una *combativa y disciplinada vanguardia juvenil* que prometía ser incontenible en medio de una marea de masas iracundas de profesores, trabajadores, indígenas y campesinos comunitarios armados. Tal perspectiva, veremos, era totalmente realista.

Se decidió en el equipo de Peña Nieto propinarle a la escuela rural un golpe todavía más brutal que el de 2011, un mazazo devastador. Se trataba de asestar a los normalistas una derrota de la que no pudieran levantarse y de eliminarlos como potenciales enemigos. Se esperó a que llegara el momento propicio. Y esta oportunidad llegó en septiembre de 2014.

La teoría de que *La Noche de Iguala* fue una represión política apenas empezó a abrirse paso en el GIEI. En el Informe que ya hemos citado, incluyó, en breves pero categóricos párrafos, que el Ejército en Iguala tuvo una motivación “**contrainsurgente**”, sin la cual, “hubiera sido muy difícil llevar a cabo un ataque masivo y un ocultamiento de los hechos a gran escala, como el que tuvo lugar posteriormente en este caso.” (3)

En el mismo reporte el equipo de expertos desgraciadamente continúa sosteniendo simultáneamente una teoría contrapuesta: que el móvil de la cacería fue que en uno de los autobuses del que se apoderaron los jóvenes existía un cargamento de droga o dinero, de manera que los muchachos afectaron involuntariamente los intereses de narcos, lo que ocasionó que éstos ordenaran su asesinato y desaparición.

Aquí sometemos a examen crítico tal explicación, debido a que carece de asidero factual y es un estorbo en el proceso de consecución de la verdad.

Es necesario aclarar qué queremos decir con *Estado contrainsurgente*. Sería más preciso hablar de Estado represor porque actúa tanto contra los movimientos insurreccionales y anti sistémicos como contra aquellos que simplemente disienten sobre cuestiones económicas y/o políticas cuya satisfacción no pondría en peligro los cimientos del Orden. Sin embargo, la costumbre de decir Estado contrainsurgente se impone sobre el rigor terminológico.

**

Es muy probable que los autores intelectuales de Iguala en algún momento creyeran que habían cometido el crimen perfecto, al hacerlo pasar como uno de los numerosos y espeluznantes hechos de sangre que a diario cometen en México los miembros de los cárteles de delincuentes, aquí ayudados por rústicos policías municipales. Seguramente calcularon que luego de dos o tres meses de protestas los normalistas y sus apoyadores se cansarían y rendirían, exhaustos de cargar un fardo tan pesado de sangre y dolor. En este escenario el gobierno de Peña Nieto potenciaría su “momentum”, incrementaría su brillo ante los capitales de todas las latitudes por ser capaz de aplastar a uno de los sectores populares más tenazmente opositor.

Sabemos que el curso fue muy distinto. El gobierno inició una rápida declinación mermado por una cascada inagotable de protestas. Ya no tuvo nunca calma ni reposo. Ayotzinapa es una de las principales causas de que

el PRI sea hoy una organización en proceso de extinción.

Sin embargo, la causa de los mártires guerrerenses no se soluciona. Ayotzinapa esperó a que AMLO cumpliera su promesa de esclarecimiento y éste no lo hizo ni lo hará. En 2022 fueron lanzadas nuevas manifestaciones y enérgicas protestas frente a cuarteles militares, la fiscalía general y hasta la embajada de los sionistas (porque Israel le ha dado refugio a uno de los canallas).

Ayotzinapa no deja de exigir justicia y verdad. Pasan los días, los meses y los años y no deja de luchar, de exigir, de clamar. Es incansable, es imbatible. Desde hace años los familiares de los chicos desaparecidos y las distintas generaciones de normalistas vienen diciendo que la verdad está en los archivos del Ejército. Y la negativa de la fuerza armada a mostrar sus documentos demuestra que tienen razón. Las víctimas saben cuál es la verdad porque también saben, por experiencia propia, que el Ejército en Guerrero es autor de numerosas desapariciones y represiones. Este libro simplemente intenta exponer con palabras, pruebas y argumentos lo que el pueblo de Guerrero dice, sabe, sospecha o intuye.

* * *

En la *Noche de Iguala* se dieron siete ataques con armas de fuego en diferentes lugares, desde las 9 horas 20 minutos de la noche. La acción produjo cerca de 180 víctimas directas y hasta cerca de 700 familiares afectados, se dio en nueve escenarios diferentes con disparos de armas de fuego y violencia, durante 4-5 horas (4). Las acometidas se dieron en un territorio que se extendió al menos 80 kilómetros en línea por la carretera Iguala – Chilpancingo.

Los cadáveres de los estudiantes Julio César Ramírez, Daniel Solís y Julio César Mondragón fueron recogidos de las calles.

Otras tres personas que perdieron la vida fueron Blanca Montiel Sánchez, ama de casa, quien viajaba en un taxi. Otra víctima fue un menor de edad de tan solo 16 años, David Josué García Evangelista, integrante del equipo de fútbol “Los Avispones”; y el operador del autobús en que viajaba este club deportivo, Víctor Manuel Lugo Ortiz. Los hechos en los que perdieron la vida estas tres personas continúan sin clarificarse y mucho menos han sido investigados y sancionados.

Durante los hechos se produjeron al menos 30 heridos por arma de fuego, y en dos casos por los golpes de policías.

De los estudiantes lesionados cinco fueron de gravedad: Aldo Gutiérrez Solano estudiante de primer año originario del municipio de Ayutla de los libres, Guerrero, fue herido por un proyectil de arma de fuego en el

cráneo y hoy en día se encuentra en estado vegetativo. Edgar Andrés Vargas, estudiante de tercer año, originario de Oaxaca fue alcanzado por las balas ocasionándole una lesión de gravedad en la mandíbula, por la que en el día de los hechos casi pierde la vida. La lesión afectó su sistema respiratorio. Fernando Marín, oriundo de la Costa Chica, fue herido de bala por lo que casi pierde el brazo al destrozarle los tendones. Jonathan Maldonado, estudiante de primer año perdió cuatro dedos de una mano por disparos. Germán Bruno, nacido en la región de La Montaña fue herido de bala en el tobillo derecho.

Los estudiantes estaban infiltrados por el Ejército, que tenía al menos tres soldados que se hacían pasar como estudiantes. Uno de los jóvenes desaparecidos era agente en activo de inteligencia militar y enviaba informes periódicos de las movilizaciones de los jóvenes y sus actividades (asambleas, discusiones políticas, boteo, toma de buses, etc.).

Según la SEDENA los dos batallones de infantería en la ciudad de Iguala, números 27 y 41, contaban durante la noche sangrienta con el total de sus efectivos, que eran 603 en el primero y 588 en el otro. Estos destacamentos se encuentran muy cerca de los sitios en los que ocurrieron dos de los tres principales ataques.

La ancha alianza de los agresores estuvo formada por las policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzucó, Tepecoacuilco y probablemente de Taxco. También por el Ejército, la Policía Federal (hoy Guardia Nacional), la policía ministerial, la policía estatal, la policía de la PGR, Protección Civil y delincuentes de la banda “Guerreros Unidos” (GU). Hasta la policía de tránsito participó de las operaciones.

En los distintos ataques y retenes participaron alrededor de 150 agresores (cálculo de este autor). Sólo en el retén en Mezcala los testigos calcularon que había 40.

El número de estudiantes que ingresaron a la ciudad de Iguala poco antes de las nueve de la noche fue de 109. A medianoche llegaron a auxiliarlos quizá unos 50 estudiantes y profesores, que también fueron atacados.

La mayoría de los perpetradores se hicieron presentes con armas de alto poder, de uso exclusivo del Ejército y algunas de ellas fueron usadas en algunas de las guerras de este siglo. No sabemos si los reportes de balística estimen cuántas balas dispararon. Los numerosos disparos en ráfaga permiten suponer que percutieron cientos de proyectiles.

Para bajar a los estudiantes de uno de los autobuses, los atacantes arrojaron dentro de éste dos granadas. Cortaron ramas de árboles que usaron como armas. Con bates o palos golpearon las cabezas de los jóvenes que bajaron de uno de los autobuses que, inconscientes o sin poder caminar, fueron subidos a patrullas policiales para luego ser desaparecidos.

Los agresores acudieron perfectamente equipados, como si fueran a una guerra. En cambio, ningún estudiante iba armado. Nunca lo hacían. Carecían de armas blancas, de fuego o de cualquier tipo. Algunos se defendieron con piedras.

La mayoría de las víctimas tenía entre 18 a 21 años. Todos ellos provenían de familias campesinas entre las más modestas. Ignoro si existen estudios relativos a la pertenencia de los estudiantes a las distintas nacionalidades oprimidas que existen en Guerrero. La mayoría de chamacos pertenecían a pueblos originarios (nauas, na savi; me'pháa, ñomndaa y amuzgos) o eran afroamericanos o mestizos. Los chicos agredidos concentraban algunas de las características que más detestan los explotadores capitalistas: eran pobres entre los pobres, jóvenes y de piel morena u oscura. Si agregamos que estudiaban y tenían una ideología y militancia política socialista y radical, lo que los hace orgullosos, activos y altivos, reunían lo que la burguesía mexicana y sus operadores políticos más odian.

Los alumnos de las escuelas normales rurales tenían por costumbre apoderarse temporalmente de autobuses de pasajeros para transportarse a actos como el que conmemora el 2 de octubre de 1968, cuando el Ejército llevó a cabo una matanza en el barrio de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Estos estudiantes, repartidos en media república, pertenecen a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), fundada en 1935.

En septiembre de 2014 la Normal de Ayotzinapa tenía una matrícula de quinientos once alumnos. Hay un tronco común de materias que se imparten con un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde. Ocupan la tarde en talleres de música, danza, banda de guerra, curtido de pieles, carpintería, natación y artes plásticas. Dentro de la escuela hay terrenos que los alumnos siembran y en donde crían animales. Para acreditar las materias, los estudiantes deben cubrir un ochenta y cinco por ciento de asistencia. Existe un Club de Activistas, una escuela de formación política al que los jóvenes pueden inscribirse voluntariamente.

Cuando el GIEI leyó los reportes que hicieron los soldados infiltrados en la escuela, “no encontró ninguna relación de los jóvenes con el narcotráfico o con algún grupo criminal”.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad para investigar este tema, 26 personas clave, vinculadas al caso, han sido asesinadas. La FGR del gobierno de AMLO ha participado de la eliminación de testigos. Uno de ellos era operador del cártel Guerreros Unidos. El 22 de septiembre de 2021, “una vez sometido, Juan Salgado Guzmán fue ejecutado” por agentes de esta fiscalía que le dispararon 22 balas. Luego del crimen, los policías involucrados no se presentaron a declarar. (5) Y no les pasó nada.

Una de las banderas gracias a la cual López Obrador ganó en 2018 la elección presidencial fue que haría justicia y develaría la verdad. Es otra promesa de AMLO traicionada.

Pero el caso Ayotzinapa no es uno más. La Noche de Iguala es el 2 de octubre del siglo XXI. La fecha 26 de septiembre ya está grabada en la mente del pueblo, que seguirá exigiendo en esa fecha y siempre que haya oportunidad, año tras año, justicia y verdad. Si el gobierno de Peña Nieto quedó manchado para siempre por este enorme crimen, la llamada 4T y su presidente comparten el oprobio y la deshonra.

Agosto de 2023.

* * *

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 Guerrero es el estado del país que ocupa el primer lugar en marginación social: 17% de la población de 15 años o más es analfabeta, 31.6% con 15 años o más no concluyó la primaria, 20% habita en viviendas sin drenaje ni excusado, 30% ocupa viviendas sin agua entubada, 50% vive en situación de hacinamiento, 20% ocupa viviendas con piso de tierra, 50% vive en localidades con menos de 5 mil habitantes y 55% de la población ocupada gana hasta 2 salarios mínimos. (6)

En 2012 el 71.9 % de los guerrerenses vivía en condiciones inferiores a la línea de bienestar. Era superior al del país, que es de 51.6 por ciento. Entre 2010 y 2012, el porcentaje de la población por debajo de la línea de bienestar mínimo en el estado de Guerrero pasó de 38.8 % a 45.1 %. En los 46 municipios más pobres, el 37.4 % de las personas sufrían de pobreza alimentaria en 2010, esto es, casi dos veces el indicador nacional, de 20 %. El porcentaje de personas en estos 46 municipios que no tenían acceso a la seguridad social ascendía a 76.9 por ciento. (7) 39.4 % de los habitantes carecen de acceso a la alimentación digna. Estas cifras se elevan en los 46 municipios referidos, en donde 44.3 % de los pobladores tienen carencias alimentarias.

A fines de 2011 el secretario de Salud de la entidad reconoció que sigue Guerrero en los primeros sitios en muerte materna e infantil, tuberculosis y obesidad. (8)

A mediados de 2013 la titular de la Secretaría de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio, denunció que había 48 mil casos de mujeres violentadas en Guerrero. Los mayores casos de violencia los sufren mujeres de entre 15 a 35 años, las mujeres de mayor edad tienen hijos grandes que las protegen, dijo. (9) Aproximadamente 60% de la producción nacional de opiáceos proviene del estado de Guerrero. Las dos terceras partes de esta cantidad provienen

del Pentágono de la Amapola. La ciudad de Iguala es el principal punto de concentración de estos narcóticos...

Guerrero es un estado militarizado. Hay bases militares en Iguala, Teolalapan, Chilpancingo, Acapulco, Ciudad Altamirano, Pie de la Cuesta, Atoyac y Petatlán. “Dentro del pentágono de la amapola el Ejército controla quién entra y quién sale de él, con batallones ubicados estratégicamente en sus límites y puntos de acceso.” (10)

Existe una estrecha relación entre mandos militares y presidentes municipales. El de Cocula, César Miguel Peñaloza, declaró a la PGR que el comandante de la 32 zona militar, Alejandro Saavedra, le recomendó a sus dos directores de seguridad pública. El jefe de la policía municipal de Iguala en 2014, Felipe Flores, fue durante una década soldado y cabo en el 27 Batallón.

En un acto del que no conocemos precedentes, la Sedena le cedió a José Luis Abarca, un particular, en 2005, un terreno de 52 mil m² en el que ahora se asienta la Plaza Tamarindos. Tal era la estrecha proximidad entre este personaje y los militares. Abarca era presidente municipal de Iguala cuando los 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos y es uno de los principales responsables. También es considerado parte del grupo delincencial Guerreros Unidos (GU).

De 2006 a 2010 Guerrero se ubicó entre los primeros cinco estados donde la violencia ligada a la “delincuencia organizada” creció en mayor medida.

El 8 de abril de 2011 se expidió la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, la cual, en su artículo 37 reconoce expresamente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y a su sistema de justicia. Con otras palabras, son legales las policías que las comunidades y pueblos organizan. Lo hacen para defenderse de delincuentes, funcionarios corruptos y de las compañías mineras que ocupan sus territorios.

De acuerdo con las actas de *Coordinación Guerrero Seguro* (donde participaban Ejército, Marina, Policía Federal, PGJ, PGR, Seguridad Pública Estatal y Gobierno de Guerrero), todas las autoridades del ámbito estatal y federal tenían conocimiento antes de la Noche de Iguala de la colusión con la Delincuencia Organizada de autoridades y policías municipales de Iguala y varias ciudades cercanas. Un documento de la 35 Zona Militar incluye una lista de personas implicadas en el narco: diputados federales, locales y directores de seguridad pública (11) Personal del Ejército, como los comandantes de los 27 y 41 Batallones con sede en Iguala estaban también coludidos con la delincuencia organizada.

El GIEI fue formado por exigencia de las familias de los 43 desapareci-

dos, desconfiados de los órganos institucionales mexicanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue resultado de un acuerdo del gobierno de Peña Nieto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Inicialmente estuvo formado por cinco expertos que en esta primera fase presentaron dos informes contrapuestos a las investigaciones oficiales. Por esta razón el grupo dejó el país en 2016. Posteriormente, bajo la presidencia de AMLO el GIEI regresó a México en 2020 y emitió otros cuatro informes.

El gobierno creó dos instituciones para el caso Ayotzinapa, una fiscalía especial y una Comisión de la Verdad para el caso (COVAJ). Ambas colapsaron cuando AMLO detuvo las investigaciones y las consignaciones demandadas por el fiscal Omar Gómez Trejo, cercano a los familiares de los 43 y al GIEI.

El GIEI también entró en choque con las autoridades y sus miembros salieron del país en 2023. La investigación está detenida desde entonces.

FUENTES Y REFERENCIAS

1. GIEI, VI Informe, julio 2023, pág. 36. En adelante, GIEI, VI (o el número en romano del Informe) y página.
2. Emilio Álvarez Icaza (padre), presidente de la comisión de derechos humanos del PRD, declaró que podía probar que más de 200 de sus militantes asesinados en ese sexenio lo habían sido por obra del gobierno. *La Jornada*, 11/5/93.
3. GIEI, VI ,115.
4. GIEI, II, p.15.
5. Alejandro Encinas, Informe COVAJ, agosto de 2022, p. 14.
6. Aurelio Cuevas, Guerrero: una radiografía de la marginación social, *Vivir en Tlaxiaco*, 28/05/2013
7. CNDH, 2014, Recomendación sobre policías comunitarias.
8. Lourdes Chávez, *El Sur*, 23/12/2011.
9. Florencio Villarreal, *El Sur*, 7.6.2013.
10. “Mirar morir, el Ejército en la Noche de Iguala”. Documental, Coizta Grecko, Colectivo Ojos de Perro vs. La Impunidad, cit. Homero Campa, “El Ejército en la noche de Iguala”, *Proceso*, 11/10/2015.
11. GIEI, VI, 106-11.

Los errores en Chilpancingo 2011 que el Estado no repitió en Iguala

I

Sacar a los estudiantes de Chilpancingo

El operativo contra los estudiantes que culminó con los ataques del 26 de septiembre de 2014 dio inicio unos días antes, cuando el gobierno les impidió apoderarse de autobuses en Chilpancingo, como era costumbre de los jóvenes. El objetivo era sacar a los normalistas de lo que podía considerarse “su territorio”, Chilpancingo, capital de Guerrero. Lo siguiente era llevarlos a Iguala, en donde tenía condiciones propicias para emboscarlos. **En el relato de cómo consiguió estos dos objetivos están algunas de las claves de la Noche de Iguala.**

**

La ciudad de Chilpancingo (o “Chilpo”, como le dicen los lugareños) se encuentra muy cerca, a unos 15 kms de Tixtla, municipio en el que se asienta la hermosa ex hacienda de Ayotzinapa, que desde 1933 es la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Se trataba de obligar a los estudiantes a acudir a Iguala a apoderarse de camiones, distante 125 kilómetros, ciudad en la podría agredirlos sin que pudieran recibir pronta ayuda y en gran número, como ocurrió tres años antes, en 2011, cuando los atacó en Chilpancingo.

Iguala es asiento de todas las corporaciones policiales y de dos batallones de Infantería. Además, el presidente municipal, José Luis Abarca, represor de líderes sociales, era enemigo de los alumnos, lo que era público. Para los de Ayotzinapa, Iguala era una ciudad lejana, ajena y hostil. No tenían planeado acudir a ella a apoderarse de autobuses.

**

En el año 2011 se desarrolló un fuerte conflicto entre las autoridades, especialmente el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y los estudiantes. Los normalistas, desesperados por no encontrar solución a sus apremiantes necesidades luego de meses de infructuosas negociaciones, decidieron una

drástica medida de presión. El 12 de diciembre unos 250 acudieron en autobuses a la carretera que atraviesa Chilpancingo y que va de la Ciudad de México al puerto de Acapulco. Iban acompañados de algunas decenas de miembros de las organizaciones Campesina de Teponaca y de la Xanii Tsavvi (Sueño Mixteco), que habían acudido a apoyarlos. Bajaron de los transportes y bloquearon el camino por donde cada día pasan cientos de automóviles, en su mayoría con turistas. Numerosos viajeros descendieron de sus vehículos. Eran aproximadamente las 11:30 horas, a plena luz del día.

Ya los esperaban 168 policías, 91 de los cuales portaban rifles de alto poder, que dispararon. La noticia corrió rápidamente. En minutos llegaron reporteros, otros normalistas y personas de distintas organizaciones sociales que residen en la ciudad, amigas de los estudiantes. Las cámaras de comercios, de automovilistas y de otras personas tomaron videos y fotografías. Existen abundantes evidencias gráficas de policías apuntando y disparando sus rifles a poca distancia de sus blancos, los jóvenes.

El ataque, que duró sólo alrededor de 50 minutos, fue un fracaso. Las autoridades no pudieron evadir su obvia responsabilidad, que incluía el asesinato alevoso de dos muchachos. Apareció una crisis aguda en el gobierno. Ángel Aguirre estuvo cerca de caer.

Esta vez, 26 septiembre de 2014, el gobierno no cometió el error de atacarlos en Chilpancingo.

**

La asamblea de la FECSM (Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, celebrada del 15 al 20 de septiembre de 2014) decidió que Ayotzinapa tenía la misión de conseguir autobuses para transportarlos desde allí a la Ciudad de México, a la marcha del 2 de octubre.

El plan era que en la escuela de Ayotzinapa se concentrarían el 30 de septiembre alumnos de las 16 normales rurales del país (unos 700), para que salieran de ahí en caravana. Además de transportarlos, los de Guerrero deberían alimentarlos.

Los compromisos que se había echado a cuestras la escuela normalista eran enormes, así que de inmediato se activó.

**

Los normalistas guerrerenses eran vigilados constantemente por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN, hoy CNI), que hacía labores de espionaje, inteligencia y contrainsurgencia, y dependía del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Su titular, Eugenio Ímaz Gispert, trataba directamente con éste y el presidente Enrique Peña Nieto. (1)

La información que se reportaba desde Iguala y Chilpancingo llegaba a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y al principal asesor y so-

brino del gobernador, Ernesto Aguirre, quien daba seguimiento a los conflictos políticos y sociales. El sobrino operaba un equipo de espionaje que “utilizaba para acechar a los dirigentes de organizaciones sociales, partidos políticos, periodistas, normalistas de Ayotzinapa y hasta a funcionarios del mismo gabinete estatal.” El equipo de espionaje fue adquirido a la empresa Hacking Team. (2)

La Escuela Normal, además, estaba infiltrada al menos por tres soldados que se hacían pasar por estudiantes y que informaban con regularidad sobre sus planes y movimientos. Uno de estos soldados-espías reportó el 22 de septiembre que un día antes el Comité Estudiantil de la escuela se había reunido y acordado apoderarse de “aproximadamente 15 autobuses” para lo que hemos dicho. Este mensaje llegó a las más altas autoridades militares, al titular de la SEDENA, general Salvador Cienfuegos (nombrado dentro de esa secretaría como DN1), al titular de la Sección Segunda (Inteligencia) del Estado Mayor de la Defensa Nacional y a la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (DN-4), entre otros mandos. (3)

La información sobre los estudiantes era procesada por el Centro Regional de Inteligencia de Iguala (CRII), que realizaba escuchas o interceptaciones telefónicas y de mensajes, y que funcionaba en el 27 Batallón.

También tenía interés en Ayotzinapa Omar García Harfuch, que en 2014 era coordinador de fuerzas regionales de la Policía Federal (PF) en Guerrero. La PF “operaba con temas relacionados a la guerrilla”(4). Políticos del PRI, escritores de derecha y algunos periodistas ligaban a los normalistas con grupos armados. Las fuerzas policiales de García Harfuch usaron sus guadañas contra los estudiantes en Iguala.

**

El 22 de septiembre los muchachos consiguieron dos autobuses en Chilpancingo. (5)

El día 23 en la mañana lo volvieron a intentar, pero la PF (actualmente Guardia Nacional) recuperó unos autobuses que habían capturado. (6) Ese mismo día a las 15 horas los alumnos intentaron apoderarse de transportes en la carretera Chilpancingo-Iguala a la altura de Tierras Prietas; sin embargo, llegó una “decena de camionetas con policías estatales y federales con equipo antimotines y fuertemente armados... Los jóvenes llamaron a sus compañeros de tercero para que los apoyaran... Con una rápida maniobra rompieron el cerco policiaco y lograron llevarse dos camiones”. (7)

Uno de los soldados-espía (o “fachada”, como los llama la SEDENA) infiltrados en la escuela normal informó que los estudiantes recolectaban dinero, “actividades de boteo y extracción de diesel en diferentes puntos de esta entidad” (8) La noche de este día los estudiantes fueron a la caseta de cobros número 3, en las inmediaciones de Iguala, en donde **se apoderaron**

de cinco autobuses. “El monitoreo por SEDENA y CISEN de dichas actividades fue constante”, según el GIEI. El comandante del 27 Batallón de Infantería reportó el hecho. Añadió un dato muy importante: hizo acto de presencia personal de las policía federal y estatal **sin haber intervenido.** (9). Más adelante explicaremos por qué las autoridades les permitieron hacerse de vehículos en este lugar y no se los impidieron, como ocurría en la ciudad capital.

El **24 de septiembre** realizaron un intento por tomar autobuses en Chilpancingo, sin conseguirlo, debido al fuerte operativo de las policías estatal y federal, que llegó a retener a algunos jóvenes. (10) De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en lo que llama “el cuarto intento” (al que no fecha) la Policía Estatal Antimotines no le permitió a los normalistas salir de la central de autobuses con dos unidades. En ese momento los estudiantes retenidos se comunicaron por teléfono a su escuela, que envió a unos 140 estudiantes que acudieron en su auxilio. En Tixtla hicieron “rehén” a un elemento de la Policía Estatal y al llegar a la central de autobuses de Chilpancingo acordaron con la Antimotines que, “a cambio de dejar salir a sus compañeros con los dos autobuses, dejarían libre al ‘rehén’ y de esta forma se resolvió la situación”. (11)

Estos hechos son reveladores de la determinación del Gobierno de no permitirles tomar vehículos en la ciudad mencionada y de la aspereza en las relaciones entre ambos actores. También confirmaron la rápida y eficiente capacidad de respuesta de los normalistas en Chilpancingo, ciudad a la que fueron capaces de enviar al instante a una audaz masa de sus compañeros en auxilio de los que estaban bajo amenaza.

“Para no entorpecer las clases, las actividades referidas de los estudiantes se llevaban a cabo por las tardes. Así, el **25 de septiembre** la academia de tercer grado acudió a Chilpancingo a la toma de autobuses, sin embargo, la policía los estaba esperando en la central de autobuses y fueron rechazados violentamente, por lo que regresaron a la escuela.” (12)

Ese día el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, solicitó:

“Elaborar un diagnóstico de la situación que prevalece en su jurisdicción con motivo de la próxima conmemoración de los hechos registrados el 02/10/68 remitiéndolo al suscrito por conducto de la S 2 inteligencia del EMDN para antes de la 0:08 del 26/09/2014...”. **Ayotzinapa era un asunto de máximo interés del secretario de la Defensa.**

El 26 de septiembre, “... el día de los hechos los estudiantes acordaron que posterior a las actividades internas de la Normal Rural como son la higiene de la Institución, cultivo en las tierras, alimentación de los animales que tienen y las actividades académicas, procederían al boteo y toma de

unidades”. (13). Para los estudiantes, apoderarse de camiones era una actividad que no debía afectar sus deberes académicos y con la escuela. Tampoco sus días de asueto, los días sábado 27 y domingo 28, que estaban próximos.

Es el 26 septiembre, viernes a la mañana. A las 11am, los jóvenes van otra vez a Chilpancingo, pero en este caso la acción de hacerse de buses se vio impedida por policías estatales. Una fuente periodística añadió que la policía fue apoyada por el Ejército, que usó un vehículo Hummer. (14). De inmediato el General de Brigada D.E.M. S.H. emitió un mensaje informando del hecho y que los jóvenes optaron por regresar a la Escuela. La información se ponía en conocimiento con copia a DN-4 de Lomas de Sotelo, D.F. (sede de la Secretaría de la Defensa) y a otros altos mandos. “El nivel de monitoreo e información de sus movimientos era total y la información llegaba al más alto nivel de SEDENA...” El CISEN estaba igual de atento que la SEDENA y reportó los acontecimientos. (15)

Algo parecido ocurrió ese día **viernes 26 de septiembre** en la tarde: a las 17:30 horas, los normalistas salieron a recolectar dinero y tomar autobuses. “Como las dos terminales [de Chilpancingo] ya estaban resguardadas por policías estatales, enfilaron rumbo a la ciudad de Iguala.” (16)

En síntesis, el **26 de septiembre** en la tarde apenas contaban con ocho o nueve unidades. Debían conseguir al menos seis o siete más. El tiempo los presionaba: les quedaban sólo ese día, el viernes 26, y el lunes 29 para apoderarse de los suficientes transportes, ya que se atravesaba el fin de semana, inhábil, días de descanso de los estudiantes. Desde el martes 30 comenzarían a llegar estudiantes de otras escuelas rurales. Aquí es necesario recordar que unos días antes habían podido secuestrar cinco camiones en la carretera que va a Iguala, a la altura de Huitzucó, a más de 20 kms. de Iguala. El mensaje de las autoridades fue que en este lugar podían obtener los transportes. Los chicos fueron en esa dirección ese día fatídico. Se transportaban el **viernes 26 de septiembre de 2014** en dos camiones de la empresa Estrella de Oro, con números 1531 y 1568. Iban 109, la mayoría de primer año, salvo seis que eran de segundo año y dos de tercero, que se repartieron en los autobuses para actuar como “referencia para los más jóvenes”.

El “Comité de la Base Estudiantil” había acordado que los alumnos de cuarto grado de licenciatura (los de más edad y experiencia) consiguieran los autobuses. Ellos acudieron a hacerlo algunas veces a la ciudad de Chilpancingo, sin embargo, después se “quejaron”, aduciendo que debido al último grado que cursaban, tenían muchas actividades académicas, lo que les dificultaba continuar secuestrando autobuses, razón por la cual se acordó que entonces fueran los alumnos de primer grado quienes se encargaran de la tarea. (17)

**

Las autoridades habían conseguido que los muchachos salieran de Chilpancingo y se acercaran a Iguala. Los chicos planeaban **obtener transportes cerca de esta última ciudad sin entrar a ella**. Es probable que supieran que las autoridades los tenían sometidos a una rigurosa vigilancia. Lo que no sabían es que les tenían preparada una sangrienta emboscada dentro de esa ciudad. Y que para meterlos a Iguala les tenían confeccionada una estratagema, un “ardid de guerra”.

La ñagaza para meter a los normalistas a Iguala

Iguala está a 125 km de Tixtla. Tenía 125 mil habitantes. Es asiento de policías de los tres niveles de gobierno, la municipal, la Estatal, la ministerial, la PF y la de la PGR (hoy FGR). El CISEN tiene aquí una sede. Aquí se localizan los batallones militares, números 27 y 41.

Esta ciudad y los municipios vecinos también se caracterizan por la notoria presencia de delincuencia organizada y por la colusión de autoridades civiles y militares con ella. El principal grupo de facinerosos, “Guerreros Unidos” (GU) tenía nexos con los comandantes de los dos batallones de infantería, así como con “al menos un capitán y un teniente y otros miembros del ejército. “Todas las autoridades de ámbito estatal y federal tenían conocimiento previo de la colusión con la Delincuencia Organizada de autoridades y policías municipales de Iguala y varias ciudades cercanas.” Responsables de seguridad pública de este lugar, Cocula, Tepecoacuilco, Huitzucó y varios alcaldes de la zona aparecen en documentos de SEDENA de 2013 y 2014 señalados de ser parte de organizaciones criminales. Desde mayo de 2014, en el grupo de Coordinación Guerrero Seguro (donde participaban Ejército, Marina, Policía Federal, PGJ, PGR, Seguridad pública Estatal y Gobierno de Guerrero) se solicitó desarmar a la policía de Iguala. Las autoridades militares y el CISEN conocían la connivencia y cooptación por parte del narcotráfico de diferentes presidentes municipales de la zona hacía al menos dos años. (18)

El Ejército también estaba involucrado en el narco. El General Hernández Nieto era comandante del 41 Batallón de Infantería. La noche en la que los jóvenes fueron atacados, el militar e integrantes de GU intercambiaron mensajes de texto con narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas. Sus conversaciones muestran que el General tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada. (19)

Existía una circunstancia más, que hacía de Iguala para los normalistas un lugar especialmente repelente. Su alcalde, José Luis Abarca, estaba vinculado al Cártel de GU a través de los vínculos de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, tres de cuyos hermanos fundaron este grupo mafioso.

(20)

Agravaba el cuadro el antecedente del asesinato del regidor de Iguala Arturo Hernández Cardona en 2013, por el propio presidente municipal, por razones políticas, ya que el primero luchaba por los derechos de los campesinos. Los normalistas protestaron airadamente en esta ciudad el 3 de junio de 2013 por la desaparición del fundador de la Unidad Popular de Iguala y dos de sus compañeros. Abarca insultó a los que llamó despectivamente “ayotzinapos”.

*

Dejamos a los normalistas **el 26 de septiembre a las 17:30 horas**, en Chilpancingo, a donde salieron nuevamente a recolectar dinero y tomar autobuses. Tras un nuevo intento, y después de ver a varias patrullas federales amenazantes, decidieron trasladarse por la carretera que va a Iguala hasta la altura de Huitzucó.

Los estudiantes eran vigilados por las autoridades. Desde Chilpancingo reportaron vía telefónica sus movimientos a las 17:59 horas. Esta información llegó también al Ejército y a la PF en Iguala. (21)

Alrededor de las 19:30 horas los dos autobuses cargados de muchachos llegaron al “Rancho del Cura”, enfrente del restaurante “La Palma”, ubicado sobre la carretera federal Chilpancingo-Iguala, a la altura de Huitzucó, a unos 30 kms de Iguala. Decidieron que el autobús con número 1531 permaneciera en este lugar y el otro se dirigiera a la Caseta de Peaje 3 de Iguala, muy cercana. La SEDENA recibió información del arribo de los estudiantes a través de uno de sus agentes de inteligencia, EC. (22)

Los normalistas llegaron en el vehículo 1568 a la caseta mencionada antes de las 20:00 horas. Observaron que patrullas de la PF que estaban a 300 metros detenían a los autobuses, bajaban a los pasajeros y los vehículos daban vuelta para tomar otro camino. Los viajeros atravesaban la caseta caminando y seguían a pie hacia la ciudad. Les comentaron a los estudiantes que los uniformados les habían dicho que podían ser asaltados y que por ello los habían bajado de los transportes.

Además del agente de inteligencia militar EC, el soldado de inteligencia M recibió la instrucción de teniente JG de observar los movimientos de los muchachos, que no podían apoderarse de camiones.

Bernardo Flores Alcaraz, de 21 años, el alumno de Ayotzinapa que era responsable de la misión de apoderarse de autobuses les dijo a algunos de sus compañeros que ya no podían seguir porque había anochecido y decidió que volvieran: “mejor ya nos vamos de regreso”, dijo.

Pero en ese momento ocurrió un hecho que le dio un giro a toda la situación.

Por fin, los normalistas lograron apoderarse de un autobús cuando

transitaba por el “Rancho del Cura”. Cabe preguntarse: ¿por qué sí pudieron capturar este vehículo, cuando la policía federal impedía el paso de autobuses? Era de la empresa “Costa Line”, número 2513. La tesis de que fue una carnada fraguada por las autoridades para meterlos a la boca del lobo, a Iguala, tiene fundamentos.

Los normalistas que detuvieron este vehículo le dijeron al chofer que lo llevarían a Ayotzinapa. El conductor les informó que el camión ya no tenía líquido anticontaminante “Adblue” y que por esa razón no los podría llevar a su escuela. (23)

De acuerdo con el conductor del autobús, que transportaba a 28 personas, un pasajero se asomó por la ventana, expresó su inconformidad con la toma de la unidad y les preguntó a los estudiantes quién era su líder. Unos diez estudiantes subieron al autobús, hablaron con los pasajeros y “llegaron a un acuerdo”: que algunos estudiantes irían a bordo del autobús “Costa Line” 2513 para dirigirse a la Central de Autobuses de Iguala. Afuera de ese lugar los pasajeros descenderían del camión para que, posteriormente, los estudiantes regresaran al “Rancho del Cura” con el autobús y su conductor. (24)

Sin embargo, el chofer entró en la estación, bajaron los pasajeros, después el operador cerró el bus y les impidió a los estudiantes que bajaran. Según testigos, los buses habían sido seguidos por halcones de GU en moto, quienes informaron lo que sucedía durante todo el recorrido. El autobús arribó a las 20:30 horas a la central camionera. (25)

Uno de estos jóvenes encerrados, de segundo grado, miembro del comité estudiantil, se comunicó por teléfono con sus compañeros que se encontraban en el Rancho del Cura para pedir ayuda, debido a que “estaban detenidos”. (26) De acuerdo con el chofer del Estrella de Oro 1531 (que estaba en el Rancho del Cura) una media hora después de que partiera el autobús Costa Line a Iguala, escuchó una llamada de teléfono que recibió un normalista quién, “muy alterado, me dijo: ‘vámonos, ya agarraron a mis compañeros, vamos a liberarlos, vámonos para la central de Costa Line’ ” en el centro de Iguala. Otro de ellos posteriormente declaró: “Decidimos ir por ellos para evitar que se los llevaran detenidos o los fueran a golpear, por lo que decidimos ir a la terminal [de Iguala].” En auxilio de sus compañeros acudieron todos los estudiantes que estaban fuera de la ciudad de Iguala, en los dos autobuses Estrella de Oro. Eran aproximadamente las 20:45 horas.

Así fue como los normalistas se dirigieron desde el “Rancho del Cura” y la Caseta de Peaje a la Central de Autobuses de Iguala. Antes de partir, tomaron piedras. Intuyeron que podrían necesitarlas para un posible enfrentamiento. Su armamento paleolítico iba a ser irrelevante ante las granadas y

los rifles de alto poder que les tenían preparados.

El agente de inteligencia militar (OBI) 2 que se encontraba vigilando sus actividades observó cómo se dirigían a Iguala. Él mismo se dirigió a dónde iban los chicos.

Las informaciones sobre la llegada de los estudiantes a la central camionera eran transmitidas a los responsables del 27 Batallón de Infantería (en adelante, 27 BI) y a las demás autoridades involucradas. (27)

Meses después uno de los normalistas sobrevivientes, José de la Cruz, en una asamblea en Jalisco, confirmó que “no tenían intención de llegar a Iguala” y explicó que tuvieron que entrar a esa ciudad por lo que aquí hemos narrado. (28) Llegaron a Iguala a las 21:09. Dos horas después la mitad de los normalistas estaban gravemente heridos, muertos o en trance de ser desaparecidos. Entrar a Iguala fue meterse a las fauces de un monstruo que los hirió y engulló dentro de un pozo oscuro del que a la fecha no han salido.

**

Añagaza quiere decir “artificio para atraer con engaños”, un señuelo. La palabra viene del árabe ñagaz, un pájaro saltarín que servía para atraer y atrapar a otras aves. El autobús “Costa Line” número 2513, que metió a los primeros ocho o diez normalistas a Iguala, y tras los cuales entraron a esa ciudad unos cien más, fue un señuelo ideado por los especialistas en represión y contrainsurgencia que operaron la Noche de Iguala, y que contaron con la colaboración del conductor, de al menos uno de los “pasajeros” y quizá de la empresa de autobuses.

La unidad 2513 transitaba por el “Rancho del Cura”, y se supone procedía del puerto de Acapulco, con paradas predeterminadas en las terminales “Las Cruces” (municipio de Acapulco) y Chilpancingo, y con destino final en la ciudad de Iguala.” (29)

El conductor de este autobús en su primera declaración, ante la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, (PGJ), señaló que ese 26 de septiembre salió de Acapulco a las 16:15 horas. En una segunda comparecencia, ante la PGR, dijo que salió de ese puerto a las 14:00 horas. (30). No indicó a qué hora llegó a Las Cruces ni cuándo lo hizo a la Central de Autobuses de Chilpancingo, sólo reportó que arribó al “Rancho del Cura” aproximadamente a las 20:00 horas, en donde fue detenido por los normalistas.

Otras irregularidades (por llamarlas de algún modo) en la trayectoria de este autobús, pronto aparecieron. “Mediante escrito del 9 de abril de 2015, el apoderado legal de la empresa “Autotransportes Estrella Roja del Sur”, S.A. de C.V., propietaria del camión 2513, exhibió ante la autoridad ministerial federal, “tres guías de pasaje-194 completamente ilegibles”, es decir, “no se aprecia el número de corrida, horarios, ni relación de pasaje-

ros”, según la CNDH. Además, anexado al expediente de esta institución se encuentra un documento también ilegible que debiera contener la lista de pasajeros. Es el oficio con la leyenda “Transportes Estrellas del sur, S. A de C. V.”, de fecha 9 de abril de 2015. (31)

Además, el conductor del autobús Costa Line 2513, señaló que, por “su seguridad” (¿?), con posterioridad a los hechos del 26 de septiembre de 2014, el número económico del autobús “Costa Line” 2513, fue cambiado por el número 2900. (32).

Las “irregularidades” del Costa Line 2513 son muchas:

1. Fue el único vehículo al que la PF permitió que los estudiantes tomaran.
2. El conductor se rehusó a que lo llevaran a la escuela en Ayotzinapa y pretextó falta de líquido de frenos para ir a Iguala.
3. El conductor contó con la ayuda de un enérgico “pasajero” para convencer a los normalistas de entrar a Iguala.
4. El conductor faltó a su palabra de bajar a los pasajeros fuera de la estación camionera.
5. Dentro de la estación camionera, el conductor dejó encerrados a los muchachos dentro del vehículo.
6. La documentación de la empresa acerca de la corrida del autobús es falsificada y habría hecho imposible entrevistar a los supuestos pasajeros así como corroborar la trayectoria de Acapulco a Iguala.
7. Se simuló que este autobús era uno más de los que transportan pasajeros en las carreteras del país todos los días. En realidad fue un artificio, un ardid o maña, que sirvió para meter a los normalistas a la ciudad que les sería funesta.

* *

Eran las 21:09 horas. Los 109 normalistas se encontraban juntos dentro de la central camionera. Aprovecharon para apoderarse de otros tres autobuses. Planeaban ir en caravana de cinco vehículos de vuelta a su escuela. Subieron a los vehículos y se pusieron en marcha. Escasos 11 minutos después y a seis cuerdas daría inicio la devastadora celada que les tenían preparada.

Una prolongada y gigantesca represión sobre la que no hay videos

Dijimos que en Iguala los ataques con disparos de armas de fuego fueron en siete lugares y se prolongaron durante cuatro-cinco horas. La acción produjo seis asesinatos, 30 heridos de bala y 43 desapariciones. Se dieron en un

territorio que se extendió al menos 80 kilómetros en línea por la carretera Iguala – Chilpancingo.

A pesar de las enormes dimensiones de lo ocurrido y del largo tiempo en que transcurrió, no existe sobre ello un video que dé cuenta de algunos de los principales hechos. A lo sumo hay grabaciones de situaciones previas y poco relevantes (como el de los jóvenes dentro de la Central de Autobuses en Iguala) y unas pocas fotografías poco legibles o poco interesantes. ¿Cómo pudo ser que en pleno auge de la masividad de la grabación de videos y fotografías haya pocos y deficientes registros sobre la Noche de Iguala?

Esta vez los agresores se cuidaron de que no quedaran huellas gráficas de su salvaje actuar y con premeditación echaron mano de todos los recursos a su alcance para ello.

Mientras que el ataque por las policías a los alumnos de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo llegó a los medios debido a que quedó grabado en numerosas cámaras de instituciones, negocios y particulares, en Iguala no fue así, o los videos existentes forman parte de los más secretos archivos del Estado.

En Chilpancingo los videos y fotografías publicados fueron evidencias inequívocas que confirmaron la responsabilidad gubernamental. La población interesada pudo saber, por ejemplo, que la primera ráfaga de disparos fue hecha por los uniformados y que previo a ella no existió ningún tipo de aviso, advertencia o ultimátum. Gracias a fotografías cayeron las mentiras del Coordinador de la Policía de la Procuraduría de Guerrero, quien compareció ante la CNDH para decir que el día aciago se encontraba de descanso; “sin embargo –dijo ésta- se trata de la persona que en múltiples fotografías y videos aparece apuntando al grupo de manifestantes. El mencionado Coordinador de la Policía Ministerial [la CNDH no indica su nombre] se vio portando un arma larga tipo Colt, calibre .223, modelo AR-6530.”

Exhibió en Chilpancingo una conducta similar el Subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, quien, “acompañado por su escolta armada, enfrentó a los estudiantes con un palo en la mano.” Las cámaras del C-4 en Chilpancingo también echaron abajo la versión de la PF, en el sentido de que “no llegó en primera instancia [al lugar de la protesta], como dijo su vocero”. De lo grabado por “las cámaras de seguridad instaladas en la carretera, se desprende que fueron los primeros en llegar.”

En contraste, las evidencias gráficas constataron que los jóvenes normalistas acudieron sin armas. (33)

La coartada inventada por las autoridades que pretendieron hacer ver su emboscada como un zafarrancho desatado por un joven armado, se cayó rápidamente.

El fracaso de los gobierno federal y estatal en Chilpancingo seguramente ocasionó una acalorada y ríspida discusión en los altos mandos que manejan desde el Estado la contrainsurgencia. Una de las lecciones fue, en lo sucesivo, evitar que la evidencia gráfica se hiciera pública. Y en La noche de Iguala lo lograron.

**

Tanto videos como fotografías e informaciones sobre Iguala fueron registrados en el “Sistema C-4”. Desde hace más de una década en México existe tal dispositivo gubernamental, que significa Centros de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, implantado “para coordinar y supervisar los planes y programas en materia de seguridad mediante tecnología computacional.” Cuentan con cámaras instaladas en puntos estratégicos para obtener información oportuna. “Cada C4 tiene al menos un Centro de Monitoreo integrado por una pared de pantallas o videocubos, sistema de videoconferencia, radiocomunicación, etc., todos diseñados para estar en operación 24/7.” A dicho sistema se integran las llamadas de emergencias a través del teléfono 066 y del teléfono de Denuncia Anónima 089. En Iguala, toda la información que ahí se recibe llega en tiempo real a la base de la PF y a las oficinas de la PGR que se encuentran en la misma ciudad. En ese centro de operaciones se realizan reuniones periódicas con representantes de esas y otras corporaciones para evaluar su trabajo y capacidad de reacción ante las emergencias. “La noche del 26 de septiembre de 2014 todas las instancias de gobierno en materia de seguridad pública que integran el C4 conocieron en tiempo real la violencia que estallaba en las calles” (34)

En Iguala 2014 el C-4 constaba de 24 cámaras y el Ejército lo tenía bajo control. “Las cámaras estaban manipuladas por personal de inteligencia del 27 BI del ejército, que reportaba inmediatamente al teniente J.C.G. y al comandante del 27BI J.R.” “El soldado RALA refiere en su declaración que el C-4 estaría formado por ‘militares encubiertos, que aportan información de lo que acontece en las calles’. [...] En el C-4 había militares, policía de tránsito, protección civil, policía estatal y policía municipal.” (35)

Sin ninguna duda, el C-4 de Iguala recogió información preciosa sobre estos hechos, pero la destruyó o escondió. Para empezar, las autoridades reportaron que “al parecer solamente cuatro cámaras se encontraban operativas el día de los hechos”, lo cual es poco creíble. “En otros casos la evidencia videográfica no se recogió a tiempo o se sobrescribió, en un claro ejemplo de negligencia y de responsabilidad en la destrucción de pruebas relevantes. Otras cámaras de seguridad privadas que se encuentran en el recorrido de los hechos no fueron nunca pedidas. Algunas evidencias no se recogieron o se grabaron, entre ellas varias cámaras del C-4. Tampoco otras se re-

cogieron como las cámaras de Capufe, casetas de carretera, bancos, zonas públicas de la calle Juan N. Álvarez y otras zonas, pérdida del video del Oxxo del Periférico poniente...” En cuanto al C-4, el “despachador” del sistema reportó el 27 de septiembre de 2014 que seguía indagando sobre más información, pero que se le restringió, ya que “dicha información es manejada por personal de la Sedena.” (36)

Entre este material “restringido” (que la reportera Anabel Hernández denomina “escondido”), está un video del C-4 en el cual se aprecia a un grupo de vehículos pasar por el Periférico Poniente de esa ciudad, y en uno de los vehículos había civiles sometidos por uniformados. Fue cerca de la medianoche del 26 de septiembre de 2014. A unas cuadras de ahí, en la calle Juan N. Álvarez, acababa de ocurrir uno de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa, donde fueron desaparecidos al menos 20 de los 43 normalistas. Como parte del convoy de 13 vehículos iba una patrulla similar a las de la Policía Municipal igualteca y que transportaba en la parte trasera al menos a seis civiles– pasó en sólo 59 segundos frente a la cámara del C-4 de Iguala. “Pero el video completo –denunció la reportera–, donde se ve el paso del convoy, ha sido ocultado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero y por la PGR, instituciones que lo tienen en su poder desde hace más de 14 meses.” (37). A la fecha, no se conoce tal video.

Un ejemplo de destrucción de pruebas se dio en el caso del Palacio de Justicia, frente al cual ocurrió uno de los ataques más letales sufridos por los muchachos. Existían videos con imágenes en las que se aprecia que fueron detenidos, golpeados y posteriormente desaparecidos los 15 a 20 jóvenes que iban en el autobús Estrella de Oro 1531. Existían dos cámaras, una enfrente del Palacio de Justicia y la otra en una de sus esquinas, que grabaron seis videos que ya no existen. (38)

Una de las excusas para destruirlos fue que el sistema de grabación utilizado en ese C-4 “se va sobrescribiendo y regrabando la información captada cada siete días para optimizar el almacenamiento del servidor”, dijo el técnico que lo operaba. (39). Cuando fue citada a declarar la presidenta del Tribunal de Justicia, la magistrada Lambertina Galeana, dijo que “tomó la decisión de destruirlo porque sólo se veían unos jóvenes, no tenía buena visibilidad”. Otra explicación de esta funcionaria ante la PGR fue que el personal encargado de las cámaras “había intentado respaldar esos videos, sin embargo hubo “un error técnico desconocido” que lo impidió. “Inexplicablemente los videos no existen hoy”, concluyó el GIEI.

Otro de los escenarios de Iguala fue la Clínica Cristina, en donde un nutrido grupo de normalistas –algunos gravemente heridos–, profesores y padres de familia acudieron en procura de asistencia médica, no se les dio y fueron violentamente increpados y amenazados por un grupo de militares.

El Ejército declaró lo contrario a lo dicho antes y aseguró que sus miembros fueron corteses y solidarios. Al paso de pocos días después del 26 de septiembre una patrulla militar fue a la clínica a recoger las grabaciones de las cámaras del establecimiento. Además, el médico del lugar afirmó que antes de declarar ante la PGR fue llamado al 27 Batallón para hablar con las autoridades militares. “¿Cuál fue el motivo de dicha visita? ¿Por qué? ¿Qué aspectos se abordaron?” se preguntó el GIEI. La confiscación de los videos y el control de lo que pudiera decir el galeno –decimos nosotros- formaron parte de la destrucción de toda evidencia que revelara que estos miembros del Ejército formaron parte de la agresión a los estudiantes.

Algunos normalistas grabaron algunos videos con sus celulares y los entregaron a la fiscalía de Guerrero y luego ésta a la PGR cuando atrajo la investigación. Fueron “omitidos e ignorados por completo en las pesquisas del gobierno federal.” (40)

En resumen, ya hemos reportado el estricto seguimiento de inteligencia que se hizo de los jóvenes en los días previos al 26 de septiembre de 2014 y ese mismo día. De ello quedó registro. Sin embargo, a partir de las 21h30 de esa noche, cuando los cinco autobuses salen con los muchachos de la Central de Autobuses, existe, a decir del GIEI, “un apagón informativo”, es decir, luego de esa hora no se cuenta con “ninguna información de inteligencia de SEDENA, CISEN o del estado de Guerrero que den cuenta de lo que sucedió. Si los jóvenes tenían un seguimiento exhaustivo antes de entrar, también debieron de tenerlo después. Todo ello muestra un comportamiento coordinado, de ocultar los hechos o, en su caso, de no proporcionar la información existente.” (41)

**

Resta explicar cómo evitaron que los ciudadanos y vecinos no hayan proporcionado evidencia gráfica. La respuesta es: las autoridades y los delincuentes lograron implantar un régimen de miedo y terror que se recrudeció en los días de los hechos y después. Si los lugareños tenían fotos, videos o información, decidieron no proporcionarla.

Anabel Hernández relata que:

Entrevisté a varios estudiantes sobrevivientes. Recorrimos las calles por donde ocurrieron los ataques e intenté entrevistar a las personas. Podía leer el terror en sus ojos ante mi pregunta: “¿Usted estaba en su casa cuando ocurrieron los hechos?” “¿Qué fue lo que vio o escuchó?” Lo que decían sus ojos lo negaban sus palabras. Todos estaban fuera de Iguala, de visita en otra ciudad. Los comerciantes cuyos negocios estaban abiertos a esa hora, los vecinos, los transeúntes y conductores que circulan cotidianamente por esa ruta a esa hora. Todos negaban haber escuchado o visto algo y de inmediato cerraban

cualquier posibilidad de conversación.

Gracias al testimonio de los vecinos supe que los estudiantes no solo fueron atacados por policías federales y municipales uniformados, sino por personas vestidas de civil. Varios coincidieron en que parecían militares.

Fue poco a poco, a fuerza de regresar a tocar la misma puerta, que los testigos comenzaron a narrar esa noche de terror. Lloraban, temblaban, sentían culpa por no haber hecho nada. Un profesor estaba en shock porque el día posterior al ataque había tenido que limpiar la pared exterior de su casa salpicada de sangre.

**

En Los Ángeles, en el lejano 3 de marzo de 1991, el taxista afrodescendiente Rodney King fue perseguido en la autopista por la policía. Se paró en el distrito de Lake View Terrace. Estaba esposado cuando fue derribado, inmovilizado y golpeado inmisericordemente por cuatro policías blancos.

El incidente fue grabado por un vecino, George Holliday. Lo hizo con una cámara Sony. Entregó el material a una emisora local de tv y en cuanto se difundieron las imágenes, la grabación fue repetida por decenas de emisoras. La bárbara agresión fue vista por millones. La paliza estaba, además, teñida de rabia racista. Al parecer, fue el primer hecho de agresión policial que se filmó y llegó al gran público.

A pesar de las evidencias, tras un juicio los policías fueron absueltos. El veredicto dio lugar a un levantamiento popular de algunos días; eran masas enardecidas por la impunidad otorgada a los agresores. El gobierno de California se mostró impotente. El presidente George Bush, padre, amenazó con reprimir con la Guardia Nacional. Cientos de comercios fueron saqueados, se contaron más de 50 muertos y dos mil heridos. Hubo más de 7 mil incendios.

El video de Holliday evidentemente contribuyó a la masividad y cólera con la que se manifestaron los angelinos del sur, en su mayoría negros o de habla hispana. “La grabación fue la mecha que encendió la gasolina sembrada sobre el terreno de pobreza, discriminación, humillación y abuso policial contra personas ‘de color’”. (42)

Sobre Iguala no hay videos. Los autores intelectuales de la represión creyeron que por ello las reacciones serían menores. Pero existían en México y en Guerrero condiciones económicas, sociales y políticas que eran tan o más injustas y lacerantes que las de California en 1991. La Noche de Iguala, sin fotos ni películas que recogieran sus horrores, detonó las protestas más extendidas, enconadas y persistentes habidas en México en décadas.

No hubo, como en los Ángeles, 7 mil incendios. Pero las autoridades las sintieron como algo parecido.

En Iguala, el Estado logró invisibilizar la represión

Represión.- *Acto, o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales.*
Diccionario de la Real Academia Española.

En Chilpancingo el Estado cometió errores mayúsculos, morrocotudos. Uno muy grave fue el llevar a cabo sin disimulos una represión, por lo que desde el primer momento fue evidente su responsabilidad en los asesinatos de dos jóvenes y en las detenciones arbitrarias y torturas contra otros. Además, apareció como un ente intolerante de sus opositores, como un aparato antidemocrático e irrespetuoso del derecho.

En cambio, en Iguala, su agresión careció de antecedentes recientes de pugna con los normalistas para evitar que se la definiera como una represión. Y lo logró: la Noche de Iguala no fue vista así por el GIEI y periodistas independientes¹. Pocas voces afirmamos que había sido un acto represivo.

La despolitización de la emboscada de septiembre de 2014, el que las distintas corporaciones armadas estatales participantes no fuesen vistas cometiendo un acto contrainsurgente o represivo fue –todavía lo es– su mayor logro, que se completó con la teoría de que los narcos lo generaron al ver amenazados sus intereses. Esta teoría absolutoria del Estado como entidad contrainsurgente es uno de los mayores obstáculos para la consecución de la verdad.

**

Desde los inicios de 2011 los normalistas demandaron al gobernador Ángel Aguirre aumento salarial para sus profesores que se encontraban en paro, es decir, querían tener clases y con docentes mejor pagados; exigían un aumento en sus percepciones, que eran 35 pesos diarios por alumno para alimentos y otros gastos; y que al conseguir la licenciatura se les contratara como profesores, o sea que demandaban empleo luego de capacitarse cuatro años.

También exigían aumento a la matrícula escolar.

Desde meses atrás habían planteado públicamente sus demandas, sin

¹ Hasta el año 2023 el GIEI concluyó que fue una acción “contrainsurgente”, como veremos en el capítulo IX.

obtener respuesta ni diálogo: “Exigíamos una audiencia con el gobernador, quien personalmente se había comprometido a escucharnos, pero al cancelarla en tres ocasiones decidimos salir a las calles para ser escuchados”, declararon. (43). “Por pedir una entrevista con el mandatario Ángel Aguirre Rivero para solucionar estas demandas los balacearon, golpearon, persiguieron, asesinaron, hirieron, detuvieron y torturaron. El gobernador Ángel Aguirre y el gobierno federal pueden sentirse orgullosos”, denunció Luis Hernández Navarro (44), que agregó: “El gobernador actual, Ángel Aguirre, visitó la escuela en septiembre de este año [2011], se tomó la foto y se comprometió a resolver las demandas estudiantiles. Allí dijo que el recurso para la dieta, que es utilizado para la elaboración de los alimentos diarios, hoy se los incrementamos a 50 pesos porque no era posible que comieran con 10 pesos al día. Pero no cumplió sus promesas y los jóvenes comenzaron a movilizarse nuevamente a comienzos de noviembre.”

Tanto el gobierno federal como los de las entidades federativas venían ahogando económicamente y hostigando de distintas maneras a las escuelas normales rurales desde años atrás, lo que llevó al cierre a la mayoría de ellas. La sordera del gobernador Ángel Aguirre era parte de esa política de extinción de este tipo de educación. En estas fechas W Radio hizo un reportaje sobre las instalaciones de la escuela y encontró “dormitorios en ruinas que nunca fueron reparados, salones de clase sin pupitres, adaptados como dormitorios con alumnos hacinados, baños sin regaderas, pisos y techos destruidos por un evidente abandono gubernamental y falta de presupuesto”. (45)

Las tensiones entre estudiantes y gobierno eran públicas. Cuando ocurrió la agresión, fue ineludible que se la ligara inmediatamente con las demandas juveniles. Por ejemplo, el portal electrónico Sin Embargo en el acto lo dijo escueta y crudamente: “Los estudiantes pedían clases y empleo: les respondieron con balas”. (46)

Nada parecido ocurrió en Iguala 2014. El gobierno se cuidó de que en los meses previos no hubiese un *tour de forcé* o un juego público de vencidas con sus antagonistas. Durante este tiempo continuaron las contradicciones entre ambos actores, aunque soterradas, de manera que en Iguala la actuación del gobierno no apareció como la reacción que tuvo en Chilpancingo. Desde meses antes de la Noche de Iguala el gobierno evitó verse enfrentado frecuentemente con los jóvenes, lo que hizo posible que la celada nocturna pudiese ser presentada como un crimen ordenado por los narcos.

En Chilpancingo fue imposible que el gobierno desligara la violencia contra los muchachos de sus demandas (por lo demás, sus peticiones eran muy moderadas). En esa situación de previa y paciente exigencia pública de sus peticiones por parte de los normalistas, las autoridades carecieron de

margen para fabricar la versión de que la trifulca había sido responsabilidad de un estudiante armado e impulsivo y de personas ajenas. Si a ello le añadimos el abundante material gráfico que incriminaba a las autoridades, su coartada quedó destruida.

El general Ramón Arreola Ibarra, quien estaba al mando de la policía del estado, declaró que para restablecer la paz en Chilpancingo habían acudido sólo con equipo antimotines y completamente desarmados. Los seudo estudiantes, como llamó a los normalistas, “nos recibieron a golpes, con fuego”. (47)

Estas fueron las primeras declaraciones con las que las autoridades trataron de quitarse responsabilidad. El portal Sin Embargo, a unas horas de los hechos denunció que “el gobernador Aguirre Rivero no ha dado la cara. Informó que un trabajador del gobierno de Chilpancingo estaba difundiendo por twitter fotos en las que se acusa a los estudiantes de estar armados con granadas.” (48). Alberto López Rosas, el procurador del estado de Guerrero en 2011, agregó que un estudiante normalista, Gerardo Torres, era la persona “que había iniciado el tiroteo con un cuerno de chivo”, un rifle de alto poder (49) La noche del 12 de diciembre el funcionario presentó un arma larga y granadas de fragmentación que supuestamente portaba el muchacho. (50)

El normalista Gerardo Torres, cuando vio a sus compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino en el suelo, alcanzados por las balas, corrió y subió a un autobús, para salvarse. Antes había recogido del suelo un cartucho ya percutido. Unos policías lo capturaron a él y a uno de sus compañeros, y los tiraron al suelo. “Nos patearon en las costillas, las manos, los pies, muchas veces, unas 50.” Fue subido a una camioneta pick up. Lo subieron por un costado y lo aventaron. Durante el trayecto lo fueron pateando. Fue llevado a la procuraduría del estado. Recibió nuevos golpes al llegar y durante los primeros interrogatorios. Le quitaron un celular, 30 pesos y los tenis. Ahí le encontraron el cartucho que había recogido, que fue el pretexto de las autoridades para decir que él había disparado contra los policías y sus propios compañeros.

Además de este estudiante, las autoridades intentaron fabricar a otros tres responsables, pertenecientes a la Organización Popular de Productores de la Costa Grande. Daniel Juárez Vázquez, quien tenía 14 años, el 12 de diciembre de 2011 se encontraba con familiares en Chilpancingo, no participó en la manifestación de los normalistas “y fue aprehendido y golpeado por policías que lo llevaron a la Procuraduría de Justicia, donde otra vez fue golpeado y torturado.” El albañil Andrés Jacinto Antúnez, y el vendedor de nieves, Nicolás Hernández García, fueron los otros miembros de esa organización capturados y tampoco participaron con los estudiantes. Nicolás,

golpeado en un riñón, quedó discapacitado.

“Ante la CNDH dijeron que fueron torturados y que agentes de la Procuraduría intentaron incriminarlos, pretendían que se declararan culpables de haber disparado armas de fuego contra la manifestación de normalistas.” (51) Con estas mentiras los perpetradores de la represión intentaron construir una “verdad histórica”, que ni siquiera alcanzó esta denominación debido a que era tan clara y evidentemente falsa que pronto se derrumbó, insostenible.

En cuanto a la imputación contra el estudiante Gerardo Torres, no se sostuvo debido a que el plan de las autoridades era obtener del joven, mediante torturas, una confesión. El comandante David Jesús Urquizo Molina lo acusó de haber disparado con un rifle AK-47 contra la policía y sus compañeros estudiantes. Uno de sus captores vestía un pantalón “como de militar, camuflageado, color verde con gris para selva”. Fue sometido a nuevas sesiones de golpizas, una de ellas en un baño. Azotaron su cabeza contra los lavabos. En ese lugar sólo quedó el que vestía pantalón militar. Le taparon la cabeza y lo sacaron tapado con su playera. En otra habitación lo volvieron a poner boca abajo con las manos en la nuca. Un policía le pateaba las costillas, y le decía: *‘Tú eres el del cuerno ¿verdad? ¿Te duele? ¿Pues a mí no!’ Y lo seguía pateando.*

Encapuchado, lo subieron a una camioneta. Lo esposaron con las manos atrás y lo llevaron a las afueras de Chilpancingo a una casita. Le preguntaron si había disparado un arma. Sacaron un arma larga para que la disparara. Cuando se rehusó a empuñarla lo golpearon en el estómago, las costillas y los brazos. Lo obligaron a poner la mano en el arma, a jalar el gatillo, lo hicieron disparar varias veces. Juntaron los cartuchos, se los pusieron en las manos y le hicieron tocarlos. El objetivo era que diera positivo en la prueba de rodizonato de sodio, por haber disparado. (52)

El joven de Ayotzinapa soportó los tormentos y no aceptó auto incriminarse. La CNDH concluyó que presentaba “signos y síntomas positivos de tortura.” El estoicismo del normalista ocasionó que a las autoridades se les cayera una de las principales “pruebas” que los exoneraba de sus crímenes y cuya autoría intentaron trasladar a un normalista de la escuela rural.

Las autoridades también quisieron responsabilizar a los estudiantes del incendio de la estación de gasolina Eva que se encuentra sobre la carretera, cerca del lugar donde fueron emboscados. Un video reveló que había sido quemada por una persona vestida de civil cuando los estudiantes recibían disparos. Uno de los empleados del lugar, Gonzalo Miguel Rivas, intentó evitar, sin éxito, la inminente explosión e incendio. Murió unos días después por las quemaduras.

La versión de que los estudiantes fueron responsables de estos hechos

corrió con mejor aceptación: no sólo la hicieron suya, como era de esperarse, algunos intelectuales de derecha sino también el subsecretario de Gobernación en el gobierno de AMLO, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de la Verdad y Justicia para el caso Ayotzinapa (COVAJ). En el Informe que presentó en agosto de 2022 (página 29), asegura que los estudiantes en Chilpancingo “incendiaron una gasolinera”. Este Informe fue desautorizado por el GIEI.

Del incendio y tragedia se quiso responsabilizar a los de Ayotzinapa y se les fincaron procesos judiciales. La CNDH no los inculpó. En cambio, fue revelador que las autoridades, contra la ley, hayan modificado el escenario. Cuando 48 horas después del incendio llegó un perito, “observó que ya se habían realizado maniobras y trabajos de limpieza y albañilería, y que por ello el lugar no fue preservado correctamente para el estudio pericial que se le solicitó practicar.” Concluyó que “no se podía establecer el origen ni el foco del siniestro, así como qué tipo de agente externo se utilizó” (53)

La rápida y drástica modificación por las autoridades de la estación de gasolina es un hecho suficiente para eximir a los estudiantes de su incendio y muerte del empleado, y pone en primer lugar en la lista de sospechosos de haberlo hecho a las mismas autoridades. En el mismo sentido es interesante saber que, meses después, cuando la CNDH expidió su Recomendación, constató que “la PGR ni su homóloga en el estado de Guerrero han informado sobre las acciones emprendidas hasta el momento, en colaboración, o dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para esclarecer el homicidio del agraviado [Gonzalo Rivas].” Esto prueba que las autoridades nunca quisieron llegar a la verdad sobre el lamentable hecho.

Los gobernantes aprendieron de los errores que cometieron el 12 de diciembre de 2011 y mejoraron su mortífero actuar en Iguala 33 meses después. Su mayor logro fue convencer que el móvil de la desaparición de los 43 se debió a que un grupo de narcos los confundió con una banda rival; o que accidentalmente los normalistas ocuparon un autobús con un cargamento de droga: en sendas afirmaciones los narcos los habrían exterminado por atentar contra sus intereses y se esfuma que la Noche de Iguala fue una represión de grandes proporciones orquestada por el Estado y sus distintos niveles de gobierno, en la que fueron ayudados por delinquentes.

La sangrienta agresión en la capital de Guerrero en 2011 terminó sirviendo de ensayo de las autoridades para lanzar el 26 de septiembre de 2014 en Iguala una represión de mayor magnitud y más sangrienta, y sobre todo, con más posibilidades de éxito.

FUENTES Y REFERENCIAS

1. GIEI, VI, pág. 115.
2. Noche de Iguala: Aguirre, el gobernador ausente, Amapola Periodismo, 23/09/, 2019.
3. GIEI, VI, 115-121.
4. Fernández Menéndez, Jorge, “Otro engaño del caso Ayotzinapa, Excélsior, 22/01/ 2021.
5. Hernández, Anabel. (2016) La verdadera noche de Iguala. México, Penguin Random House, pág. 39.
6. Iliades, Esteban. (2015), “La noche más triste”. Nexos.
7. Hernández, Anabel., Op. cit., p 41.
8. GIEI, VI, 121.
9. GIEI, VI, pág. 119.
10. Hernández, Anabel, Op. Cit., pág. 42.
11. CNDH (2018), Recomendación 15VG/2018, págs. 332-333.
12. Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, “La violencia del Estado contra los normalistas de Ayotzinapa” (2015), págs. 135 y ss. En adelante, Tlachinollan...
13. PGR (2016), Informe del Caso Iguala. Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, pág. 79.
14. Amapola Periodismo, Op. Cit.
15. GIEI, VI, 142.
16. Tlachinollan, 2015, pág.136.
17. CNDH (2018), Op. Cit., págs. 332-333.
18. GIEI, VI, págs.104, 106 y109.
19. Sirenio, Kau, ¿Quién es Hernández Nieto, el militar ‘liberado’ por el caso Ayotzinapa? 24/08/ 2023.
20. Hernández, Anabel, “Los Pineda Villa, el clan fundador de la mafia guerrerense”, Proceso, 18/10/2014).
21. Hernández, A. (15 de julio de 2020). El expediente secreto de la PF del caso Ayotzinapa, Aristegui Noticias.
22. PGR (2016) págs. 81-82.
23. CNDH (2018) pág. 340.
24. PGR (2016) Declaración del conductor del autobús “Costa Line” 2513, 8/04/2015.
25. GIEI, VI, 28; GIEI, I, 31 y Greko, T. (2016) Ayotzinapa. Mentira histórica: Estado de impunidad, impunidad de estado. Proceso, p.190.
26. CNDH, 2018, pág. 342.
27. GIEI, VI, 30.
28. Reynoso, Carlos Alonso y Alonso, Jorge, 2015, Ayotzinapa, una fuerte indignación que se convirtió en movimiento, UAG, pág. 51.
29. CNDH, 2018, pág. 339.
30. PGJ, 27/09/201; y PGR, 8/04/ 2015.
31. CNDH, 2018, pág. 552.
32. CNDH, 2018, pág. 345.
33. CNDH, 2012, Recomendación no. 1 VG. Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, relacionada con los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, Guerrero, 27/03/ 2012. Punto 77. Salvo indicación en contrario, los datos de este capítulo están tomados de este documento.
34. <http://www.revistahincapie.com/la-verdadera-masacre-de-iguala/#> .
35. GIEI, VI, pág. 39.

36. GIEI II, pág. 133.
37. Hernández, Anabel, El video escondido de la Noche de Iguala, Proceso, 23/01/2016.
38. Barrera Hernández, Abel, “Ayotzinapa, corazón en llamas”, La Jornada, 26/9/2020.
39. GIEI VI, pág. 173.
40. Hernández, Anabel, 2016, pág. 228.
41. GIEI, VI, pág. 33.
42. Beatriz Díez, BBC Mundo, 29 abril 2017.
43. Ruiz, Cuauhtémoc, 2021, La guerra del Estado contra los insumisos, El Socialista, 407.
44. Hernández Navarro, Luis, Ayotzinapa otra vez, La Jornada, 13/12/2012.
45. Ramos, Dulce, “Aprueban comisión especial para investigar muerte de normalistas”, Animal Político, 21/12/2011.
46. <https://www.sinembargo.mx/12-12-2011/94217>.
47. Ocampo Arista, Sergio, “Matan policías a dos estudiantes al desalojar un bloqueo carretero”, La Jornada, 13/12/2011.
48. <https://www.sinembargo.mx/12-12-2011/94217>
49. cndh, 2012, punto 55.
50. Sirenio Pioquinto, Kau, Ejecución extrajudicial en la Carretera del Sol: 9 años de impunidad, Pie de Página, 11/12/2020.
51. Labastida, Mariana, Invita el gobierno estatal a acto de disculpa pública a víctimas del 12 de diciembre”. El Sur, 18/11/2012).
52. CNDH, 2012.
53. CNDH, 2012, punto 31.

Iguala 2014 y Chilpancingo 2011: el mismo *modus operandi*

II

El 17 de diciembre de 2012, a la una de la tarde, en París, la empleada de limpieza de Maureen Kearney “la descubre en la cocina de su casa derrumbada en una silla, amordazada. Tiene los pies atados, los brazos amarrados al espaldar del asiento, una A ‘grabada’ en la piel del vientre y el mango de un cuchillo metido en la vagina. Asaltada a las 7 de la mañana lleva seis horas así...”

Maureen Kearney era dirigente sindical en la empresa Areva, multinacional nuclear francesa controlada por el Estado. Se había destacado por defender a los trabajadores y por denunciar malos manejos de los altos directivos.

Los detectives concluyeron que no encontraron prueba alguna de la agresión, ni huellas digitales del perpetrador.

Después de más de cuatro años de idas y vueltas ante la “Justicia”, el 15 de mayo de 2017 Kearney comparece ante el Tribunal Superior. Está acusada de “falsa denuncia”. De acusadora pasa a ser acusada y es condenada.

La situación dio un giro cuando Caroline Michel-Aguirre, reportera del semanario L’Obs, “se percata de deficiencias policiales y judiciales de suma gravedad. Y sobre todo se entera de una historia bastante parecida a la de Maureen Kearney”, cuenta Anne Marie Mergier.

“El 22 de junio de 2006 dos hombres encapuchados irrumpen en la casa de Marie-Lorraine Boquet-Petit en plena tarde. La golpean. La violan. Le ‘graban’ una cruz sobre la piel del vientre y un ataúd en el pecho. Y la advierten que su esposo debe callarse.”

Su pareja, Emmanuel Petit es un ingeniero de Veolia, multinacional francesa especializada en el tratamiento del agua. “Desde 2004 Petit intenta oponerse a oscuras maniobras de corrupción ligadas a la implantación de esa empresa en Medio Oriente. Dos días más tarde denuncia a Veolia ante

la fiscalía anticorrupción que se demora un año y medio antes de instruir el caso. Durante todo ese tiempo, Emmanuel Petit y su familia sufren amenazas que culminan con la agresión de Marie-Lorraine.”

Como en el caso de Maureen Kearney, los investigadores policiales de Versailles no encuentran huella alguna de los agresores y empiezan a insinuar que la víctima “inventó” su agresión.

Crecen las presiones sobre Petit, quien retira su demanda contra Veolia.

Pero el que la periodista Caroline Michel-Aguirre haya sacado a la luz que el *modus operandi en ambos crímenes fue prácticamente idéntico* y que la agresión ocurrió en situaciones y contextos parecidos, con víctimas que eran peligrosas para grandes intereses, condujo a las autoridades francesas a tener que reconsiderar el caso de Maureen Kearney. Y a absolverla. (1)

Fueron atroces los ataques contra Maureen y Marie Lorraine. Fueron pensados para destruir psíquicamente a mujeres. Marcar los vientres de las víctimas (quizá con un punzón que no derramó sangre) fue poner la última grafía de la firma. El que el *modus operandi* fuera en esencia idéntico, delató que sí había agresores (y que probablemente fueran los mismos). Y que hubo un solo autor intelectual de ese tipo de tortura.

Todo asesino serial desarrolla un *modus operandi*, una manera de cometer los crímenes propia, distinta a otros delincuentes. La repetición de algunas o todas las operaciones que conducen a consumar la felonía las convierte en patrones, que en su conjugación son característicos del sujeto delincencial. Tales comportamientos ocurren en todas las profesiones o actividades humanas que exigen repetición y creatividad, y el resultado es único, al revelar al autor, individual o colectivo, que deja su impronta en la obra. De acuerdo con el Diccionario jurídico, el *modus operandi* es “reiterativo, pero de ninguna manera estático. Como todo comportamiento aprendido, tiende a perfeccionarse y modificarse...” (2)

En Chilpancingo 2011 y en Iguala 2014 el autor intelectual fue el mismo y lo hizo con el mismo *modus operandi*, en su versión de represión a masas de disidentes políticos.

El Estado represor llegó con una amplia experiencia a 2014, condensada en un *modus operandi* usado tres años antes que adaptó y perfeccionó. En ambos acontecimientos dejó su firma. El *modus operandi* delata la huella del criminal. Es parte de la escuela mexicana de la represión.

Ciencia militar

Podemos asegurar que en el decálogo del Estado contrainsurgente está que cuando reprime masivamente debe hacerlo como si acudiese a un peligroso combate contra un fiero y poderoso enemigo. Del hecho de que el adversario vaya desarmado, carezca de cualquier tipo de instrucción militar, sea tomado por sorpresa y vista calzado y prendas de entre las más modestas (como fueron los casos de los chicos guerrerenses) no debe concluirse que deba acudir a enfrentarlos sin el equipo, el armamento y todo a su favor. En criminología existen dos términos que definen este comportamiento: alevosía y ventaja. El significado de la primera es: “Cautela para asegurar la comisión de un delito, sin riesgo para el delincuente. El asesino se asegura de que no corre ningún riesgo que pudiera proceder de la defensa de la víctima. A través de la alevosía se pretende asegurar la indefensión de la víctima ante el ataque. (3)

Las ventajas comienzan cuando constatamos que tanto en Chilpancingo como en Iguala los represores hicieron gala de estrategia militar. En *La Noche de Iguala* la técnica fue refinada, como ya vimos: aun antes de comenzar las violentas acometidas, el 26 de septiembre en la noche, el impedimento de que se hicieran de vehículos de transporte en Chilpancingo, la artimaña para llevarlos a las goteras de Iguala, el genial señuelo inventado para meterlos a ese casco urbano, el riguroso seguimiento de cada uno de sus pasos, revelan que los represores contaban previamente con un plan determinado y que hicieron un uso flexible de distintas tácticas.

Chilpancingo fue una Iguala en miniatura, en dónde también apareció, en escala elemental, la ciencia militar. La masa estudiantil, que ocupaba la carretera, fue atacada “por dos flancos, de norte a sur, por ambos carriles de la Autopista del Sol, y por el puente del río Huacapa.” La CNDH registró con más detalle la pericia bélica de los atacantes: “los elementos policiales estuvieron ubicados en 11 puntos bloqueando casi la totalidad de los accesos a los manifestantes”. (4)

En Iguala el Estado diseñó una estrategia represiva más ambiciosa, en un teatro territorial más extenso, de mayor tiempo de duración y con fines más letales. Implicó coordinar las fuerzas de casi una decena de instituciones policiales y hasta grúas de tránsito y ambulancias (más los activos de los delincuentes del cártel Guerreros Unidos). Incluyó instalar retenes en distintos puntos de la carretera que va a la capital. Requirió de emitir órdenes de atacar al calor de los acontecimientos: como la agresión a estudiantes, profesores y periodistas que participaban de una improvisada conferencia de prensa, a la media noche, en la que resultaron asesinados tres normalistas.

Equipados para combate

Los policías de las patrullas en Iguala llevaban mejor equipo que el habitual de la policía municipal: portaban casco, pasamontañas, ropa de manga larga, coderas, rodilleras, chalecos y guantes. Llegaron otros policías, “que parecían estatales, ya que se encontraban uniformados de manera distinta: portaban chalecos antibalas, con capuchas que cubrían sus rostros, vestían equipo táctico”. [...] “Llevaban casco, rostros cubiertos, gafas, guantes tácticos, chalecos antibalas, coderas, espinilleras, lo que se conoce como tipo antimotines, pero sin tolete y sin escudo”.

Carecemos de registros sobre el equipo de los policías en Chilpancingo, salvo lo obvio, que la mayoría del personal policial contaba con equipo de protección antimotines. Para saber cómo acostumbraba equiparse la PFP para reprimir multitudes podemos valernos del reporte acerca de esta policía en Oaxaca 2006, enviada por el presidente Fox y su sucesor Felipe Calderón a acallar las numerosas manifestaciones populares habidas en ese estado. Se reconoce que dentro de la tropa había “cierto personal” policial que acudió “armado”, aunque no se aclara de qué tipo de armas, que suponemos eran de fuego; se acepta que tras los uniformes de la PF había soldados (y no policías) y que éstos se habían fogueado en operativos contra delincuentes. Esta fuerza policial constituyó la columna vertebral de la represión en la tierra de Benito Juárez.

“El personal actuante... elementos de la PFP con su equipo básico antimotín, integrado por casco con visera, escudo, pechera, rodilleras, espinilleras, tolete y algunos con equipo dispersor de gas, aclarando que [...] cierto personal se encuentra armado [...]. **Los elementos desplegados en el estado de Oaxaca son aquel personal comisionado de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Seguridad Pública [...] habiendo participado dicho personal en diversos operativos de Delincuencia Organizada en los diferentes estados de la República**”. (5)

Armamento

En el violento desalojo y represión en Chilpancingo intervinieron un total de 168 elementos: de la Policía Federal (PF); de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y de la Policía Preventiva. **91 portaban armas de fuego**, de los cuales 59 eran de la PF. Portaban armas largas tipo Bushmaster, G-3 y Panther, así como pistolas 9 mm y Beretta. De la Policía Ministerial, 26 portaban armas Colt tipo AR-15, calibre .223. Seis policías adscritos a la Policía Estatal portaban el mismo tipo de armas largas. De 73 policías ministeriales del estado de Guerrero, 26 iban armados. (6)

En Iguala los agresores usaron las mismas armas que sus pares en la

capital de Guerrero.

El G-3, el AR-15 y el Bushmaster son fusiles de asalto. El primero “tiene una cadencia de fuego de 600 disparos por minuto. Es un arma muy precisa, al acoplarle una mira telescópica se convierte en un fusil de tirador selecto”, según Wikipedia. En Iguala, “la mañana después del ataque fueron encontradas entre 36 y 38 de esas armas en el edificio de la policía municipal”, según el periodista alemán Wolf Dieter Vogel, quien investigó el caso para el diario *Die Tageszeitung*. Su interés tenía que ver con el hecho de que el fusil G-3 (o G36) es de fabricación germana, por la compañía H&K (Heckler & Koch). Unos policías detenidos declararon que portaban esas armas el 26 de septiembre de 2014. (7)

Sobre los AR-15, Wikipedia informa que ocasionaron “grandes heridas” en la guerra de Vietnam. “Estas heridas eran tan devastadoras”, que la publicación de las fotografías estuvo prohibida hasta la década de 1980. En cuanto a la carabina Bushmaster, fue empleada en la matanza de la Escuela Primaria de Sandy Hook, en Connecticut, en 2012. Hubo 26 víctimas. A partir de ello, el estado de Nueva York prohibió esta arma.

Entre las armas usadas en Iguala también hubo fusiles de asalto italianos Beretta. Las pistolas 9 mm han sido adoptadas por el ejército de los EEUU y fueron usadas en las guerras de Irak y Afganistán. También existen fusiles de esta marca y se les conoce como los AR-70/223. (8)

La Policía Municipal de Iguala contaba también con 47 fusiles de asalto y 132 pistolas de la empresa italiana Beretta. Dice el informe de balística del caso Ayotzinapa que al menos ocho casquillos encontrados en la escena del crimen pertenecen a tres de dichos fusiles, y tres casquillos pertenecen a dos pistolas de la misma marca. (9)²

Balas de militares y de la PF

En el Informe de la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa (agosto 2022) presidida por Alejandro Encinas, dependiente del gobierno de AMLO, jamás se constata que, en Iguala, además de policías municipales, participaron otras policías, destacadamente la PF y militares vestidos de civil. *Estos últimos dejaron cartuchos que sólo usa el Ejército.*

Ya desde 2016 la reportera Anabel Hernández había denunciado que “el gobierno federal y el de Guerrero han ocultado que la noche sangrienta

2 Anabel Hernández agrega que Las armas italianas y las alemanas H&K entran al mercado a través del Ejército mexicano, el cual comercializa las armas a personal militar, policías estatales, municipales, e individuos”. Fue la Secretaría de la Defensa Nacional de México quien las compró y luego las revendió a diversos gobiernos estatales.

los policías municipales de Iguala y Cocula portaban fusiles automáticos R-15 o G36 de calibre .223 y pistolas calibre 9 mm, al igual que los federales, mientras que los militares del 27 Batallón de Infantería portaba el rifle de asalto G3 calibre 7.62 × 51, según se comprobó en la averiguación previa. **Cartuchos de todos esos calibres se encontraron en la calle Juan N. Álvarez, donde se perpetraron dos ataques, y en la autopista, en el cruce con Santa Teresa**”, afirma la autora del libro *La verdadera noche de Iguala*.

Hernández obtuvo el dictamen de balística que la fiscalía guerrerense practicó a cuatro de los autobuses donde viajaban los normalistas, así como al vehículo donde viajaban los futbolistas del equipo Los Avispones -que fue también agredido al ser confundido con uno de los vehículos en los que viajaban estudiantes.

Uno de los autobuses tenía al menos veintinueve disparos, los cuales se realizaron con proyectiles calibre 7.62. “El documento apunta que dicho calibre se usa en los fusiles AK-47, FN FAL y G3, ninguno de los cuales era parte del armamento que las policías de Iguala y Cocula emplearon esa noche: **los únicos que portaban armas de esas características eran los escuadrones del 27 Batallón de Infantería y los testimonios de los propios militares indican que estaban equipados con fusiles G3**”, asegura esta autora.

El camión en el que viajaban los futbolistas recibió 83 impactos de bala. Fue atacado con armas calibre .223, medida que corresponde a las que portaban las policías municipales de Iguala, Cocula y la PF. Aquí también se encontraron disparos calibre 7.62, que corresponde al G3 del Ejército.

Otros peritajes revelaron que algunos de los casquillos encontrados en otras escenas del crimen salieron de la Fábrica de Cartuchos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Sedena aclaró que esos pertrechos son de uso exclusivo del Ejército, “por lo que no pueden ser adquiridos por personas civiles”. (10)

Con este tipo de artefactos también fueron atacados los estudiantes normalistas en Chilpancingo. La muerte en este sitio de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y de Gabriel Echeverría de Jesús, se debió, en el primer caso, a un “Traumatismo craneoencefálico severo consecutivo a una herida por proyectil único de arma de fuego penetrante y saliente de cráneo, que por su propia naturaleza es una lesión mortal por necesidad, y en el segundo caso por una herida por proyectil único de arma de fuego penetrante y saliente de cuello.”

Gabriel Echeverría y Jorge Herrera recibieron tiros de precisión, mortales. Los fusileros recibieron la orden de aniquilarlos. Ambos fallecieron momentos después. Ese tipo de disparos tan exactos como letales salen de fusiles como los mencionados.

La familia de Aldo Gutiérrez, el chico que luego de ser balaceado en

Iguala quedó en estado vegetativo, pudo suponer que su hijo fue herido por un proyectil disparado por el fusil alemán G36. Solicitó estar en el juicio en Alemania por la venta ilegal de armas de ese país a lugares de México considerados peligrosos. Y no le permitieron hacerlo.

En tanto que, en el otro lado de la escena, “el grupo de personas que se manifestaba públicamente en Chilpancingo –y podemos agregar, en Iguala- **no portaba arma de fuego alguna**”, reconoció la CNDH. (11)

El deleite de rafaguear a jóvenes inermes

Una ráfaga es un “conjunto de proyectiles que en sucesión rapidísima lanza un arma, cambiando convenientemente la puntería para cubrir por completo el blanco del tiro.” Podemos decir sin ninguna duda que el personal del Estado contrainsurgente tiene una especial predilección por esta práctica, que usó profusamente en Chilpancingo y en Iguala de la Independencia. Forma parte favorita de su *modus operandi*.

Usted acaba de leer que el autobús en el que viajaban los adolescentes del equipo de fútbol Avispones (confundido con uno de los transportes de los chicos de Ayotzi) recibió 83 impactos de bala en unos segundos. Es horrible imaginarse en los cuerpos de estos adolescentes. El objetivo era matar a los más posibles y aterrorizar y traumar profundamente a los sobrevivientes. Sólo en ese lance fueron asesinados un adolescente de 15 años y el chofer, y otros tres quedaron gravemente heridos: uno de ellos con cinco balas en el cuerpo. Hubo un total de 12 heridos de un total de 21 pasajeros. De acuerdo con otra fuente, el autobús recibió más de 400 disparos. (12)

“Los disparos llegaron desde las laterales y luego de frente. Fue donde mataron a David Josué y nos dieron a varios. Migue recibió 5 balazos, y al preparador físico le dieron un rozón en el ojo, le atravesaron la nariz y le fracturaron un brazo. Yo creo que fuimos los más graves en ese momento, pues a mí dos balas me atravesaron el abdomen y también el hígado, relató uno de los futbolistas. (13). Por su parte, el preparador físico recordó que cuando el autobús en el que iban los jóvenes deportistas se detuvo, uno de los agresores se acercó a la puerta y le exigió abrirla: “Yo veo que me está encañonando y le digo: ‘sí, sí te voy a abrir la puerta pero no me encañones, ya me despedazaste un brazo, me echaste a perder un ojo y traigo niños de 15 a 19 años, no vayas a volver a disparar’... El chofer está tirado a mis pies y le pregunto: ‘¿Puedes abrir? Y me dice ‘No; estoy bien madreado, no me puedo mover.’”

En Chilpancingo ocurrió algo parecido. La CNDH concluyó que “fueron los elementos de la Policía Federal quienes, una vez lanzada la granada de humo a los manifestantes desde el lado oriente, generaron que la manifestación se tornará violenta”. Lo que quiso decir la CNDH es que la explo-

sión de la granada fue la orden para que los policías federales iniciaran la metralla. “Un grupo de alumnos intentó resguardarse en uno de los camiones, y otro trató de repeler a los policías con cohetones y piedras, pero no lo logró. Por el contrario, los balazos se intensificaron. Los cristales de los autobuses quedaron destrozados y las carrocerías con impactos de bala.” (14)

De acuerdo con los abogados del Centro de Derechos Humanos, Tlachinollan, “los disparos de armas de fuego se prolongaron entre las 12:10 y las 12:30 horas, llegando a ser, por momentos, de una intensidad inusitada.” Uno de los dueños de un negocio cercano a los hechos, entrevistado por la CNDH, también calculó que la lluvia metálica duró 20 minutos³.

Hay que imaginar que decenas de policías lanzan gases y hasta 91 disparan durante 20 minutos con fusiles contra estudiantes desarmados y autobuses en los que se refugiaron algunos de ellos. Esto fue lo central de la represión y ocasionó la muerte de dos jóvenes y cuatro heridos por las balas.

La PGR estudió sólo 68 armas de fuego y encontró que 24 fueron disparadas, de las cuales 22 pertenecían a la PF. La CNDH no preguntó por qué no fueron examinadas el total de armas -91- llevadas por las distintas policías (15)

La información sobre los casquillos recolectados fue todavía más inverosímil, pues sólo encontraron 49. (16) Por lo que respecta a los proyectiles impactados en los autobuses en que se refugiaron los estudiantes, el dictamen en materia de balística fue también insuficiente. O tal vez el problema reside en la ínfima información que la CNDH extrajo de éste. Sólo fue examinado uno de los autobuses (de un total de siete) sobre el cual sólo se dice una obviedad: “presentó daños producidos por proyectil de arma de fuego.” Fue hecho por una perita de la Procuraduría General de la República en el estado de Guerrero (17), institución que fue parte ofensora.

Los testigos involuntarios de la cacería de estudiantes, en cambio, “atónitos y nerviosos, choferes de automóviles particulares, autobuses y tráileres, que atestiguaban los hechos en ambos carriles, huían para protegerse de los disparos.” (18) Dos estudiantes, Carlos y Josué narraron que al escuchar los primeros disparos y luego de que estallaron granadas de humo, “unos 50-60 estudiantes corrieron hacia la gasolinera y a la tienda OXXO donde fueron detenidos.” Los policías lanzaron otra granada de humo y les gritaron que se entregaran.

Josué relató que corrió hacia la gasolinera y vio a los federales en la calle lateral del bulevar [.] “El joven se dio cuenta de que las balas comenzaron a dirigirse hacia los estudiantes cuando vio que los cristales de los autobuses se impactaban por las balas.” Vio caer a su compañero Alexis Herrera Pino.

3 La CNDH, que por distintas vías intentó minimizar la magnitud y duración de la agresión, calculó que los disparos sólo duraron seis minutos.

Se tiraron en el pasillo del OXXO y en el piso de la gasolinera por instrucciones a gritos de los policías, que los patearon e insultaron.

Vayamos a Iguala.

El 26 de septiembre de 2014, apenas salieron los cinco autobuses cargados de estudiantes de la Central y entraron a la calle Juan N. Álvarez, fueron perseguidos por patrullas que les dispararon y destrozaron una llanta trasera del autobús que cerraba la comitiva, el Estrella de Oro 1568. Los normalistas se protegieron tirándose en el suelo en los diferentes autobuses. Eran perseguidos inicialmente por unas siete patrullas y al llegar el convoy al Zócalo se sumaron más patrullas a agredirlos. *“Ahí nos están disparando a matarnos. Algunos chavos están sentados en los asientos y otros tirados en el pasillo para protegerse de los disparos. Se para el autobús porque ya no podía pasar. Se paran los tres autobuses, siguen disparando, le disparan y pincharon todas las llantas, empezaron a disparar a matarnos”*, relató el normalista FM al GIEI.

A las 21:40 horas aproximadamente, cuando los autobuses se disponían a incorporarse al Periférico norte para salir de la ciudad, la patrulla 002 se cruzó en el camino, impidiendo la salida. *El autobús todo estaba perforado, a la salida del Periférico nos salen otras patrullas que nos bloquean. En eso empezamos a escuchar las detonaciones*”, según relato del normalista TC al GIEI.

Todos los autobuses fueron tiroteados, quedaron muchos cristales rotos y las carrocerías agujereadas, especialmente en el caso del último autobús, Estrella de Oro 1568, que resultó con treinta disparos que impactaron en su interior (19) De acuerdo con uno de los choferes, una decena de estudiantes bajaron del autobús a quitar una patrulla que les cerró el paso. En ese momento, dijo, *“empecé a escuchar detonaciones de armas de fuego... de repente los disparos se dirigieron hacia el autobús por lo que cubrí mi cabeza escondiéndome abajo del tablero para evitar ser alcanzado por alguna bala”*. (20) El autobús Estrella de Oro 1568 tuvo 30 impactos de atrás hacia delante, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. *“La mayoría de los proyectiles inciden en la parte interna del autobús”*, presenta diversos daños en su carrocería y ventanas, que por sus características fueron producidos por proyectil de arma de fuego; con las trayectorias realizadas se estableció que dichos disparos fueron realizados desde diversos ángulos, siendo todos estos impactos de afuera hacia adentro del vehículo, estableciéndose además que para tal evento participó más de un tirador...”

Los disparos de la policía alcanzaron a Aldo Gutiérrez Solano en la cabeza cuando intentaba quitar la patrulla que obstaculizaba el paso (21). De acuerdo con una de las víctimas, *“...en ese momento los policías municipales*

dispararon sus armas de fuego hacia nosotros, desde una distancia aproximada de diez metros, dando un impacto de bala a mi compañero normalista, Aldo Gutiérrez, a la altura de la cabeza". (22) Aldo es el chico de Ayotzinapa que, a la fecha, está en estado vegetativo como resultado de esta lesión. Mientras que otro de los jóvenes, reportó que: *"nos cierran el paso con una patrulla; al detenernos seguían disparándonos"*. (23)

"En la calle había decenas de casquillos. El tercer camión estaba todo balaceado. Los disparos eran de afuera hacia adentro, eso se notaba por la forma en que estaba doblada la lámina por donde entró la bala."

"Todo estaba lleno de sangre, recordaría después con horror una señora que se asomó al vehículo, quien por razones de seguridad pidió no dar su nombre, escribió Anabel Hernández: 'El volante estaba lleno de sangre; en el suelo, también lleno de sangre, había cuajos; y la pared de uno de mis vecinos también estaba embarrada de sangre'"'. (24)

Cuatro de los cinco autobuses en que se transportaban los estudiantes "quedaron baleados, destrozados los vidrios, con sangre en su interior", resumió el GIEI.

Perseguir a los jóvenes que huían

Es obvio que tanto en Chilpancingo como en Iguala la orden dada a los perpetradores fue que, en el caso en que algunos jóvenes corrieran y trataran de escapar, deberían perseguirlos y atraparlos.

En Chilpancingo, cuando la metralla cesó, los estudiantes buscaron dónde refugiarse. Creyeron que había terminado la pesadilla, sin embargo, los elementos de las diversas corporaciones los buscaron hasta en las faldas de los cerros. Las detenciones de normalistas se prolongaron durante más de una hora. El reportero Sergio Ocampo Arista, presente en la escena, calculó que el asedio contra los estudiantes fue más largo, de unas tres horas: "La persecución de estudiantes no cesó, pues los policías buscaron en los cerros a los normalistas hasta después de las 16 horas". En cuanto a la CNDH, registró que, luego del asesinato de los dos estudiantes en Chilpancingo, algunos de los manifestantes ya dispersos observaron cómo otras personas fueron perseguidas por elementos de las diversas corporaciones policiales; los acecharon desde ese lugar hasta los lotes baldíos que se encuentran en las faldas del cerro situado cerca del mismo, donde fueron sometidos de forma violenta.

En Iguala, los estudiantes salieron de la Central de Autobuses en cinco unidades, una de las cuales, el de la empresa Estrella Roja salió por la puerta trasera. Era el llamado por el GIEI "quinto camión", sobre el que nos extenderemos en el capítulo final. Este autobús salió de la ciudad por la carretera

hacia Chilpancingo, llegó poco antes del Palacio de Justicia (en dónde el autobús Estrella de Oro 1531 había sido detenido y los estudiantes que lo tripulaban estaban siendo agredidos) y fue detenido por una patrulla de la PF. Los jóvenes bajaron de la unidad a ver qué pasaba cuando un agente de la PF les apuntó con su arma, mientras los jóvenes huían hacia la Colonia Pajaritos, y una montaña cercana, donde se escondieron. Fueron perseguidos durante horas. Posteriormente bajaron de nuevo hasta cerca el Palacio de Justicia, cruzaron el puente bajo el cual había quedado el autobús Estrella de Oro 1531 destrozado y regresaron a pie hacia Iguala en búsqueda de sus compañeros. Al entrar a Iguala por el Periférico, fueron perseguidos de nuevo por policía municipal y una patrulla ministerial y tuvieron que huir otra vez. Fueron atacados con piedras y disparos de armas de fuego mientras subían por unas escaleras hacia la parte alta de dicha colonia.

El GIEI realizó el recorrido con sobrevivientes del Quinto camión y **comprobó las marcas de los disparos en la subida donde señalaron los normalistas que fueron atacados con armas de fuego**, por parte de la policía, cuando trataban de huir en la colonia 24 de febrero.

Líderes estudiantiles asesinados

En Chilpancingo fueron asesinados dos estudiantes y en Iguala tres. En ambos sitios los perpetradores eligieron entre sus víctimas a líderes, a Gabriel Echeverría, en 2011, y a Julio César Mondragón Fontes tres años después. Esto fue deliberado: los represores siempre tratan de castigar con más rigor a los cabecillas y esto también debe formar parte destacada del Decálogo de la represión. Y este axioma se cumple de manera todavía más ejemplarizante en el caso de Julio César, como veremos.

Gabriel Echeverría tenía 20 años y era originario de Tixtla. Alumno destacado en el bachillerato, fue nombrado delegado nacional de la FECSM. “Sus compañeros lo recuerdan como un joven muy activo, comprometido y audaz”, dice el Centro Tlachinollan.

En cuanto a Julio César Mondragón, tenía 22 años, estaba casado, tenía un hijo, y poco tiempo estudiando en Ayotzi. Antes había estudiado en las normales de Tenerife y en Tiripetío, de donde salió por “desacuerdos” con los dirigentes estudiantiles. El 26 de septiembre iba al mando de un autobús con 30 estudiantes. Tenía “habilidad para aprender sistemas digitales”, era un “atleta consumado, frontonista y corredor que también tenía tiempo para los estudios y la familia.” Antes del 26/09/14 se fraguaba un frente de organizaciones campesinas y populares contra los abusos y despojos de empresas mineras, y Julio César era un activista destacado de este proyecto. (25)

Las represiones de 2011 y 2014 incluyeron el asesinato de muchachos

representativos de las banderas normalistas. Fue parte del escarmiento, para que los que osaren encabezar a este movimiento sepan que su seguridad y vida peligran más que las del resto. Y que su asesinato podría ser espantoso: Julio César fue salvajemente torturado antes de ser asesinado, y fue desollado.

Evitaron que recibieran atención médica

¿Los perpetradores en Chilpancingo auxiliaron a las víctimas, a las decenas de jóvenes heridos de bala o por golpes? Parece una pregunta absurda, esquizofrénica, porque el que reprime quiere causar daño y, una vez causado, espera que la víctima no se reponga de éste. No obstante, en cualquier circunstancia es una obligación legal de las policías prestar ayuda a heridos. Dice al respecto la CNDH sobre Chilpancingo:

“105. Esta Comisión Nacional observó que las víctimas fueron auxiliadas por otros manifestantes, sin que los elementos de la PF, así como de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, ambas del estado de Guerrero, que estuvieron presentes en los hechos en que resultaron heridos por proyectil de arma de fuego tres personas, omitieron prestar auxilio a las víctimas, situación que evidenció no solamente el desinterés en las víctimas del delito, sino una falta de sensibilidad y trato digno hacia ellas.”

En sus largos textos sobre la represión del día de la virgen de Guadalupe en la Autopista del Sol, la comisión nacional no informa más acerca de esto, salvo las siete líneas que hemos copiado.

En Iguala los represores seguramente también recibieron la orden de no coadyuvar para que los jóvenes y otras personas heridas recibieran auxilio médico. Es muy probable que las autoridades ordenaran a los hospitales que no recibieran a heridos de Ayotzinapa, ni a los que se les pareciesen.

Los sobrevivientes y heridos del equipo de fútbol Avispones relataron al GIEI el trato “displicente y amenazante” con que se condujeron los policías federales que estuvieron en el lugar en que los agredieron, que se negaron a atender a los heridos y a trasportarlos. Los padres del chico futbolista que había recibido cinco balazos pudieron llegar pronto al lugar del ataque, en dónde su hijo se desangraba: *“Entonces a mi esposa la detienen [los policías federales], yo me les alcancé a zafar. Iba endiablado, no era yo, corro donde está mi hijo, estaba tirado. No puedo levantarlo. Se acerca uno de los policías federales y me dice: ‘no te lo vas a llevar’; le digo: ¡pues es mi hijo!, me dice: ‘no te lo vas a llevar’; le digo: ‘sí, está grave!’. Para esto, mi esposa les pide, hasta se les hincó, que lo ayudaran, que lo levantaran, que si no veían cómo estaba desangrándose y le dijeron que no podían ellos levantar heridos. Al contrario,*

la quitaron del lugar porque según ellos íbamos a destruir evidencia al mover casquillos.”

El padre del joven herido fue amenazado cuando intentó subir a su hijo al coche de la policía:

“Levantamos a mi hijo, y como estaba cerca la patrulla, se me hizo fácil querer subirlo ahí. Y fue cuando (el policía federal) me dijo: ‘¿sabes qué?, ¡ni te atrevas a subirlo ahí!’; entonces intenté ponerlo en el cofre y me dijo: ‘¡ni te atrevas a ponerlo!’ Intentó detenerme, casi forcejeamos. Yo iba manchado de sangre, a él le preocupaba no mancharse...” “Otros heridos señalan la misma actitud de los policías federales –dice el GIEI. Hay que tener en cuenta que varios de los heridos tenían lesiones de extrema gravedad que ponían en riesgo su vida y que la atención y traslado rápidos eran cuestiones de urgencia vital”. (26)

Los dos heridos más graves, el conductor del autobús y el niño apodado cariñosamente “El Zurdito”, agonizaban. El retraso en su traslado fue fatal. El herido más grave que sobrevivió, MR, fue llevado de urgencia por su padre a Iguala. Allí se encontró con que los hospitales tenían la instrucción de no atender heridos de bala “en la situación de Iguala de ahorita”, le dijeron. En el hospital Royal Care y en la Clínica Cristina fueron rechazados.

El resto de heridos de Los Avispones señalaron que tampoco recibieron respuesta de los servicios de emergencia, ninguna ambulancia llegaba. En el hospital, “pasaron mucho tiempo sin ser atendidos, otros fueron llevados a quirófano después de bastante tiempo. Hasta las tres de la madrugada del 27 de septiembre se puso en operación un segundo quirófano. Otros heridos fueron intervenidos hasta las 06:00 h, y otros prefirieron atenderse en sus casas.

Un matrimonio que fue atacado en uno de los retenes colocados esa noche (también víctimas colaterales que tampoco tenían nada que ver con Ayotzinapa) y cuya esposa había sido herida, llamó de forma reiterada al C-4: las ambulancias se tardaron en llegar más de una hora, estando Santa Teresa, sitio en el que hay ambulancias, a 10 minutos de la ciudad de Iguala. (27)

Algunos familiares con heridos del equipo Los Avispones decidieron buscar ayuda en el 27 Batallón de Infantería. Según uno de ellos, los militares “se burlaron de nosotros y nos dijeron que no podían hacer nada. Poco después llegaron otros cuatro muchachos del equipo y tampoco los ayudaron”. Los uniformados “se burlaban de nosotros” y no hacían nada a pesar de ver a los muchachos heridos; en ese momento se acercó el que era jefe de los militares y nos dijo que él no podía hacer nada hasta que tuvieran una orden. Otros familiares confirman la respuesta que tuvieron de los militares que les dijeron que “no podían hacer nada porque no estaba bajo su jurisdicción.”

(28) Otro familiar narra que “el jefe” militar llegó como a las 00:30 horas, “pero no iba vestido de militar, llevaba playera blanca, muy altanero, iba en una camioneta gris. Él vio cuando estábamos ahí, los muchachos llorando, ahí tirados, no nos volteó a ver... no sé por qué esa acción en contra de uno.” (29)

El maestro oaxaqueño Nicolás Andrés Juan le contó a la escritora Marcela Turati sobre la suerte que corrió su hijo normalista Edgar Andrés Vargas, de 19 años, quien resultó herido en el rostro. Esa noche conoció también al maestro de la CETEG que salvó la vida de su hijo que estuvo a punto de morir por asfixia. El profesor le practicó al joven una traqueotomía. Se enteró a las dos de la mañana del 27 de septiembre que su hijo estaba herido y que no lo querían atender en la clínica Cristina.

“A la clínica llegó el médico Ricardo Herrera quien **no quiso atender al herido por ser estudiante de Ayotzinapa**. El llamó a la policía municipal para que detuviera a los jóvenes, pero en su lugar llegó una veintena de soldados. Los militares llegaron al hospital y apuntando con sus armas sacaron a los 26 estudiantes de sus escondites, los regañaron por dedicarse a la delincuencia y amagaron con llevarlos detenidos.

“Se metieron a un hospital privado, es allanamiento, es un delito, vamos a llamar a los policías municipales para que se los lleven, advirtió el que iba al mando de los soldados”.

“Si llaman a los municipales los van a asesinar porque ellos son los que balacearon a todos”, respondió el profesor.

Los militares salieron un momento a hablar entre ellos. Al regresar regañaron al grupo, reclamaron al maestro que les enseña a ser revoltosos, regañaron a los jóvenes por no aprovechar la oportunidad que les dan sus padres para que estudien, los regañaron por problemáticos, les tomaron foto a uno por uno, les pidieron sus nombres, y se fueron. Antes les aseguraron que pronto pasaría una ambulancia por el herido. Pero no llegó. Los estudiantes se fueron en un taxi que accedió a subirlos porque escondieron al herido.

“Cuando llegamos a Iguala y vimos al médico nos dijo que estaba a punto de morir por asfixia porque estuvo mucho tiempo sin atención, tenía la garganta inflamada, cerrada, le hicieron una traqueotomía, por eso salvó la vida...”. (30)

Los Convenios de Ginebra (1949) han sido adoptados por 194 países del mundo. Se trata de normas diseñadas para proteger a los combatientes y prisioneros de guerra. Su artículo 30 se refiere a la asistencia médica que deben recibir: “Los prisioneros de guerra gravemente enfermos o cuyo estado necesite tratamiento especial, intervención quirúrgica u hospitalización habrán de ser admitidos en una unidad civil o militar calificada para aten-

derlos”, dice. (31)

Arriba dijimos que los represores acudieron a emboscar a los muchachos como si fuesen enemigos en guerra. Aquí es necesaria una acotación: los agresores no la consideraban cualquier guerra sino una en la que podían saltarse los ordenamientos internacionales universales y todo principio ético; era entonces para ellos una *guerra sucia*.

Criminalización de las víctimas

En el folleto que en 2021 escribí sobre la represión sufrida por los chicos de Ayotzinapa en 2011 en Chilpancingo, constaté que los estudiantes detenidos vivieron un doble infierno, pues 16 de ellos fueron torturados..., “aunque a los jóvenes heridos les fue peor: Édgar Espíritu Olmedo fue herido de bala. Recibió un balazo de grueso calibre que atravesó su cuerpo a la altura del estómago. No fueron los policías los que lo llevaron al hospital sino sus propios compañeros. Le fue practicada una cirugía y estuvo diez días hospitalizado. Agentes del Ministerio Público (MP) de la Procuraduría (PGJ), diligentes y celosos de cumplir con su deber –supone este autor- ‘intentaron tomarle huellas y hacerle prueba de uso de armas de fuego sin presencia de abogados’” (32)

Aquí vemos al caso del joven futbolista que recibió cinco impactos en la noche de Iguala. Por fin, en un tercer hospital de esa ciudad fue intervenido quirúrgicamente luego de que su padre les llegara al precio a médicos y a un químico privado. Al salir del quirófano, agentes del MP de la PGJ lo esperaban para tomarle declaración, luego de una pérdida sanguínea considerable. Así lo recordó el papá en comparecencia ante el GIEI: *“Llegaron a la clínica los del MP. Ya estaba despierto mi hijo, había regresado de la anestesia, medio azonzado. Dijeron los agentes que era urgente hacerle la declaración. Yo les dije: ‘sí se le van a hacer, pero como es menor de edad, yo lo voy a asistir’. Y me permitieron. Estuve a punto de pararla porque más que declaración era un interrogatorio, cuando empezaron a preguntarle, que ellos con qué armas habían disparado. Fue cuando le dije: ‘o te limitas a lo que él te diga o le paramos aquí. ¡Como con qué armas van a disparar si son niños, son jugadores, no tienen nada que ver con armas!’ ”*

A otros jóvenes heridos también futbolistas en el hospital les realizaron pruebas de rodizonato de sodio. Algunos eran menores de edad. *“En lo que nos pusieron suero llegó la policía a hacernos pruebas de rodizonato de sodio, y obviamente todos salimos positivos porque estuvimos manipulando la escena, moviendo a los heridos y dada la cantidad de proyectiles que hubo ahí estaba infestado todo de pólvora y los niños salen positivos, yo salgo positivo, todos los que estuvimos. (33)*

* *

De los dos grandes hechos represivos aquí estudiados lo que quedó en firme fueron procesos penales abiertos contra... ¡chicos de Ayotzi! La política de criminalización de las víctimas aplicada en 2011 y 2014 por el Estado se hizo sentir mucho después de los hechos. En 2021 escribí que “los normalistas seguían bajo proceso penal, en peligro de que en cualquier momento pudieran ser aprehendidos. En octubre de 2015 denunciaron que pendían sobre sus cuellos “57 averiguaciones previas que tenemos abiertas, relacionadas con los hechos del 12 de diciembre de 2011 y con el 26 y 27 de septiembre de 2014. Los nombres de doce compañeros aparecen en ambas listas.” “No es posible que nosotros fuimos las víctimas el 12 de diciembre de 2011, fuimos las víctimas el 26 y 27 de septiembre y somos los que estamos siendo investigados”, se quejaron. (34) El inolvidable Carlos Monsiváis decía que, en México, “no peca el que mata la vaca, sino la vaca.”

Camionetas de lujo

En Iguala los represores hicieron un uso intensivo de “camionetas de lujo”, sobre las cuales quedaron numerosos testimonios: *“había camionetas cerradas y dos personas armadas, camionetas de lujo, cerradas. Había dos personas caminando, de civil, armadas, con el arma larga colgando.”* En el retén colocado por los agresores en Mezcala, a la altura de la colonia Valerio, una víctima colateral observó *“una camioneta cerrada color rojo o vino Ford tipo Explorer o Nissan tipo Xtrail, la cual se encontraba atravesada sobre la carretera (...) y vi a un grupo de entre diez y quince personas vestidas con ropas civiles y pasamontañas de diferentes colores que se encontraban a las orillas de la carretera, los cuales portaban rifles en su mayoría al parecer AH-47 con los cuales y sin mediar advertencia o señal alguna dispararon contra mi vehículo”.*

Otro testigo afirmó que cuando llegó una comitiva de autoridades que se dirigía hacia Iguala, “los asaltantes huyeron en seis camionetas de último modelo tipo Chevrolet Cheyenne o Ford Lobo doble cabina.” Algo parecido afirmaron un grupo de periodistas que llegaron en la madrugada desde Chilpancingo: *“se cruzaron con un convoy de entre tres o cuatro camionetas de lujo, cerradas, que venían en sentido contrario Iguala-Chilpancingo, a gran velocidad y como a 15 minutos de Mezcala. También declararon que “cerca de Iguala, al pasar por el cruce de Huitzucó, les siguió un carro azul verde de color metálico y vidrios polarizados en el que venían dos hombres con pelo de corte militar, nos adelantaron y luego se paró, y de ahí volvieron a ir detrás nuestro, hasta el retén de la policía municipal, donde nos encañonaron; les dijimos que éramos periodistas.”*

En otro retén, en la zona de Sabana Grande, cerca ya del cruce de Santa Teresa, “los autores del mismo fueron personas con armas largas, vestidas de civil, que tenían camionetas último modelo”.

Acerca de quiénes usaron tales vehículos elegantes existen dos hipótesis: eran delincuentes del cártel “Guerreros Unidos” o eran del Ejército. Nos inclinamos por la segunda: si bien en Chilpancingo no aparecieron en la escena del crimen este tipo de vehículos, quizá por ser innecesarios, sí han sido usados por la SEDENA en otros acontecimientos represivos.

La detención y desaparición forzada en diciembre de 2011 en Guerrero de los líderes campesinos ecologistas Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle fue una operación que sí demandó de vehículos ágiles y sin señas de ser del Ejército. A mediados del año 2011 Eva y Marcial denunciaron que **recibieron amenazas provenientes de policías y militares**. El 11 de agosto de ese año el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero solicitó a las autoridades estatales medidas de protección. Volvió a hacerlo el 5 de diciembre. No sirvió de nada. “El día 7 de ese mes ambos viajaban en un autobús Futura hacia la Ciudad de México, que fue **detenido por un convoy de militares** que preguntó por Bautista. Ningún pasajero contestó. Poco después, un segundo convoy de camionetas de lujo [así las denominó el reportero] que iba escoltado por dos patrullas de la policía del estado, instaló un retén, “en una acción de protección de los sicarios que **vestían con trajes militares y portaban armas de grueso calibre**.” (35). “Al parar el autobús subieron hombres que obligaron a bajar a Marcial Bautista. En ese momento, Eva Alarcón, que estaba sentada en la parte trasera, en un intento de evitar la detención de su compañero, dijo que ella también se bajaría del autobús y así lo hizo.” (36)

En Iguala, camionetas negras persiguieron a Julio César Mondragón, uno de los dirigentes estudiantiles cuyo cadáver apareció luego de ser bárbaramente torturado y desollado. “Otro testigo de Iguala entrevistado por el GIEI, que huyó hacia la calle Juárez donde se encuentra un autolavado propiedad grupo delincuencia los Tilos, señaló que pasaron tres camionetas negras cuando trató de refugiarse en esa calle justo después de los disparos. (37). Es el lugar y hora por donde corrió Julio César luego del ataque a la conferencia de prensa que ofrecieron los normalistas poco antes de la media noche.

Al final, el Ejército aparece

Otra característica en el *patrón represivo* de policías y militares consistió en que el Ejército con sus insignias aparece al final, cuando la operación ha ter-

minado, se presenta como ajeno a los hechos y carente de cualquier responsabilidad. Pareciera que acude a supervisar que todo está en orden. Así lo hizo en Chilpancingo: alrededor de las 12:35 cesaron los disparos. Minutos después llegaron tres vehículos del Ejército, los que permanecieron allí media hora y luego se retiraron rumbo al poblado de Petaquillas. Tras el tiroteo, la zona fue resguardada por elementos del Ejército mexicano, y de la PF.

De acuerdo con el GIEI, “a pesar de conocer los hechos de Iguala desde las 21:40 horas, a través de sus agentes y el C-4, y posteriormente de la información directa transmitida a las 22:30 horas por el agente de inteligencia enviado al Palacio de Justicia que fue testigo de la agresión a los normalistas, el Ejército sólo envió cuatro patrullas en dos direcciones diferentes a inspeccionar lugares donde se habían dado los ataques hasta casi dos horas después, a las 00:30 h. La evaluación que se realizó en ese tiempo, mientras estaban desarrollándose hechos graves de violencia en Iguala, llevados a cabo por policías municipales con disparos de arma de fuego, no ha sido aclarada hasta ahora”, constató el GIEI en su VI informe, en el subtítulo “Salida de patrullas a inspeccionar a las 00:30 h.” del 27 de septiembre. A esa hora los jóvenes ya habían sido detenidos y subidos a patrullas de la policía municipal, que se los llevó al desconocido *territorio de la desaparición*. A esa hora ya había ocurrido el ataque a la improvisada conferencia de prensa que ofrecieron en la calle los normalistas. Los militares tienen su cuartel, los Batallones de Infantería 27 y 40, muy cerca de estos escenarios, a los que llegaron cuando todo había pasado.

Ya supimos lo que hicieron los militares en el hospital Cristina. Antes, llegaron a la calle de Juan N. Álvarez esquina con Periférico en donde acaba de ocurrir ataque a la rueda de prensa y dos de los jóvenes yacían en el piso, agonizantes. “Allí se presenta un escuadrón del 27 Batallón de Infantería, integrado por 14 elementos que llevan chalecos antibalas, cascos y rifles de asalto G3; viajan en dos vehículos Cheyenne de la Sedena.” De acuerdo con Anabel Hernández, comandan al grupo el capitán José Martínez Crespo y el subteniente Fabián Pirita Ochoa.

“El escuadrón se detiene donde yacen mojados e indefensos los normalistas Daniel Solís y Julio César Ramírez; en el lugar no hay ninguna otra autoridad y los militares actúan a sus anchas, asumen que no hay testigos. Tres elementos bajan de los vehículos: uno de ellos dirige su G3 hacia los dos jóvenes y los otros dos los patean con fuerza. No les ofrecen auxilio, no llaman a una ambulancia o al Ministerio Público. No hay conmiseración, ni siquiera se inmutan ante el horror que se observa alrededor: huaraches sin dueño, pedazos de dedos, charcos de sangre. Enseguida los vehículos militares se marchan cobijados por la oscuridad...” “Un testigo presencial dijo en entrevista para esta investigación que la acción duró unos minutos: ‘Yo creo

que querían saber si aún estaban vivos’, explicó, visiblemente conmovido por la brutal actitud de los militares.

“El 27 de septiembre la Secretaría de Salud practicó las necropsias a los cuerpos de Daniel Solís y Julio César Ramírez, calculándose que el primero murió alrededor de las 0:50 de la noche y el segundo cerca de la una de la mañana. A partir de esas horas y de lo que refirió el testigo, se puede inferir que los estudiantes probablemente aún estaban vivos cuando el escuadrón del capitán Martínez Crespo pasó por ese punto”, concluyó la escritora. (38)

* * *

Hemos hecho un recuento de algunos de los patrones que configuran la manera de actuar del Estado contrainsurgente, con excepción de uno de ellos, muy importante: con frecuencia **echa mano o es auxiliado por la Delincuencia Organizada (DO) para las tareas represivas o para ocultar o tergiversar el móvil de sus crímenes**. Las víctimas ya no son disidentes políticos sino personas sospechosas de estar involucradas con delincuentes, y por ello son ejecutadas o desaparecidas.

Hay una larga y truculenta serie de episodios del Estado contrainsurgente asociado con delincuentes para doblegar a opositores políticos. Es parte de la historia de algunas de las cañerías del régimen político y de sus gobiernos, del color que sean. Es necesario conocerla (así sea sucintamente) para desentrañar otros enigmas y misterios de *La Noche de Iguala*.

FUENTES Y REFERENCIAS

1. Mergier, Anne Marie, Arde Francia: “La syndicaliste” destapa un escándalo de Estado, Proceso, 30/04/ 2023.
2. Diccionario Jurídico <http://diccionariojuridico.mx/definicion/modus-operandi/>
3. Diccionario de la Real Academia Española.
4. CNDH, 2013, Punto 180)
5. CNDH, Expediente sobre Oaxaca 2006-7, páginas 005490 a 5493. Oficio de la PFP a Lic. Víctor Hugo Pérez Hernández, DGA de DDHH de la SSP, 3/11.2006.
6. CNDH. Recomendación no. 1 VG/2012. Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, relacionada con los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, Guerrero, 27/03/ 2012. Punto 174. Salvo indicación en contrario, los datos de este capítulo son de esta institución y contienen un número que se indicará).
7. Leire Ventas, México: cómo los fusiles de una fábrica alemana de armas terminaron vinculados con la tragedia de Ayotzinapa, BBC Mundo, 19/02/2016.
8. <https://es.wikipedia.org/wiki/Beretta-M9>

9. Hernández, Anabel, El uso ilegal de armas alemanas e italianas en México, Deutsche Welle, 17/02/2020.
10. Hernández, Anabel, La verdadera noche de Iguala, 339 -342.
11. CNDH, Aquí citamos el Informe sobre la investigación por violaciones graves a los derechos humanos en relación con los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en chilpancingo, guerrero, del 9 de enero de 2012, punto 86.
12. Cruz Francisco, Santana Ángeles Félix y Alvarado Miguel Ángel, LA GUERRA QUE NOS OCULTAN, 2016, Mx., Planeta, 2016. 212-3.
13. (GIEI, I o II, pág. 24.
14. Sergio Ocampo Arista, “Matan policías a dos estudiantes al desalojar un bloqueo carretero”, La Jornada, 13.12.2011.
15. CNDH, Punto 175.
16. CNDH, Punto 176.
17. CNDH, Punto 178.
18. Ocampo Arista, Sergio, “Matan policías a dos estudiantes al desalojar un bloqueo carretero”, La Jornada, 13.12.2011.
19. GIEI I o II, 103-104.)
20. PGJ, Declaración de HBC, págs.102-103.
21. GIEI, I, pág. 106.
22. GIEI, I, 106.
23. FTCL, pág. 53.
24. Hernández, Anabel, Op. Cit., pág. 11.
25. Cruz Francisco, Santana Ángeles Félix y Alvarado Miguel Ángel, Op. Cit., págs. 69, 97, 118, 226-7.
26. GIEI, II, pág. 31.
27. GIEI II, pág. 32)
28. (GIEI, II)
29. GIEI, I, pág. 104.
30. Turati, Marcela, Aquella noche de terror en que el Ejército se negó a ayudar a los normalistas, Proceso, 30/10/2014.
31. Comité Internacional de la Cruz Roja, III. Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, 1949.
32. Chávez, Lourdes, Es dado de alta uno de los normalistas herido, El Sur, 24/12/2011.
33. GIEI, I, pág. 409.
34. Valleón, Valentina, Denuncia la generación de egresados de Ayotzinapa 2011-2015 averiguaciones previas en su contra, 9/10/2015, <https://subversiones.org/archivos/119233>.
35. Betancourt Radilla, Rosendo, Revelan presunta participación de un comandante de la Policía Ministerial en la desaparición de los ecologistas, , El Sur, 26/12/2011.
36. Betancourt Radilla, Rosendo, Real atención a víctimas, demanda la hija de Eva Alarcón, la ecologista desaparecida en 2011, , El Sur, 7/12/2017.
37. GIEI VI, 51- 52.
38. Hernández, Anabel, Op. Cit., págs. 289-291. La entrevista con el testigo se hizo bajo la condición de que se reservara su identidad, anotó la autora.

Cuando el Estado se auxilia de delincuentes

III

Coexisten en México dos mundos: el de la industria del narcotráfico (y otros negocios ilegales); y el de la protesta popular, que a veces adquiere un carácter radical. Como reacción a éste actúa el Estado represor, que cada tanto se sirve de delincuentes. Ello llegó a un nivel extremo en Iguala 2014 y, a la fecha, es un recurso al que las autoridades recurren cada tanto. *Servirse de delincuentes es parte del modus operandi del Estado contrainsurgente*. En ocasiones lo hace para que ellos hagan la parte más sucia del trabajo represivo, como es la ejecución de disidentes. En otros casos el Estado puede achacar los crímenes políticos a facinerosos y no a su propio personal. O puede servirle para insinuar o propagar la especie de que la víctima algo tenía que ver con la delincuencia. En uno de los casos que presentamos aquí, la desaparición forzada y asesinato del abogado indígena Arnulfo Cerón, tenemos una escena casi surrealista, en la que un vulgar malandro apodado “La Chiva”, antes de la ejecución, somete a un interrogatorio típico de experto policía político a su víctima: “los perpetradores le espetaban a Arnulfo Cerón su constante activismo en las marchas y bloqueos, contra el ayuntamiento de Tlapa, y su renuencia a abandonar el movimiento, pese a las advertencias de que tal desafío le costaría muy caro.” (1)

El matrimonio Estado-narcos con fines de represión o contrainsurgentes es antiguo y fue inventado por la CIA norteamericana y entes similares que rápido lo exportaron a México.

En el libro *Los Señores del Narco*, de Anabel Hernández, “aporta pruebas sobre la estrecha alianza entre narcos, gobierno mexicano y el gobierno norteamericano para combatir las luchas del pueblo y sus intentos de organización.”

Laurence Víctor Harrison durante años trabajó para los narcotraficantes Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Carrillo. El 6 de julio de 1990 hizo la siguiente declaración en la Corte Federal de Los Ángeles, California: “Miguel Ángel Félix Gallardo me dijo que

él pensaba que sus operaciones de tráfico de drogas eran seguras porque él suministraba armas a la ‘contra’ nicaragüense”. La *contra* era una organización armada que organizó Washington contra el gobierno nicaragüense emanado de una insurrección contra la dictadura pronorteamericana de Somoza en 1979.

Prosigue así Harrison su declaración: “Platiqué cara a cara con Félix Gallardo y me dijo que había conseguido que otros aportaran fondos al movimiento de la contra, apoyado por los Estados Unidos”. Describió varias de las conversaciones que tuvo con otros capos mexicanos sobre sus acuerdos con los estadounidenses, aunque señaló que sólo Félix Gallardo había especificado que era protegido por su apoyo a la guerrilla contra. Lo que sí le dijeron los otros capos con claridad, incluyendo Don Neto y Caro Quintero, así como autoridades mexicanas, es que “ellos tenían una especie de relación con el gobierno de Estados Unidos”.

De acuerdo con este personaje y con las investigaciones que realizaba el prestigiado periodista Manuel Buendía antes de su asesinato en 1984 (a manos de elementos de la gubernamental Dirección Federal de Seguridad –DFS–), la contra nicaragüense fue entrenada en un rancho propiedad de Rafael Caro Quintero en Veracruz. Las operaciones del campo de entrenamiento eran conducidas por la CIA, usando como cubierta a la DFS y con la complacencia del gobierno mexicano. Por estos *servicios el gobierno yanqui permitía el libre tránsito de droga hacia su país*. Según las investigaciones de Buendía, además de droga el gobierno americano aprovechaba estas rutas para el tráfico de armas hacia centro y sur América.

El periodista Jefferson Morley es un veterano periodista norteamericano, especialista en la política exterior de su país. Trabajó en *The New Republic*, *The Nation* y la revista *Spin* antes de llegar al *Washington Post*, uno de los periódicos más influyentes. Gracias a documentos desclasificados de la CIA, Morley pudo reconstruir la historia de esta agencia entre 1956 y 1968, así como la del jefe de la CIA en la Ciudad de México, Winston Scott, que fue el responsable de poner en funcionamiento una red llamada LITEMPO por medio de la cual compraba el servicio de funcionarios mexicanos para trabajar a favor de los intereses de Estados Unidos. Naturalmente, el trabajo no era gratuito.

Entre los servidores públicos registrados en la nómina de la CIA estaban los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, así como el jefe de la policía secreta Fernando Gutiérrez Barrios. El objetivo principal del plan LITEMPO era la cooperación entre funcionarios y la CIA para detectar grupos “subversivos” y “comunistas”. Para Estados Unidos el gobierno sandinista de Nicaragua, fruto del levantamiento armado de la población y el FSLN en 1979, era un peligro en la región. En este contexto,

la ayuda que varios funcionarios mexicanos y el grupo delincriminal Cártel de Guadalajara proporcionaron a la contra nicaragüense fue un elemento que de manera natural formaba parte de estos vínculos.

En su investigación, Morley señala que entre 1985 y 1996 decenas de testigos revelaron que funcionarios del gobierno de México habían colaborado con la CIA para desarticular movimientos de izquierda en la región, *apoyándose en narcos del cártel de Guadalajara*, a quienes se les permitió traficar droga como pago por la ayuda a la política internacional de Estados Unidos. (2)

Tales son los antecedentes de la connivencia Estados-delincuentes para combatir a los que se soliviantan o que simplemente se oponen a tal o cual política gubernamental o interés empresarial. Tal alianza ha sido puesta en práctica por todos los gobiernos y llega hasta nuestros días, a los tiempos de la “cuarta transformación”.

El primer asesinato político con AMLO, operado por delincuentes

Sin quererlo, el dirigente campesino morelense **Samir Flores Soberanes** se convirtió repentinamente en un disidente del gobierno de López Obrador. Su militancia de años en contra de la construcción de una termoeléctrica ocasionó su asesinato, ocurrido tres días antes de la celebración de una “consulta” organizada por el gobierno para decidir la continuación de la obra. AMLO como candidato había prometido en 2014 que de ser presidente cancelarían la megaobra. Al instalarse en Palacio Nacional traicionó su palabra y promovió su continuación. En un acto público en Cuautla en febrero de 2019 injurió a Samir y a sus compañeros. Ellos no eran del PRIAN y pocos meses antes le habían dado su voto al que hoy los zarandeaba. Apenas habían transcurrido 70 días del sexenio de la Cuarta Transformación. Los asesinos de Samir son delincuentes que años después anunciaron que habían pactado con el gobierno la ejecución.

Proyecto integral Morelos (PIM) es el nombre de tres megaobras que “afectarían a unas 80 comunidades nahuas de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.” (3) Comenzado desde 2011 por el gobierno de Felipe Calderón, prosiguió durante el sexenio de Peña Nieto y el siguiente. La inversión es de 1,100 millones de dólares y en el negocio están al menos tres empresas europeas, una de ellas la española **Enagás**. Consta de una termoeléctrica en Yecapixtla, Morelos, que funcionaría quemando gas lutita traído de Estados Unidos, a través de un gasoducto de 172 kms y de un acueducto.

Parece increíble que a estas alturas de la devastación global de la naturaleza se continúe con la quema de combustibles fósiles para la generación

de electricidad, que despiden gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento de la atmósfera del planeta. La termoeléctrica, además, hace un alto consumo y contaminación de agua que perderían los campesinos. El gasoducto sería potencialmente peligroso ya que su trazo lo acerca en algunos puntos con el Popocatepetl, un volcán todos los días activo. “El PIM representa un proyecto emblemático de acaparamiento, sobreexplotación y contaminación del ambiente”; “los verdaderos beneficiarios serían empresas como Saint Gobain, Continental, Burlington, Nissan y Bridgestone. La energía producida por la central serviría para la compañía canadiense Alamos Gold, que busca abrir una gigantesca mina a cielo abierto para sacar oro y plata del Cerro del Jumil”, sostiene el investigador Josemanuel Luna-Nemecio (4)

La Central ya está construida y tal vez en funcionamiento. “En la carretera que lleva a Huexca se aprecia la enorme estructura de la planta, en la que primero sobresalen sus torres eléctricas, seguidas de tres grandes chimeneas; al fondo, en contraste con la notable obra metálica, aparece el Popocatepetl lanzando fumarolas”, dice la reportera Patricia San Juan. El gobierno emplea a la Guardia Nacional para custodiar las instalaciones. Los habitantes declararon que **la planta expulsa agua a riachuelos y hondonadas que sólo tienen corriente en temporada de lluvia. “Ahora contienen aguas sucias, denuncian.”** Los afluentes están “cargados de espuma y una densa nata amarillenta cubre la superficie; en algunas zonas han muerto peces.”

La contaminación también será acústica, ya que la planta emitirá ruidos de 110 decibeles, ensordecedores, “pues toma en cuenta que 130 decibeles son equiparables al estruendo de un trueno o al funcionamiento de la hélice de un avión”, explica. (5)

**

Las megaobras estimularon la organización popular en los tres estados afectados, generaron la aparición de un líder como Samir y de una radioemisora independiente. Se formó la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, que se adscribió al Consejo Nacional Indígena. Luego se creó el Frente de Pueblos en Defensa del Territorio, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala. En 2013 comenzó transmisiones Radio Amiltzinko, desde la cual Samir hablaba en náhuatl.

Flores Soberanes ya se había fogueado desde hacía tiempo en la lucha. Fue un defensor de las tierras comunales de Amilcingo. “Peleó por evitar la privatización de una zona con ahuehuetes, logrando junto a su comunidad que permaneciera como un territorio comunitario.” (6)

El espíritu rebelde de Samir le venía de familia y del entorno histórico zapatista. Su padre, Vinh Flores Laureano, a decir del escritor Luis Hernán-

dez Navarro, “fue un incansable héroe local que recorrió los pueblos de la región; defendió los derechos de los campesinos y, bajo la divisa zapatista de educación para el pueblo, fundó con sus compañeros instituciones educativas como la Normal Rural Emiliano Zapata de Amilcingo (la última de este tipo)”. Perteneció a las Juventudes Comunistas y fue dirigente nacional de la Central Campesina Independiente, ligada al partido de la hoz y el martillo. “Pagó muy cara la osadía de desafiar al gobierno y animar la efervescencia rebelde de las comunidades del oriente de Morelos. El 6 de septiembre de 1976, fue torturado y asesinado, junto a su tío Enrique Flores, en la montaña de Tepexco, Puebla.” (7)

**

En 2014 llegó AMLO a tierras de Morelos. Declaró en Yecapixtla que defendería “con todo” lo que pudiera a los pueblos para que esas obras no se construyeran.

El 10 de febrero de 2019 la situación fue muy distinta cuando el mismo personaje, ya presidente, regresó a esas tierras y llevó a cabo un acto en el deportivo El Almeal en el que defendió el PIM. Samir Flores fue una de las principales voces que se manifestaron en contra. López Obrador a los que protestaban los llamó “radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores”. A fin de cuentas, dijo el presidente, “aunque haya gritos y sombrerazos”, se llevará a cabo la consulta sobre el proyecto energético. (8)

El martes 19 de febrero de 2019, Samir acudió a una asamblea informativa en la población de Jonacatepec sobre los proyectos a los cuales se oponía, encabezada por Hugo Erik Flores, delegado del gobierno federal para el estado de Morelos y representante del PES (Partido Encuentro Solidario), un partido fantasmal que apoyó a AMLO. Flores Soberanes entró en debate con el representante gubernamental. Cuestionó crudamente “las mentiras que están diciendo acerca de la termoeléctrica en Huexca y el Proyecto Integral Morelos”. El líder comunitario sabía que “había dejado a Erick Flores callado y sin argumentos”. Al día siguiente Samir fue asesinado por tres sicarios que tocaron a su puerta a las 5 y media de la mañana y le dieron dos tiros en la cabeza.

El 20 de febrero de 2019 más de 100 académicos, científicos, investigadores, organizaciones, pueblos y colectivos pidieron a López Obrador reconsiderara hacer la consulta, que definió la activación de la termoeléctrica en Huexca y que tuvo la oposición del 40%. Según los peticionarios, la consulta distó “de cumplir con los requisitos democráticos para considerarse válida” debido a que no cumplió “con los mandatos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas, para que los pueblos afectados otorguen o no su

consentimiento para la realización de proyectos de inversión y desarrollo.” (9) La ejecución de Samir no llevó a que el gobierno cancelara o suspendiera la consulta. El asesinato no provocó ninguna reacción, ni una palabra del presidente.

Samir tenía 36 años, estaba casado con Liliana y tenía tres hijas y un hijo.

Cinco horas después del asesinato, la Fiscalía de Morelos señaló que el crimen no estaba relacionado con el activismo político de Samir, sino con el crimen organizado. (10) Fueron afirmaciones sin ningún asidero, ya que la víctima nunca tuvo nada que ver con delincuentes y sus actividades a quien afectaban eran al gobierno y a empresarios. El presidente y las compañías constructoras fueron los beneficiarios de la eliminación del dirigente comunitario.

En enero de 2022 los delincuentes matones del Comando Tlahuica entraron en contradicción con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Filtraron una fotografía en la que el ex futbolista está acompañado de tres conocidos malandros. Después apareció en un lugar público de Oaxtepec una “narcomanta” dirigida al gobernador en la que le dicen: “aquí se rompen los acuerdos”; y lo amenazan: o me respetas o de lo contrario soltaré datos exactos de la muerte de Samir.” “Acuérdate de todos los favores que me pediste antes de la llegada de AMLO a Morelos”, le dicen. Puede inferirse que entre tales favores estuvo ejecutar al líder indígena. Con sarcasmo, piden que les “saluden mucho a Hugo Erick”. La reportera Verónica Bacazero buscó una postura de las autoridades estatales sobre estos hechos, sin embargo, éstas señalaron “que no iban a brindar declaración al respecto.” El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua declaró que “si queda algún grado de decencia en las instituciones de persecución judicial, deben investigar los posibles vínculos de Cuauhtémoc Blanco, Hugo Eric Flores y Uriel Carmona Gándara con el crimen organizado y el asesinato de nuestro hermano Samir Flores”. (11)⁴

**

Es 10 de abril de 2023 en Cuernavaca, capital de Morelos. Se conmemora el 104 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. Cientos de campesinos se reúnen a recordarlo. También exigen a las autoridades que se cancele el PIM.

Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos en defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala, recordó la traición que 4 Carmona Gándara es el actual fiscal de Morelos, tristemente célebre cuando fue señalado de encubrimiento en el feminicidio de la joven capitalina Ariadna López Díaz, cuyo cadáver fue hallado en octubre del 2021 a las fueras de Tepoztlán, y de quien la fiscalía morelense afirmó que había muerto por una grave intoxicación alcohólica y broncoaspiración, y que en realidad fue golpeada hasta que murió a causa de traumatismo múltiple.

cometió el ex presidente del país Francisco Madero al no devolver las tierras a los campesinos; y ahora, el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, dijo, “vuelve a traicionar a los pueblos al no querer cancelar los proyectos de muerte, como el PIM, incrementar la guerra contra los pueblos y los asesinatos de defensores de la vida y medio ambiente, como Samir Flores. Si Madero apoyó a los hacendados, ahora se apoya desde el poder a las empresas transnacionales”. (12)

Marco Antonio y Vicente Iván Suástegui Muñoz

Marco Antonio Suástegui Muñoz es uno de los líderes sociales más sobresalientes de este siglo. La firmeza y valentía con la que defiende sus convicciones y su apariencia física evocan a Vicente Guerrero y a Emiliano Zapata. Por su cuerpo corren sangre afroamericana e indígena. Nunca abandona un sombrero texano de color negro. Su palabra es clara, directa y pedagógica. Muchas veces reprimido pero irreductible, recibió castigo a través de su hermano Vicente Iván, entregado por policías a un delincuente que lo desapareció.

Todo empezó cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la construcción de la presa La Parota, una enorme hidroeléctrica cuya construcción afectaría a 24 comunidades con presencia indígena, desplazaría a 25 mil personas y afectaría a otras 70 mil. La obra estaría a 30 kilómetros del puerto de Acapulco, en el cauce del río Papagayo. (13) De acuerdo con el escritor ñuu savi Kau Sirenio, la presa sería tres veces más grande que la bahía de Acapulco, lo que equivale a inundar a más de 30 comunidades de los municipios de Acapulco, San Marcos, Tierra Colorada y Tecoaapa. (14). La altura de la cortina de la presa sería de casi 200 metros, una de las más altas del mundo. El costo de la obra empezó en 800 millones de dólares, cifra que aumentó en 2018 a un mil 200 millones, que serían financiados a través de deuda pública. (15)

Un texto de 2005 dice que “la construcción de la presa La Parota cuenta además con el apoyo de los empresarios de Guerrero y del gobierno federal, del PAN, del PRD, del PRI y del PVEM. El candidato a la presidencia por el PRD, Andrés Manuel López Obrador, Zeferino Torreblanca -gobernador perredista del estado-, y Félix Salgado Macedonio, candidato también del PRD a la presidencia municipal y a quien la CFE le ofreció dinero para financiar toda su campaña si se comprometía a apoyar el proyecto, están de acuerdo con la construcción de la Parota.” (16)

En 2003, Suástegui fundó el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP). Miles se congregaron a su alrededor. Tenía 27 años. En julio de 2005 el Consejo y más de 70 organizaciones de

todo el país y otras del extranjero convocaron a un “Encuentro Nacional contra la Presa La Parota” en Cacahuatpec, municipio de Acapulco. Entre los objetivos se plantearon “reafirmar el rechazo total a la presa, como decisión mayoritaria de los Pueblos”; y escuchar a las organizaciones que se “unen a la defensa de la tierra de comuneros y ejidatarios, y del agua del Río Papagayo.” (17) El encuentro fue un éxito. Es uno de los encuentros de organizaciones populares más numerosa y representativa en la historia del país, que tuvo apoyo internacional. El CECOP inventó el cántico que dice: “¡La tierra no se vende/la tierra se defiende!”

Las autoridades organizaron “asambleas” fraudulentas de comuneros para justificar la construcción de la obra. Ninguna cuajó. El CECOP acudió a los tribunales. Le dieron la razón y las reuniones en su contra fueron declaradas nulas. CECOP acudió a instancias internacionales y recibió solidaridad. Fuera de México aprendió que, para esas fechas, las megas presas habían desplazado en el mundo a 80 millones de personas y que a muchos campesinos les despojan de sus tierras y les ocasionan pobreza y tristeza. (18)

Desde el principio les cayó la represión. Marco Antonio fue encarcelado en 2003. En julio de 2004, ya había seis órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes. Suástegui Muñoz y uno de sus compañeros fueron encarcelados nueve días. Entre septiembre de 2005 y el 2007 tres fueron asesinados. Era sólo el inicio: Suástegui ha sido apresado por cuatro gobernadores de su estado. Ha sido forzado al hábito desde hace más de 20 años y a la fecha, de acudir a firmar cada semana ante la autoridad pues siempre ha estado sometido a procesos penales.

Las amenazas no cesaban en su contra así como la delincuencia, infiltrada en las comunidades aledañas al río Papagayo. Para seguridad de la población, se organizó en 2016 una policía comunitaria. Pronto hubo una “policía” rival, con fachada de popular, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). “Detrás de la UPOEG está el Estado –asegura Suástegui-, porque se han extendido en comunidades usando armas no permitidas a las policías comunitarias, con financiamiento del gobierno y usando una camioneta blindada. En cambio, dijo, los policías de la CRAC traen frágiles escopetas. Reiteró que el crimen organizado promueve a Plácido Valerio, cabeza de la UPOEG: “¿quién les da las armas cuernos de chivo? El narco, pues es el que financia las armas”. Insistió en que los empresarios gravilleros también forman parte de los promotores de la UPOEG en los bienes comunales de Cacahuatpec. (19) Marco Antonio fue detenido el 17 de junio del 2014, acusado de tentativa de homicidio, robo, despojo, lesiones simples y agravadas, ataques a las vías de comunicación. Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, Nayarit, a cientos

de kilómetros de su comunidad. La prisión que sufrió fue un prolongado acto de tortura. Le arrancaron dos uñas y lo golpearon en la columna ocasionándole una fuerte lesión. Estuvo en celdas de castigo. La comida era más parecida a basura. De 96 kilos que pesaba bajó a 50. La caída del gobernador Ángel Aguirre por el ataque a los de Ayotzinapa lo salvó. Le ofrecieron ir al exilio o ser sentenciado a 30 años de prisión. No aceptó. Fue liberado un poco más de un año después.

¡La construcción de la presa fue suspendida! Pero ello no le significó calma.

En la madrugada del 7 de enero de 2018 las autoridades organizaron una provocación en La Concepción, una de las comunidades del CECOP. Hubo un enfrentamiento en el que resultaron ocho personas muertas, dos policías comunitarios. Suástegui no estuvo presente en los hechos y llegó a las seis de la mañana. Encontró los cadáveres de sus compañeros. A las 10 de la mañana llegaron más de 200 policías, el Ejército y la Gendarmería. “Iban en aproximadamente 35 vehículos y un helicóptero del gobierno del estado que sobrevolaba el pueblo.” (20)

Marco Antonio le narró lo siguiente a la periodista Maribel Gutiérrez:

“Dos policías comunitarios se meten a la comandancia, Alexis Santos y Feliciano Ascencio, y tras ellos se mete Esteban Maldonado Palacios [coordinador de la policía ministerial], con policías, y les apuntan con sus armas.

”Alexis llevaba un arma quebrada, la suelta y levanta las manos, Feliciano suelta su arma y se hinca. **Los dos estaban desarmados, rendidos, Alexis con las manos en alto y Feliciano hincado, y ahí los ejecutaron, los policías ministeriales les tiraron balazos por la espalda.**

”Otro policía comunitario, Crescenciano Everardo, estaba con su arma colgada al hombro, los estatales lo desarmaron y se lo llevaron rumbo a la Conasupo. Se oyen disparos, matan a mansalva a *Tano*.

”Después me llevaron con las manos atrás, hacia Agua Caliente en una camioneta. En el monte me tenían tirado. Me interrogaron.

- ¿Cómo te llamas?
- Marco Antonio Suástegui Muñoz.
- ¿A qué te dedicas?
- Soy vocero del Cecop.
- ¿A cuántos mataste anoche?
- A nadie, yo no uso armas.
- ¿A qué grupo perteneces?
- A ninguno.

Tres me hicieron el interrogatorio, un policía ministerial, uno estatal y un

militar.

Poco después un policía arrancó un palo de moringa y lo golpeó en piernas, glúteos y espalda. Le preguntaron:

- ¿De quién eres gente?
- De Zapata y Villa.
- Entonces aguantas más vergazos.

Lo patearon en todo el cuerpo: “golpes en los testículos, en el abdomen, patadas en todo el cuerpo, hasta que me desmayé.”

Lo llevaron en helicóptero al aeropuerto de Acapulco. ”Después me suben a una camioneta, y ahí me golpearon otra vez los de la policía ministerial, se subieron encima de mí, me lastimaron la columna, tengo daños en el cuerpo, en la columna y tengo hernias.”

En la Fiscalía de Acapulco lo esperaba Esteban Maldonado quien le sembró 620 carrujos de mariguana a él y a otros 37 de sus compañeros que también fueron detenidos. El plan era acusarlos de narcomenudeo y de asesinato. También llenaron de pólvora sus manos.

”Desde las 2 de la tarde estaban ahí los otros detenidos, muy golpeados. Esteban Maldonado me dice: ‘ven, quiero hacer un trato contigo’. Le respondí: ‘¡no hago tratos con mañosos, maldito asesino, mataste a los policías comunitarios que estaban desarmados!’”

En la noche fue llevado a la cárcel, al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco, en donde estuvo en a la “casa blanca”, de la que no le permitieron salir ni ver la luz durante meses.

Entrevistado en la cárcel, Maribel Gutiérrez encontró que “su figura se ve más alargada, parece que sólo tiene los huesos, la piel, oscura, y el cabello corto casi a rape. Tiene ropa común y los tradicionales huaraches de correas cruzadas. Cuando estaba en libertad pesaba 85 kilos, y en los primeros ocho meses de encierro en el Cereso de Acapulco bajó 27 porque lo que le daban como alimentación era incomible. En los últimos dos meses se ha ido recuperando, y ahora pesa 65. Se ve débil y enfermo, por dolores que tiene en la columna y el abdomen. Desde el 7 de enero no tuvo atención médica y su salud se fue deteriorando. Estos 10 meses Suástegui ha estado segregado de la población penitenciaria, supuestamente para protegerlo, porque las autoridades no garantizan la seguridad. Primero lo tuvieron en una celda oscura, totalmente cerrada, sin ventanas, caliente, y no le permitían ver la luz del sol. El calabozo en que estuvo con su hermano Vicente, es un cuartito como de 3 metros cuadrados, muy pequeño para dos personas.”

Dijo Suástegui: “Estuve ocho meses en esa celda, no me daban de comer, a las ocho de la mañana pasaban gritando ‘rancho’ [comida], me paraba con mi plato, pero no llegaba nada, como hasta las 12 del día llevaban

algo grasoso y frío que no se podía comer y tortillas duras. A la 1:30 otra vez pasaban gritando ‘rancho’, me levantaba con la esperanza de que llevaran comida, y nada, como las cinco llevaban otra vez comida fría y tortillas duras. Nos daban agua con ‘rompetripas’, que son larvas de moscos. Las visitas que iban a verme estaban tiradas en el piso porque no había donde sentarse”.

”A un policía le pedía que me dejara ver la luz del día.”

Las autoridades intentaron trasladarlo a un penal de máxima seguridad en dónde están homicidas y presos peligrosos. Para ello la psicóloga Gladimira Ocampo dictaminó que es adicto a las drogas, al alcohol y altamente peligroso. “Le mandó un informe a la jueza Isis Peralta, fue un estudio falso, nunca me entrevistó, nunca la he visto”, dijo.

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan asumió su defensa y de sus compañeros a través del abogado Rogelio Téliz. Sus condiciones carcelarias mejoraron. (21)

El enfrentamiento del 7 de enero en La Concepción fue el desenlace de una serie de ataques al CECOP y a la Policía Comunitaria de Cacahuatpec, que tenía como objetivo aniquilarlos. Previamente lograron corromper a la UPOEG, “pagada por el empresario gravillero, Humberto Marín, y por propietarios de tierras que apoyan el proyecto de la presa La Parota que ocupan puestos en las instituciones municipales y agrarias.” La UPOEG pretendía quedarse en las comunidades de Cacahuatpec y desplazar a la Policía Comunitaria. Pero tuvo que retirarse porque el 9 de junio mató a siete integrantes de una familia, incluidos un bebé y una niña, lo que generó el repudio de los vecinos.

Un militar retirado, conocido como “Chistorete” se sumó al objetivo de asesinar al vocero del CECOP, para lo cual estuvo meses en el monte con otros sicarios. El 31 de diciembre de 2017 fue detenido por la Policía Comunitaria y confesó los planes que tenía: las órdenes de ejecutar al líder vinieron del gobernador y de su asesor César Flores, de empresarios como Mauro Gallegos y de Humberto Marín, que explota el material pétreo del río Papagayo.

La detención de estos tres sicarios por la Policía Comunitaria desató la agresión del 7 de enero. Un grupo llegó a liberarlos en la madrugada. Y allí sonaron los balazos.

El asesinato de cinco policías comunitarios y el encarcelamiento de 38 miembros del Cecop y de su líder, no paralizó la resistencia. Ambas organizaciones desde el primer día se movilizaron y exigieron justicia, siguieron las asambleas de los domingos y la Comunitaria estuvo activa.

Por su parte, el gobierno continuó aprehendiendo opositores.

Abel Barrera, director de Tlachinollan, ante la criminalización por las autoridades de la lucha del CECOP, declaró a Sin Embargo: “Yo creo que

ya es un ensayo fríamente calculado de generar un ambiente de temor entre los activistas para que se desistan de su lucha, para contener la inconformidad, para generar una dispersión del movimiento. Aquí le apuestan a que el CECOP se disgregue, se disperse. Es la mano dura para poder enfrentar un problema social. El uso de mecanismos jurídicos para criminalizar a los líderes sociales se ha hecho socorrido en la entidad para intentar desmovilizar la lucha social.”

En 2016 la casta política guerrerense aprobó una contrarreforma jurídica que derogó la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. Eliminó los derechos de las comunidades y de la población afromexicana a organizarse, armarse y a autodeterminarse en materia de seguridad e impartición de justicia. Fue un golpe a las policías comunitarias.

A fines de 2018 en el Senado hubo una iniciativa de amnistía de 176 presos políticos que se contaron en el país. En Guerrero estaban en la cárcel los Suástegui y 22 presos más, entre ellos el policía comunitario de Tixtla, Gonzalo Molina. Había 50 órdenes de aprehensión contra activistas sociales. (22)

Marco Antonio, su hermano Vicente y la mayoría de presos del CECOP salieron de prisión. Era difícil mantenerlos encerrados mientras no se aclarara la agresión a los chicos de Ayotzinapa y cuando la opinión pública presionaba.

La construcción de la presa La Parota, suspendida desde 2010, quedó casi olvidada, aunque no oficialmente cancelada. Parecía una victoria relativa del CECOP, luego de sufrimientos sin par. Pero estos continuaron.

**

En 1986 se celebró en México un campeonato mundial de fútbol, uno de los más trepidantes. Marco Antonio Suástegui tenía 10 años y había cursado la escuela primaria en Cacahuatpec, en donde no había secundaria. Quería conocer al astro deportivo Diego Armando Maradona y seguir estudiando. Fue al puerto de Acapulco pensando que allí estaría el número 10 del cuadro argentino. No lo encontró pero, alojado en casa de una tía, siguió estudiando. También trabajaba, por las noches y hasta las 3 de la madrugada, lavando autos. Logró ingresar a la universidad y cursar la carrera de arquitecto. Se tituló con las mejores calificaciones y le ofrecieron una beca para proseguir estudios en Francia. Estaba por viajar cuando... se atravesó en su vida La Parota, según le contó al periodista Ricardo Castillo. Y hasta la fecha.

En entrevista por radio, celebrada en julio de 2023, de la que existe video, Suástegui habló largamente sobre sus ancestros, su pueblo, su lucha, sus ilusiones de retomar estudios y de ejercer su profesión. Se mostró ex-

pansivo y de buen humor... hasta que el periodista preguntó sobre su hermano menor, Vicente Iván. (23) Vicente había acompañado a su hermano por muchas de las luchas de Cacahuatpec. Fue amenazado y decidió dejar su comunidad. Buscó refugio en el puerto de Acapulco, en donde manejaba un taxi. En la noche del 5 de agosto de 2021 policías del estado y ministeriales lo persiguieron y bajaron del automóvil, le dieron un balazo y lo llevaron al motel de Tres Palos en donde lo entregaron a Pedro Santos Cruz, alias comandante Pino, uno de los capos de la UPOEG. Esta pseudo policía ciudadana reparte su tiempo en reprimir opositores políticos y en el “trasiego de drogas y armas, desde la Laguna de Tres Palos hasta Teconapa. Es el negocio de los políticos y de las propias autoridades.” “Nos han comentado elementos de la Marina y el Ejército que no pueden tocar a las supuestas guardias comunitarias porque es una orden de arriba, esto demuestra la complicidad e impunidad; denunció Marco Antonio. (24)

“El gobierno nunca nos a perdonar haber suspendido La Parota”, dice. Le reprocha a AMLO presidente por no haberla cancelado. Llorando, prometió que nunca va a desmayar en la búsqueda de su hermano.

Samantha Colón Morales es esposa de Vicente Iván y pertenece a la colectiva “Fe y Esperanza de Encontrarles”, una agrupación que, como tantas en el país, busca desaparecidos. Tiene cuatro hijos, de cinco a 20 años, que han sido afectados física y psicológicamente. La niña más pequeña padece de enanismo y a otras dos se le han caído los dientes. Las psicólogas explican que están reaccionando de esa manera a su pena. En cuanto a las investigaciones para dar con los responsables, denunció que el “comandante Pino” se pasea impunemente por los pueblos de la región. Explica que no se le aprehende porque él denunciaría a “gente de más arriba”, los que ordenaron la desaparición. (25) En entrevista posterior, Samantha Colón, de 40 años, anunció que dos de los implicados en la desaparición de su esposo fueron sentenciados (aunque, decimos nosotros, no son los autores intelectuales). Denunció que ha recibido mensajes intimidatorios.

En Acapulco, en el mirador de la Vía Rápida, a unos metros del Antimonumento a los 43 de Ayotzinapa, Samantha se reúne con sus compañeras de causa y en ocasiones ofrecen conferencias de prensa. Allí venden aguas frescas, frutas y camisetas los sábados de 9 a 15 horas, con la intención de recaudar recursos para la búsqueda de sus seres queridos. (26)

Arnulfo Cerón Soriano

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, complementa su incansable trabajo en defensa de la población más desvalida de Guerre-

ro con una labor de reporte a un tiempo objetiva y llena de solidaridad y afecto con las víctimas. Llamó especialmente nuestra atención el que denunciara que en el municipio de Tlapa, con sólo 60 mil habitantes, ocurrieron **“más de 32 desaparecidos y más de 80 homicidios en los dos últimos dos años”** (2019-2020 ¡!).

La más conocida de estas víctimas es **Arnulfo Cerón Soriano**, desaparecido y 40 días después encontrado su cadáver. El simple hecho de localizar su cuerpo, en un México en el que ello constituye una especie de privilegio para los seres cercanos a las víctimas de desaparición forzada, que ni siquiera saben en dónde quedaron sus restos, “para muchas familias de Tlapa fue una luz, un acicate para seguir buscando a otros desaparecidos.” (27)

La infancia de Arnulfo Cerón se parece a la de Benito Juárez: un indígena en pobreza que luego de sortear numerosos obstáculos se convierte en abogado. Arnulfo era un niño cuando su padre y hermano mayor fueron asesinados, sin mayor razón. Cuando su madre recibió la noticia hizo dos cosas: llorar y “montarse en el burro para ir a recoger sus cuerpos”. Luchando junto a su madre todos los días contra la pobreza, no dejó de estudiar y de trabajar, en lo que fuera, vendiendo tortas, lavando trastes, plantando arroz con el agua hasta la rodilla. Obtuvo su título de abogado con la ayuda de su hermana. Cuenta su madre, según Tlachinollan, que le “pidió que le enseñara hablar el naua. Cuando iba en la secundaria no le gustaba hablarlo y como que se avergonzaba de que yo lo hablara. Por eso, creí que algo estaba pasando con mi hijo, porque como abogado le gustaba acompañar a la gente de las comunidades. Veía que iba con ellos al ministerio público y también visitaba a los presos en la cárcel. Me acuerdo que estuvo un tiempo en Tlachinollan, y ahí noté que le gustó defender más a la gente.”

Recuerdan sus ex compañeros abogados que “fue muy receptivo al movimiento que emergió en Chiapas, cuando los zapatistas dijeron ‘¡Basta!’ También le impactó el movimiento indígena en Guerrero, por la combatividad del Concejo Guerrerense 500 años de Resistencia. Veía en las calles de Chilpancingo las históricas marchas de los indígenas acompañados de sus bandas de viento. Tuvo conocimiento de la represión que vivieron en el gobierno de Rubén Figueroa”, que masacró a 22 campesinos en Aguas Blancas, en 1996.

Aunque el gran giro en su vida fue la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014. “Desde aquella noche Arnulfo y Antonio Vivar se entregaron de tiempo completo a esta causa y contribuyeron en la organización del Frente Popular de Tlapa, para emplazar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a dar con el paradero de los 43 normalistas. Con el apoyo de maestros y maestras de la CETEG y varias organizaciones de la región tomaron el ayuntamiento de Tlapa, como parte de

los acuerdos asumidos por la Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa, de boicotear las elecciones y conformar los Consejos Populares Municipales.”

Cerón Soriano se hizo defensor de todo el que se lo pidiera. También era organizador y movilizador de la población indígena. Enfrentó una campaña de desprestigio y llamadas telefónicas amenazantes. “Se le colocó en la mirilla para ver en qué momento podrían actuar contra su persona. Trataron de doblegarlo, de intimidarlo, de sacarlo de esta órbita de los derechos humanos.

“La trágica noche del 11 de octubre de 2019, Arnulfo salió de su casa a una reunión, y ya no regresó. Fue llevado a una casa de seguridad, donde lo interrogaron y torturaron. Lo asfixiaron, arrancándole la vida. Los perpetradores le espetaban su constante activismo en las marchas y bloqueos, contra el ayuntamiento de Tlapa, y su renuencia a abandonar el movimiento, pese a las advertencias de que le costaría muy caro este desafío.” (28)

La aparición del cuerpo de Cerón Soriano se debió a la fuerte presión del pueblo de Tlapa, y a la solidaridad de organizaciones nacionales y aun de un comité de la ONU. Durante cinco meses el Frente Popular de la Montaña tomó el ayuntamiento municipal para exigir su aparición con vida. También “fue determinante el clamor de justicia de su esposa, sus hijas e hijos, hermanas, madre y sus compañeros y compañeras de lucha; así como de las organizaciones sociales de la región y de la entidad.” Se consiguió saber que los asesinos materiales fueron delincuentes del lugar, encabezados por una persona apodada “La Chiva”, personaje que “sembró terror y muerte; la agudización de la violencia delincriminal se reflejaba en las ejecuciones, las desapariciones, vehículos quemados, narcocantantes y balaceras.” Con él, cayeron 17 de sus secuaces y un funcionario del Ayuntamiento. (29). Pero ni la investigación ni la mano de la justicia llegaron más arriba, al gobierno de Guerrero y al gobierno federal, en dónde seguramente se decidió este crimen.

Javier Torres Cruz

El 18 de abril del 2011 fue asesinado el campesino ecologista Javier Torres Cruz, cuando transitaba por un paraje cercano a la comunidad de La Morena, municipio de Petatlán, donde habitaba. Un grupo de sujetos armados lo atacó arteralmente y a su hermano Felipe, quien resultó herido.

Torres Cruz sufrió agresiones desde el año 2007 cuando decidió declarar ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para señalar a los responsables del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido asesinada en el año 2001. “A raíz de esa declaración y de su

férrea denuncia pública en contra de las atrocidades y violaciones cometidas por el narco-cacique Rogaciano Alva Álvarez, y de su labor como ecologista en la región, tanto fuerzas militares como civiles armados dirigieron una serie de ataques que concluyeron con su muerte”, de acuerdo con el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

El 13 de noviembre de 2008 la comunidad de La Morena sufrió un operativo militar al mando del mayor Rojas Arizmendi (o Rojas Méndez), quien al frente de unos 100 elementos del Batallón 19 de Infantería cateó casas en busca de Javier, Felipe y Alejandro Torres Cruz. Los militares llegaron en ocho vehículos armados y colocaron tres apuntando a las casas. Iban acompañados por civiles armados del grupo de Rogaciano Alva Álvarez, ex alcalde por el PRI de Petatlán y capo en la región del Cártel de Sinaloa.

El 3 de diciembre del 2008 Javier Torres fue detenido en un retén del Ejército, ubicado en San Luis La Loma. Los soldados vendaron sus ojos y lo llevaron a un lugar desconocido. En la noche lo entregaron a particulares, quienes lo torturaron e interrogaron acerca de la denuncia interpuesta en contra de Alva Álvarez. Lo llevaron a un lugar desconocido en el campo. Durante todo el tiempo permaneció vendado. El día 7 en la madrugada Javier logró escapar.

El 20 de diciembre acudieron a La Morena una Misión de Observación y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero para documentar su situación. A raíz de lo anterior el 21 de diciembre del 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó otorgarle medidas cautelares. Tales precauciones nunca se hicieron efectivas.

El 22 de enero se realizó otra visita de la Misión de Observación a la comunidad, porque su familia informó que había sido amenazado de muerte.

Cinco días después Torres Cruz informó que desde el día 24 se encontraba en su pueblo un grupo de 25 soldados que había acampado a 200 metros de su casa. Las mujeres, el maestro y los niños no salían de sus hogares, por temor de que les hicieran algo. Los soldados se retiraron unos días después.

Durante el año 2009, por lo menos en seis ocasiones distintas, elementos del Ejército ingresaron a la comunidad, agredieron a sus familiares y los amenazaron de muerte. Estas incursiones fueron denunciadas puntualmente.

El 16 de febrero del 2010, un comando de más de 100 soldados del Ejército a bordo de vehículos Hummer y de “Mercedes” ingresaron cerca de Rancho Nuevo y Las Humedades, donde algunos de los campesinos de La Morena tienen sus tierras de labor. Javier Torres Cruz y Narciso Torres Rosas manifestaron que los soldados llegaron disparando contra las personas que se encontraban trabajando en sus parcelas. Hirieron a Isaías Torres

Rosas y murió Adolfo, de los mismos apellidos. Fueron detenidos Anselmo Torres Quiroz (abuelo de Javier) y Húber Vega Correa, que fueron llevados al penal de Acapulco por presuntos delitos contra la salud, que les fueron fabricados por sus captores. Estos hechos se denunciaron ante el Ministerio Público Militar. Lo anterior fue constatado por una Misión de Observación Civil que el 17 de febrero del 2010 acudió a La Morena.

El 7 de diciembre del 2010 alrededor de 35 efectivos militares a bordo de tres carros Hummer incursionaron otra vez en el mismo sitio, dispararon, provocaron pánico y allanaron las casas. Cuatro meses después fue abatido el ecologista. Tenía 30 años, esposa e hijos. (30)

Gobierno y narcos colaboran para combatir a grupos guerrilleros

Javier Torres Cruz y algunas ONG acusaron a Rogaciano Alba, líder de la Unión de Ganaderos de Guerrero, de ser el operador del asesinato de la abogada defensora de derechos humanos Digna Ochoa. Alba, jefe del Cártel de Sinaloa en Guerrero, lanzó frecuentemente a un grupo armado contra las guerrillas que había en esos años en la entidad mencionada.

Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro, de 32 años, dirigió una nutrida columna de guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Independiente (ERPI). Trataba de organizar una insurrección contra el gobierno.

En entrevista con Diego Osorno a mediados de 2009, este miliciano, que vivía en la clandestinidad, dijo que a la guerra de baja intensidad en la sierra de Guerrero entre el Ejército y la guerrilla se había sumado un nuevo actor: el narco.

Las escaramuzas entre guerrilleros y efectivos militares fueron frecuentes desde 2006. En un comunicado de 2007, el ERPI aseguró que hubo diez enfrentamientos con “soldados, policías federales, estatales y grupos paramilitares”. Estos últimos son los que opera el Ejército mexicano con apoyo del cártel de Sinaloa, acusó el comandante guerrillero.

Para el insurrecto, los cárteles de la droga, en especial el que dirige el Chapo Guzmán, estaban ayudando al gobierno en labores de contrainsurgencia en la región.

El joven comandante guerrillero aseveró que la guerra del gobierno contra los narcos **“es falsa”**. “Aquí en Guerrero –dijo-, los narcotraficantes participan en las reuniones que lleva a cabo el Ejército. El gobierno del Estado golpea a un cártel y protege al otro. Aquí, el cártel del Chapo Guzmán le está sirviendo al Estado y viceversa. Ahora el problema está en que los cárteles de la droga le están haciendo el trabajo sucio al gobierno”.

La llegada en Guerrero al poder de un gobernador del PRD, Zeferino Torreblanca, no cambió nada *la guerra de baja intensidad*. “A partir de este gobierno de Zeferino Torreblanca se han querido formar más grupos paramilitares, pero cuando surgen, los ubicamos y los hemos golpeado y desbaratado, y lo vamos a seguir haciendo. (...) Muchos de los familiares de la gente que ha mandado matar Rogaciano Alba están incorporados a las columnas guerrilleras del ERPI. Para nosotros está muy claro que a Rogaciano lo protegen Felipe Calderón y Zeferino Torreblanca. Se instalan redes militares, y es extraño, pasan los grupos paramilitares junto a ellos y no los detienen.

“Alba ha cometido muchas muertes protegido por el actual gobierno estatal y federal. En total hemos contado alrededor de 60 personas, entre compañeros y gente del pueblo, todos ellos inocentes que fueron desaparecidos o ejecutados por el narco en la Costa Grande y la Tierra Caliente”. (31)

Meses después de esta entrevista, el 4 de noviembre de 2009, el Comandante Ramiro fue asesinado. La dirección nacional del ERPI señaló como autores intelectuales a “los órganos de inteligencia militar y política” del Estado mexicano y, como materiales, a un grupo de siete “narcoparamilitares” encabezados por Cayetano Alvarado Palacios, el Cuche Blanco.

El comandante Ramiro figuraba primero en la lista los más buscados por las procuradurías del centro del país. (32)

Omar Guerrero ingresó al Partido de los Pobres a la edad de 14 años. Fue aprehendido –y torturado, según la Recomendación 33/2002 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– en dos ocasiones por la Policía Investigadora Ministerial de Guerrero y el Ejército Mexicano. Siempre terminó fugándose. La última detención tuvo lugar el 9 de marzo de 2002. El 14 de noviembre de ese año abandonó el penal de Las Cruces, Acapulco, junto con otras 13 personas mediante un túnel que excavaron pacientemente. Desde entonces se remontó a la sierra para reincorporarse a una de las cuatro columnas principales del ERPI en Guerrero, de la que pronto sería comandante.

Contralínea documentó en sus ediciones del 2 y el 30 de agosto de 2009 que el ERPI se disputaba la zona baja de la sierra guerrerense con grupos paramilitares que al mismo tiempo estaban al servicio del narcotráfico. Uno de estos grupos era el que encabezaban los hermanos Villa Villalobos, quienes tenían la encomienda de, además de enfrentar al ERPI, asesinar a los civiles de la Organización Campesina Ecológica de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. (33)

Digna Ochoa

Valiente hasta la temeridad, mujer que se abrió paso a machetazos en la jungla masculina y machista, generosa, congruente... Así fue la abogada Digna Ochoa y Plácido, la más destacada defensora mexicana de personas perseguidas y reprimidas. Su trayectoria evoca a Sor Juana, por su aguda inteligencia y haber desafiado los poderes de la época. Su asesinato en 2001 en la ciudad de México, constituye, junto con la Noche de Iguala, el mayor crimen político de estas décadas. Una empresa extranjera, el Ejército y un capo del Cártel de Sinaloa tuvieron que ver con su vida profesional –su lucha- y muy probablemente en su feminicidio, que más de 20 años después debe volver a investigarse, según recomendó la CIDH.

Lo que primero llama la atención en su biografía es su precocidad: nacida en 1964, a los 20 años se tituló como licenciada en derecho. Podemos imaginar a una niña y luego a una jovencita empeñada tenazmente en estudiar en un entorno familiar precario (tuvo 12 hermanos), en una pequeña ciudad de Veracruz, Misantla. “Digna estudió derecho porque, en 1982, cuando su padre fue secuestrado e interrogado por la policía estatal, su familia no tuvo dinero para contratar a algún abogado”. (34)

En los ochenta, Digna Ochoa litiga los casos penales más delicados en los que están involucrados el Ejército y los servicios de seguridad pública. El 16 de agosto de 1988, después de advertir a su familia que había encontrado una “lista negra” de activistas políticos en la oficina de su jefe, el procurador de Veracruz, fue secuestrada en Jalapa. Declaró que sus secuestradores fueron policías estatales y que fue violada. No hubo ninguna investigación. (35)

En la década siguiente defiende a las víctimas de las matanzas de Aguas Blancas y el Charco (1995 y 1997), en Guerrero; y en la de Acteal, en Chiapas (1997). También llevó casos como los de seis jóvenes (cuatro hombres y dos mujeres) chiapanecos que fueron detenidos el 9 de febrero de 1995 en Yanga, Veracruz. De ahí, “el grupo de jóvenes fue trasladado, con los ojos vendados, hasta lo que se presume era el Campo Militar Número Uno, donde fueron torturados durante horas y obligados a firmar una declaración ministerial. En agosto de 1996, el juez federal del sexto distrito les dictó sentencia por cargos de posesión, traslado y fabricación de armas, y los condenó a seis años y nueve meses de prisión. Digna Ochoa fue la abogada encargada del grupo que logró sacar a estos jóvenes de la cárcel, al demostrar que la PGR nunca tuvo elementos para tenerlos en prisión y que los delitos fueron prefabricados. (36)

En 1996, junto con Pilar Noriega, recibe las primeras amenazas de muerte en el Centro de Derechos Humanos en el que trabajaba (Agustín Pro Juárez o PRODH), amenazas que nunca se investigaron. En 1999 es secuestrada e interrogada por cuatro horas por desconocidos, quienes le

sustrajeron sus pertenencias e identificaciones personales en su domicilio de la Ciudad de México. Un mes después se recibieron en el PRODH sobres con textos de amenaza. (37)

Entre 1995-2000 la amenazaron de muerte 13 veces, de acuerdo con Alejandro Almazán. En agosto de 2000, decide irse a Washington para salvaguardar su integridad física.

En abril de 2001, regresa a México. Tres meses después, ella junto con otros miembros del PRODH denunciaron haber sido amenazados. Digna defendía a los hermanos Cerezo, acusados de pertenecer a la guerrilla y era la abogada de los prisioneros políticos zapatistas. (38)

Entre los casos resonantes que abrazó está el de los campesinos de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Guerrero, que muy probablemente explique su ejecución. La larga desventura de estos campesinos comenzó en 1995, cuando el entonces gobernador Rubén Figueroa concedió los derechos exclusivos sobre los bosques de la Costa Grande a la empresa norteamericana Boise Cascade, que en poco tiempo los arrasó: *“Está todo pelón: la empresa dejó todo a rapa, sin árboles viejos ni jóvenes”*, dijo Rodolfo Montiel en 2001. *“Los terrenos que antes eran de ocote son sólo pastura y dicha empresa hizo que desaparecieran manantiales y animales. El cedro se lo acabaron, lo mismo que el roble y la caoba; ya no se ven venados, ni tejones, jabalíes, chachalacas o palomas.”* (39). La depredación del lugar también la causaban los ganaderos, encabezados por Rogaciano Alba, y los “narcosembradíos” de éste, según Almazán.

En febrero de 1998 campesinos de 15 localidades de Petatlán y Coyuca pararon la salida de madera, al bloquear a los camiones que la transportaban. La audacia de la acción en la que los labriegos mostraron una gran determinación se explica porque habían formado la Organización de Campesinos Ecológicos de la Sierra de Petatlán y de Coyuca de Benítez (OCESPC), liderada por Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. En represalia, ambos fueron torturados por soldados que los obligaron a inculparse de contar con armas de uso del Ejército y otros delitos que los llevaron a la cárcel. Digna salió en su defensa. Dice Blanche Petrich que la defensora hizo algo que en aquellos tiempos no se acostumbraba hacer contra los militares: citó a declarar a los soldados acusados por tortura y, en pleno interrogatorio, los hizo caer en contradicciones.

Viajó a Guerrero 18 días antes de su muerte. El 2 de octubre de 2001 hizo una asamblea con campesinos en Banco Nuevo, en donde había un destacamento militar que realizaba patrullajes en vehículos Hummer. “De acuerdo con testimonios y con un video, los militares se acercaron al lugar donde estaban los ecologistas y preguntaron, ‘¿quién es Digna?’ La abogada grabó personalmente a los militares y anotó los números de los vehículos.”

(40)

Además de la empresa y el gobierno, en la depredación de la naturaleza “los caciques y los militares actúan juntos, están ligados uno a otro”, declaró Teodoro Cabrera en el ya lejano 2001. Ya nos hemos referido al principal de estos caciques, Rogaciano Alba, quien fue también alcalde del lugar por el PRI. Diego Enrique Osorno, en su libro “El Cártel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco”, afirma que Petatlán es el municipio donde este personaje dirigió durante veinte años la Unión Ganadera de Guerrero. Era el jefe regional del Cártel de Sinaloa. Contaba con un grupo armado que lanzó frecuentemente contra las guerrillas que había en esos años en Guerrero.

Dijimos que el líder campesino ecologista Javier Torres Cruz denunció que Rogaciano fue el operador de la ejecución de Digna Ochoa. Narró que *“veíamos una película yo, Anselmo Torres, Fidel Torres y Javier Valle Villa, El Cabezón, pistolero de Rogaciano Alba. Entonces Valle nos platicó, como presumiendo, que ellos habían matado a Digna Ochoa; que los mandó Rogaciano.”*

Valle Villa era el único de los presuntos sicarios que estaba con vida. Otros presuntos involucrados, o que habrían sabido del caso, como Israel Yáñez, Gustavo Zárate y Nicolás Martínez *El Cuarterón* -quien presuntamente disparó contra ella-, habían sido asesinados. *“El Cabezón nos lo dijo, y yo se lo puedo recordar en su cara”*, le aseguró Torres Cruz en 2007 al periodista Roberto Ramírez, en la comunidad de La Morena.

De los que escucharon la confesión de Valle Villa, dos fueron atacados a balazos en pleno centro de Petatlán y uno de ellos, Anselmo Torres Rosas, murió, mientras Fidel Torres resultó ileso. (41) En cuanto al campesino denunciante, Javier Torres Cruz, fue asesinado el 7 de diciembre del 2010 por militares y civiles armados, como dijimos arriba.

**

El cadáver de Ochoa y Plácido tenía moretones a la altura del muslo derecho, en el cuello, la ceja izquierda y el lóbulo derecho; y en el centro de sus labios había marcas como si se los hubiera mordido fuertemente. Son marcas indicativas de que se defendió y luchó hasta el último minuto de su vida.

Al lado del menudo cuerpo de la mujer veracruzana de 35 años, había un trozo de papel: *“Pros, hijos de puta, si siguen así, a ustedes también les va a tocar. Conste que bajo advertencia no hay engaño”*, decía el papel firmado con una cruz. La amenaza iba dirigida a los integrantes del Centro PRODH, donde Ochoa y Plácido trabajó durante 12 años.

Ocasionaron su muerte dos disparos, uno en la pierna izquierda y otro en la zona izquierda en el cráneo. Digna Ochoa era diestra. La prueba de rodizonato de sodio arrojó que la difunta no había accionado armas de fue-

go. Dice Alejandro Almazán: “leo en el informe de la CIDH que los peritos del Servicio Médico Forense no acudieron al lugar de los hechos, por eso ni siquiera establecieron el tiempo de la muerte.”

De acuerdo con las primeras versiones de la Procuraduría capitalina (PGJDF), **la abogada había sido asesinada por motivos políticos.** (42)

Sin embargo, el 19 de julio del 2002, la PGJDF dijo que Ochoa había cometido un “suicidio disimulado”. Margarita Guerra y Tejada, la fiscal encargada de la investigación dijo que esta declaración estaba sustentada en más de 50 análisis periciales, 30 de los cuales eran considerados “hechos irrefutables”. “Guerra y Tejada dijo que uno de los hechos más contundentes para confirmar el suicidio fueron un diario íntimo y correos electrónicos que le enviaba a sus amigos: ‘Ella hablaba de fantasías, de neurosis obsesivas, de períodos largos de depresión que cuando empiezan a operar en una persona que no tiene el apoyo permanente de un especialista, pueden desencadenar en cualquier cosa que, desafortunadamente, siento que fue lo que pasó’”. (43)

Sin embargo, para Blanche Petrich (la periodista que más ha estudiado este caso, según Alejandro Almazán), su conclusión es que la mataron. “El caso de Digna es emblemático por varias razones, no sólo porque su crimen fue cometido contra una defensora y mujer, sino por el papel de las autoridades. Tenemos una investigación plagada de estereotipos de género, que no es objetiva, es una ‘sobreinvestigación’ de 40 mil hojas no útiles que hizo la Procuraduría para fortalecer un perfil de Digna”, dice Karla Michel Salas, abogada defensora en el caso de Digna Ochoa.

La Procuraduría en la Ciudad de México, a cargo del ex panista Bernardo Bátiz, y que dependía del jefe de gobierno en ese tiempo, Andrés Manuel López Obrador, al sostener que había sido un suicidio encubrió a los asesinos: el Ejército y/o narcos de Guerrero. Además –y esto es hoy lo más importante– **para hacer pasar la versión de un suicidio denigró a la víctima**, la hizo pasar como algo que no era, con la agravante que era una mujer. Más de 20 años después del crimen, ni a la familia ni a la defensa les interesa señalar culpables, explicó Peña. “**Lo que queremos es que se limpie el nombre de Digna**”.

En el libro de Alejandro Almazán sobre las “jefas y jefes” que han gobernado la capital del país a través, primero, del PRD, y luego de Morena, le dedica un papel destacado a la defensora veracruzana. Vio un Programa Rompevientos de 2013, en el que la periodista Blanche Petrich entrevista a los abogados de la familia Ochoa, Karla Michel Salas y David Peña. Ambos denuncian que la Procuraduría “hizo todo por desvirtuar la investigación para no llegar al fondo: la implicación de militares.” Dijo Peña: “a la luz del tiempo, hemos concluido que no se enfrentó al Ejército por las aspiraciones

presidenciales de López Obrador. [...] A Andrés Manuel le resultó más fácil asumir el costo de este fracaso que enfrentar al Ejército.” (44)

En el encubrimiento acompañarían a AMLO otros dos personajes venidos también del PRD. Ante la reapertura del caso, el 28 de noviembre de 2010, cuando era jefe de gobierno de la ciudad Marcelo Ebrard, la Procuraduría del DF concluyó que la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, no fue asesinada sino que ella misma se quitó la vida. A solicitud de un amparo que obtuvo la familia Ochoa es que el Ministerio Público volvió a revisar el caso pero, según el procurador Miguel Ángel Mancera, “se concluyó que fue un tema de suicidio”.

**

En la historia de Digna, además de su vida hiperactiva e intensa hay que agregar más de 20 años de lucha de su familia y sus abogados. El 6 de mayo de 2003 los familiares ofrecieron a la fiscalía pruebas periciales que apuntaban a que no tenía intenciones de suicidarse, pero estas fueron rechazadas o incluidas parcialmente. (45)

En julio de 2004, la Comisión de Derechos Humanos del DF publicó un informe sobre las investigaciones en torno al caso de la muerte de Ochoa y Plácido, en el que señalaba al menos nueve irregularidades.

Entre las muchas gestiones de abogados y hermanos de Digna –sería mejor decir: entre sus muchas batallas- rescato las colectas de dinero que organizaron entre organizaciones de derechos humanos, familiares y amigos de la abogada, para pagar peritajes que ascendieron, cada uno, hasta 200 mil pesos.

En el año 2019 la CIDH recomendó que el caso fuera abierto nuevamente, por lo que fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 26 de abril de 2021 comenzaron las audiencias. El 25 de noviembre de 2021, la CIDH declaró que existen “graves irregularidades” cometidas en la investigación y sentenció al Estado mexicano a reabrir el caso.

Se han cumplido ya dos años y medio de esta Recomendación de la CIDH y no encontramos nada que señale que el gobierno federal o el de la Ciudad de México la estén acatando.

FUENTES Y REFERENCIAS:

1. Tlachinollan, Desde las calles y entre los cerros y barrancas, abrieron las brechas de la sierra y la Montaña para defender los derechos humanos, 13/10, 2020.
2. Citado por Juan Reséndiz, “Los narcos también son contrainsurgentes”, Pluma, revista de teoría marxista, política y arte, invierno 2011-2012, número 17, p. 12.
3. , Simulación, contradicciones y represión: dos años del asesinato de Samir Flores, el activista opositor a la termoeléctrica de AMLO, INFOBAE, 20/02/2021.
4. “El Proyecto Integral Morelos y la devastación del territorio”, NEXOS, 9/08/2021.
5. San Juan, Patricia, Proyecto Integral Morelos: un monstruo que apenas despierta, Proceso, Onea, 23/02/ 2021.
<https://es.wikipedia.org/wiki/Samir-Flores-Soberanes>.
7. hernández navarro, Luis, Samir Flores, la herida de Amilcingo, 23/02/2023.
8. Muñoz Ramírez, Gloria, “¿Quién era Samir Flores, el defensor nahua de Amilcingo, opositor a la termoeléctrica de Morelos, asesinado hoy?”, La Jornada, 20/02/2019.
9. Animal Político, 22/02/2019.
10. González, José Roberto y Sotelo, Alfonso, Op. Cit.
11. Bacazenero, Verónica, “Aparece narcomanta con amenaza al gobernador Cuauhtémoc Blanco”, El Financiero 5/01/2022.
12. Morelos Cruz, Rubicela, Exigen campesinos cancelar el Proyecto Integral Morelos, La Jornada, 10/04/ 2023.
13. Sánchez, Mayela , La lucha social en México: prohibido abrir la boca, Sin Embargo, 07/07/2014.
14. Kau Sirenio, La persecución política de los opositores a La Parota, Pie de Página, 4 mayo, 2022.
15. Harrison, Aurora, Seguirá la lucha contra La Parota, El Sur, 5/02/2018.
16. Castro Soto, Gustavo, Presa La Parota, historia de un fraude, ECOPORTAL, 12/12/2005.
17. ECOPORTAL, Op. Cit.
18. Castillo, Ricardo, Marco Antonio Suástegui y la lucha contra la presa La Parota, Quadratín 17/07/2023.
19. Salgado, Abel, El asesinato de las siete personas es un mensaje contra el Cecop, dice Suástegui, El SUR, 12/06/ 2017.
20. Tlachinollan, La batalla jurídica por la libertad de los presos políticos del CECOP, 7/02/2019.
21. Gutiérrez, Maribel, Entrevista a Marco Antonio Suástegui, El Sur, 5, 6 y 7/11/ 2018.
22. Cervantes, Zacarías y Guerrero, Alejandro, El Sur, 3/01/2019; Pacheco, Anarsis, El Sur, 7/12/2018, y “Familiares de presos del CECOP se reúnen con el gobernador y le piden su libertad”, El Sur, 9/01/2019.
23. <https://oaxaca.quadratín.com.mx/marco-antonio-suastegui-y-la-lucha-contra-la-presa-la-parota/>
24. Tlachonollan, Dos meses sin el paradero del defensor de la tierra, Vicente Suástegui, 5/10/, 2021.
25. Gracida Gómez, Ramón, “Hay gente poderosa detrás de la desaparición de Vicente Suástegui”, EL SUR, 5 y 6/08/2023.
26. Briseño, Héctor, “Sentencian a 25 años de cárcel a 2 de 4 implicados en desaparición de Vicente Suástegui”, La Jornada, 8/10/ 2023.
27. Tlachinollan, Entrega del Ayuntamiento Municipal de Tlapa. Es peligroso ser defensor en la Montaña de Guerrero,12/02/2020.

28. Tlachinollan, Desde las calles y entre los cerros y barrancas, abrieron las brechas de la sierra y la Montaña para defender los derechos humanos. 13/10/2020.
29. Tlachinollan, Entrega del Ayuntamiento Municipal de Tlapa. Es peligroso ser defensor en la Montaña de Guerrero, 12/02/2020).
30. Red contra la Represión y por la Solidaridad del Taller de Desarrollo Comunitario y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.. Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Comunicado conjunto, 18-21/4/2011.
31. Citado en Pluma, no. 17, invierno 2011-2012.
32. Zósimo Camacho, “Muere Ramiro, del ERPI, bajo acciones de contrainsurgencia”, *Contralínea*, 29/11/2009.
33. Narco-paramilitares asesinaron al comandante Ramiro, *Pluma* no. 17, invierno 2011, pág. 14.
34. Almazán, Alejandro, *Jefas y jefes; las crisis políticas que forjaron a la Ciudad de México*, Grijalbo, 2023, pág. 148.
35. <https://es.wikipedia.org/wiki/Digna-Ochoa>
36. Viramontes, Sofía, *Digna Ochoa: emblema de la impunidad mexicana*, *Gatopardo*, 13/10/18.
37. <https://www.cejil.org/es/digna-ochoa>
38. 10 claves para entender quién fue Digna Ochoa, *SinEmbargo*, 19/10/2011.
39. Cardona, Liliana, *Ecologistas temen por su vida*, *El Universal*, 10/11/2001.
40. Díaz Romero, Pedro, “Pide el experto de la CIDH investigar más sobre Guerrero en el caso Digna”, *El Sur*, 4/4/2002.
41. Ramírez Bravo, Roberto, *Caso Digna Ochoa, entre los pendientes del cacique Rogaciano Alba, revela campesino*, *La Jornada*, 15/03/2007.
42. Taniguchi, Hanako, *La muerte de Digna Ochoa podría ser reconocida como homicidio*, *Expansión*, 7/09/2010.
43. Viramontes, Sofía, *Op. Cit.*
44. Almazán, Alejandro, *Op. Cit.*, págs. 143-149.
45. <https://www.cejil.org/es/digna-ochoa>.

Los cómplices

IV

Tan abundante como la sangre fue la impunidad. De 2011 a 2013 –como veremos- más de 60 personas fueron asesinadas o desaparecidas en Guerrero por ser disidentes políticos, que puede presumirse fueron ejecutadas por agentes estatales. Ninguna investigación, si la hubo, encontró a algún responsable. Nadie pisó una cárcel⁵. Desde el punto de vista jurídico, las ejecuciones “extrajudiciales”, las desapariciones “forzadas”, torturas y detenciones arbitrarias son delitos graves e imprescriptibles, algunos son “crímenes de lesa humanidad”, pero sus autores nunca sintieron miedo a ser sometidos a proceso, a ser juzgados y castigados. Por el contrario, podemos suponer que un funcionario represor de mano muy dura –es decir, que no le importaba cometer “excesos” y quebrantar la ley- era visto con admiración y respeto entre sus pares.

Enrique Peña Nieto labró su carrera hacia la silla presidencial, en 2012, con el antecedente de que había desatado una amplia represión (con numerosos abusos sexuales) en contra de los comuneros de Atenco, en el estado de México. Era la escuela de sus antecesores en Los Pinos, Vicente Fox y Felipe Calderón, que en 2006 habían colaborado con un gobernador del PRI, Ulises Ruiz, de Oaxaca, en doblegar sangrientamente el movimiento magisterial-popular en ese estado.

Al aproximarse septiembre de 2014, tanto el gobierno federal de Peña Nieto, como el de Aguirre Rivero, percibieron que una represión todavía mayor, en escala mayúscula –esto fue la Noche de Iguala- no tendría mayores costos políticos y sí podría aportarles beneficios. En sus lujosas oficinas se prendieron luces verdes para cometer la matanza.

Entre las señales favorables para proseguir la hemorragia estuvo el **amplio arco de cómplices y apoyadores** que encontraron en esos años y que fue más que notorio luego de la represión contra los estudiantes normalistas de

⁵ La excepción fue que dos policías ministeriales fueron encarcelados durante algunos meses por la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa en Chilpancingo. Otra excepción es la de José Luis Abarca, sentenciado por el asesinato de Hernández Cardona... para no ser castigado por la Noche de Iguala.

Ayotzinapa en Chilpancingo, en diciembre de 2011.

Grandes empresarios, jefes de la Iglesia y de los partidos, altos funcionarios, políticos y comunicadores profesionales, todos ellos protegieron a Aguirre Rivero, cabeza visible de los represores (pero no la única). Ellos le tejieron un sólido blindaje y le dijeron: “¡Continúa!”. Ellos son corresponsables del medio centenar de víctimas de la Noche de Iguala.

Calderón-García Luna-Ebrard

La Secretaría de Gobernación (ministerio del Interior) del panista Felipe Calderón Hinojosa ni siquiera recibió a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa cuando fueron a demandar justicia a la ciudad de México a fines de 2011. Como vimos, el gobierno federal estuvo implicado en la represión en la carretera a través de la Policía Federal, que era manejada por la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del delincuente Genaro García Luna (sentenciado en EU en 2023 por narco). No obstante, “ignoró Gobernación la marcha de normalistas guerrerenses en el DF; ningún funcionario los atendió”, tituló una nota la agencia del diario Reforma, que agregó:

“Marcharon unos mil 500 personas. Llegaron a las 16.45 y se fueron a las 19 horas; nadie los atendió. ‘Queríamos dialogar con el secretario de Gobernación, nos dijeron que no se podía; pedimos entonces con el subsecretario de Gobierno, y tampoco...’, declaró el estudiante normalista Eduardo Mesa, de la Comisión de Prensa del Comité Ejecutivo estudiantil (1)

Los altos funcionarios de la SEGOB tenían asuntos más importantes que atender frente a dos estudiantes asesinados a mansalva.

Gobernaba la capital del país el entonces perredista (hoy de Morena) Marcelo Ebrard Causabon, que ordenó un numeroso despliegue policial para intimidar a los jóvenes: al recinto que aloja la Secretaría de Gobernación llegaron 3 mil 838 elementos apoyados por dos helicópteros, según la misma fuente informativa. Marcelo Ebrard fue el político que más apoyó a Aguirre Rivero para ser electo gobernador. Viajó cinco veces a Guerrero para acompañarlo en actos de campaña, y en la marcha en Acapulco previa al mitin electoral final fue, junto con el candidato, la figura más destacada: “el senador con licencia y ex priísta Ángel Aguirre caminó alrededor de un kilómetro del brazo del jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y la plana mayor del sol azteca y de Convergencia [hoy Movimiento Ciudadano].” (2). Además de estos dos partidos, apoyaron a Aguirre para ser gobernador el PAN y el PT. También lo sostuvieron ante los hechos de 2011.

Al estar en la Ciudad de México los estudiantes tocaron una segunda puerta, la Cámara de Diputados, para exigir juicio político al mandatario de

Guerrero. Los partidos con más legisladores federales eran el PAN, PRD y PRI (a esta fecha, no existía Morena como partido registrado). La demanda no llegó nunca al Pleno de esa instancia.

El procurador de Guerrero Alberto López Rosas había tenido que renunciar al conocerse videos y fotografías en los que aparecen policías a su cargo vestidos de civil empuñando armas largas. Se esperaba que su probable responsabilidad no terminara sólo con la pérdida de su empleo sino con un proceso penal que lo podría poner tras las rejas. Por aquellos días parecía que iba a ser el único que pagaría el pato para que no se extendiera la indagatoria hacia la Policía Federal, igualmente armada y disparando armas de fuego. Se puso nervioso cuando lo citó la Procuraduría a declarar. Sin embargo, “canceló la PGR el citatorio para López Rosas”. Cuando se presentó en las oficinas de esa dependencia, le dijeron que “no rendiría declaración porque van a analizar el caso” y, al parecer, a esta fecha lo siguen haciendo. (3)

Las televisoras públicas y privadas pusieron su parte: en la poca difusión que le dieron al caso no incluyeron el material gráfico con la represión.

En Guerrero también se desplegaba el apoyo a los perpetradores de la violencia. De acuerdo con el articulista Tomás Tenorio Galindo, “algunos periódicos no regatean insultos a los estudiantes. Otros, como los titulares del Poder Judicial y del Poder Legislativo, de plano se hincan ante el gobernador”, escribió. Se puso en marcha una campaña para brindarle protección: “en esa postura le siguen la mayoría de los dirigentes del PRD”. (4)

El abogado de los normalistas, Vidulfo Rosales, criticó al PRD por “encubrir” al gobernador: “Yo no sé por qué la clase política, principalmente el PRD, está lanzando las campanas al aire, siente pasos en la azotea y empiezan a decir que no, que no se investigue a Ángel Aguirre. Yo creo que aquí nadie es impune”, declaró a *W Radio*. (5)

AMLO-Mazón-Aguirre; Loret-Ciro-Dóriga

Los líderes más representativos apretaron filas en torno al gobernador, entre ellos Lázaro Mazón, su secretario de Salud, que convocó un acto público en el que entregó estímulos económicos a trabajadores, aunque en realidad necesitaba una tribuna para poderle dirigir las siguientes palabras a su góber:

“Tiene el respaldo total a su gobierno, respaldo total a las acciones que usted está emprendiendo”, porque, dijo, “...su gobierno sí es un gobierno de rostro humano.” (6)

Con poco margen para equivocarnos, suponemos que Ángel Aguirre, formado en la escuela priista de la zalamería, no sintió pena ajena al escuchar las abyectas palabras de su empleado. Sí les sacó el mayor provecho

posible. Era público que Lázaro Mazón era el favorito de Andrés Manuel López Obrador para gobernar Guerrero luego de la gestión de Aguirre. El tabasqueño era el inminente candidato presidencial del PRD en esas fechas y contaba con amplias probabilidades de ocupar el cargo más apetecido de la República. La solidaridad del secretario de Salud al mandatario represor sólo pudo interpretarse como un apoyo a éste de López Obrador, que Aguirre refrendó al decir públicamente que Mazón dejaría el gabinete de Guerrero debido a que sería el coordinador de la campaña del abanderado tabasqueño (lo que no ocurrió). (7)

En 2012 la sociedad mexicana no parecía muy alterada por el asesinato de dos estudiantes campesinos. Desde el POS Ramón Centeno se refirió a lo dicho en enero de ese año por los comentaristas de uno de los programas de tv con más audiencia: “*Tercer Grado* reprobaría el actuar de la policía, pero esta vez no hubo referencias a las ‘garantías ciudadanas’ o a la ‘sociedad civil’. Todo lo contrario, Carlos Loret de Mola describió a los estudiantes como ‘revoltosos, abusivos, futuros malos profesores a los que había que zurrar pero con gases lacrimógenos o cuerpos antimotines.’” *Ciro Gómez Leyva*, en su turno, añadió la propuesta de reprimirlos echándoles agua. López Dóriga criticó en la policía la ‘falta de protocolo’ –lo que sea que eso signifique- para lidiar con la ira popular.

“Cuando unos ciudadanos son asesinados al hacer uso de sus garantías, se invoca su derecho a recibir gases lacrimógenos”, ironizó Centeno. (8)

En la misma revista *Pluma*, del POS, pero en la del verano de 2012, se criticó que López Obrador, el abanderado del PRD a la presidencia, se fotografiara con el gobernador Aguirre: “El candidato presidencial de ‘izquierda’ se exhibió en mítines con el asesino de los estudiantes de Ayotzinapa. Esta conducta rebasa el pragmatismo político y linda con la inmoralidad y la traición a esos jóvenes y a sus familias que, a la fecha, no han obtenido ningún tipo de reparación ni justicia.” Este autor tiene dos de esas fotografías, que encontró en internet, en las que AMLO y Aguirre departen amigablemente.

La otra figura del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, puso su parte para que el gobernador de su partido en Guerrero disimulara la sangre juvenil que lo manchaba. El 13 de septiembre de 2012 viajó a Chilpancingo, la ciudad del crimen, a recibir de Ángel Aguirre la presea “Sentimientos de la Nación”, “el máximo reconocimiento que entrega el Congreso del Estado.” *El ingeniero* dijo que recibió el premio no sólo en nombre propio, “sino y sobre todo, en el de todos aquellos que en nuestro país merecen reconocimiento y gratitud por haber venido luchando y mantenerse en la lucha por la independencia, las libertades, el ejercicio pleno de la soberanía nacional, los derechos de la gente, la democracia y la paz”. Por supuesto, no se refería a los normalistas que estudiaban a pocos kilómetros y a los que ni siquiera mencionó porque

hubiese sido como mentar la soga en la casa del ahorcado. Cárdenas dijo sentirse en casa, y con voz grave dijo: “queremos un país soberano, pugne- mos también por un mundo equitativo y de paz” (9)

Más que un homenaje al hijo de Lázaro Cárdenas, el acto constituyó un reconocimiento del llamado “líder moral” del PRD al gobernador, con el correspondiente manoseo de la figura heroica de José María Morelos. El ingeniero y su asesor predilecto, Adolfo Gilly, no se imaginaban que los normalistas de Ayotzinapa tres años después les iban a cobrar cara su traición, cuando los expulsaron airada y deshonrosamente de la primera marcha en la Ciudad de México que clamó por los 43 desaparecidos.

**

Además del gobernador, otros actores políticos estuvieron activos. De acuerdo con el periodista mixteco Kau Sirenio Pioquinto:

“De la recomendación que hizo la CNDH al gobierno de Guerrero y al congreso local, no se cumplió ni siquiera una línea. Esto, porque el PRD protegió a los principales responsables de los hechos ocurridos en la Auto- pista del Sol, el 12 de diciembre de 2011. “Los diputados de este partido, Bernardo Ortega Jiménez y Luisa Ayala Mondragón se opusieron a que el exprocurador Alberto López Rosas y el exsecretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borjas, fueran objeto de juicio político. Hicieron lo imposi- ble y lo lograron.”

López Rosas regresó al gabinete de Aguirre, esta vez con el cargo de secretario de Trabajo. En 2015 fue candidato a gobernador por el Partido Humanista y en 2020 se inscribió como precandidato por Morena.

“Hasta la fecha lo único que el gobierno del estado ha hecho es una dis- culpa pública, que más bien pareció un acto de puro trámite, de simulación” -escribió Sirenio Pioquinto. “El 21 de noviembre de 2012, el gobernador en- cabezó en Acapulco un acto en el que se supone pediría disculpas públicas a los agraviados. El problema es que no consultó a los agraviados acerca del lugar y la fecha para tales disculpas. Y lo que es peor, ni siquiera los invitó.

“Por eso no asistió ninguno de los familiares de los estudiantes asesina- dos ni de los que fueron detenidos y torturados en los separos de la Policía Ministerial.

“Aguirre aprovechó el momento para decir que su gobierno cumplió con las recomendaciones de la CNDH: ‘En cuanto a sanciones a los proba- bles responsables de los asesinatos de los estudiantes, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, se sigue proceso penal a dos policías ministeriales’, dijo. Pero, acotamos nosotros, los policías Rey David Cor- tés Flores e Ismael Matadamas Salinas, señalados en fotografías disparando en contra de los normalistas, fueron liberados 16 meses después. “De estos hechos no hay un solo detenido, ni sentenciados, el crimen sigue impune.”

(10)

Empero, era peligroso para los gobernantes dejar vivo a uno de los principales implicados, porque podría hablar. Así que, la mafia actuó como tal: el policía Rey David Cortes Flores fue asesinado el 9 de enero de 2019. Los sicarios, desde luego, huyeron sin dificultades. (11)

PAN-PRI-Iglesia

El PAN al apoyar a Aguirre lo hizo con una política que evocó a los nazis, que decían que cuando oían hablar de cultura sacaban el revólver. Su secretario general en el estado, Óscar Silva Abarca, exigió “el cierre definitivo” de la Normal de Ayotzinapa. Indignado, denunció que el 12 de diciembre los turistas que iban por la carretera “se tuvieron que fletar dos horas sin circular”. (12)

En la misma página del periódico con las exigencias oscurantistas del panista, hay una foto en la que aparece sonriente el alcalde de Acapulco Manuel Añorve (PRI), que le aplaude al no menos sonriente gobernador, en el trascendental acto de “encendido de luces de adorno de Navidad y año nuevo en la Costera Miguel Alemán”, en ese puerto.

La jerarquía católica también se sumó a la cargada. El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, dirigió a los estudiantes normalistas las siguientes palabras llenas de espiritualidad:

“Invité a los jóvenes a seguir esforzándose por darle un sentido trascendente a su vida y luchar para huir del relativismo, del libertinaje sexual, de las drogas y de una vida sin horizontes: ‘les exhorto a todos a perdonar mutuamente nuestros errores y prejuicios del pasado y el presente, apoyémonos en el común esfuerzo por contrarrestar la fuerza de la violencia, de la corrupción, del egoísmo, de la prepotencia, el odio, de la violencia, del pecado y seamos constructores de paz, necesitamos ofrecer lo mejor de nosotros’”. (13)

Los grandes empresarios también aparecieron. En septiembre del 2011 el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, las tiendas Elektra, etc., y el gobernador, firmaron un convenio de colaboración. Tal asociación no la rompió la sangre estudiantil derramada tres meses después.

Las familias de los jóvenes ejecutados seguían de luto cuando en febrero de 2012 Aguirre y el megamillonario Carlos Slim, anunciaron inversiones. El magnate fue nombrado presidente del Consejo Consultivo para la recuperación de Acapulco. (14) A mediados de 2012, seis meses después de Chilpancingo, el periodista Fernando Hernández Urías dejó en claro que “el gobernador guerrerense no está solo. De su lado –dijo– está el hombre más

rico del mundo: Carlos Slim Helú, que invertirá 250 millones de dólares para el rescate del puerto.” El magnate encabezó un grupo integrado por otros grandes empresarios como Miguel Alemán Velasco, Alejandro Burillo Azcárraga, Olegario Vázquez Raña y otros. Al dueño de Telmex ya se le llamaba en Guerrero “el mejor amigo del gobernador”. “Pero la cercanía no es gratuita –aclaró Hernández Urías-, según algunos medios como *La Jornada Guerrero*, la relación entre estos millonarios y el mandatario podría tener como trasfondo la intención de adjudicarse la construcción de la hidroeléctrica “La Parota” y de los proyectos turísticos que ahí se pretende desarrollar.” (15) En la extraordinaria biografía compuesta por Diego Enrique Osorno sobre el señor Slim, incluyó algunas fotografías, una de las cuales fue publicada por el mandamás en ese tiempo de Guerrero, la que acompañó del siguiente texto: “Con mi amigo @carloslim revisamos los avances de los proyectos y obras que juntos estamos impulsando en Acapulco”. Ambos sonrían, relajados y picarones. (16)

La agonía de la CNDH

La CNDH también cumplió un papel funesto ante estos hechos represivos y especialmente ante el cometido contra los estudiantes en Chilpancingo, en 2011. Los hechos que denunció, las verdades que recogió fueron mérito, como hemos dicho, de periodistas y de ciudadanos que grabaron videos o que tomaron fotografías. La Comisión se conformó con la información insuficiente, parcial u omisa que le proporcionaron las autoridades, las mismas que cometieron los crímenes. Por ejemplo, era necesario contar con peritajes de balística de los autobuses en los que se refugiaron los estudiantes cuando fueron atacados con armas de fuego, que expusieran cuántos proyectiles recibieron, de qué calibres, etc. En lugar de ello, les bastó registrar verdades de Perogrullo, como la afirmación de que uno de los autobuses había recibido disparos. Y nada más. Muy probablemente la CNDH ocultó en su Recomendación información relevante contenida en los peritajes⁶.

Como hemos visto, existió un peritaje a algunas, muy pocas, de las armas llevadas por las policías, para saber si habían sido disparadas, pero la CNDH no dijo nada acerca del principal peritaje que se requería: sobre las manos de los policías armados presentes, para saber los nombres y apellidos de los que jalaban gatillos.

En las casi 200 páginas que la CNDH escribió sobre estos hechos jamás

6 En el Dictamen de balística, del 15/12/2011, el perito de la Procuraduría de Guerrero, encontró que “los daños a vehículos fueron producidos por proyectiles de arma de fuego.” III.

se pregunta por la cadena de mando que ordenó una represión tan vasta, amplia y sangrienta. Exculpa así al gobernador Aguirre, al comandante de la PF y al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, es decir, nunca se pregunta ni mucho menos investigó la muy probable responsabilidad del mismo presidente, Felipe Calderón Hinojosa. No hay que ser especialista en política mexicana para saber que las órdenes de derramar sangre, aterrorizar con disparos, golpear, detener arbitrariamente y torturar a decenas de estudiantes debieron haber venido del mismo presidente y de su secretario de seguridad, así como del gobernador.

Mientras los normalistas exigían juicio político contra el mandatario de Guerrero, la CNDH puso en su blanco a la segunda línea de mando de las autoridades, como el procurador del estado, igualmente responsable pero no más que su jefe directo y que García Luna-Calderón.

En el mismo objetivo de eliminar de la lista de sospechosos a los que más lo eran, la CNDH jamás hizo algo parecido a investigar la posible intervención militar. El estudiante Gerardo Torres, como hemos visto, denunció que uno de sus torturadores vestía pantalón militar y escuchó que la casa en la que fue atormentado fue de un soldado. Pero la institución que encabezaba Raúl Plascencia Villanueva jamás investigó estas pistas. Y para quitar la posible responsabilidad del Ejército en los hechos sangrientos recurrió a una artimaña ridícula: envió una carta a la SEDENA en la que preguntó... ¿si habían participado el 12 de diciembre! La Secretaría de Defensa Nacional contestó, claro está, que no lo había hecho. “La CNDH trata con guantes de seda al Ejército”, tituló la revista Proceso en 2013 una investigación de la reportera Gloria Leticia Díaz sobre una mujer violada por soldados (17). El mismo título pudo haber sido puesto en 2011, tal vez con una variante: “La CNDH pregunta a la fuerza armada mediante oficios si peca o es virtuosa.”⁷

Desde luego la CNDH tampoco se preguntó ni indagó acerca de los móviles de los violadores contumaces de derechos humanos. Pero su insistencia en que policías y funcionarios asistan a cursos sobre este tema concibe que el problema es primordialmente educativo: policías poco civilizadas e ignorantes de las modernas reglas de convivencia social y humana. Jamás la CNDH analizó a las instituciones estatales encargadas de la coerción en una sociedad desigual y dividida; tampoco en su Recomendación aparecen antecedentes de tales instituciones estatales ni el contexto sociopolítico.

En cuanto a la reparación a las víctimas, el Gobierno incumplió. Y la CNDH lo toleró. “Esta Comisión Nacional contactó a diversas víctimas y familiares de las mismas, quienes en la mayoría de los casos manifestaron

7 En oficio de la Sedena del 19/12/2011, indicó que personal militar no participó en los hechos objeto de la investigación que realizó este Organismo Nacional. 86. RECOMENDACIÓN No. 1 VG/2012, CNDH

que la ayuda o apoyo económico ofrecido sólo fue transitorio y ‘simulado’, y que todavía no se les había indemnizado, y únicamente tenían la promesa por parte del gobierno en ese sentido.” (18).

“La CNDH murió el 12 de diciembre de 2011. Al llegar la noche de Iguala de 2014, nadie volteó a verla para que investigara, nadie le tenía confianza, nadie creía en ella. Desde los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, a la fecha, este costoso organismo nacional que paga el pueblo es un muerto que se arrastra, un vegetal parlante, un ente inútil y parasitario.” El párrafo anterior lo escribí en 2021, en ocasión del décimo aniversario de Chilpancingo. Me parece correcto y tres años después no le cambio una palabra.

FUENTES Y REFERENCIAS

- 1 El Sur, 23/12/2011.
2. Diario Crítico, Cierra campaña Ángel Aguirre Rivero en Acapulco, s/a , s/f.
3. Velázquez, Daniel, El Sur, 24/12/2011.
4. Tenorio Galindo, Tomás, Estudiantes asesinados, ¿gobierno impune?, El Sur, 26/12/2011.
5. En: <https://www.animalpolitico.com/2011/12/reportan-enfrentamiento-en-autopista-del-sol-hay-dos-muertos/>
6. Contreras, Karina, Da Lázaro Mazón su apoyo a Aguirre ante la solicitud de juicio político, El Sur, 24/12/2011.
7. Chávez, Lourdes, “Lázaro Mazón evitó confirmar la versión de que dejaría la SSA para coordinar la campaña presidencial de López Obrador”, El Sur, 23/12/2011.
8. Centeno, Ramón, ¿Cómo interpretar lo ocurrido en Ayotzinapa?”, Pluma, no. 18, primavera de 2012.
9. Guerrero cultural, Ángel Aguirre Rivero entregó la presea Sentimientos de la Nación a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 14/09/2012, <http://guerrercultural89.blogspot.com/2012/09/el-gobernador-de-guerrero-angel-aguirre.html>
10. Sirenio Pioquinto, Kau, Ejecución extrajudicial en la Carretera del Sol: 9 años de impunidad, Pie de página, 11/12/ 2020.
11. Ejecutan a un policía ministerial implicado en el caso de dos normalistas, El Sur, 10/1/2019.
12. Saavedra, Jesús, Piden panistas el cierre definitivo de la normal de Ayotzinapa, El Sur, 23/12/2011.
13. Labastida, Mariana, Exhorta el arzobispo a que la sociedad levante la voz. El Sur, 26/12/ 2011.
14. Reyes Maciel, Laura, Slim se une con distintos niveles de gobierno para relanzar Acapulco, Expansión, 27/2/ 2012.
15. Hernández Urías, Fernando, Aguirre: entre ataques de Televisa y TV Azteca estrena amigo: Carlos Slim, Sin Embargo, 12/06/2012.
16. Osorno, Diego Enrique, Slim, Biografía política del mexicano más rico del mundo, Debate, 2015.
17. Proceso, 22/12/2013.
18. CNDH, 2012, puntos 393, 394 y 395.

La escuela de exterminio

V

El Estado mexicano tiene experiencia y tradición histórica en la represión de nacionalidades indígenas, sectores populares e individuos que protestan o disienten. No me remonto al virreinato, lleno de rebeliones indias, puntualmente sofocadas. Lo mismo se hizo, en el México independiente, con los levantamientos indígenas y campesinos, como los de los ópatas y yaquis en Sonora. “El odio racial y el choque de civilizaciones no podrían hacer olvidar que el elemento motor de todas las guerras yaquis, debe buscarse en la tierra fértil del Yaqui, cuya posesión disputan los blancos a sus propietarios indios”, explica Jean Meyer, que agrega: “los principales jefes son fusilados”.

En estas décadas abundan por doquier los levantamientos: en la sierra Gorda; Temazcaltepec; Ecatzingo, Hidalgo. En 1836, en Oaxaca.

También hubo levantamientos en Yucatán y en Guerrero.

En 1844: “en el sur del Departamento de México y otros puntos de los de Oaxaca y Puebla hay considerables concentraciones de indígenas armados que perturban la tranquilidad y el orden, con el especioso pretexto de que los propietarios les han tomado sus tierras comunales y sus pasturas.”

Entre los años 1845-53 hubo la guerra “mantenida por el pueblo de Juchitán, Oaxaca, y reprimida por el gobernador Benito Juárez, el cual reconoce, sin embargo, la justicia de sus reivindicaciones contra los propietarios que se han apoderado de la salinas y la tierras de los juchitecos.”

En 1846, el levantamiento de Ahualulco, San Luis Potosí; en 1847 el levantamiento de las Huastecas. (1) Y un muy largo etcétera, en el que destaca la guerra apache, concluida hasta el siglo XX, que termina con el exterminio.

El porfiriato aplastó las huelgas de Cananea, Sonora, en 1906, y la de Río Blanco, Veracruz, un año después, y usó cárceles (pocilgas) para castigar cruelmente a los desafectos, como la de San Juan de Ulúa.

El régimen político surgido del movimiento armado creó aparatos para espiar a sus opositores y para organizar, junto con policías y el Ejército, la represión: la Dirección Federal de Seguridad (DFS, 1947) y la Dirección de

Investigaciones Políticas y Sociales, estuvieron inspiradas en el FBI de los EEUU. A estas alturas, los gobiernos “emanados de la Revolución” habían roto casi todos sus nexos con las aspiraciones populares, y la casta política y los empresarios se enriquecían aceleradamente. En los años 50s reprimió las luchas de maestros, telegrafistas, petroleros, ferrocarrileros, mineros, textiles y telefonistas, que clamaban por aumento a los salarios y por democratizar las organizaciones sindicales. Los ferrocarrileros fueron aplastados en marzo de 1959: 9 mil fueron despedidos y cientos encarcelados. Los locales sindicales fueron ocupados por la policía y el Ejército. Los líderes de estos trabajadores, Demetrio Vallejo y Valentín Campa, pasaron 10 años en prisión. Maestros y petroleros también fueron sofocados. Parecía que estos movimientos quedarían derrotados durante un largo tiempo, y que otros, temerosos, se replegarían. Pero hubo un hecho que cambió este panorama.

El 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución cubana que derroca la dictadura pronorteamericana de Fulgencio Batista. Una huelga general en las ciudades y la acción de guerrilleros y campesinos en la Sierra Maestra cambian la isla. Los revolucionarios nacionalizan las principales industrias, ponen en marcha políticas de beneficio social y se alinean con el bloque de países “socialistas” (en realidad, no eran tales) encabezado por la Unión Soviética. Latinoamérica estaba en shock. Cientos de miles de trabajadores y jóvenes simpatizaban con Cuba y muchos intentaron emularla.

En México las protestas prosiguieron y alcanzaron una gran masividad. En 1968 estalló el movimiento estudiantil popular, que fue doblegado mediante una matanza por el Ejército en Tlatelolco, el 2 de octubre, y con cárcel a cientos. Las protestas sindicales, estudiantiles y populares prosiguieron. La violencia gubernamental alentó a que grupos de jóvenes, maestros rurales y campesinos formaran organizaciones armadas y que otros que ya lo habían hecho confirmaran que no existía otro camino para conseguir cambios democráticos, económicos y sociales.

Como en Vietnam

En algunos países latinoamericanos la situación de radicalización política era parecida a la de México. Además, se añadió otro hecho exterior, la guerra que libraba Estados Unidos en Vietnam, y que aquél estaba lejos de ganar. En 1968 las guerrillas del Vietcong acometieron mediante la *Ofensiva del Tet* que, si no derrotó a los invasores, los hizo vislumbrar su fracaso. Desde Washington elaboraron una política para proteger su “seguridad hemisférica”, para evitar nuevas Cubas y Vietnams, y extirpar los anhelos de cambio. El régimen mexicano se alineó al imperio del Norte, que engendró

planes e ideologías de “seguridad nacional”. El escritor argentino Ernesto Sábato, presidente de la comisión de la verdad formada en su país en 1985, para investigar la represión de la dictadura militar habida pocos años antes, denunció que “Francia y EU fueron los grandes difusores de la doctrina antisubversiva. Organizaron centros para enseñar los principios antisubversivos. Enviaron asesores, instructores. Difundieron una cantidad extraordinaria de bibliografía.” “Los altos mandos militares argentinos asimilaron tal ideología, preñada de apelaciones a Cristo...” Y siempre que pudieron rapiñaron a las víctimas. (2)

Contrainsurgencia internacional

De acuerdo con la Comisión de la Verdad de Guerrero (2011-2014), la contrainsurgencia fue una práctica internacional comandada por los gobiernos de Estados Unidos que se aplicó en otros países antes que en México. “Su resultado no es una especificidad latinoamericana, sino una ‘herramienta de trabajo’ estadounidense para todo el mundo, fruto de su aplicación y sistematización teórica. La táctica experimentada simultáneamente en Indochina y Bolivia entre 1962 y 1964, se volvió teoría sistematizada a partir del golpe militar de 1964 en Brasil, y ya para los años setenta fue estrategia global, que ha perdurado y vencido por ser sumamente flexible en sus planteamientos, formas y ámbitos tanto temporales como geográficos, adaptándose a todas las situaciones” (3)

Es incontrovertible que el régimen priista estuvo subordinado a la estrategia contra insurgente de la principal potencia mundial. “Documentos desclasificados por el Departamento de Estado estadounidense en el año 2000, y publicados por la revista Proceso, por primera vez ofrecieron pruebas irrefutables de la responsabilidad directa del ex presidente Luis Echeverría en la lucha contrainsurgente durante su gobierno, y de que por lo menos desde 1973 aplicó una política de asesinato contra los guerrilleros detenidos en cárceles u hospitales. Entre esos telegramas confidenciales del embajador estadounidense en México destacó el marcado con el número 1493, por indicar claramente cómo el gobierno mexicano impulsó la defensa de la seguridad nacional y su lucha contra guerrillera contra las fuerzas insurgentes. Echeverría ordenó que los guerrilleros fueran capturados y vueltos ‘desechables’, al ser ‘prescindibles’. Las drásticas medidas tomadas para desarticular a los grupos insurgentes consistieron en emplear la represión ‘hasta donde fuera posible’. Todas las autoridades que lucharon contra los rebeldes fueron autorizadas a omitir los debidos procesos legales; se les dio impunidad para torturar, asesinar y desaparecer a cualquier persona que, a

su juicio, pareciera subversivo, además de que se habían girado órdenes de tirar a matar a cualquiera que fuera atrapado en actos violentos y secuestros. Por si fuera poco, fueron creados escuadrones de la muerte con agentes de la DFS y otros cuerpos policiales.” (4)

Alrededor de 400 oficiales mexicanos fueron enviados a Estados Unidos para aprender lucha anti insurgente, en centros como la Escuela de las Américas, la academia del FBI y la Academia Internacional de Policía de Washington. Desde mediados de los años 60 introducen en el Ejército mexicano el pensamiento contrainsurgente y formación antiguerrillera, a decir de Camilo Vicente Ovalle, especialista en el tema, de quien que tomamos parte de la información y análisis de este apartado.

Como parte de esta colaboración entre los gobiernos de EU y México, se llevó a cabo una reunión, en Acapulco, el 24 abril de 1969, encabezada por el secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán y al parecer funcionarios de la SEGOB. Estuvo presente el general John P. Mc Conell, comandante en jefe de la fuerza aérea de Estados Unidos. Ambos gobiernos temían que crecieran las guerrillas, que contaban con raíces, simpatía y apoyo entre las comunidades de la Costa Grande. Para reprimirlas, la herramienta predilecta fue el Ejército, que empleó algunas de las técnicas usadas por los marines en Vietnam. En octubre de 2014, la periodista Carmen Aristegui entrevistó a Pilar Noriega y José Enrique González, integrantes de la Comisión de la Verdad de Guerrero, que relataron la puesta en práctica, en 1970, de un plan, “que consistió en tender una tela de araña por todo el estado de Guerrero donde iban cayendo las moscas, para eso utilizó a miles de soldados en contra, aparentemente, del grupo alzado en armas, de Lucio Cabañas, pero en realidad el objetivo era controlar a toda la población; era la población de Guerrero el enemigo, el enemigo interno, y aplicaban tácticas de Seguridad Nacional de Norteamérica”. Nueve años después los titulares de la Comisión de la Verdad de Guerrero presentaron anexos a su informe de 2014. En éste, de acuerdo con Pilar Noriega, “identificaron nombres y planes de mandos militares asesorados o formados en Estados Unidos.” (5)

La batida contra la población y las guerrillas de Guerrero incluía tácticas como la de ahogar la “aldea vietnamita”, a la que luego nos referiremos.

Contraingurgencia institucionalizada

Luego del asalto por el Grupo Popular Guerrillero al cuartel Madera, Chihuahua, en 1965, a un graduado mexicano de la Academia Internacional de Policía de Washington, Miguel Nazar Haro, se le encargó formar, dentro de

la DFS, el llamado C-047, para hacerle frente a este nuevo tipo de disidencia. La dinámica fue convertir a toda la DFS en algo parecido al nuevo organismo. Personal adscrito a esta oficina fue creciendo desmesuradamente. En el año 1977 tenía 459 empleados; en 1979, 655; dos años después subió a 938 y en 1984 llegó a tener 3008. Existen los organigramas de la DFS y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, es decir, formaban parte de la estructura administrativa del aparato estatal.

La estrategia se completó mediante la creación de grupos paramilitares como Los Halcones, usado para reprimir a los estudiantes el 10 de junio de 1971. Para enfrentar a los guerrilleros crearon la Brigada Blanca. Aunque la DFS creció, la institución fundamental para reprimir siguió siendo el Ejército, que echó mano en gran escala de la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones. Se habilitaron dos centros de detención-desaparición en el Campo Militar Número Uno y en muchos de los cuarteles de la SEDENA.

“Los cambios en la contrainsurgencia... fueron una respuesta a la situación de movilización popular y a la acción de grupos guerrilleros a nivel nacional... Entre 1971 y 1972 se reactivó la movilización popular, principalmente de la mano de la acción estudiantil, con especial fuerza en Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca y Sinaloa”. Numerosos estudiantes simpatizaron con las nuevas agrupaciones independientes como la Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil de Oaxaca, y la COCEI, una organización parecida en el Istmo de Tehuantepec.

Existían al menos cuatro organizaciones político-militares, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria; el Frente Unido Zapatista; la Unión del Pueblo y el Movimiento Armado Revolucionario.

La nueva organización estatal para reprimir desarrolló una refinada división del trabajo y trabajaba estrechamente con el Ejército. Existía personal especializado en interrogatorios, otro en torturas, un equipo de información, un grupo aéreo. Todos contaban con entrenamiento especial. Participaban otros poderes del Estado, en ocasiones había agentes del Ministerio Público en los centros clandestinos de detención y médicos en los suplicios. Crearon también lo que hoy se llamaría un *think tank*, un laboratorio para generar análisis e ideas, un equipo de expertos en redactar reportes de la situación nacional “a partir de los informes de cada una de las comandancias de las zonas militares en el país, con los mismos apartados e igual forma de procesar la información; podían sintetizarse y elaborar conclusiones a nivel nacional en cada uno de los temas de interés. Se ocupaba de cinco temas: político, agrario, estudiantil, delictivo, enervantes y sindical.”

Contaban con creativos especialistas en organizar golpes represivos, lo que incluía evitar las posibles repercusiones políticas adversas de los mismos, como podemos ver en un documento de la DFS del 23 de octubre de

1983, elaborado para asesorar en cómo agredir al gobierno de la COCEI en Juchitán, el primer ayuntamiento que escapó al control del PRI. Incluía garantizar el control de la prensa, cuidar la imagen de los gobiernos federal y estatal, preparar un “paquete” con pistolas, escopetas, carabinas y cartuchos de dinamita que se sembrarían en las oficinas del palacio municipal para justificar ante la opinión pública la batida contra los nuevos gobernantes, a los que se les haría ver como a extremistas armados. La imaginación política de estos especialistas fue todavía más allá, pues recomendaron en su punto número 5: “detener extranjeros indocumentados” para presentarlos como “protegidos por el Ayuntamiento Popular.” No bastaba exhibir a los disidentes como “ultras”, era necesario sembrar la idea de que un poder extranjero los manejaba.

También se creó una nutrida red de “informadores confidenciales” (así se les llama a estos espías en un oficio de la policía judicial), que estaban infiltrados en fábricas, escuelas, centros de trabajo, etcétera, para reportar lo que allí pasaba. Se les pagaba una mensualidad.

La represión, la desaparición temporal o permanente, la tortura, las ejecuciones, afectaron sobre todo a jóvenes y a campesinos muy humildes. Vicente Ovalle incluyó en su libro fotografías de víctimas, tomadas de los archivos de la DFS, que en su mayoría eran chicos que apenas habían dejado la adolescencia o estaban en ella, como María Soledad Martínez Aragón, de 17 años; Gerardo Martínez Reyes, de 16; Yali Mireya Smith, de 19; Felipe Mendoza, de 20. Destaca el caso de Óscar Morán, de 16 años, detenido el 14 de julio de 1974. Los periodistas de El Diario de Culiacán lo encontraron en un hospital en “estado deplorable de salud por los castigos que ha recibido en las últimas 48 horas de manos de la Policía Judicial del estado.” También cayeron Felipe Ángel Millán García, de 24 años, Francisco Javier Manríquez Pérez, de 18, Juan Germán Flores Carrasco, de 17, Martha Alicia Camacho Loaiza, de 21 años y Carlos Alemán Velázquez, de 18 años. Francisco Alberto Cruz Sánchez, de 14 años, fue llevado al Campo Militar Número Uno luego de ser sacado de su casa en Oaxaca.

En Argentina, bajo la última dictadura militar, el exterminio se cebó en jóvenes de entre 20 a 30 años: el 53% de las víctimas tenía esa edad, y el 30% de ellos fueron mujeres. También hubo embarazadas y niños desaparecidos. No faltaron adolescentes, personas mayores, inválidos y lisiados. Entre los desaparecidos, 30.4% eran obreros industriales, 17.9% empleados, 5.7% docentes y 21% estudiantes. Cayeron también periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos. (6) “No solamente se persiguió a los miembros de las organizaciones políticas que practicaban actos de terrorismo. Se cuentan por millares las víctimas que jamás tuvieron vinculación alguna con tales actividades y fueron sin embargo objeto de horribles supli-

cios por su oposición a la dictadura militar, por su participación en luchas gremiales o estudiantiles...” “Los Consejos de Guerra con competencia para juzgar tales delitos (terrorismo) sólo sostuvieron cargos que concluyeron en condenas contra aproximadamente 350 personas.” Si se calcula que hubo unos 30 mil desaparecidos, entonces menos del 2 por ciento fueron militantes de organizaciones guerrilleras.

Los militares liberaron a delincuentes para que les ayudaran a demoler a miles de seres humanos.

En la acomodación del aparato estatal mexicano para hacer frente a la llamada “insurgencia sindical” y popular, así como al desafío de los grupos armados, se apeló a la participación activa de los grupos empresariales en algunos de los lugares críticos. En 1973, por ejemplo, en el estado de Nuevo León arreció la protesta popular y apareció una guerrilla, la Liga Comunista 23 de Septiembre, ante lo cual fue creado el “Cuartel General Contra la Subversión”, que fue uno de los “primeros grupos especiales para la contrainsurgencia, y en especial para operar la detención-desaparición, con una coordinación operativa y administrativa”. A cargo del cuartel con rimbombante nombre fue designado un experimentado agente de la DFS, Arturo Condelle Gómez. Coordinaba con la policía judicial del Estado y el comandante de la 7a. Zona Militar, que le proporcionó un pelotón de soldados y armamento. El gobierno municipal de Monterrey le envió policías y le pagó el alquiler de una casa particular. La misión era: “vigilar a los sectores obrero, popular, campesino, estudiantil y eliminar a las organizaciones guerrilleras.” “Parte de su infraestructura, en especial la usada como cárceles clandestinas, en donde se mantuvo en calidad de detenidos-desaparecidos a militantes de las organizaciones guerrilleras y organizaciones populares, fue proporcionada por individuos vinculados a los sectores empresariales de Monterrey. Algunos ex militantes... señalan que los empresarios financiaron a grupos paramilitares clandestinos de contrainsurgencia.” “Peinaban’ sectores industriales y en el campo en busca de extremistas que repartieran volantes.

“Todos estos grupos estuvieron subordinados a las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, y en última instancia a la presidencia de la República. Al presidente en turno, durante el periodo contrainsurgente, se le mantuvo informado constantemente de los riesgos y desafíos de la disidencia, así de los avances y logros en su combate.” (7)

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, formada en 1990, llevó a cabo una década después una investigación sobre violaciones a derechos humanos durante esos años de extrema violencia del Estado contra los movimientos populares, los opositores y las organizaciones armadas (aproximadamente de 1965 a 1985), fenómeno conocido como “guerra sucia”, debido a que la represión no conoció límites ni cortapisas jurídicas y éticas.

Entre los testimonios que recogió está el que tituló “TORTURA A NIÑA DE UN AÑO”, en el que una mujer dijo:

“...fuimos tirados al suelo y empezaron los agentes a golpear salvajemente a mi esposo para que dijera la dirección de otras dos personas. Luego lo arrastraron de los cabellos y lo metieron en la cajuela de un auto; enseguida hicieron lo mismo conmigo, llevándome a otro auto y amarrándome los ojos para que no viera a donde nos dirigíamos. Nos llevaron a un local que después me di cuenta que era el Departamento de Tránsito [del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México] y me echaron al piso junto con mi nenita. Ya para entonces yo escuchaba los golpes que le daban y enseguida oí que le decían a mi esposo: ‘ahorita vas a hablar cabrón, tráiganme a su vieja’. Enseguida me levantaron, me quitaron el trapo que tenía en la cabeza y me obligaron a desnudarme por completo. Luego me llevaron a presenciar a mi esposo, el cual se encontraba también desnudo y le estaban aplicando toques eléctricos en los testículos. Me tiraron al suelo, me golpearon en su presencia y me levantaron de los pechos estirándome los pezones. Después me introdujeron en la vagina un fierro al cual me dijeron que le iban aplicar corriente eléctrica (cosa que después no hicieron) pero sí me dieron toques en la vulva y en los pechos’ [...] A mi esposo lo golpeaban entre muchos; lo sujetaban en el suelo entre varios y le levantaban la cabeza para tirarle patadas en la cara. Lo desnudaron nuevamente y lo metían a una pila en la que dan agua a los caballos, en donde lo sacaban a punto de ahogarse. Me dijeron después que a mi niña, a mi cuñada, a su hijo y a mí, nos iban a matar. Al rato agregaron: ‘A tu marido ya se lo llevó la chingada por cabrón, así que hablas o la que sigue es tu hija...’ [...] A mí me traían en un carro seis agentes: tres en la parte delantera y tres atrás conmigo, uno de ellos me abrazaba (yo estaba amarrada) y los otros me manoseaban el cuerpo diciendo obscenidades [...] Uno de ellos me dijo: ‘¿tienes hijos?’ Sí, una niña de un año. — ‘Bueno, ya viene en camino para que esta cabrona sepa lo que sabemos hacer’, decía otro. — ‘¿Sabes que te vamos a matar?’ — ¿Por qué? — ‘Por guerrillera, no te hagas pendeja’. — Yo no soy guerrillera. — ‘Al rato vas a jurar por tu madre que lo eres’ (otro) — ‘¿Sabes lo que les hacemos a las cabronas como tú? Las matamos pero de a poquito mamita y se mueren hasta que a nosotros se nos pega la gana. ¡Vas a suplicar que te matemos...!’ [...] Con toda intención dejé para el final lo que a continuación voy a declarar por parecerme lo más abominable y terrible de cuanto me hicieron: A mi hijita de un año dos meses, la tortura-

ron en mi presencia maltratándola y aplicándole toques eléctricos en todo su cuerpecito.”

Muchos de los desaparecidos fueron fusilados por soldados. En 1988 uno de estos verdugos desertó del Ejército y huyó a Canadá, en donde solicitó asilo. Zacarías Osorio Cruz, miembro de la Brigada de Fusileros Paracaidistas acuartelado en el Campo Militar Número Uno, compareció ante el Tribunal del Departamento de Migración de Montreal, al que le dijo haber realizado “siete u ocho misiones para recoger gente que estaba detenida, que ya estaba preparada para ser subida a un helicóptero o avión, es decir, tenían la cabeza tapada. En 1978 tuvo que ir a Atoyac por personas detenidas, de las que ‘daban lata y no se podía permitir que continuaran con sus actividades’, gente que ‘quería comunicar o manifestar su descontento al gobierno y las órdenes que recibía era que tenía que desaparecer a esa gente... ‘la orden era que tenían que morir porque le traían problemas al alto mando’”. “Sacaban a la gente de la prisión militar y la llevaban a un campo de tiro en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, porque es un campo de práctica y así quienes viven cerca de ese campo, al oír los disparos, podrían pensar que estaban practicando.” Zacarías Osorio refiere haber realizado misiones a Atoyac, Guamúchil Sinaloa, Baja California y Tapachula, Chiapas. (8)

La estrategia represiva despojó a las víctimas de su ideario político, nunca consideró a los opositores personas con pensamientos propios y diferentes. Para los represores, sus antagonistas eran delincuentes, y los campesinos, “robavacas” o gavilleros. La sustracción del carácter de disidentes políticos llevó a la deshumanización de los prisioneros, que fueron cosificados: les llamaban *paquetes*. Cuando la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (FEMOSPP) accedió a algunos archivos oficiales, encontró que “con fecha, 73/ 11/ 22 se detecta por primera vez en los expedientes de la SEDENA el término ‘paquete’, para referirse a los ‘detenidos que ilegalmente quedan en manos del Ejército.’”⁸ En los centros de detención-desaparición, “el maltrato y denigración eran sistemáticos, [los reos] andaban descalzos, en trusa o desnudos.” Un testigo de uno de estos centros de reclusión, que estaba en búsqueda de un desaparecido, pudo ingresar a buscarlo al Campo Militar Número Uno en el año 1973, y dejó el siguiente testimonio: “pasamos a la celda donde estaban los detenidos, todos sucios, desnudos, greñudos y barbones, los detenidos estaban de uno o de a dos en cada celda en un galerón de más de 100 metros de largo con celdas a uno y a otro lado.” Describe el lugar como “feo y pestilente y que en esas condiciones estaban los detenidos y que entre ellos no se encontraba Tomas

8 Ya vimos que, 50 años después, usaron ese término los captores de Marco Antonio Suástegui

Flores Jiménez.” (9)

En esos años de *Priato* y “guerra sucia”, la tortura no estaba tipificada como delito. Hasta 1986 se publicó la primera Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y hasta 1993 se elevó a nivel constitucional.

La CNDH calculó que la labor de espionaje de la DFS y de la DIPS, concentrada en sus archivos, había dado lugar a “un número aproximado a 80,000,000 de tarjetas” y que había revisado “aproximadamente 40,000 fojas de expedientes relativos a las acciones que en materia de detenciones, interrogatorios, allanamientos de morada, cateos, retenciones, torturas y desapariciones forzadas efectuaron servidores públicos de la DFS.” Puede concluirse que los intereses de tal oficina iban mucho más allá de las organizaciones armadas de izquierda (la mayoría de ellas, minúsculas), y que su objeto de atención y vigilancia –y, sobre todo, de represión- eran porciones considerables de la ciudadanía. (10)

La CNDH elaboró la Recomendación 026 del año 2001 con base en “las investigaciones tendentes al esclarecimiento de los 532 expedientes recibidos por presuntas desapariciones ocurridas en la década los 70 y principios de los 80.” Encontró que la enorme mayoría de desapariciones de esos años oscuros están en el estado de Guerrero.

Entre la sangre y el verde

La Recomendación consideró sólo 532 casos de personas incluidas en las quejas sobre desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80 en todo el país, de los cuales únicamente “existen 275 casos de personas en los que se puede concluir que fueron víctimas de detención, interrogatorios y eventual desaparición forzada por parte de servidores públicos de distintas autoridades públicas del país”. Sobre otros 97 casos aseveró que no había indicios suficientes para concluir la “existencia de desaparición forzada u otra violación a los derechos humanos, sin que pueda descartarse esa posibilidad.” Sobre otros 160 casos emitió una evaluación confusa. Para esta autoridad, hubo en todo México menos de 500 desaparecidos de manera forzada en esos años. Pero según uno de los perpetradores de desapariciones en Guerrero, en ese estado hubo... ¡unos mil 500 casos! Gustavo Tarín estuvo bajo las órdenes del teniente-coronel Miguel Acosta Chaparro, que fue director de Protección y Seguridad Pública y Subdirector de la Policía Judicial que quedó a cargo de la lucha contra la guerrilla.

“Tarín señaló que de 1974 o 75 a 1981 detuvieron a cerca de 1500 personas, a las que sometían a investigación e interrogatorios en los separos de las oficinas de Policía y Tránsito de la ciudad de Acapulco, Guerrero, que conocían como ‘el Metro’, porque era un espacio muy reducido. A esas

oficinas se presentaban, por encargo del entonces gobernador Rubén Figueroa Figueroa, varios agentes del Ministerio Público para conversar con los detenidos y saber si deseaban amnistiarse. Estos agentes se entrevistaban con los detenidos y determinaban quiénes reunían los requisitos para ser amnistiados. Si los detenidos no aceptaban la amnistía, se les llevaba a la Base Militar Pie de la Cuesta. Los guerrilleros, atados y vendados, eran bajados de una camioneta Chevrolet Van café, con capacidad para 15 personas, y eran conducidos uno a uno hasta el banquito de fierro que conocían como ‘El banquito de los acusados’, y ya en este lugar, se les sentaba haciéndoles creer que los iban a fotografiar.

Conforme a la declaración de Tarín, una vez que la persona estaba sentada la ejecutaban Acosta Chaparro, Alfredo Mendiola, Alberto Aguirre I. Quintanar y Humberto Rodríguez Acosta, con un disparo en la nuca con una pistola calibre 380, que tenía adaptado un ‘moflecito’ (un silenciador). Inmediatamente después se les colocaba sobre la cabeza una bolsa de nailon que se les ataba al cuello para evitar que quedaran rastros de sangre. Siempre se usó la misma pistola, por lo que la bautizaron como ‘la espada justiciera.’ (11)

“Realizado este procedimiento, generalmente [los ejecutados] eran 14 o 16 personas, se colocaban dentro de costales de yute, se le ponían unas piedras y se cosían, para después ser transportados en carretilla hasta el avión Arava del Ejército Mexicano que se colocaba en la pista y los conducían a un lugar conocido como la costa de Oaxaca. Había ocasiones en que el avión Arava hacía tres o cuatro vuelos en una sola noche. Así fueron ejecutadas o desaparecidas más de 1500 personas. [Tarín] cree que Acosta Chaparro habría ejecutado personalmente a unas 200 personas.”

Había otros métodos para llevar a cabo las ejecuciones, según la Comisión de Verdad de Guerrero (COMVERDAD), que rivalizan en saña. Al estudiar documentos en el Archivo General de la Nación “se comprueba que en 1974 empezaron a aparecer los cuerpos sin vida de personas visiblemente torturadas, desfiguradas y quemadas, a quienes se trataba de señalar como delincuentes o relacionar con el hampa, pero que, conforme a un informe de la DFS, en realidad se trataba de personas relacionadas con Lucio Cabañas. Las detenciones se ejecutan por órdenes expresas del comandante de la 27a Zona Militar, con sede en Acapulco, general de División Salvador Rangel Medina, que después de obtener, por diferentes medios, toda la información posible sobre Lucio Cabañas y su gente, se les da a tomar gasolina y se les prende fuego; posteriormente se les abandona en lugares solitarios, en donde aparecen con las desfiguraciones provocadas por las llamas y presentando impactos de arma de fuego.”

“En el expediente militar SC/34/2000/IV/1E-BIS se encuentra la decla-

ración de Margarito Monroy Candia quien era piloto y mecánico de aviones. Su trabajo era transportar guerrilleros que detenía y mataba el personal al mando del general Quiroz Hermosillo. Monroy Candía señala que las personas que transportó eran de todos los lugares, también de buena situación económica, ingenieros, doctores del pueblo, licenciados, de todo tipo. Cuando eran mujeres les ofrecían que si tenían sexo, al llegar a Guerrero las dejarían en libertad y en su caso a los esposos. En algunas ocasiones aceptaron pero nunca, que él viera, las liberaron.

En ocasiones el personal ejecutado todavía iba vivo, agonizante y después los tiraban al mar. Durante su comisión trasladó de 120 a 150 cuerpos.”

El Ejército mexicano aprendió del norteamericano en su guerra en Indochina, librada contra campesinos todavía más pobres que los de nuestro país. En la sierra de Guerrero “hizo un censo de la población civil que fue obligada a concentrarse en los poblados mayores en los que tendió un cerco militar. La población fue obligada a abandonar los pueblos pequeños y dispersos, con todo y sus animales y cultivos, que quedaron como pueblos fantasma o cuarteles de la fuerza armada. Los habitantes huyeron a poblados a donde tenían familiares o amistades que los acogieran, o fueron reconcentrados en los poblados mayores, o salieron de la región exiliados a donde pudieran. A este tipo de desplazamiento forzado se le conoce como ‘aldea vietnamita’. Tenemos registro de que durante este tiempo se aplicó esta práctica, cuando menos en los siguientes veinte barrios y poblados”, dice la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que enlistó esos lugares (12). A través del Plan Atoyac se controló a la población de las comunidades campesinas por medio de “cartillas de identificación indicando las actividades a las que se dedica su portador con su fotografía” y el control de los abastecimientos, principalmente víveres que normalmente “se sabe consumen las gavillas de Lucio Cabañas”, lo que implicó, de acuerdo con testimonios recibidos, que a la población rural de la Costa Grande de Guerrero se le limitaran los alimentos y víveres que cultivaban, compraban y consumían. Se les limitaba la salida de su comunidad y la atención de sus huertas, para salir de la comunidad debían obtener permiso, por lo que gran parte de las cosechas se perdieron. Se ha documentado que el Ejército impidió la introducción a las comunidades de suficientes víveres, robó el ganado, destruyó casas, desplazó a familias, y a quienes permanecieron en la región los sometió a un control de hambre y miseria, ya que debían pedir permiso para realizar sus tareas productivas, lo cual generó pérdidas en sus cosechas y una reducción considerable de su nivel de vida porque, además, limitaba la introducción de medicinas y artículos de primera necesidad.” El Ejército utilizó morteros y aviación para bombardear comunidades.

La COMVERDAD es enfática al afirmar que no sólo se trató de un “exterminio de la guerrilla” sino que la represión fue masiva y se extendió al sector urbano, especialmente a los estudiantes de Guerrero, Durango, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Los estudiantes, sólo por el hecho de serlo eran sospechosos de apoyar o abastecer a la guerrilla.

Entre los numerosos testimonios recogidos por la COMVERDAD, escogemos casi al azar los siguientes tres casos.

Una víctima de desaparición transitoria conoció a Fredy Radilla Silva en el campo de detención y exterminio. El testigo estuvo preso por más de dos meses, de los cuales “cuarenta días no le dieron de comer, sólo tomaba agua del grifo”. Como al mes de estar sufriendo torturas, una madrugada entraron sus captores, de pronto oyó mucho ruido de personas corriendo en tropel, llevaban a un prisionero al que metieron a la sala de tortura, le subieron el volumen al radio, “lo torturaron muy feo, porque gritaba muy feo, casi lo estaban matando, después lo bajaron al galerón, y luego regresaron y lo colgaron a la mitad del techo frente a la celda donde estaba, tenía las manos amarradas hacia atrás y los pies apenas rosaban el piso, y ahí lo dejaron y se fueron, daba unos alaridos horribles, se quejaba mucho, yo empecé a hablarle...” El ahorcado era Radilla Silva.

Los hermanos Justino y Pastor Romero Flores de 13 y 16 años, fueron detenidos el 9 de septiembre de 1976 por la Policía Judicial comandada por el Teniente Coronel Mario Arturo Acosta Chaparro. Eran muchos elementos vestidos de civil con armas y se desplazaban en varios vehículos. Justino y Pastor iban rumbo a su trabajo, los bajaron con lujo de violencia del autobús donde se trasladaban a las granjas. Su vecino Erasmo es el que presentó este testimonio: supo que se los llevaron con rumbo a Guerrero, “sin saber su paradero hasta la fecha, sus captores eran elementos de la Policía Judicial de Acapulco, fueron reconocidos por vecinos por las placas del estado de Guerrero que tenían los vehículos. Hicieron destrozos en el domicilio, los busqué en la policía judicial de Acapulco y en la 27ava zona militar me informaban que ahí no había ninguna persona detenida con esos nombres.”

“De acuerdo al testimonio en torno al caso de desaparición forzada de Cirino Hernández Flores, en ese momento contaba con aproximadamente 22 años de edad, no recuerdo la fecha de sus detención, pero sí recuerdo claramente que ese día llegaron los militares en tres vehículos, se brincaron las cercas y comenzaron a patear la puerta rodeando la casa en actitud violenta. Yo les grité que esperaran que yo les iba abrir, pero muy rápidamente abrieron la puerta a golpes y detuvieron a Pascual Zabala López que en ese tiempo era presidente del comisariado ejidal del Mexcaltepec. Inmediatamente lo vendaron, enseguida detuvieron a Salvador Hernández Panó que ahí se encontraba, y le preguntaron que si él era Cirino, él dijo que no y luego de-

tuvieron a Cirino Hernández Flores y comenzaron a golpearlos adentro de la casa, todas las cosas fueron tiradas en desorden, llevándose todas las cosas de valor, joyas de oro como una esclava, grabadora, casete, documentos del banco, cuchillos de cocina que teníamos de buena calidad, y andaban entre ellos en ese momento repartiéndoselos, lo cual representa una agresión y un robo con violencia de parte de los uniformados militares que agredieron a nuestra familia y saquearon nuestra casa y se llevaron a los detenidos Cirino y Salvador. Salvador fue liberado ocho días después del Cuartel Militar de Atoyac, escuchó quejarse toda la noche a Cirino, que estaba muy golpeado, y después ya no volvió a escuchar nada, no supo si lo sacaron o lo cambiaron de lugar. En el mismo poblado fue detenido Raúl Parra Juárez, amigo de Cirino y ocho días antes de la detención de Cirino habían detenido en el Ciruelar a Pedro Flores, medio hermano de Cirino, los cuales hasta la fecha permanecen desaparecidos.”

Entre los cientos de casos, destaca uno en el que el número de víctimas fue de más de 40 en un solo acto. En la triste historia de la represión en México en la época moderna, comparte lugar con las matanzas del 2 de octubre de 1968, con la habida en San Cosme el 10 de junio de 1971, con la carnicería de indígenas, mujeres y niños en Acteal, en 1997... y con la Noche de Iguala de 2014.

En 1979 el entonces procurador general de la República informó que 44 personas resultaron muertas en el enfrentamiento suscitado el día 8 de septiembre de 1974, con motivo del rescate del entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, que había sido secuestrado por el Partido de los Pobres (PDLP), la guerrilla bajo la jefatura de Lucio Cabañas. De acuerdo con la Recomendación antes citada de la CNDH, “contrariamente a lo asentado en dicho informe, la desaparición forzada de los agraviados es atribuible a servidores públicos que los privaron de su libertad y los sometieron a interrogatorios y que, por otra parte, informaron públicamente que ‘habían muerto en un enfrentamiento’, cuando que de las evidencias se desprende que en dicho suceso sólo falleció una persona, sin dejar de lado que no hay constancia de la supuesta muerte, ni mucho menos de que las personas respecto de las cuales existen evidencias de su detención fueran liberadas posteriormente o puestas a disposición de autoridad ministerial alguna, como lo prevé el artículo 16 constitucional.”

La CNDH concluyó que el informe del procurador “no reflejaba una investigación que permitiera dar certeza a su contenido.” “Las evidencias que obtuvo la Comisión Nacional, e incluso manteniendo un mínimo margen de duda, debe tenerse presente que la suerte de las víctimas de la desaparición forzada quedó en manos de agentes del Estado que regularmente actuaban con impunidad. [...] Contrariamente a lo asentado en dicho in-

forme, la desaparición forzada de los agraviados es atribuible a servidores públicos que los privaron de su libertad y los sometieron a interrogatorios y, por otra parte, informaron públicamente que ‘habían muerto en un enfrentamiento,’ cuando que, de las evidencias se desprende que en dicho suceso sólo falleció una persona, sin dejar de lado que no hay constancia de la supuesta muerte, ni mucho menos de que las personas respecto de las cuales existen evidencias de su detención fueran liberadas posteriormente o puestas a disposición de autoridad ministerial alguna, como lo prevé el artículo 16 constitucional...”

Con palabras llanas y directas: los más de 40 capturados el 8 de septiembre de 1972 sufrieron homicidio a sangre fría.

Entre las principales conclusiones de la COMVERDAD, está la de “lograr que las autoridades asuman la desaparición forzada de cientos de personas, señalen su destino final y también reconozcan la violación a los derechos de las personas sobrevivientes de desaparición forzada. Para ello se requiere que dicho reconocimiento trascienda el ámbito local, dado que **el principal perpetrador de las violaciones a los derechos humanos en esa época fue el Ejército mexicano.**”

“El ejército en Guerrero: una historia de masacres”

Así tituló Kau Sirenio uno de sus textos, lo cual quiere decir que las fuerzas armadas verdeolivo reprimieron también antes, durante y después de la guerra sucia. “Masacres, persecución política y desapariciones forzadas son el sello de los gobiernos autoritarios que han llegado al estado de Guerrero”. Y en esta trayectoria, el Ejército ha sido partícipe en seis de nueve matanzas (seis; si es que al Ejército le tocó exterminar a los 44 guerrilleros que capturó luego de liberar al gobernador Figueroa).

En 1952, Miguel Enríquez Guzmán era el candidato presidencial opositor al PRI. “De acuerdo con Fernando Pineda, durante un mitin del candidato ocurrió una represión que dejó un saldo de varios muertos, heridos y detenidos. La masacre en la plaza de Chilpancingo de 1952 no registra los detalles, ni a los muertos, pero fue la primera masacre en que intervinieron elementos del Ejército mexicano, y el punto inicial de la violencia política en Guerrero.”

En octubre de 1960 dio comienzo un potente movimiento universitario por la autonomía de su institución educativa. “La protesta tomó fuerza en las calles y pronto se convirtió en un movimiento popular, que exigía la desaparición de poderes por las constantes represiones en contra de estudiantes, colonos y campesinos, cometidas por el general Raúl Caballero Aburto, que ordenó el despliegue de militares en las calles de Chilpancingo para re-

plegar a los colonos y universitarios que mantenían tomada las instalaciones del Colegio de Guerrero, así como la plaza de Chilpancingo.

“El 30 de diciembre de 1960, los militares dispararon en contra de la población civil que mantenía la protesta en el lugar conocido como Alameda Granados Maldonado. El resultado: 13 muertos, decenas de heridos y detenidos.

“A las 23:30 del día 29 de diciembre de 1962, miembros del Ejército mexicano y la policía judicial rodearon a las personas que se encontraban frente al palacio municipal de Iguala, para rendir homenaje a las 13 personas asesinadas en Chilpancingo durante el movimiento en contra el general Raúl Caballero Aburto.

Ese día, personal castrense ocupó los edificios de los ayuntamientos de Iguala y Teloloapan que estaban en poder de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG). Al no conseguir disolver la reunión, el Procurador de Justicia de Guerrero, José Bello y Bello, amenazó con recurrir a la fuerza pública. Los militares dispararon sus armas en contra de la población civil que se encontraba en la plaza pública de Iguala. El resultado: siete muertos, 23 heridos y 280 detenidos.

En la siguiente carnicería no participa el Ejército pero es necesario considerarla porque es la causa directa de que Lucio Cabañas haya organizado una guerrilla.

El 18 de mayo de 1967, el comité de la sociedad de padres de familia de la escuela primaria Juan N. Álvarez realiza un mitin frente a la escuela para pedir la destitución de la directora del plantel. A las diez y media de la mañana de ese día, el profesor Lucio Cabañas Barrientos habla ante el público. La policía judicial dispara en contra de la multitud. El resultado: 11 muertos y decenas de heridos. A partir de entonces, el profesor se refugia en la sierra de Guerrero y desde ahí funda el Partido de los Pobres.

Ese mismo año 1967 ocurrió la matanza de productores de coco, que pretendían democratizar su Unión, deshacerse de políticos que los esquilaban y pagar menos impuestos. Fueron atacados por gatilleros enviados por el gobernador Raymundo Abarca Alarcón. El resultado fue: 35 asesinados; 150 heridos; y decenas de detenidos acusados de disparar en contra de sus compañeros.

“El 28 de junio de 1995, integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) viajaban a Coyuca de Benítez para pedir que las autoridades cumplieran las promesas de entregar los insumos para el campo a los campesinos.

La mañana de aquel día aciago para los campesinos en El Vado de

Aguas Blanca los esperaban elementos de la policía estatal y de la judicial, que los bajaron a golpes de la camioneta y los obligaron a tirarse en el suelo. Lo mismo se aplicó con los pasajeros de la otra camioneta que venía atrás, minutos después los policías y judiciales dispararon hacia los campesinos durante 20 minutos. En el ataque, 17 campesinos fueron asesinados. El 25 de febrero de 1996 se difundió, en un programa de televisión, la videograbación no editada de la operación en Aguas Blancas, documental que probó que la operación en contra de los campesinos, fue con los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición.”

“El 7 de junio de 1998, elementos del Ejército Mexicano incursionaron en la comunidad Ñuu Savi, El Charco, municipio de Ayutla de los Libres. Los militares cercaron la escuela primaria, donde descansaban autoridades comunitarias que habían participado en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.

“En la madrugada de ese día, empezó el tiroteo hacia los campesinos que duró hasta las 10:55. De acuerdo con los sobrevivientes, el Ejército irrumpió disparando y lanzó dos granadas de fragmentación. En el ataque fueron asesinados 11 campesinos ñuu savi, cinco resultaron heridos y 25 detenidos. Entre los asambleístas se encontraban cinco menores de edad: el 9 de junio, cuatro fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo. El quinto quedó herido y fue trasladado al hospital naval donde estuvo internado un mes. “Más de tres mil indígenas ñuu savi de las comunidades de Piñal, Ocote Amarillo, Ayutla de los Libres y otras, quedaron bajo cerco militar.” (13)

Las degollinas de Aguas Blancas y El Charco ocurren después de la Guerra Sucia y las víctimas son campesinos e indígenas participantes en impetuosos procesos de lucha y organización. ¿Por qué son ellos los actores de estos hechos?, ¿Acaso no habían sido aplastados sangrientamente hacía treinta años?

El EZLN: la historia vuelve a girar

Hay un acontecimiento que cambia la historia del país. El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el primer día de 1994 desata una vigorosa onda de choque que se irradia a nivel nacional y más allá. En los estados próximos a Chiapas y con circunstancias económicas, políticas y sociales parecidas, como Guerrero, el impacto neozapatista es un mazazo. En 1996, en el primer aniversario del asesinato de 17 campesinos de la OCSS, aparece, desafiante, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que empieza a ganar simpatías populares. El Estado contrainsurgen-

te, que tenía aletargadas algunas de sus extremidades, las reactiva.

La batalla del combatiente Rafael

El 25 de octubre de 1996 el Ejército capturó en Zumpango del Río, Guerrero, al “combatiente Rafael”, guerrillero del EPR. Aunque el grupo armado denunció el hecho y apareció en la prensa, el Ejército no presentó al prisionero ante el Ministerio Público, como manda la Constitución. Es decir, “Rafael” había sido sometido a desaparición forzada. Sus captores lo denominaron “el experimento”, debido a que ya tenían años sin tener que desaparecer personas. Pero antes de ejecutarlo deben obtener la mayor información posible de su reo, así que lo torturan:

“Te quitaron la ropa. Te ataron a un potro. Estás vendado. Este es tu cuerpo bajo la luz eléctrica que tú no ves, en medio del cuarto. Te rodean. Hay quienes dan órdenes y quienes las cumplen. Un médico te revisa y aconseja a los hombres, quienes te aplican toques y te golpean. Actúan en conjunto. No es una escena improvisada y ellos no son novatos. Algunos hasta te presumen sus estudios en el extranjero como si de un posgrado en ingeniería se tratara: Guatemala, Fort Benning, Panamá. Se sienten orgullosos y, hay que reconocerlo, saben de su trabajo. *Son rigurosos, cumplen lo que te dicen.* Y en este momento te dicen que te van a dejar inválido, que te van a quebrar la columna, que te van a violar, que te van a sacar todo lo que guardas y que después te van a matar o quizá sólo te mutilen y te dejen ciego.”

El prisionero no canta. Y consigue huir novelescamente luego de cuatro meses en el infierno. En “Tzompaxtle, la fuga de un guerrillero”, John Gibler recoge la historia de “Rafael” o Andrés Tzompaxtle Tecpile, nativo de Astacinga, en la sierra de Zongolica del estado de Veracruz. El escritor norteamericano sumó más de treinta horas de entrevistas en las que el indígena veracruzano le contó su experiencia en las garras de los militares. Sus palabras las puso en cursivas.

En “Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808”, Francisco de Goya evoca al pueblo madrileño, que un día antes se había insurreccionado contra los invasores franceses. Era inapropiado pintar una escena así con los estilos en boga, el academicismo y el rococó, con colores cálidos y alegres, así que el asturiano abre paso a su “obra negra”: su paleta es oscura, salvo un potente rayo de luz que ilumina a uno de los ejecutados. Y aquí continúa la revolución pictórica: aparece el realismo en los rostros valientes, rabiosos o resignados de los condenados; es una nueva escuela sin la cual no tendríamos obras como el Guernica, el expresionismo alemán y el mismo

muralismo mexicano, especialmente a Orozco. Goya, además, al intuir los conceptos históricos aparecidos a mediados del siglo XIX, depositó en el colectivo anónimo el protagonismo. De acuerdo con Ana Ortiz Angulo, en *Los fusilamientos...* no aparece “el retrato del héroe ni la poderosa figura de un conquistador montando un brioso corcel; no, es la crueldad humana ante el vencido, la visión de la muerte sin esperanza, el dolor de la pérdida, simultánea, de la vida y de la patria. Es la tragedia elevada a categoría estética.” (14)

El combatiente Rafael es conducido por primera vez al potro de los tormentos:

Ellos trabajan con precisión y eficacia sobre tu cuerpo. Vienen preparados. Pero tú no. Hace unos minutos, por ejemplo, tú no sabías como se siente cuando el cerebro te estalla. No sabías que el dolor se concentra en el cerebro. Ellos no le piden nada a los instrumentos de tortura de la antigüedad. Son tan precisos, saben llegar al cerebro, quemarlo.

[...]

En tan sólo unos minutos tu cuerpo siente y vuelve a sentir más dolor del que muchos sienten en una vida entera. Y tú sin poder gritar. Tu cuerpo se contrae, tus huesos se contraen, y en cualquier instante todo estallará. El dolor y el miedo. ¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Aguantarás? ¿Te matarán? No hay manera de saberlo. Te llevan a una realidad que no es la que conoces. El riesgo es inmenso. Te encoge y no sólo es el hecho de que puedes morir, sino que te pueden reducir, te pueden cambiar. Te destapan la boca para que te rindas. Te dicen: ‘¡Ayúdate!’, Pero, ¿qué es ayúdate? Es la traición.”

Es el prolongado y desigual combate entre un modesto indígena y un Estado poderoso, prepotente y engreído. Es un episodio terrible de la lucha de clases. Es la batalla de cada jornada, minuto a minuto, de un ser aparentemente indefenso contra sus agresores, que los dos primeros meses lo sometieron a suplicios cada dos horas. Puntualmente.

Esa victoria de los que parecen débiles, está en la prosa erguida de John Gibler.

**

La sexta masacre en la que ha participado el Ejército en Guerrero es en la Noche de Iguala, tema principal del capítulo noveno y último.

FUENTES Y REFERENCIAS

1. Meyer, Jean, Movimientos sociales campesinos. Problemas campesinos y revueltas agrarias. Movimientos De 1828 a 1910. SEP Setentas, 1973.
2. CONADEP, Nunca más, Bs. As., UBA-Eudeba, 14 ed., oct. 1986, 490 páginas.
3. COMVERDAD, anexo 1, Informe final.
4. COMVERDAD, Op. Cit, págs. 22 y 23. <https://articulo19.org/informecomverdad/>.
5. Nava, Luis Daniel, Sedena se niega abrir archivos de la represión del Estado durante la Guerra Sucia, Proceso, 10/09/2023.
6. CONADEP, op. cit., p. 480.
7. Vicente Ovalle, Camilo, [Tiempo suspendido]. Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980, Bonilla Artigas, ed., 2019, págs.74-76.
8. Maza, Enrique, Obligado a Matar, fusilamiento de civiles en México, Proceso, citado por COMVERDAD.
9. COMVERDAD, Guerrero, octubre 2014.
10. CNDH, Recomendación 026/2001, Sobre los desaparecidos en años 70 y 80.
11. Díaz, Gloria Leticia, La 'foto del recuerdo' y al mar, Proceso, 1356, 17/10/2002.
12. FEMOSPP, Guerra sucia en Guerrero, Capítulo 6, pág. 88.
13. Kau Sirenio, "El ejército en Guerrero: una historia de masacres", Pie de página, 20/8/2023.
14. Ortiz Angulo, Ana, Goya, inventor del arte moderno, Pluma, revista marxista de política, arte y literatura, número 2, primavera de 2006.
15. Gibler, John, Tzompaxtle, la fuga de un guerrillero, Tusquets, 2019.

2012 - 2016: Pre insurrección en Guerrero, Oaxaca, Chiapas...

VI

Fueron años de crispación y de protesta a ratos muy radical en una vasta región del sur y Michoacán, que en ocasiones llegó a la Ciudad de México y a otras latitudes. En algunos lugares olió a Revolución, con miles de obreros agrícolas, campesinos e indígenas empuñando armas en combate contra torvos delincuentes. Aquí y allá, decenas de miles de maestros y padres de familia tomaron calles y enfrentaron fieramente a la policía y a veces al Ejército. El despertar llegó a capas privilegiadas, como los estudiantes de escuelas privadas del movimiento Yo soy 132. Después de largos años de quietud, los alumnos del Politécnico en la capital fueron a huelga.

Vamos a los años 2012 a 2016: en cuatro entidades federativas, las más pobres del país, se desataron protestas y multitudinarias manifestaciones que recordaron las que hubo en las décadas sesenta y setenta del siglo pasado. Estos años del naciente siglo XXI también evocaron esa época, en la que surgió la guerrilla de Lucio Cabañas, porque reapareció el EZLN, así como un nuevo fenómeno, parecido a las milicias: las autodefensas y policías comunitarias.

26 de agosto de 2013

Más de 30 mil maestros de Oaxaca se movilizaron a la Ciudad de México y con manifestaciones y métodos de algo parecido a una guerrilla urbana pusieron en jaque a los Gobiernos federal, del DF y al Poder Legislativo. [...] El gremio docente se movilizó como siempre, pagando cada uno sus gastos de transportación y viáticos y con la cooperación económica de los que no viajaron. Actuaron con la firme determinación de hacer cualquier cosa para

evitar la aprobación por el gobierno de Enrique Peña Nieto de leyes que les afectan; es decir, están dispuestos a pelear con la policía, a ser detenidos, a dormir en las calles, a mal comer, etcétera. También vinieron con su experiencia en lucha callejera, aprendida en 2006 en el levantamiento contra el gobierno del priista Ulises Ruiz. Estos maestros son capaces de atravesar en segundos un tráiler en medio de una calle para bloquearla; muchos traen pinzas para quitar vallas y usarlas para obstruir el paso de los caballos de los policías montados; los más saben hacer “invasiones hormiga” de edificios e instalaciones, con lo que evitan que la policía los detenga o reprima si van en masa; y muchos están dispuestos a entrar en combate con policías. La mayoría son mujeres. Las maestras saben hacer guerra psicológica contra los policías antimotines, a los que increpan y desafían al decirles que les van a repetir la medicina de 2006, cuando la Policía Federal enviada a Oaxaca perdió dos combates en las calles. En la toma de la Cámara de Diputados del lunes 20 de agosto la policía detuvo a algunos profesores pero tuvo que liberarlos porque los docentes tenían en rehenes a algunos genízaros.

El sector más disciplinado y que más se movilizó es el de educación bilingüe, los indígenas. Todos portan su equipo de campamento, con frazadas, alimentos típicos y anafres.

Un profesor oaxaqueño y miembro del Partido Obrero Socialista (POS) me dice que las autoridades “subestimaron a la sección magisterial 22, a la que veían en crisis”. Es cierto que esta sección sindical padece de la corrupción de sus principales dirigentes así como de su entreguismo ante el gobierno de Gabino Cué, del PRD. Muchos maestros caracterizan a sus líderes como vendidos e incompetentes. Pero a la hora decisiva miles se movilizaron y tienen en vilo a la “reforma educativa” de Peña Nieto. [...]

Por ahora, el gobierno está la defensiva y no se atreve a reprimir. [...] El secretario de Educación, Emilio Chuayffet, tiene más de una semana sin aparecer públicamente. Las cámaras legislativas tuvieron que sesionar, por primera vez en la historia, en auditorios alternos porque las sedes oficiales fueron rodeadas por los inconformes. Durante dos, tres o más días hubo caos en amplias zonas de la ciudad capital y los maestros boicotearon parcialmente al aeropuerto. (1)

18 de abril de 2013

Chilpancingo.- Al grito de “¡cuidado, cuidado, cuidado con Guerrero, estado, estado, estado guerrillero!”, la marcha partió a las 11 horas desde el plantón que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) mantiene fuera de sus instalaciones. A la movilización –una de las más grandes en la entidad, sólo superada por la del miércoles de

la semana pasada– se calcula que asistieron 120 mil personas.

A las 15 horas, unos mil integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) desmontaron dos puertas del acceso a la sala de sesiones, rompieron algunos vidrios de la biblioteca e impidieron la salida de los diputados o su ingreso al Congreso. Mientras, los contingentes bloqueaban totalmente la Autopista del Sol, a la altura del órgano legislativo.

A la protesta se unieron maestros de Oaxaca, Michoacán, Morelos, Puebla, Zacatecas, Chiapas y el Distrito Federal; asimismo, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, del movimiento #YoSoy132, trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero, del Colegio de Bachilleres, jubilados, normalistas, campesinos y unos 50 miembros de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso, quienes encabezaron la marcha. (2) Los maestros exigían que una ley educativa que ellos habían redactado fuese aprobada por el Congreso local, ley alternativa a la reforma de Peña Nieto, que lesiona la gratuidad de la educación y derechos laborales como la permanencia de los maestros en su puesto de trabajo.

Bloqueos a la Autopista fueron desalojados con mil 500 policías federales, comandados por Omar García Harfuch quien, al momento de escribir estas líneas, es senador de Morena y miembro distinguido del equipo de Claudia Sheinbaum.

19 de marzo de 2014

Habitantes del barrio El Fortín, municipio de Tixtla, entre ellos mujeres, niños, ancianos e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), respaldados por estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, repelieron la mañana de este miércoles la incursión de unos 500 policías federales, estatales y municipales que, apoyados por el Ejército, pretendieron catear casas en busca de armas y supuestos delincuentes.

Minutos antes de las 6 horas, policías y soldados ingresaron a El Fortín para aprehender a varios elementos de la CRAC-PC, pero sólo detuvieron a Aurora Molina (hermana de Gonzalo Molina, un líder comunitario), a quien llevaron al Centro de Readaptación Social.

Durante más de una hora los policías comunitarios, apoyados por ciudadanos de El Fortín y normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron con los policías, quienes dispararon gases lacrimógenos.

Por la tarde, unos 500 simpatizantes de la CRAC-PC se manifestaron en la cabecera municipal de Tixtla. Apedrearon la casa del alcalde perredista Gustavo Alcaraz Abarca, donde rompieron algunos vidrios y tres cámaras de circuito cerrado, y realizaron un mitin ante las instalaciones de la policía

municipal. (3)

22 de mayo del 2014

Álvaro Obregón, Ciudad de México.- Habitantes del poblado de San Bartolo Ameyalco, que se oponen a la introducción de una tubería de agua potable del Sistema Cutzamala, que se llevaría el líquido a zonas residenciales, hicieron sonar las campanas y armados con tubos, palos, piedras y bombas molotov trataron de impedir los trabajos. [...] Los inconformes retuvieron a varios uniformados, los cuales fueron rescatados por la tarde, tras un nuevo enfrentamiento. A lo largo del día, luego de horas de tensión, el lugar quedó rodeado por cerca de dos mil uniformados en medio de barricadas, fogatas y calles llenas de enormes piedras que fueron utilizadas como proyectiles. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal reportó alrededor de 50 policías lesionados, de los cuales dos se encuentran graves por traumatismo craneoencefálico, por lo que fueron trasladados en un helicóptero al hospital Mocel. Al menos 60 vecinos fueron atendidos en el Centro de Salud de la comunidad por heridas en la cabeza y golpes en diversas partes del cuerpo. (4)

13 de junio de 2016

Oaxaca. - Los gobernantes creyeron que al encarcelar a dos líderes de maestros atomizaría y desorganizaría al movimiento. Ha sido lo contrario: este lunes ha habido una jornada de protestas todavía más amplias, intensas y radicales. Los profesores de la Costa, de donde es oriundo el secretario general de la sección 22, encarcelado ayer domingo, decidieron bloquear durante tres días los accesos a esa región; el gobierno federal envió más camiones con policías desde la ciudad de México, pero las comunidades en distintos lugares les impidieron el paso.

Más padres de familia y gente del pueblo se incorporan a la lucha. En los puntos en donde se ha cortado el paso en las carreteras, miles de personas se concentran en defender las posiciones y existe un ambiente festivo y una moral muy alta. En el Istmo, hay música en los plantones.

De acuerdo con profesores oaxaqueños del POS, se empieza a vivir un ambiente parecido al de hace diez años, cuando se desató en este estado una insurrección. Mañana 14 de junio se cumple una década del comienzo del levantamiento. Ahora, como en 2006, los maestros levantan barricadas en las calles de la capital. Actualmente podría repetirse una insurrección, aunque ahora abarcaría más estados. Ya sabemos que Chiapas está en pie de lucha, lo mismo que Guerrero y al menos una parte de Michoacán. El día de

hoy los maestros de Tabasco, a pesar de que fueron víctimas hace unos días de un fuerte embate policial, tienen bloqueadas carreteras. En otros estados, aun del norte del país, empiezan manifestaciones de apoyo a la insurgencia magisterial. El movimiento, de ser sólo estatal en 2006 ahora podría abarcar una extensa región del país, el sur-sureste. Y más allá.

A pesar de ser el magisterial el movimiento más denigrado por los medios en la historia del país, suma apoyos entre el pueblo. Ya se anuncian manifestaciones de solidaridad en la capital. El pueblo que lucha hoy junto a los profesores no lo hace sólo contra la reforma educativa; además, se están juntando muchas razones para la participación popular. Una es la ira, la rabia contra el gobierno de Peña Nieto por la corrupción y el atropello inmisericorde y cotidiano de los derechos. Existe tal vez otra causa: el pueblo considera que si cae la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se desplomaría con ella la última valla actualmente existente contra las arbitrariedades de gobernantes, empresarios, políticos y delincuentes. Si la Coordinadora es derrotada, mañana las compañías mineras, petroleras, etcétera, podrán hacer lo que se les antoje en el país, no sólo saqueando los bienes naturales sino imponiendo todo lo que quieran. Si la CNTE pierde, pierde todo el pueblo. (5)

18 diciembre de 2013

En regiones de Guerrero existe un “levantamiento en armas contra la inseguridad”, dijo en conferencia de prensa Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, al presentar una Recomendación acerca de las policías comunitarias. Reprochó que en Guerrero existe “vacío de poder” y una grave situación de violencia. El ombudsman explicó que se han organizado policías comunitarias en más de la mitad del estado. El “Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero”, indica que están presentes en 46 de los 81 municipios.

En el documento se indica que esto ocurre en Guerrero “pero se replica cada vez con mayor frecuencia en otras entidades federativas.” Las razones, dice, son las “lamentables condiciones sociales que imperan en dicha entidad, provocadas por el abandono y la ausencia del ejercicio de las funciones de seguridad pública a cargo de los gobiernos estatal y municipales”.

En el Informe, se “destacan los relatos en los que las víctimas identifican a las autoridades como las responsables de la comisión de delitos graves como el secuestro, así como la crueldad y el alto grado de violencia con que fueron cometidos esos delitos en su contra”. Estas razones justificaron, por ejemplo, el levantamiento en armas contra la inseguridad que protagonizaron más de 800 personas el pasado 5 de enero, en el municipio de Ayutla,

Tecoanapa, Cruz Grande y Copala. “Tomaron las armas e instalaron retenes en la localidad de Ayutla con el objetivo de brindar seguridad a sus comunidades, bajo el argumento de luchar en contra de la delincuencia”, se lee en el numeral 23 del texto.

“Una gran parte de los pobladores refirió haber sido víctima de casos de colusión entre las autoridades y la delincuencia; en esos testimonios se demuestran ejemplos de participación conjunta en la comisión de delitos, así como la negativa de las primeras en llevar a cabo la investigación por los hechos denunciados.”

Además, la inseguridad ha generado el desplazamiento forzoso de los pobladores, teniendo hasta el momento documentados 2 mil 193 casos. (6)

Junio de 2016

“Chiapas está al borde del estallido social”, escribió Eliana Gilet, desde la Ciudad de México, para la conocida revista uruguaya Brecha, quien agregó que: desde hace tres años el magisterio mexicano resiste, fundamentalmente en los estados del sur, y sobre todo en Chiapas, a una reforma educativa ideada en conjunto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y una corporación empresarial, Mexicanos Primero, un grupo de cabildeo y de definición de políticas públicas promovido por algunos de los hombres más ricos del globo y Televisa. Ellos fueron quienes lideraron la criminalización del sindicato magisterial desde 2010, promoviendo una imagen del maestro “flojo”.

Gilet cita a Luis Hernández Navarro, articulista del diario La Jornada: “Dos maestros han sido asesinados, uno en Chiapas y otro en Guerrero, y hay más de diez en la cárcel. La SEP anunció que más de 5 mil serán despedidos. Necesitó desplegar miles de policías y militares cuando llamó a los maestros a que presentaran exámenes; mantuvo, literalmente, decenas de ciudades en estado de sitio”. El 15 de abril, un mes antes de que comenzara el paro magisterial, en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, y en San Cristóbal de las Casas, manifestantes fueron fumigados desde helicópteros con gases lacrimógenos. En San Cristóbal, 18 docentes fueron trasladados a un penal de máxima seguridad en otro estado, acusados de terrorismo.

Lo que está sucediendo en la diadema de estados del sur de México – Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán– es algo grande, apunta el cronista de La Jornada. “Se está convirtiendo en un conflicto magisterial popular. Los maestros tienen el apoyo de los padres de familia y están articulando mucho del descontento social existente. Para seguir con el ejemplo de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco se comprometió a hacer negocios con un sector de pequeños empresarios, que hicieron el trabajo y no les pagaron.

Protestaron y les echaron a la policía. Hoy esos empresarios en pequeño están apoyando a los maestros. En las movilizaciones de ese estado es manifiesto cómo reciben la solidaridad y el apoyo de manera masiva. La situación se está poniendo muy delicada, explosiva y puede terminar en situaciones muy dramáticas de confrontación y violencia.”

Febrero de 2012

*¿Escucharon?,
Es el sonido de su mundo derrumbándose.
Es el del nuestro resurgiendo
El día que fue el día, era noche.
Y noche será el día que será el día.*

Este es parte del comunicado que el día 21 de diciembre de 2012 emitió el Comité Clandestino Revolucionario Indígena y la Comandancia General del EZLN “desde las Montañas del Sureste Mexicano”.

A la par, en absoluto silencio una vasta columna conformada por más de 40 mil indígenas chiapanecos zapatistas -hombres, mujeres y niños- ocuparon pacíficamente, mientras llovía, las poblaciones de San Cristóbal, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, como lo habían hecho 18 años atrás, en 1994, cuándo le declararon la guerra al gobierno representado entonces por Carlos Salinas de Gortari, de funesta memoria.

La reaparición fue como una coreografía cuidadosamente planeada y ejecutada, rica en símbolos; con ese barroco indígena, chamánico, libertario, marxista, cosmopolita, lleno de alusiones cosmogónicas mayas y de imágenes poéticas universales, que es la manera tan suya en que se expresa este vasto y alucinante universo cultural anticapitalista mexicano que es el zapatismo.

La rebeldía revolucionaria del Sureste encarnada al modo indígena. Un mundo y un lenguaje como pergeñados en un ensueño, como si fuera un dibujo huichol o uno tzotzil primero ensoñado, obligatoriamente, para después ser plasmado en la vida cotidiana. Tal es la tradición cultural de los indígenas mexicanos.

Y se nota a leguas. Tal vez por eso el zapatismo chiapaneco está dotado de esa feracidad prodigiosa que asombra a todos, que da vértigo, que es como un borbotón creativo, interminable, de ideas nuevas; de formas organizativas inéditas que le han permitido no solo sobrevivir sino dar al mundo derroteros, rumbos, modos nuevos de organizar la rabia contra el capitalismo, siempre abusivo y depredador. (7)

Noviembre de 2015

El viernes 13 de noviembre el gremio magisterial de Chiapas llevó a cabo una “marcha histórica, nunca vista en el estado”. Más de cien mil se dieron cita en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Eran maestros de las secciones 7 y 40, del COBACH, preparatorias, universidades y de las escuelas Normales. “Estuvimos acompañados de nuestros aliados naturales, los padres de familia. Después de la marcha –nos dijo el maestro Carlos Vidal- nos instalamos en un plantón de 72 horas en ALERTA MAXIMA. Nuestro objetivo primordial fue boicotear las sedes en donde se aplicarían los exámenes, que servirían para despedir a los profesores que no los aprobaran.”

En Chiapas se desarrolla la organización popular. Los maestros de las secciones 7 y 40 se encuentran hermanados en una asamblea estatal permanente, se vislumbra el primer congreso de asociaciones de padres de familia y se proyecta formar el comité de estudiantes normalistas del estado.

La multitudinaria demostración de fuerza magisterial y popular fue ocultada por los medios nacionales, incluyendo La Jornada. Obviamente, la SEP tampoco se refirió a ella, aunque el que se haya visto obligada a postergar las evaluaciones en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero revela que acusó el golpe recibido.

En Chiapas, el magisterio sacó el músculo para decirle al gobierno federal y especialmente al gobernador, el Güero Velasco, del “Partido Verde”, que aquí la reforma educativa es letra muerta. Tal “reforma” quieren imponerla el Gobierno federal y los gobiernos estatales a sangre y fuego, porque está diseñada para lastimar, despedir, castigar y mandar a la calle a los profesores del país. Asunto por el cual “no estamos de acuerdo en aceptarla, y daremos la lucha con los diferentes referentes de lucha a nivel estatal y nacional asumiendo todos los riesgos de nuestra lucha, porque es justa y tenemos la razón.

“Nos queda claro que una evaluación, un examen, no puede medir las grandes carencias que los maestros viven a diario en sus escuelas, comunidades y con sus alumnos. El problema educativo no es solamente pedagógico, sino político, económico y social. No queremos una evaluación para despedir profesores.

La calidad educativa que quiere imponer el secretario de Educación Aurelio Nuño, va acompañada de despidos masivos, descuentos, militarización de los estados y cárcel para los docentes. (8)

7 de junio de 2015

En Juchitán, principal ciudad del Istmo de Tehuantepec, la población desa-

fió a las autoridades e impidió las votaciones el 7 de junio, en acuerdo con los estudiantes y sus familiares de Ayotzinapa, que convocaron al boicot electoral para exigir la aparición con vida de sus 43 compañeros desaparecidos hace pocos meses.

Todo empezó el 1° de junio, día del paro convocado por la CNTE para exigir la abrogación de la “reforma educativa” y la aparición de los 43. Desde meses atrás los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa habían exigido que no hubiese elecciones y se boicotearan, pues un país con desaparecidos no puede decir que tiene democracia. Su clamor encontró oídos en tierra zapoteca.

Además, la asamblea estatal magisterial acordó tomar las instalaciones de los 11 distritos electorales en Oaxaca y en Juchitán se realizó una nutrida marcha hacia la sede correspondiente. Aunque la oficina era custodiada por el Ejército, la puerta fue forzada por los manifestantes y el interior quedó devastado: documentos y demás materiales fueron incendiados. Había empezado el boicot electoral.

En otros lugares de Oaxaca, las gasolineras fueron bloqueadas. El gobierno federal dijo que actuaría con el objetivo de que las elecciones se realizaran. Envío al Ejército, Policía Federal, Marina y Gendarmería. El sábado 6 de Junio se dieron algunos enfrentamientos. En el Istmo, el distrito electoral de Tehuantepec fue recuperado por las fuerzas federales, pero los manifestantes se organizaron y recuperaron; en la refinería de Salina Cruz aún se mantenía el bloqueo; y en Juchitán la sede distrital en poder de manifestantes se reforzó. De igual manera, una comunidad que ha creado su administración comunitaria, Álvaro Obregón “Gui’xhi’ ro”, también se aprestaba a impedir la instalación de casillas electorales y en algunos municipios como Miahuatlán, Tlaxiaco, Huajuapán de León, Huatla de Jiménez, Salina Cruz y Tuxtepec maestros y pueblo resistían y en algunos colocaron barricadas.

El día esperado llegó: el 7 de Junio muchos vecinos y maestros asistían a la convocatoria. La ciudad ya contaba con gran presencia de fuerzas federales en el crucero, así como en la sede electoral. Una nutrida columna de profesores avanzaba sobre la avenida Venecia, donde se encontraba una casilla electoral que de inmediato fue incendiada. A una cuadra los maestros ubicaron una más, que tuvo el mismo destino. El Ejército se hizo presente. Los manifestantes avanzaban y superaban enormemente a las tropas y varias casillas más fueron incendiadas en la Octava Sección.

A la altura de las tiendas Soriana y Bodega Aurrera, vehículos del Ejército intentaron bloquear el paso a la marcha. Así se inició el primer enfrentamiento del día, aproximadamente a las 9:40 am. Militares, antimotines y maestros inician una lluvia de piedras. El vehículo donde venían los militares huyó.

La marcha continuó. A la altura de la terminal de autobuses, vehículos de las fuerzas federales estaban siendo atravesados para impedir el paso y la Gendarmería bloqueó el paso con escudos y toletes en mano. La avanzada de la marcha se hizo de palos y piedras y se dirigió hacia una casilla que había sido instalada en la Terminal de autobuses. Los gendarmes retrocedieron y retiraron sus vehículos. Al llegar a la Terminal las personas que ahí se encontraban comentaban que las fuerzas federales se habían llevado las urnas. En el cielo se veían avionetas de la Fuerza Aérea que volaban, intimidatorias, a baja altura.

Eran las 10 y media de la mañana y las personas que estaban en las casillas las entregaban a los manifestantes. Ya se había recibido el informe de que el dirigente magisterial de la Regional del Istmo, Heriberto Magariño, también líder del POS, había sido detenido junto con otras seis personas.

A las 2:35 pm llega la información de que la gendarmería y los militares venían en camino. Al escuchar esto las personas decidieron quedarse y resistir, se improvisó una barricada para que las fuerzas federales no avanzaran. Cinco minutos después llegaron los militares y gendarmes. Familiares de Heri Magariño pidieron apoyo de los colonos a través de las bocinas de los equipos de sonido que hay en los barrios. También la radio y algunas redes sociales difundían.

En el sitio del bloqueo, a las mujeres se les pedía que se resguardaran en otros lugares y algunas mujeres dijeron que se quedarían porque nunca dejarían a sus compañeros.

Al costado de la carretera vecinos comenzaban a organizarse. Camionetas, mototaxis, taxis y demás vehículos venían llegando con personas para apoyar a los manifestantes. Los que estaban a un lado del canal 33 levantaron barricadas y subía el humo de llantas incendiadas. Los soldados y gendarmes tuvieron que retirarse. Mientras, a lo lejos se veían vehículos militares que se acercaban, por lo que los manifestantes comenzaron a colocar piedras enormes en medio de la carretera. Se inició un nuevo enfrentamiento con los gendarmes y soldados, las piedras llovían, los soldados dispararon gases lacrimógenos y algunos cayeron dentro de casas de las colonias vecinas. A esta hora, la resistencia ya era más vecinal que magisterial, porque llegaron más personas a apoyar. El enfrentamiento continuaba a las 10 de la noche. Las piedras y cohetones se escuchaban todavía, se decía de varias personas detenidas por los soldados, los chavos hacían retroceder al Ejército y éste les disparaba gases y balas de goma.

Esa noche en Juchitán se sentía un ambiente tenso, las sirenas sonaban, policías estatales con ejército y policía federal patrullaban.

En la mayoría de urnas no hubo votaciones. (9)

Agosto de 2011

Al entrar a la meseta purépecha se siente el aire frío y miras los bosques, los lagos, la tranquilidad, la convivencia pacífica entre hombre y naturaleza; pero si miras a profundidad y ves los plantíos de aguacate donde debiera haber bosque, los caminos rodeados de basura, los montes rapados, los retenes, los militares apuntándote y las camionetas de lujo pasear desvergonzadamente, empiezas a sospechar que algo no está tan bien y que por ello aquella comunidad dijo: “ya no más” y se organizó. Un valor inmenso y una decisión impresionante hizo pie en la fuerza purépecha y los shikuamis salieron a luchar por lo suyo, a rescatar sus bosques y con ellos su vida.

A la entrada de Cherán una barricada de rocas, madera, autos quemados y hombres te impiden el paso hasta identificarte y revisar tu auto.

Tras pasar la barricada la vida del lugar pudiera parecer la de un pueblo normal, con gente transitando en auto o caminando, niños jugando en la calle y locales abiertos ofreciendo sus productos. Pero al caer la noche los shikuamis salen y encienden fogatas. En cada cuadra hay una fogata donde las familias comparten alimentos y conviven. En algunas la gente conformó con trozos de árboles hermosas sillitas, otros con tablones han improvisado mesas y los más aventados han instalado pabellones de madera.

Las mujeres salen a preparar de comer para todas las familias de la cuadra. Pudiera ser que sólo se prepare té o atole acompañado de tortillas de harina o que se haga un guiso muy elaborado, el fin es que alcance para todos y que si pasa algún conocido o algún visitante se les pueda invitar un vasito o un taquito.

Las pláticas son variadas y sirven para consolidar acuerdos y acrecentar los lazos de unión. Ante el fuego la vida del pueblo recobra fuerza, pues tras cada película o partido frente a la televisión que un vecino sacó para compartir, crece el lazo de camaradería; y frente a cada altar se escucha el rezo en el rosario diario.

Cuando termina la cena y las mujeres terminan con su labor de género, viene el turno de los hombres quienes pernoctan en el lugar y cuidan el espacio previendo la posible entrada de “los malos”.

Hay otros dos grupos que han decidido dar sus noches por la lucha, aquellos que cuidan la barricada, quienes con sus sentidos bien abiertos están pendientes de cualquier cambio en la noche oscura y deben mantener informada a la comunidad mediante claves bien establecidas; y la *ronda comunitaria*, quienes caminan por todas las calles de la comunidad y con la pregunta de “¿todo bien?” recorren fogata tras fogata brindando la seguridad que durante tanto tiempo no se había sentido en esta comunidad, la seguridad que el crimen organizado les había robado y que ahora el pueblo organizado recupera. (10)

Diciembre 2013 – enero 2014

En Michoacán, las autodefensas y policías comunitarias, provenientes de 15 municipios, actuaron unidas, casi como un mismo ejército popular compacto lanzado contra los delincuentes. Era tan grande el territorio controlado por La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios que el pueblo en armas tuvo la necesidad de crear el Consejo de las Autodefensas de Michoacán. Nacidas en febrero de 2013, para diciembre ya habían expulsado a sus enemigos en 28 municipios. “Grupos de Autodefensa y Policías Comunitarios de Michoacán tomaron el control de Churumuco y su principal tenencia, Juntas de Porturo, según informó José Manuel Mireles Valverde, uno de los coordinadores de los grupos de Autodefensas y Policías Comunitarios de Michoacán. Las Juntas de Poturo, una comunidad de más de 100 viviendas, se convirtieron en el poblado 72 tomado por las autodefensas. De inmediato, fueron colocadas barricadas hechas con costales de arena y la gente se armó con lo que pudo: guadañas, palos, garrotes, machetes, escopetas, carabinas ‘de taco, con las que cazan güilotas, se colocaron playeras blancas e iniciaron guardias permanentes en los puntos de entrada a las poblaciones.” (11)

Menos de dos semanas después, esta fuerza armada popular se disponía a hacerse del control de poblaciones más grandes e importantes. “Los grupos de autodefensa avanzaron este sábado a dos comunidades más de esa entidad: El Ceñidor, y Zapotán. Hipólito Mora, líder de la organización comunitaria en La Ruana, sostuvo que el gobernador Fausto Vallejo en lugar de contener a las autodefensas, ‘debería hacerlo con quienes matan y abusan del pueblo, es decir, Los Caballeros Templarios, grupo delictivo que se aprovecha de los ciudadanos’. En entrevista para el diario *Cambio de Michoacán*, Mora señaló que los grupos avanzarán en municipios como Uruapan, Los Reyes, Apatzingán y Quiroga, donde los habitantes, aseguró, solicitaron la entrada de las autodefensas ante las extorsiones, abusos y cobro de piso de Los Caballeros Templarios.

Las acciones fueron propias de una guerra. “La Fiscalía michoacana dio a conocer que los hechos violentos registrados este viernes dejaron un saldo de 12 camiones de carga quemados, autobuses de pasajeros y autos calcinados en Parácuaro y Apatzingán.” (12)

“*Los Templarios* pasaron de las extorsiones generalizadas que venían realizando desde hacía años—como el cobro de impuestos criminales a la población civil—a intentar controlar la producción agrícola de una de las regiones limoneras más importante del país. Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en el primer poblado en “levantarse en armas”, lo narra así en un reportaje reciente en la revista *Nexus*: ‘Empezaron por apropiarse de ranchos limoneros, algunos a la mala, sin papeles, otros comprándolos

gracias al dinero de la droga y muchas veces al precio que ellos querían' (13)

Además, *Los Caballeros Templarios* secuestraron a mujeres y niñas para después violarlas. De acuerdo con el doctor José Manuel Mireles, líder de autodefensas, los delincuentes “empezaron a violar niñas de 11 y 12 años; nada más en mi secundaria en el mes de diciembre fueron violadas 14 niñas en el municipio de Tepalcaltepec, 6 de estas niñas eran del turno de la tarde de mi escuela.” (14)

La organización del Consejo de las Autodefensas de Michoacán, para derrotar la mafia conformada por altas autoridades gubernamentales y los cárteles de delincuentes, es una de las grandes proezas del pueblo mexicano. Con discreción, casi en la clandestinidad, en diversas comunidades “pequeños grupos de personas se reúnen y acuerdan el modo en que habrán de enfrentar a los ‘criminales’. Podemos establecer algunos rasgos generales del levantamiento: el trabajo en secreto, la compra de armas con recursos de los productores de la región y la incorporación masiva de los hombres a las filas de las autodefensas, una vez que la violencia de los grupos criminales se hizo insoportable.

“Ocho grupos de autodefensa surgieron entre febrero y junio de 2013. Su primera tarea fue ‘limpiar de criminales’ sus respectivos poblados y ciudades, y posteriormente, organizar columnas móviles con el fin de extenderse hacia otras comunidades. Acerca de este objetivo máximo, José Manuel Mireles declaró: ... nuestro objetivo es eliminar a todo el crimen y delincuencia organizada del estado de Michoacán y que quede claro no hablo de un cártel, no hablo de eliminar [sólo] a Los Caballeros Templarios, sino todo tipo de criminal, del cártel que sea, que quiera venir a apoderarse nuevamente de las vidas y productividad del estado de Michoacán”. El levantamiento operó bajo la forma del contagio: en ocasiones se produjeron enfrentamientos armados y en otras las bandas criminales simplemente abandonaron los pueblos en que operaban. Las columnas móviles ingresaban en las poblaciones ‘liberadas’ y organizaban una asamblea del pueblo en la que se discutía la situación, se daba a conocer la propuesta de las autodefensas y se invitaba a la población a crear sus propios grupos de autodefensa. Este último es un rasgo esencial para calificar estas acciones como ‘levantamiento’: en ruptura con la cultura paternalista de partidos y gobiernos, los alzados llamaron a la autorganización de la población.” (15)

La imbricación de intereses entre autoridades gubernamentales, mandos del Ejército y delincuentes fue la tónica. Jesús Reyna García, quien fuera secretario de gobierno y gobernador interino, tuvo que ser encarcelado por ser “socio y protector de los grupos criminales”, de acuerdo con Ornelas y Ramírez Gutiérrez. En cuanto al instituto armado, el doctor Mireles contó a la Agencia Subversiones que “Yo un día le pregunté a uno de los delincuen-

tes de Tepalcatepec: ‘¿cómo es posible que vengan cientos de operativos al año tras de ustedes y nunca agarren a uno?’ ¿Saben qué contestó? ‘Doctor, lo que usted no sabe es que el mismo que le manda el mensaje al general de la XXI zona militar en Morelia de que vengan a Tepalcatepec por nosotros, es el mismo que nos manda el mensaje a nosotros para que desocupemos Tepalcatepec’. ¿Qué quiere decir? Que hasta allá está el crimen organizado, hasta la Secretaría de la Defensa Nacional.”

Años horribles para los poderosos

La crisis se sintió en las alturas. “El estado de Guerrero está convulsionado, tenemos problemas de inseguridad, de empleo, de educación, problemas sociales, las organizaciones que se están manifestando, no sólo los de Ayotzinapa, son diferentes organizaciones”, alertó el diputado del PRI Cuauhtémoc Salgado. (16)

En 2016 el gobierno de Enrique Peña Nieto, al que le faltaba casi la mitad de su gestión, exhibía debilidad, marasmo, falta de rumbo. “Dos importantes medios internacionales: Financial Times y Bloomberg destacaron que este 2016 se ha convertido en un año ‘horrible’ para el presidente. En los primeros meses de su administración había prometido grandes avances con una serie de reformas que cambiarían el rumbo del país, pero no fue así. Ahora enfrenta severas críticas y baja popularidad”.

Para el Financial Times las reformas fallidas, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el escándalo de la llamada “casa blanca” de la Primera Dama Angélica Rivera Hurtado han provocado una drástica caída en los índices de popularidad del presidente, llevándolo a obtener sólo el 29 por ciento de aprobación en las encuestas. (17)

Una pequeña organización política marxista, aunque con militantes que le tomaban el pulso a la región mencionada, caracterizó que allí existía “un ambiente pre-insurreccional”. “Desde hace 20 años no cesan las insurrecciones en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. En 1994 fue el EZLN y en 2006, Oaxaca. A fines de 2012 reapareció el EZLN con cuatro enormes marchas. En 2013 hubo un auge de las policías comunitarias en Guerrero acompañado de intensas luchas magisteriales en este estado, en Oaxaca y en la mitad del país. Los primeros meses de 2013 tocó el turno a Michoacán con miles de personas organizadas y armadas en autodefensas. El Congreso del POS de junio de 2013 caracterizó una situación pre insurreccional en estos estados. **“Se está incubando un levantamiento popular e indígena”, afirmó esta asamblea, que explicó que:**

A partir de que Enrique Peña Nieto llegó al gobierno [2012] se ha

venido dando un vertiginoso incremento de las luchas y las protestas populares. Empezó la juventud, el movimiento Yo soy 132. Luego vinieron las tenaces y aguerridas manifestaciones de los maestros. Las policías comunitarias se extendieron por un tercio del país y sorprendieron por la eficacia mostrada contra los delincuentes. Menos espectaculares pero igualmente firmes fueron las comunidades campesinas contra las empresas mineras y eólicas.

El movimiento Yo Soy 132 encendió un espíritu rebelde entre la juventud y que estalló en Michoacán, cuando los normalistas indígenas de Tiripetío retuvieron casi 60 vehículos y a algunos funcionarios.

Las razones que atizan la lucha indígena y campesina son problemas estructurales del capitalismo, como la necesidad que éste tiene de explotar bárbaramente los recursos naturales del país; la falta de empleos, la carestía y la miseria; y la expansión de la burguesía delincuente y narcotraficante que se encuentra cada vez más imbricada con otros sectores de empresarios y con los políticos burgueses.

En estos meses ha existido un auge del movimiento magisterial. Aunque la lucha dista de ser nacional, la perseverancia y arrojo de los docentes ha sido una pesadilla para el gobierno federal, los gobiernos del PRD en Guerrero y Oaxaca, y el PRI en Michoacán.

Se está incubando una nueva insurrección, mucho más profunda y extendida a la que vivimos en 1994 con el EZLN. No decimos que ya va estallar, sólo que viene madurando. (18)

Cuando los de abajo no quieren y los de arriba no pueden

Un proceso insurreccional significa distintas e intensas manifestaciones de los de debajo que pueden desembocar en una revolución. El fenómeno en el que masas se ponen en movimiento y adquieren fervientes deseos de cambios fue cuidadosamente estudiado por los teóricos marxistas. Vladimir Ilich Lenin, en 1912, luego de analizar las revoluciones ocurridas en el siglo XIX y la de Rusia en 1905, concluyó que una “situación revolucionaria”, es cuando *“los ‘de abajo’ no quieren y los ‘de arriba’ no pueden seguir viviendo a la antigua.”* “Para la revolución no basta con que las masas explotadas y oprimidas tengan conciencia de la imposibilidad de seguir viviendo como viven y exijan cambios; para la revolución es necesario que los explotadores no puedan seguir gobernando” como lo hacen habitualmente. Se requiere, escribió Lenin, de “una agravación, superior a la habitual, de la miseria y las penalidades de las clases oprimidas; y de “una intensificación considerable, por las razones antes indicadas, de la actividad de las masas, que en tiempos

‘pacíficos’ se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas, tanto por la situación de crisis en conjunto *como por las alturas mismas*, a una acción histórica independiente.” (19)

Al estudiar la Revolución rusa de 1917, León Trotsky definió cuatro condiciones para que hubiera una situación revolucionaria: 1) La crisis total, económica y política de la burguesía y su Estado. 2) La *izquierdización* de la pequeña burguesía o clase media. La revolución sólo triunfa si el proletariado es apoyado por un sector masivo de la clase media, es decir, si la mayoría de la población quiere hacer la revolución. 3) La voluntad revolucionaria de la clase obrera y de las capas más pobres, que a veces ya han construido sus propias organizaciones para tomar el poder. 4) La existencia de un partido marxista que tenga influencia de masas, quiera tomar el poder y pelee con todo para hacerlo, junto a la clase trabajadora. (20)

Obviamente, no decimos que la situación mexicana de los años referidos fue igual a la de Rusia hace más de un siglo. Lo que queremos resaltar es que en una región del país se estaban conformando *algunas* de las condiciones que generan una *situación de insurgencia*, con amplios sectores en pobreza y miseria, enormes protestas, la creación de novedosas organizaciones populares, antagónicas del sistema político mexicano, como el EZLN y las policías comunitarias. También fue notable que se manifestaran de manera muy radical sectores de los pequeños y medianos propietarios, como en Michoacán, cuyas autodefensas fueron lideradas por prósperos agricultores de aguacate y limón.

A falta de mejor nombre, a esto le llamamos una situación pre insurreccional o una situación de insurgencia.

Durante los años 2012-2016 ocurrieron en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, sucesos que apuntaban a nuevas Oaxaca 2006. O pudo desatarse una *situación de insurgencia coordinada que incluyese simultáneamente a estos cuatro estados*. Cualquiera de estas perspectivas, con altas probabilidades de concretarse, debió haber prendido focos rojos y alarmado a la casta política.

**

Ante el poderoso empuje de los de abajo, en las cimas del poder hubo divisiones, entre aquellos que favorecían concesiones y los que exigían mano dura. Desde lo alto fueron ordenadas matanzas: entre ellas está la Noche de Iguala y Nochixtlán, Oaxaca, en 2016, con ocho pobladores asesinados. Regresó el Estado contrainsurgente. Volvió a actuar violentamente contra los que consideraba opositores peligrosos, como lo hizo en los años 1967-1978. El Estado de la clase capitalista que reprime violentamente y controla a las clases subalternas nunca se fue. Pero sí volvió en los años 2012-2016 con todos los recursos a su alcance para causar un daño duradero, aplastante,

necesariamente sangriento, contra los que se soliviantaban. Los gobernantes consideraron que existía una situación de insurgencia, así que respondieron con contrainsurgencia. Así de simple. Es casi una ley física: si hay insurgencia, aparece y actúa la contrainsurgencia, aunque en ocasiones ésta se adelanta y propina golpes preventivos.

FUENTES Y REFERENCIAS

1. Ruiz, Cuauhtémoc, *El Socialista*, xy/ 2013.
2. Ocampo Arista, Sergio, *La Jornada*, 19/04/2013.
3. Ocampo Arista, Sergio, *La Jornada*, 20/03/ 2014.
4. Sánchez, Mayela, *La lucha social en México: prohibido abrir la boca, SIN EMBARGO*, 07/07/2014.
5. Ruiz, Cuauhtémoc, *El magisterio resiste la represión: crece imbatible el movimiento*, *Carabina 30-30*, 13/06/2016.
6. “Hay doble discurso de Aguirre ante policías comunitarias”: CNDH, *El SUR*, 18/12/2013, *Noticia principal*.
7. Flores, Genaro, *La Reparación del EZLN*, *Pluma*, primavera 2012.
8. Pineda Morales, Carlos Vidal, *Chiapas: multitudinaria manifestación magisterial ocultada por los medios*, *Pluma*, no. 29.
9. *Colectivo Vientos de Liberación del Istmo, Crónica del boicot electoral del 7 de junio en Juchitán*, fragmentos, *Pluma*, invierno 2015.
10. Mares, Aideé, *Entre Shikuamis*, *Pluma* número 16, septiembre-octubre de 2011.
11. *Autodefensas controlan 28 municipios de Michoacán*, *Redacción, Proceso*, 29/12/2013.
12. *Autodefensas de Michoacán toman otros dos poblados*, *Redacción, Proceso*, 11/01/2014.
13. García Ponce, Omar y Lajous, Andrés, *¿Por qué tardaron tanto en levantarse las autodefensas?*, *Nexos*, 22/05/2014.
14. *Agencia Subversiones*, 2013.
15. Ornelas, Raúl y Ramírez Gutiérrez, Sandy E., *Los grupos de autodefensa en Michoacán*, *De Raíz Diversa*, vol. 4, núm. 7, enero-junio 2017, pp. 249-282.
16. Flores, Israel, “Guerrero está convulsionado”, *El Sur*, 23/12/ 2011.
17. *Sin Embargo*, 2016 es ya un año “horrible” para el Presidente por la desigualdad y la crisis social, 19/07/ 2016.
18. *Revista Pluma*, no. 22, verano de 2013, página 6.
19. “La bancarrota de la II Internacional”, *Obras Completas*, Tomo XXI, pág. 211, *Cartago*, Buenos Aires, 1960. Y *La enfermedad infantil del “izquierdismo”*, 1920. *Obras Completas*, Tomo XXXI, página 80, *Cartago*, Buenos Aires, 1960.)
20. Citado y comentado por Nahuel Moreno, *Las Revoluciones del siglo XX*, 1984, Ed. Antídoto, Buenos Aires, 1986.

500 presos políticos

VII

A la situación de insurgencia (o de pre insurgencia) el Estado contestó con todos los recursos en contra a su alcance, legales o no, lícitos e ilícitos. En Guerrero, predominó la violencia. En el siguiente capítulo veremos las más de 50 ejecuciones llevadas a cabo por el gobierno de este estado y una cantidad parecida de desapariciones (entre las que incluimos a los 43). Además, se recurrió profusamente a los encarcelamientos, casi siempre acompañados de torturas. En el país, en estos años de duros enfrentamientos hubo una cifra récord de prisioneros políticos, unos 500.

Encuentro un informe de enero de 2016 del POS sobre el tema:

Luego de la desaparición de los 43, el gobierno estuvo a la defensiva frente al potente y amplio movimiento que desató Ayotzinapa. Pero de unos meses para acá ha vuelto a endurecerse y ha encarcelado a muchas personas.

El gobierno federal y el de Michoacán (PRD) intentaron verse enérgicos ante los normalistas de ese estado. Encarcelaron inicialmente a 52, de los que 22 eran mujeres, y a las que tuvieron que liberar rápidamente. Posteriormente, luego de cerca de dos meses de reclusión, el 26 de enero fueron liberados 30 normalistas varones michoacanos. Los puso en libertad un movimiento estatal que recurrió a bloqueos de carreteras y otras acciones directas.

En el plano judicial el gobierno hace ver que no quiere liberar a los policías comunitarios, autodefensas, ni a otros luchadores sociales. Tanto el doctor Mireles como Nestora recibieron este mes reveses de los jueces. El mensaje para el pueblo es: el que se mete a comunitario o autodefensa terminará en la cárcel. Es que el gobierno observa que los sectores de la población que se arman para defenderse de delinquentes y gobernantes cómplices, permanecen y se expanden. Apenas este mes en Guerrero se organizaron dos nuevas y diferentes policías comunitarias, en distintos sitios, una de ellos en siete barrios

de Chilpancingo.

El gobierno ha extendido la represión al magisterio, como parte de su política para imponer la “reforma educativa”. En Chiapas asesinaron a un joven profesor, en diciembre de 2015, lo que no les sirvió para detener el enorme movimiento magisterial y popular, que estuvo en huelga cuatro días.

En Oaxaca hay cuatro profesores en la cárcel, recientemente encarcelados, y a otros líderes de este gremio les han girado órdenes de aprehensión, entre ellos a nuestros compañeros Heriberto Magariño y César de la Cruz.

Al FPR (Frente Popular Revolucionario) en Oaxaca le han encarcelado en estos meses a 28. En Michoacán podría haber entre 200-300 autodefensas presos. Y en Puebla hay más de 150 personas en la cárcel por activismo político. (1)

En el mes de octubre de 2013 el consejo de redacción de la revista Pluma resolvió denunciar el encarcelamiento de 13 policías comunitarios, entre ellos la comandanta Nestora Salgado. Camilo nos entregó este texto, luego publicado en contraportada:

Antes de convertirse en la Comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, la vida de Nestora Salgado García bien puede leerse como una variación del drama doble y recurrente de las mujeres proletarias de las zonas indígenas del sur del país. Casada a los dieciséis años, tiene su primer hijo a la misma edad con un hombre alcohólico que la golpea y la maltrata, a ella y a sus tres hijas. Un día, harta, decide irse al norte con sus hijas, donde trabaja todos los días de ocho a dos de la mañana, limpiando casas, cocinando, de mesera.

Casada por segunda vez en Estados Unidos, donde obtiene la ciudadanía, decide volver a México, pero en 2001 sufre un accidente y queda paralizada durante tres años, alejada de su esposo, que se queda en EU. Desde 2012, ya mejor de salud, empieza a formar parte de la guardia comunitaria que se organiza en Olinalá para repeler a los narcotraficantes, dedicados además a secuestrar pequeños comerciantes y asaltar taxistas.

Nestora rápidamente se convierte en la lideresa de la Policía Ciudadana, y los otros miembros, la mayoría hombres, se empiezan a referir a ella como «La Comandanta». La fuerza simbólica de Nestora, en tanto que mujer, en tanto que migrante proletaria repatriada, en tanto que originaria de una comunidad de orígenes negros y esclavos; en tanto que comandanta militar de un agrupamiento que por

su propia existencia pone en duda la necesidad del estado burgués, era algo demasiado peligroso para el régimen, y sus lacayos no tuvieron empacho en admitirlo así. El fiscal guerrerense y el secretario de Seguridad Pública justificaron su detención por la «peligrosidad» de Nestora, acusada de secuestro junto con otros miembros de la CRAC y retenida en el CERESO de Tepic.

El arresto de Nestora expresa el terror del gobierno ante el desarrollo radical del poder popular encarnado en las policías comunitarias. [...] Fue detenida a raíz de que la Policía Comunitaria (PC) que ella dirige decidiera arrestar, sin respetar su fuero, al síndico del pueblo, cercano al PRI y acusado de robar ganado.

Todos los niveles del gobierno, desde el gobernador perredista hasta la fiscalía y las Fuerzas Armadas están involucradas en esto: hace unos meses la PC de Olinalá estuvo a favor de que el Ejército entrara al pueblo para resguardarlo del crimen organizado, pero hoy queda claro que fue el comandante de la zona militar el que ha orquestado la campaña de desprestigio contra la PC, y la Marina misma se encargó de arrestarla. (2)

Una de las primeras reacciones ante estos encarcelamientos fue de los mismos policías comunitarios, que se movilaron por la libertad de sus colegas y, al hacerlo, fueron puestos tras las rejas. Así fue como también fueron enchiquerados Gonzalo Molina y Arturo Campos. En EU, José Luis Ávila, esposo de Nestora, “se paraba delante del edificio federal Henry M. Jackson ubicado en el centro de Seattle con fotos de su esposa”. Fred Hyde, “un juez jubilado de derecho administrativo, con Parkinson y miembro del Partido de la Libertad Socialista – (FSP por sus siglas en inglés)-, se reunió con Ávila cuando era manifestante solitario” (3) El FSP se puso en marcha por la libertad de Nestora. Este partido es la organización hermana del POS en los Estados Unidos y ambos forman parte de una coordinación internacional de revolucionarios (CRIR).

Al saber que el FSP se había activado, el POS decidió hacerlo también. En diciembre de 2013 dos militantes de este partido, Tomás Holguín e Ismael Ortega, luego de viajar en autobús toda la noche, tocaron muy temprano la puerta de la casa en Olinalá, Guerrero, de la familia Salgado. Los hermanos de la comandante los recibieron con algo de sorpresa y quizá de desconfianza. Que sepamos, nadie les había ofrecido apoyo. Les dieron de comer a sus inesperadas visitas y quedaron de avisarles si estaban dispuestos a que hicieran campaña. Al poco tiempo respondieron afirmativamente. Poco después circulaba profusamente el primer cartel por la libertad de Nestora, diseñado por Luana González.

A la formación del Comité Nestora Libre sólo asistieron los militantes del POS asignados a esta tarea y una persona más. Nestora era casi una desconocida aunque feministas como Marta Lamas empezaron a hablar de ella en tv. El Comité resolvió que también lucharía por los otros 12 policías presos de Guerrero y por los autodefensas michoacanos. El 21 de agosto de 2013 Nestora fue detenida junto con Eleuterio García, José Leobardo Maximino, Abad Francisco Ambrosio, Cano Morales, Bernardino García, Ángel García, Benito Morales, Florentino García y Rafael García. Samuel Ramírez, Arturo Campos y Gonzalo Molina fueron capturados días después.

El Comité por los presos se puso rápidamente en acción. Acudió a principios de 2014 al congreso de un sector de policías comunitarios celebrado en El Fortín, Tixtla, muy cerca de la escuela legendaria de Ayotzinapa. Allí conocimos a Agustina García de Jesús e Inocencia Honorato Vázquez, parejas de Arturo Campos y de Gonzalo Molina, respectivamente. Las entrevistamos aunque no permitieron que las fotografiáramos. Esa desconfianza se rompió con el tiempo y en su lugar creció la amistad así como con Cleotilde Salgado, hermana de Nestora, y con María de Jesús, esposa de Marco Antonio Suástegui. Fueron mujeres las que llevaron siempre la voz cantante en el Comité por la libertad de los presos. Mientras tanto, hicimos difusión de los comunitarios y conocimos a muchas personas de otros lugares que luchaban por otros presos.

La dirección del POS, en coordinación con el FSP de Estados Unidos y el resto de miembros del CRIR, decidió que era posible emprender acciones más audaces. Se acercaba el primer aniversario de la aprehensión de la mayoría de comunitarios, el 21 de agosto de 2014. El plan era llevar a cabo ese día actos en distintos países. Faltaba contar con el acuerdo de los familiares de los prisioneros, a los que no era fácil reunir, pues son de comunidades distantes entre sí. Logramos convocarlos en Tixtla, en la casa de Inocencia y de Gonzalo Molina, adonde llegaron también Cleotilde Salgado, desde Olinalá; Agustina, esposa de Arturo Campos, de Ayutla de los Libres, y otras personas. Yo acudí a esa reunión, pues estaba relativamente cerca, en Acapulco, puerto del que soy originario. El encuentro me recordó las asambleas en colonias populares del estado de México, en donde construimos en los años 80s una organización popular. La casa de Inocencia era pequeña, de una sola estancia, mal iluminada y modestísima; la mayoría de asistentes eran mujeres pobremente vestidas y allí, apretujados, nos pusimos a hablar de política y de defensa de derechos. Yo expuse el plan y método para el 21 de agosto, que fue aprobado con entusiasmo: por fin había metas y tareas. Y, sobre todo, una organización para luchar, el “Comité Nestora libre”. Esta reunión, que pareció insignificante, fue decisiva para el éxito de la campaña que, tras tres años de lucha, pondría a todos los de Guerrero en libertad.

En esta junta se aprobó el siguiente llamamiento:

¡Libertad a Nestora, Mireles y a todos los presos políticos!

El presidente ha llenado las cárceles de presos políticos. De unos meses para acá, han sido encarcelados unos 300 autodefensas en Michoacán; ya había 13 policías comunitarios presos en Guerrero y ahora están en prisión cuatro dirigentes populares que se oponen a la construcción de la presa La Parota; en Puebla y Morelos están reclusos aquellos que no desean la edificación de una termoeléctrica. En la capital del país hay presos políticos por protestar contra la asunción de Peña Nieto, en 2012. Y hay otros presos en Quintana Roo y otros estados.

También ha habido asesinatos políticos, como el de Galeano, un dirigente zapatista chiapaneco; y antes Rocío Mesino, dirigente campesina de Guerrero, y numerosos periodistas.

El gobierno ha lanzado una fuerte represión contra los autodefensas, comunitarios y contra todos aquellos que en el país se movilizan y luchan. Su objetivo es desalentar la necesaria y eficaz organización armada del pueblo y dar una señal a los inversionistas nacionales y extranjeros para que aprovechen las nuevas leyes que les permitirán saquear los recursos energéticos, mineros y hidráulicos.

Para el pueblo, es el momento de actuar. No podemos permitir un país con presos políticos. No podemos aceptar que los que luchan por sus derechos sean tratados como criminales. En cambio, el gobierno tolera a jefes de los cárteles que trafican droga y que cometen innumerables delitos, si no es que altos funcionarios gubernamentales son cómplices de las bandas criminales.

Se exhorta a los colectivos, personas y movimientos para coordinar un acto de confluencia social-popular en el que podamos juntos repudiar la ola represiva que se cierne sobre las autodefensas y policías comunitarias, así como de todos los activistas y luchadores sociales presos o en peligro de serlo.

Hacemos nuestra la iniciativa de que este 21 de agosto sea el Día Internacional por la libertad de todos los presos políticos. Ese día se cumplirá un año del injusto encarcelamiento de Nestora Salgado, la valiente mujer que encabezó a la policía comunitaria en Olinalá, Guerrero.

Ya se preparan protestas en otros países frente a los consulados y embajadas mexicanas: en EU, Australia, Brasil, Costa Rica, Dominicana, Reino Unido, Argentina, etcétera. En México, las policías

comunitarias organizadas en la Casa de Justicia, “La Patria es Primero”, están organizando ese día protestas en ese estado y en Distrito Federal. Lo mismo la Coordinadora de Ejidos, Comunidades y Organizaciones Opositoras a La Parota, así como autodefensas de Michoacán, las organizaciones defensoras de los presos en la capital del país, etcétera.

Mensaje de la comandante a las mujeres, en su día internacional

Los militantes del POS –mujeres y hombres- tuvieron la idea de escribir una carta a nombre de Nestora, que ella suscribiera cuando su hermana Clotilde se la leyera al visitarla en el penal de Nayarit. La misiva se publicó con éxito y dice así:

Me llamo Nestora Salgado, tengo 43 años, tres hijas y dos nietas. Estoy injustamente en la cárcel. Aunque estoy encerrada y mis captores quieren abatirme, me dirijo con optimismo y la frente en alto a las mujeres en su día internacional. Mi mensaje es que no se dejen, protesten y luchan si son humilladas en su trabajo, en su localidad o en su casa.

La vida para las mujeres en países como México es muy difícil, sobre todo si somos de familias campesinas y de pueblos como el mío en medio de las montañas de Guerrero, estado donde siempre ha habido mucha pobreza y falta de servicios. También siempre ha habido mucha corrupción y abusos de los gobernantes. Últimamente han aumentado los secuestros, los asesinatos y las extorsiones.

Siempre he trabajado para mantener a mis hijas. Tuve que emigrar muy joven a Estados Unidos, donde trabajé de muchas cosas, limpiando casas y cuidando niños ajenos. Por mi esfuerzo, adquirí la ciudadanía norteamericana.

Pero nunca olvidé mis raíces, a mis padres, hermanos y familia, a los que con frecuencia visitaba. No pude ser indiferente a lo que estaba pasando con mis vecinos y el pueblo de Olinalá. Los abusos de los delincuentes eran cosa de todos los días, ya no se podía vivir en paz, ya no podíamos salir de nuestras casas, no podíamos trabajar, viajar, poner un negocio, mandar con tranquilidad a nuestros hijos a las escuelas.

El pueblo se organizó y a mí me eligieron su representante. Soy la coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá. Al principio recibí apoyos y atenciones del gobierno. El mismo gobernador nos dio dos camionetas. Nos dieron un documento en el que nos reconocen como policías comunitarios.

Los comunitarios hicimos nuestro trabajo y lo hicimos bien. Com-

batimos a los delincuentes y a los que los ayudan. Tal vez por eso el gobierno terminó por agredirnos y a mí por capturarme, junto a otros 12 policías comunitarios de la CRAC de Guerrero. Fui capturada en medio de un despliegue militar y policial que no se los dedica el gobierno ni a los peores narcos. En unas horas estaba yo encerrada en Nayarit donde estoy como si fuera un animal peligroso. Sólo puedo ver cada dos semanas a una de mis hermanas y ahora a una de mis hijas. No puedo hablar con nadie, no veo ni tomo sol. No recibo medicamentos ni terapia para mis dolencias por un accidente. No puedo recibir revistas ni periódicos. Ni siquiera una carta de mi esposo o un dibujo de mis nietos. Sólo puedo hablar unos minutos por teléfono a la semana. Tengo prohibido ver televisión.

Pero no me quebrarán. De mi boca y de mi corazón sólo escucharán que salen palabras de aliento para todos aquellos y aquellas que, como yo, se deciden por hacer algo por sus pueblos y sus hijos.

Me dirijo a en especial a las mujeres. A las esposas y madres de los otros comunitarios presos les digo que debemos aguantar la fría prisión y que está más próximo de lo que creemos el día en que estaremos libres. A todas las mujeres les digo que no se dejen de nada ni de nadie, que no toleren al gobernante corrupto y amafiado, que no acepten la discriminación en ningún lado. Ni el maltrato.

Mis captores me agregan delitos y más delitos. Pero sé que finalmente saldré de prisión. Lo haré con la frente en alto. Proseguiré la lucha que inicié desde la policía comunitaria de Olinalá.

Adelante mujeres de México y del mundo. La historia enseña que cuando algo se gana es porque ha habido sacrificios. Estemos dispuestos a hacerlos. No tengamos miedo y sí voluntad de acabar con lo malo y los malos. Si así lo hacemos, a las mujeres nos espera un futuro mejor y luminoso.

Penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, a 7 de marzo de 2014.

El primer acto en México por la libertad de los comunitarios fue el 21 de agosto de 2014. El Comité programó una conferencia de prensa y un acto público en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México –UACM- que fueron un éxito de asistencia de prensa y de público. Asistieron unas 300 personas, 260 de las cuales estaban sentadas. Fue muy importante la asistencia de familiares de presos de otros estados. Llegaron representantes de los presos políticos de la Ciudad de México; Juan Manuel, ex preso de Aquila, Michoacán; de Oaxaca; y de la CECOP, de Guerrero, que tenía preso a su

vocero, Marco Suástegui. También asistió la hermana de Rocío Mesino, de Atoyac, ejecutada meses antes. Fue muy importante y solidaria la asistencia de la organización Francisco Villa Siglo XXI, en el Distrito Federal, y del sindicato de la UACM. También habló el rector de esta universidad, Hugo Aboites.

Los componentes del CRIR en Costa Rica, en la República Dominicana y en Australia, emprendieron la campaña y en las fechas clave de ésta tuvieron un excelente desempeño. Desde Brasil apoyó una militante socialista, Gleice de Oliveira, de Manaus, que atrajo a un grupo de feministas de otra ciudad, encabezadas por Concepción Amorim. En Argentina hubo ocasionalmente apoyo de la Tendencia Piquetera y muy en firme de la organización que actualmente se llama Partido de la Libertad Socialista; también apoyó el escritor Tomi Mori, desde Japón, y otros más desde otros países.

Gonzalo Molina

Llegué el domingo 10 de abril de 2015 a las ocho y media de la mañana a Chilpancingo, en cuya prisión están Gonzalo Molina y Samuel Ramírez, presos políticos por ser policías comunitarios. Como es muy temprano para ingresar al penal, visité el mercado, que a esas horas ya estaba a reventar. Esta ciudad no es de las más bonitas, pero su mercado es enorme y vivaz, un laborioso y colorido panel, construido en una loma, por lo que hay que subir y subir escaleras. Se celebra una misa al aire libre en memoria del líder de los locatarios, Juan Serrano Moreno, asesinado hace menos de una semana. Estuve aquí hace unos días, poco antes de su muerte y leí una manta en la que increpaba duramente al presidente municipal. Esto es hoy Guerrero, tierra de crímenes políticos auspiciados desde el aparato estatal, por los empresarios y los delincuentes.

En un puesto ambulante pregunto por una especie de guanábana, aunque pantagruélica. No soy el único que desconocía la yaca: a una señora le dan a probar y yo aprovecho para saborearla, es exquisita. Como es enorme, la venden en pedazos.

Busco *El Sur de Guerrero*, diario que un día antes me pidió Gonzalo. Es que este preso es una persona muy informada y activa. Las rejas no le impiden participar en mítines a los que hace llegar mensajes y muchas veces su misma voz. Frecuentemente es entrevistado en programas de radio.

Molina, de 51 años, no tenía cargo de comandante en la policía comunitaria, aunque el gobierno lo identificó como uno de sus principales líderes y promotores. Junto con Nestora Salgado y Arturo Campos, luego de ser capturados fueron enviados al destierro, a cárceles de alta seguridad lejos de

sus casas, a otros estados, donde era prácticamente imposible que los visitaran sus familiares, lo que sólo podían hacer cada 13 días. Gonzalo estuvo seis meses en el penal de Miahuatlán, Oaxaca, clasificado como de mediana seguridad aunque es tan o más severo y cruel que el de Nayarit. Desde que llegó fue confinado en el área de castigados, aislado en una pequeña celda que tenía apenas una ventanita por la que le daban alimento: poca comida y sin sal, y, de “plato fuerte”, mortadela cocida en agua. Ausencia, su esposa, lo que más recuerda es la piel del reo: “por falta de sol se le puso blanca y delgada, frágil, si uno lo tocaba con un poco de fuerza lo podía herir.”

Se las arreglaba para conversar con los prisioneros vecinos, con quienes se comunicaba a gritos, acostado, con la boca bajo la puerta, para que su voz pudiese salir de la mazmorra. Lo primero que hizo fue convencerlos de que no era un “capo”: el impresionante despliegue policial para llevarlo a la celda hizo pensar que se trataba de un peligroso delincuente. El psicólogo que le asignaron le confesó que, la primera vez que lo visitó, esperaba enfrentarse con una persona temible, pues entre los muchos cargos que le imputaron está el de ser terrorista.

Molina González es una persona amable y de fácil palabra. En esta prisión ha organizado, junto con Samuel, lo que llama una “escuelita”, en la que los reos pueden solicitar libros y revistas. Samuel –presente en la entrevista, de 20 años– se encarga de los préstamos de publicaciones. Allí está *La náusea*, el *Retrato de un artista adolescente*, la revista *Pluma...* Gonzalo organizó también dos talleres de pintura, pues este hombre pinta cuadros al óleo que trata de vender para pagarle a su abogado. Me lleva a conocer un mural que pintaron Nicolás –un sobresaliente artista plástico náhuatl que lo visitó–, Samuel y él mismo. La obra está en dos paredes que el director del penal les autorizó pintar. El mural contiene elementos simbólicos: hace una exaltación del conocimiento y de la necesidad de que se lo apropien los trabajadores; en otra parte un hombre caído se levanta: representa la mayor cualidad del ser humano, la voluntad, según me enseñó Nora Ciapponi.

Gonzalo es el tercero de 12 hermanos. Llegó a estudiar preparatoria. No pudo ir a la universidad por falta de medios. Cuándo le pregunto qué le hubiese gustado estudiar, no lo piensa y me contesta: filosofía.

Lo atrajo el PRD. En 1989 hubo una ola de ocupaciones de palacios municipales por fraudes electorales. Pronto entró en conflicto con este partido, que no lo apoyó en las denuncias que hacía contra el PRI. Se quedó sin partido al conocer las turbias negociaciones entre el PRD y el gobierno. Trabajaba en el ayuntamiento de trabajador de limpieza. Fue despedido. Eran los años 90.

Formó la organización social Vicente Guerrero. Promovió incontables mejoras en las comunidades y los barrios. Recolectaba basura, la separaba y

la vendía; crió codornices y marranos. Compró una camioneta. Su situación económica personal, dice, mejoró.

Todo parecía bien en su vida, que tenía dos hijos adolescentes. “Pero, entonces, el problema aparece”, me dice, y se refiere a la actuación desenfrenada de delincuentes que cometían secuestros, robos, cobro de “cuota de piso” a modestos vendedores. Su hijo fue secuestrado.

Llegó a la conclusión de que había que organizar policías comunitarias y se lanzó a hacerlo. Hoy está preso por ello. (4)

**

Nestora Salgado fue cambiada de penal, a uno en la Ciudad de México. Arturo Campos y Gonzalo Molina fueron trasladados a penales de Guerrero. Los que estaban en Acapulco están ahora en la cárcel de Ayutla, más cerca de sus familiares. Estos avances se deben a que en el mes de mayo y junio de 2015 se incrementaron las acciones para sacarlos de sus injustos cautiverios. Ya se preparaba una huelga de hambre de los familiares cuando supimos que Nestora había declarado una huelga de este tipo. A partir de entonces se desataron numerosas protestas y movilizaciones en México y allende las fronteras. Los de CECOP se aproximaron a tomar los pozos de Salsipuedes, que proveen de agua a Acapulco. Tomas de edificios, marchas y otras protestas se desplegaron desde el Distrito Federal.

Se incrementó la solidaridad en otros países. Destacó el apoyo desde Estados Unidos, encabezado por el FSP. Se sumaron muchos activistas a la campaña y el FSP consiguió el apoyo de sindicatos. Nestora llegó a las páginas del diario británico *The Guardian*, a otros muchos medios de otros países y a los más importantes de México. Los comités por Nestora en Estados Unidos enviaron una delegación a México que se mostró sumamente activa.

El optimismo por los logros en la liberación de las compañeras y compañeros presos no debe hacernos olvidar que siguen tras rejas y que las promesas de abrirlas pueden ser sólo eso. Sin embargo, tenemos derecho de decir que la bandera por la libertad de los presos políticos ha ganado en estos meses un lugar. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la ha colocado como una de sus enseñanzas más importantes. (5)

**

Juan Reséndiz y yo nos retrasamos para llegar a la conferencia de prensa porque fuimos a hacer unas copias del boletín recién redactado que daríamos a los periodistas. Los demás, familiares de los presos y otros compañeros se adelantaron en taxis que tomaron hacia las oficinas del CENCOS (Centro Nacional de Comunicación Social), en la calle de Medellín 33, en la colonia Roma, sede de la cita con los medios. Nervioso, llegué unos 10 minutos tarde e ingresé rápidamente al salón en el que se acostumbra este tipo de actos, en el que suponía ya estarían a lo mucho una docena de repor-

teros. Pero no había nadie. Era otro fracaso. Tal vez recordé lo que me dijo una amiga costarricense, asombrada ante mi “capacidad de frustración”. O lo que entre bromas y veras me dijo un ex funcionario electoral, que aseguró yo tenía un doctorado en derrotas. O tal vez no tuve tiempo de pensar nada de esto porque en ese instante alguien me dijo: “venga, lo estamos esperando, estamos en el jardín”. Cuando el personal de CENCOS advirtió que una multitud de periodistas estaba llegando, decidió que nuestra conferencia se hiciera en el patio de la vieja casona, en donde los camarógrafos instalaban equipos y los reporteros buscaban asiento. Días antes la señora Isabel Miranda de Wallace había acusado a los policías comunitarios de ser secuestradores y torturadores de las personas que capturaban y los medios esperaban que diéramos respuesta. Estábamos preparados. Desde Olinalá, junto con los familiares de Nestora llegaron dos personas que habían sido apresadas tiempo atrás por la policía ciudadana: ellos relataron su experiencia en la que siempre fueron tratados con respeto, se les dieron buenos alimentos y se les impuso como sanción y correctivo hacer trabajo comunitario que cumplieron con convicción. El método de hacer justicia por una comunidad mexicana por fuera de las instancias tradicionales recibió la atención y simpatía de los periodistas.

Las siguientes conferencias de prensa del Comité fueron también un éxito y estuvieron coordinadas por Aidé Tassinari, que manejó con habilidad los problemas que empezó a haber con las hijas de Nestora, ligadas al PRD, con sus abogados y otras personas. Los abogados no actuaban ya sólo como técnicos que se ocupan de las cuestiones jurídicas de los movimientos sino como líderes que pretendían tomar las principales decisiones. En una conferencia de prensa intentaron ser las estrellas, mientras que para el Comité Nestora libre los principales protagonistas tenían que ser los familiares de los presos, que eran mujeres.

Agustina

“Agustina García de Jesús toma el micrófono y sus palabras son como las piedras del rey David: cantos pequeños y filosos que se clavan en la frente. Cuando habla, Agustina pone al país ante un espejo en el que nadie quiere verse: el destino violento de ser mujer, indígena y pobre.”

Con el párrafo anterior Emiliano Ruiz Parra pintó a Agustina, pareja de Arturo Campos Herrera, policía comunitario preso en Guerrero de 2014 a 2017. Él y el fotógrafo Felipe Luna, fueron a entrevistarla a su casa en Ayutla de los Libres a fines de 2016.

El escritor escuchó a García de Jesús en el acto en la UACM, al que nos referimos antes, por la libertad de los presos políticos en agosto de 2014.

“Ha desfilado una decena de oradores pero Agustina es, sin duda, la más poderosa.” De Emiliano son los siguientes fragmentos:

Su español es imperfecto, salpicado de errores gramaticales. Lo aprendió hasta la adolescencia. Su lengua materna es el tu'un savi o mixteco. Desde Ayutla, en Guerrero, García de Jesús ha viajado más de ocho horas para reclamar la liberación de su esposo, Arturo Campos Herrera, quien era asesor de la CRAC, la organización que construyó la Policía Comunitaria (PC) en la Sierra Mixteca.

“No significa ser indígena quedar callados”, dice Agustina al borde del llanto. “Nos quitaban todo: violaciones, asaltos, homicidios. En nuestra zona, 98 homicidios en un año. Con la PC bajó esa situación en un 99 por ciento. Y este es el coraje del gobierno, que no puede con la delincuencia. Queremos libertad nuestro marido. Su delito es organizar a la gente.”

Arturo, su esposo, no sólo se opuso a la delincuencia. También a la tala clandestina y a los proyectos mineros. Hoy que escribo estas líneas, a fines de diciembre de 2016, Campos Herrera cumple tres años y 25 días preso sin sentencia.

El encarcelamiento de Arturo transformó la vida de Agustina. La convirtió en la portavoz de la causa de su liberación, en promotora de las PC e incluso anunció su intención de ser la candidata presidencial del EZLN en 2018.

“Yo tengo mi orgullo, mi principios, mi dignidad. ¿Hasta cuándo vamos a vivir torturados? Yo sigo luchando. Tengo seis hijos que mantener pero seguiré camino hasta que Dios me quite la vida. El miedo ya se pasó de moda, compañeros. No más miedo” dice Agustina casi al final de aquel discurso en la UACM.

Agustina le contó a Emiliano su vida de niña y joven: su padre los abandonó. Sólo estudió la primaria. No pudo seguir en la secundaria por falta de recursos. Trabajó de sirvienta en Acapulco y en Ayutla, recibió abusos y malos tratos, salarios minúsculos.

Se juntó con Arturo y acudían juntos a cursos de derechos humanos. “Mucho me gustaba ir a escuchar. No importaba caminar dos o tres horas para llegar donde va haber cursos.

“En ese tiempo entraban mucho los soldados y corríamos al monte porque intimidaban a la gente. Los soldados hicieron su campamento cerca del río. Muchas muchachas fueron violadas. Pero nunca nadie decía nada. Tenían mucho miedo a los soldados porque portaban sus armas. Hacían lo que ellos querían.

“Antes de que se formara la CRAC sufríamos muchos asaltos.

Tenía mucho coraje de los asaltantes porque violaban a las señoras.

“Arturo era taxista y lo asaltaron dos veces. Empezó a organizar una policía comunitaria y lo apoyé al 100 por ciento. Ahí fue cuando empieza con la CRAC. Para nosotros la CRAC es sagrado.. Hasta a mí me agarraba la loquera: voy contigo a las comunidades, quiero escuchar, le decía. Mucho me gustaba ponerme el uniforme y me daban un arma pequeña”.

Agustina vive en la colonia Nuevo Horizonte, a las afueras de Ayutla.

En su jardín ha cultivado diversas plantas, frutas y flores. La venta de plantas es sólo una manera de ganarse la vida. También prepara tamales, que sale a vender con alguna de sus hijas. Lava y plancha ajeno. Hace limpieza y trabajo doméstico. O se emplea en el duro oficio de chaponar: desyerbar terreno con machete.

Agustina tiene cinco hijas mujeres y un hijo varón. Son su sostén emocional cuando le dicen te quiero y le soban la espalda cuando la derriban los dolores, pues padece de una enfermedad no identificada ya que no tiene dinero para hacerse estudios. Sus hijos son también –de manera indirecta- la causa de su sufrimiento más grande: porque a veces no contamos ni para pasajes.

Además del jardín de su casa, tiene un jardín simbólico de flores de rocío, cascadas, luceros y fuentes. Los nombres de sus hijas evocan la naturaleza. La primera, se llama Ita-yuyu, que en tu’ un savi significa flor de rocío.

A la segunda la llamó Nami: cascada. La tercera es Kimy, que significa lucero. Luego viene Aruro. A la quinta niña le puso Xavi, que significa lluvia.

La sexta es Ameyalli, en náhuatl, fuente de agua.

**

El fotógrafo Felipe Luna y yo estuvimos en Ayutla la tercera semana de noviembre de 2016 para elaborar este perfil de Agustina García. Una semana después volvimos a verla, pero ahora en la Ciudad de México. Agustina había citado a una conferencia de prensa. Quería ser la candidata presidencial del EZLN. La apoyaba, en principio, una antigua organización de izquierda, el POS, que había iniciado la campaña por la liberación de Arturo Campos y Nestora Salgado, escribió Emiliarno Ruiz.

Agustina denunció la represión a las policías comunitarias, dijo con orgullo que sus hijos eran buenos estudiantes y ofreció que si el EZLN elegía a otra aspirante, ella la apoyaría.

De blusa bordada, escapulario al cuello, pantalones de mezclilla, habló

en español con su acento mixteco y me pareció que no había perdido una pizca de la poderosa oratoria que le conocí dos años atrás cuando la escuché para exigir la libertad de su esposo. Al otro día, las noticias sobre Agustina estaban en *La Jornada*, en *Milenio* y en el portal *Animal Político*. Esa mañana ella misma presidió un mitin en Ayutla, a las puertas del penal donde estaba recluido Campos Herrera, que cumplía tres años en la cárcel. Era su primer mitin como precandidata presidencial.

La llamé el 24 diciembre de 2016 y me dijo que había declinado en su aspiración, escribió Ruiz Parra. Su salud se había agravado y ponerse de pie le implicaba demasiado esfuerzo. El POS retiró la precandidatura de Agustina por seguridad e indiferencia del EZLN. “Recibe constantemente llamadas de números que no hemos podido identificar. en las que la amenazan de asesinarla y secuestrarla, a ella y su familia.” (6)

Visita a los presos

El pasado fin de semana de este mes de septiembre de 2015 Aidé y yo fuimos a dos cárceles en Guerrero, a visitar a los comunitarios. Luego de un viaje desde la Ciudad de México de más de siete horas llegamos a Ayutla de los Libres, en dónde están Arturo Campos y seis más. De vuelta a México, el domingo visitamos a Gonzalo Molina, preso en Chilpancingo.

Arturo y Gonzalo son veteranos militantes de izquierda con muchos años de trayectoria que a fines de 2012 decidieron participar en la organización y expansión de las policías comunitarias. El resto de presos son compañeros jóvenes o muy jóvenes (con excepción de uno) que se lanzaron con valor y entusiasmo a participar como comunitarios. La mayoría son campesinos, todos leen y escriben, están más informados que la media. Los siete de Ayutla son indígenas y su lengua materna es el tu'ün savi. Hablan muy bien el español.

Nos recibieron muy amablemente y saben que hemos sido nosotros los que hemos coordinado la campaña por su libertad. Conocían la revista *Pluma* y estaban muy complacidos de ver sus fotos y nombres en ella. Ángel se comprometió a redactar semblanzas de cada uno. Comimos y conversamos animadamente. Se mostraron contentos al saber que los esfuerzos por su liberación se han extendido a otros países. Aunque algunos son muy jóvenes, todos están casados y tienen al menos un hijo. Eleuterio tiene tres. Nos pidieron revistas y libros. Algunos quieren leer sobre ciencias. Dentro del penal hacen artesanías. Mientras conversábamos Eleuterio tejó una hermosa bolsita que le obsequió a Aidé. Leen y platican alrededor de Arturo, que se ocupa de su formación. Nos contaron sus experiencias como comunitarios.

Se emocionaban cuando nos contaban sus acciones y hazañas. Bloquearon las rutas por donde los narcos pasaban drogas y convencieron a campesinos de no sembrar mariguana y amapola. (7)

Tercer viaje a Ayutla y Chilpancingo

El 3 de enero de 2016, en Ayutla, y el 5 del mismo mes, en Chilpancingo, estuvimos en las cárceles para visitar a los presos. En Ayutla Aidé, Robert (FSP) y Cuauhtémoc visitaron a los siete presos. Les llevaron juguetes o útiles escolares para sus 18 hijos menores de edad. Por su parte, el FSP envió una enorme maleta con hilos para que hagan artesanías. También les llevaron ropa y chaquiras. En Chilpo entraron a la cárcel Ismael y Robert. Y en la Ciudad de México hicieron dos intentos Aidé y Robert de visitar a Nestora y se los impidieron porque quieren detener la publicación de artículos sobre la comandanta (creyeron que Robert es periodista).

Durante la visita en Ayutla notamos diferencias entre los presos. Hay intrigas entre las esposas, cuyo blanco es Agustina. Nosotros llamamos dentro del penal a reunirnos con todos los presos. Tuvimos una entrevista con todos ellos que fue cordial y entusiasta.

Consideramos muy exitoso haber hecho estas visitas y más en compañía de un dirigente del FSP que vino también a colaborar con nuestro partido mexicano. El FSP también les dejó hilo a los dos presos que están en Chilpo y dejó tarjetas telefónicas para Nestora. (8)

Nestora Salgado se retira de la lucha

En agosto de 2016 fue dado a conocer un comunicado donde la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, se deslinda de Nestora Salgado, ex comandante de esta institución. El escrito también es firmado por familiares de la ex presa. Lo anterior es el episodio más reciente de un distanciamiento que comenzó desde que Nestora Salgado obtuvo su libertad el pasado 18 de marzo de 2016. El Partido Obrero Socialista expidió el siguiente comunicado:

El 20 de agosto 16 familiares de Nestora Salgado García emitieron un valiente pronunciamiento mediante el cual se deslindan de su repudiable comportamiento político de estos meses. Dado que el POS emprendió una vigorosa campaña por la libertad de la señora Nestora y de otros policías comunitarios, durante más de dos años, tomamos partido por estos familiares, con quienes nos fue grato colaborar estrechamente.

La confesa colaboración de Nestora con la llamada Casa de Jus-

ticia de San Luis Acatlán, guarida de pseudo policías comunitarios y en realidad ariete del entonces gobernador del PRD Ángel Aguirre y ahora del mandatario por el PRI, Héctor Astudillo, sería una razón suficiente para cesar todo trabajo común. La militancia de la señora Salgado García con la Casa mencionada será perjudicial para el movimiento comunitario y ya le hace el juego a sus peores enemigos.

Desgraciadamente, existen más razones, una de las cuales fue anotada por los mismos familiares Salgado y/o García: la fractura por parte de Nestora de la guardia comunitaria de Olinalá. Esta división de una organización popular sólo beneficiará a los enemigos del pueblo, al PRD y al PRI.

Son igualmente repudiables los métodos con los cuales Nestora se ha conducido en estos meses y de los cuales uno de los dirigentes del POS fue víctima. El uso de mentiras y hasta de calumnias también debe ser señalado para ser extirpado del movimiento popular y democrático.

La liberación de Nestora en marzo de este año y de otros seis policías comunitarios unas semanas después fue un gran triunfo de todos los que nos movilizamos por ellos y fue una victoria del pueblo mexicano. El POS reivindica su batalla por liberar a Nestora. Pero por ello mismo ahora es nuestra obligación denunciar enérgicamente lo que está haciendo la ex compañera, pues es una traición a la bandera comunitaria.

El POS continuará luchando hasta que sean liberados los compañeros Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez, policías comunitarios. Convocamos a continuar esta lucha y la que existe por la libertad de todos los presos políticos en el país, que podrían ser 500.

El Comité Ejecutivo del POS
22 de agosto de 2016.

Nestora Salgado quedó libre, no así los demás presos. Convertida en senadora de Morena, nunca les hizo llegar ninguna ayuda económica.

* * *

El reconocer que los comunitarios y autodefensas son parte del movimiento popular parece obvio, pero no lo es y tiene consecuencias. El EPR (Ejército Popular Revolucionario) considera que este fenómeno es una creación del Estado burgués. El Comité de los Hermanos Cerezo nunca reivindicó a Nestora ni a sus compañeros presos. El EZLN, que sepamos, no se ha definido

ni a favor ni en contra de los comunitarios. (9)

Heri Magariño

Todavía seguían en la cárcel tres policías comunitarios cuando recibimos la noticia de que un dirigente del POS había sido encarcelado. El 10 de mayo de 2016 fue detenido por la policía federal el profesor Heriberto Magariño, dirigente de la CNTE y representante de 13 mil maestros en el Istmo de Tehuantepec. Se le acusaba de cometer más de diez delitos federales, algunos tan absurdos y denigrantes como tentativa de homicidio y robo. Desde meses antes le habían girado siete órdenes de aprehensión. Congelaron su cuenta bancaria y lo orillaron a vivir en la clandestinidad. Su encarcelamiento se debió a su activismo en contra de la reforma educativa. Cinco días después de su aprehensión el magisterio oaxaqueño y el de otras entidades inició un paro indefinido contra este proyecto del gobierno. Los gobiernos estatal y federal se propusieron descarrilar tal protesta encarcelando a sus dirigentes pero les ha resultado contraproducente. Además, Peña Nieto nunca le perdonará a Magariño el haber movilizado en su contra, en el mes de febrero de este año, a unos 4 mil 500 docentes cuando se presentó en el Istmo de Tehuantepec a inaugurar una empresa eólica.

Magariño tiene casi 30 años de profesor. Comenzó dando clases muy lejos de su ciudad natal, Juchitán, en lugares de difícil acceso y a muchas horas de camino. Impartió clases en comunidades en las que se hablan lenguas distintas a su idioma materno, el zapoteca, y en otras con fuerte presencia del narco. Ha sido un maestro ejemplar. Es dirigente del Partido Obrero Socialista, organización en la que milita desde que era menor de edad. Magariño ya estuvo preso en junio de 2015. En ese momento, salió en libertad rápidamente gracias a la pronta movilización de la sección XXII y a la solidaridad de otras organizaciones. (10)

En cuanto Heriberto Magariño cayó preso, la dirección del POS se reunió y concluyó que su libertad dependía del destino del movimiento contra la reforma educativa. Si el movimiento era aplastado, Heriberto pasaría en la cárcel mucho tiempo, tal vez años, como ocurrió con los compañeros de Atenco. Si el movimiento conseguía parar al Gobierno federal, Heriberto podía correr con mejor suerte, como ocurrió.

Heri, en las dos grandes alzas en el movimiento oaxaqueño, la de 2013 y la del año 2016, tuvo una destacadísima participación. Capturado el 10 de mayo, 72 horas después ya contaba el partido con un póster con su fotografía del que se hicieron miles copias y que fue enviado inmediatamente a unas 20 ciudades. Este cartel fue nuestra más importante herramienta de campaña. La política fue unir la consigna de libertad a los presos de Gue-

rrero -Arturo Campos y Gonzalo Molina-, con la de Heriberto. Esto nos permitió que la exigencia de libertad de nuestro compañero maestro también llegara a Guerrero: en este estado se pegaron carteles en las ciudades de Chilpancingo, Tixtla, Ayutla y Olinalá.

96 horas después de la aprehensión de nuestro compañero, ya estaban en Chiapas Roberto de la Cruz, maestro en el Istmo, y Cuauhtémoc Ruiz. El 15 de mayo el magisterio chiapaneco hizo una marcha, con la que iniciaron un paro indefinido contra la política educativa. Era importante que la campaña por la libertad de Heri estuviera allí.

Sobre este acontecimiento escribió en esos días Roberto de la Cruz, maestro zapoteco presente en Chiapas:

Tuxtla Gutiérrez.- La marcha del 15 de mayo fue gigantesca: el diario El Heraldó estimó que tuvo una extensión de siete kilómetros. Los maestros en plantón ocupan muchas cuerdas del centro, entre ellas diez de la Avenida Central. Desde 2013 en Chiapas existe un alza de la lucha magisterial y popular. Hubo un paro triunfante de 87 días ese año. La sección 7 volvió a ser democratizada y está con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Otros sectores de la población también están en lucha: los padres de familia, estudiantes normalistas, trabajadores de la salud y otros. La manifestación congregó a profesores de todo el estado. Como Oaxaca, Chiapas también es muy grande y está formado por regiones, algunas muy distantes y de acceso intrincado. Llegaron maestras y maestros de Palenque, Soconusco, la región tojolobal, Copainalá, Bonampak, Los Altos, Ocosingo, Tapachula, San Cristóbal, la zona petrolera, la Fraylesca, Larráinzar, San Juan Chamula, Cintalapa, etc. También maestros de música y jubilados. El ánimo es alto. En un acto en el zócalo se decretó el comienzo del paro indefinido. Se aclaró que no vienen de paseo. Los maestros dijeron que están “vitaminados” y lucharán hasta triunfar.

Cuauhtémoc Ruiz y yo nos incorporamos a la marcha. Los profesores nos permitieron usar los aparatos de sonido conectados a automóviles. Informamos sobre la detención, cinco días antes, de Heri Magarino. Nuestras alocuciones se convirtieron en mítines relámpago que terminaron con aplausos. Muchos profesores se llevaron el cartel que demanda la libertad de nuestro compañero y de los policías comunitarios de Guerrero. La marcha tardó una hora en entrar al Zócalo, en donde se instaló un estrado. Habló Cuauhtémoc a la multitud luego de los dirigentes chiapanecos. Participamos más tarde en la asamblea

de la sección VII que difundió un resolutivo en solidaridad con los seis maestros prisioneros de Oaxaca.

Los días siguientes visitamos los campamentos instalados en el centro de Tuxtla de las delegaciones magisteriales. Encontramos una atenta recepción. Los profesores nos ofrecieron aguas frescas y los de Chiapa de Corzo, pozol, una deliciosa bebida de cacao con hielos. Muchos nos dieron monedas y algunos, billetes. Todos saben que solidaridad implica llevar la mano al bolsillo.

El cartel exigiendo la libertad de Heri llegó a muchas localidades de Chiapas, pues fue llevado y pegado por los mismos profesores. A cada delegación magisterial le dimos entre 20 a 50 carteles. Cuando esta herramienta se agotó hicimos copias fotostáticas. (11)

Se llevó a cabo una campaña en otros países y de firmas en internet. Se recogió dinero dentro del POS. Uno de sus dirigentes se trasladó con dos mil carteles a la ciudad de Oaxaca. Llegó un día antes de la marcha más concurrida habida en ese año, 2016. Los compañeros en esta ciudad, encabezados por Mario Martínez, desplegaron una gran actividad y pelearon en las asambleas del sindicato magisterial para que se involucrara en la libertad de todos los presos.

En el Istmo, Juan Magariño encabezó el plantón en el canal 33, lo que significó una actividad de casi todas las horas del día durante meses. Se convirtió en los hechos en el vocero de la campaña, recogió dinero y visitó al preso en el penal de Hermosillo, Sonora.

Por otra parte, hubo que apoyar a uno de nuestros simpatizantes herido por la policía en Nochixtlán. El hecho de que César Rivera había sido gravemente herido de bala el fatídico 14 de junio de 2016, exigió la atención de todos y sobre todo de nuestros compañeros en la ciudad de Oaxaca y sus alrededores, que nunca abandonaron al compañero y por el que hicieron una campaña especial. Los compañeros del Valle de Tehuacán y de Puebla viajaron a Nochixtlán y a la ciudad de Oaxaca a llevar apoyo. (12)

El Comité Nestora Libre incluyó expresamente a todos los presos políticos comunitarios de Guerrero. Contrario a esto un comité impulsado por el PRD, desde una posición seudo feminista, sólo pedía la libertad de Nestora. También el Comité abrazó a los autodefensas presos de Michoacán.

El Comité Nestora libre empleó un método democrático de trabajo. Citó a reuniones previas a los actos del día 21 de agosto de 2014 para decidir colectiva y democráticamente cómo serían estos. En la conferencia de prensa y en el mitin del 21 de agosto hablaron los representantes o familiares de presos presentes. Todos los que acudieron a las reuniones previas preparatorias (y aun algunos que no lo hicieron), tomaron la palabra.

Se trataba de preparar las condiciones para crear un gran comité por la libertad de todos los presos políticos que hay en el país. Ya vimos que el doctor Mireles rechazó nuestra propuesta de unir la lucha por la liberación de los comunitarios de Guerrero y las autodefensas de Michoacán. Posteriormente, una vez liberada Nestora y poco antes de su defeción, se llevó a cabo un encuentro en Olinalá al que llevamos esa propuesta. La idea era abrir una oficina, hacer un censo de los presos políticos en todo el país, tener un equipo de abogados defensores, etcétera. La iniciativa no prosperó.

FUENTES Y REFERENCIAS

1. POS, Movimiento por los presos políticos en México, Informe interno, 28/01/2016.
2. Pluma, invierno de 2013.
3. Seattle Times, 22.03.2016.
4. Ruiz, Cuauhtémoc, El Socialista, 2015.
5. Revista Pluma, no. 29.
6. Ruiz Parra, Emiliano, La travesía de Agustina García, Gatopardo, febrero de 2017.
7. C.R. 16/09/2015.
8. Holguín, Tomás, POS, Informe, 28/01/2016.
9. POS, 2016, documento interno.
10. El Socialista, no. 380, 06/ 2016.
11. El Socialista no. 380.
12. Balance de la campaña por la libertad de Heri Magariño, CE del POS, 13/01/2018.

El baño de sangre previo a Iguala

VIII

*Las fuerzas armadas mexicanas matan
con una eficiencia abrumadora,
apilan cuerpos a gran velocidad.
The New York Times, 26 de mayo de 2016.*

La Noche de Iguala no llegó de repente, sin anunciarse. El pueblo de Guerrero no fue tomado totalmente por sorpresa. Para decirlo con una frase original, Iguala no fue un rayo en un cielo risueño. Antes de esta descomunal represión hubo muchas más, igualmente crueles e infames. La celada del 26 de septiembre de 2014 fue sólo un salto en una cadena de asesinatos, desapariciones, encarcelamientos, terror y agresiones contra líderes de organizaciones populares. Iguala fue la operación represiva o contrainsurgente más grande y mortífera desde hace décadas, pero las que la precedieron la exceden en víctimas, aun si el recuento lo circunscribimos a los tres primeros años del gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero. La agresión a Ayotzinapa fue la mayor herida de una abundante hemorragia causada previamente a dirigentes populares, estudiantes y periodistas. **Fue la respuesta de las autoridades a la situación de pre insurgencia que ya se apreciaba desde 2011.**

Esta contraofensiva represiva por parte del Estado fue denominada una segunda guerra sucia por la Comisión de la Verdad de Guerrero⁹. Lo mismo dijo el Movimiento Social Indígena, como veremos. Quizás tienen razón. Como quiera que nombremos a este fenómeno el hecho es que el Estado derramó sangre como si fuese agua, desapareció a decenas y encarceló a cientos. El culmen de la obra de esta maquinaria violenta fueron los chicos de Ayotzinapa en 2014.

**

⁹ La COMVERDAD, que entregó su informe en octubre de 2014, denunció en este texto que el pueblo de Guerrero sufría en esos tiempos “la nueva guerra sucia de estos días que es hija de aquella guerra sucia impune”.

La represión fue selectiva y el modus operandi consistió en sicarios a pie, en motocicleta o automóvil que disparan a la cabeza de las víctimas. Frecuentemente el Ejército está cerca de la escena del crimen.

En los primeros 33 meses de gobierno de Ángel Aguirre, comenzado en abril de 2011, se contaron, al menos, los **asesinatos políticos** de:

11 periodistas: “Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de *Televisa*; Juan Daniel Martínez Gil, de Radiorama, Juan Francisco Rodríguez Ríos y su esposa María Elvia Hernández, de *El Sol de Acapulco*, y siete más”.

Javier Torres Cruz, de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPCC), el 18 de abril de 2011.

El **28 de mayo 2011** fue encontrado asesinado **Adrián Silva**. Entre los homicidas un testigo identificó a Chano Arreola y a la familia Bautista, a quienes vinculó con la tala ilegal de los bosques de la zona. Al activista lo acribillaron al menos 10 hombres. (1)

Isabel Ayala Nava y su hermana Reyna, el **3 de julio de 2011**. Isabel fue pareja del legendario guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.

El 3 de septiembre de 2011 fue asesinado el campesino **Enrique Rodríguez Santana**, defensor de los bosques en la zona de la Tierra Caliente y primo hermano de Rubén Santana Alonso, dirigente de la OCEPCC, ultimado el 15 de febrero de este año. Unos 15 hombres armados irrumpieron en el poblado El Pescado, se dirigieron a la casa de Enrique Rodríguez, lo sacaron y lo ejecutaron ante sus parientes, que dijeron que caciques de la región y presuntos saqueadores de madera, encabezaban al grupo de pistoleros. (2)

Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, estudiantes normalistas acribillados en la carretera de Chilpancingo, el 12 de diciembre de 2011.

Daniel Castro Flores, Moisés Villanueva de la Luz, Juan García Mendoza, Paulino Villanueva de la Luz y Aristeo Díaz Bazán, del Comité Regional de Gestoría y Defensa Social de La Montaña, “asesinados entre 2009 y 2011.” (3)

María Edy Fabiola Osorio Bernaldez y una amiga que la visitaba en su domicilio. Encabezaba la ecologista Asociación Civil Guerreros Verdes. 31 de mayo de 2012.

El 25 de septiembre de 2012, **Juventina Villa**, lideresa de la OCEPCC, denunció que ocho de sus familiares fueron asesinados durante 2011 y 2012. “En la lista de muertos figuran **Rubén Santana Alonso, Damián Díaz Hernández, Catalina Pérez Duque, Celso Santana Villa, Jorge Salgado Salgado, Enrique Rodríguez Santana, Joel Santana Villa, Ascencio Villa Santana y Leonila Díaz Santos. Joaquín Pérez** fue herido de bala. La Procuraduría de Guerrero no ha resuelto uno solo de estos homicidios.” (4)

El 11 de noviembre de 2012, Juventina Villa Mojica, denunció que ese día fueron asesinados otros dos familiares, sus sobrinos **Celso Chávez Segura y Fortino Méndez Segura**. Responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, “quienes se han negado a atender las denuncias por amenazas de muerte contra habitantes de ese poblado”. La dirigente acusó a la gente que vive en “Los Ciuelos, encabezada por Marcelo Benítez Núñez, protegida por el Ejército Mexicano, el cual se encuentra apostado ahí pero no interviene, a pesar de que sabe lo que pasa”. (5)

Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez, de la Organización Unidad Popular de Iguala, el 3 de junio de 2013.

Rocío Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, el 19 de octubre de 2013.

El 16 de noviembre fueron asesinados **Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo**, dirigentes campesinos de la comunidad El Paraíso. “Es un crimen político que viene desde los grupos de poder en el gobierno, que están fuera de control”, le dijo al reportero una fuente del lugar, que no se identificó con su nombre. “Como ha pasado con otros luchadores sociales, la ejecución es la forma más fácil de deshacerse de ellos. Ellos eran los líderes de la comunidad, y son los que movían todo”. Las víctimas, añadió, habían convocado justamente este domingo por la mañana a los pobladores de El Paraíso, donde se anunciaría la creación de una policía comunitaria de cien elementos. (6)

Juventina Villa y su hijo de diez años, Reynaldo Santana, de OCESPCC. 28 de Noviembre de 2013. Distintos medios de prensa dan cuenta que el total de asesinatos sufridos por la OCESPCC fue de 27 y 3 desapariciones¹⁰.

En este lapso se cometieron las **desapariciones forzadas** de:

Eva Alarcón y Marcial Bautista, líderes de la OCESPCC, en diciembre de 2011. Y de otros tres miembros de la OCESPCC, ligados a Juventina Villa.

El activista mixteco de 25 años, **Longino Vicente Morales**, que trabajaba para el diputado del PRD Jorge Salgado Parra. Junio de 2012. (7)

En cuanto a los encarcelados, lo estuvo el líder indígena **Maximino García Catarino**, miembro de la Organización para el Futuro de los Pueblos **Mixtecos (OFPM)**. Enero del 2012.

¹⁰ Entre agosto y noviembre de este año ocurren los asesinatos de Raymundo Velázquez Flores y Samuel Vargas, de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur-Emiliano Zapata; y de Luis Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatica, de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, acerca de los cuales tenemos información contrapuesta, que no tuvimos condiciones de verificar, por lo cual no los incluimos ahora en esta lista.

Los principales dirigentes del entonces explosivo movimiento de policías comunitarias, **Néstor Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y nueve más**, capturados en agosto y septiembre de 2013.

El vocero y dirigente del CECOP, **Marco Antonio Suástegui** y sus compañeros **Emilio Hernández Solís, Julio Ventura Ascensio, Maximino Solís Valeriano y María de la Luz Dorantes**. Ésta última, de 43 años, “enferma de cáncer, tiene cuatro hijos, no tiene esposo y vive muy modestamente.” El gobierno había girado órdenes de aprehensión contra 86 miembros del CECOP. Junio de 2014.

Hasta aquí, en el récord represivo del gobernador Aguirre, el gobierno federal, los militares y pistoleros de caciques, contamos 58 asesinatos (sin contar las de políticos del sistema) y seis desapariciones forzadas. Sabemos que no hay estadísticas en México sobre este fenómeno pero podemos decir que en estos tres años los represores vertieron sangre abundantemente y que es uno de los periodos de mayor represión política en el país, que tuvo por objetivo liquidar la situación de pre insurgencia o insurgencia popular que sacudía a Guerrero.

**

“Durante el gobierno de Aguirre Rivero, de acuerdo con sus colaboradores que no se citarán porque pidieron se reservara su identidad, las funciones de atender los conflictos políticos y sociales las tenía su sobrino Ernesto Aguirre, a quien lo identifican como su principal operador. Ellos mismos denunciaron que Ángel Aguirre operaba un equipo de espionaje que llamaban El Perro y que utilizaban para acechar a los dirigentes de organizaciones sociales, partidos políticos, periodistas, normalistas de Ayotzinapa y hasta a funcionarios del mismo gabinete estatal. La Fiscalía General de la República debería de llamar a Ernesto Aguirre para que informe del caso Ayotzinapa, pues, era él el que gobernaba la entidad, dice uno de los colaboradores de aquella administración.” (8)

En cuanto al programa Guerrero Seguro, instrumentado por el gobierno de la entidad, “aparece como un grupo para reprimir movimientos sociales, lo hizo contra la Policía Comunitaria y lo hizo contra Ayotzinapa [en la represión en Chilpancingo en 2011]”, según el director de Tlachinollan, Abel Barrera. (9)

Javier Torres Cruz

Apenas habían pasado 18 días de gobierno de Aguirre (abril de 2011) cuando ocurrió el asesinato de este joven campesino ecologista, que sufrió

agresiones desde el año 2007 cuando decidió declarar ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para señalar a los responsables del asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido, asesinada en el año 2001, a lo que ya nos hemos referido. “A raíz de esa declaración y de su férrea denuncia pública en contra de las atrocidades y violaciones cometidas por el narco-cacique Rogaciano Alva Álvarez, y de su labor como ecologista en la región, tanto fuerzas militares como civiles armados dirigieron una serie de ataques que concluyeron con su muerte”, de acuerdo con el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

El 13 de noviembre de 2008 la comunidad de La Morena sufrió un operativo militar al mando del mayor Rojas Arizmendi (o Rojas Méndez), quien al frente de unos 100 elementos del Batallón 19 de Infantería cateó casas en busca de los hermanos Javier, Felipe y Alejandro Torres Cruz. Los militares llegaron en ocho vehículos y colocaron tres vehículos armados apuntando a las casas. Iban acompañados por civiles armados del grupo de Rogaciano Alva Álvarez, ex alcalde por el PRI, en Petatlán. El 3 de diciembre del 2008 Javier fue detenido en un retén del Ejército, ubicado en San Luis La Loma. Los soldados vendaron sus ojos y en la noche lo entregaron a particulares, quienes lo torturaron e interrogaron acerca de la denuncia interpuesta en contra de Alba Álvarez. Lo llevaron a un lugar desconocido. Durante todo el tiempo permaneció vendado. El día 7 en la madrugada logró escapar. El 20 de diciembre acudieron a la comunidad La Morena una Misión de Observación y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero para documentar su situación. Un día después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó otorgarle medidas cautelares. Tales medidas nunca se hicieron efectivas. El 22 de enero se realizó otra visita de la Misión de Observación a la comunidad, porque su familia informó que había sido amenazado de muerte. Cinco días después Torres Cruz informó que desde el día 24 se encontraba en su comunidad un grupo de 25 soldados que había acampado a 200 metros de su casa. Las mujeres, el maestro y los niños no salían de sus hogares, por temor de que les hicieran algo. Los soldados se retiraron unos días después.

Durante el año 2009, por lo menos en seis ocasiones distintas, elementos del Ejército ingresaron a la comunidad, agredieron a sus familiares y los amenazaron de muerte. Estas incursiones fueron denunciadas puntualmente.

El 16 de febrero del 2010 un comando de más de 100 soldados del Ejército a bordo de vehículos Hummer y “Mercedes” ingresaron cerca de las comunidades de Rancho Nuevo y Las Humedades, donde algunos de los campesinos de La Morena tienen sus tierras de labor. Javier Torres Cruz y Narciso Torres Rosas manifestaron que los soldados llegaron disparando

contra las personas que se encontraban trabajando en sus parcelas. Hirieron a Isaías Torres Rosas y murió Adolfo, de los mismos apellidos. Fueron detenidos Anselmo Torres Quiroz (abuelo de Javier) y Húber Vega Correa, que fueron llevados al penal de Acapulco por presuntos delitos contra la salud, que les fueron fabricados por sus captores. Estos hechos se denunciaron ante el Ministerio Público Militar. Lo anterior fue constatado por una Misión de Observación Civil que el 17 de febrero del 2010 acudió a La Morena. El 7 de diciembre del 2010 alrededor de 35 efectivos militares a bordo de tres carros Hummer incursionaron otra vez en el mismo sitio, dispararon, provocaron pánico y allanaron las casas. El 18 de abril del 2011 fue asesinado el ecologista cuando transitaba por un paraje cercano a su comunidad, La Morena, municipio de Petatlán. Un grupo de sujetos armados lo atacó arteramente y a su hermano Felipe, quien resultó herido. Tenía 30 años, esposa e hijos. (10)

11 periodistas asesinados

En junio de 2011 el dirigente del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Salomón Cruz Gallardo, exigió al gobierno de Guerrero el cese del hostigamiento, amenazas, agresiones y asesinatos contra periodistas. Diputados del PRD, PRI y PAN: “se quejaron de los excesos en el trabajo periodístico y denostaron el trabajo de los reporteros. Sólo buscan malas noticias”, dijeron. El diputado Héctor Astudillo (quien posteriormente fue gobernador de este estado de 2015 a 2021) se quejó porque los reporteros “interpretan las palabras de los políticos y no las plasman como son dichas.” De acuerdo con estos legisladores, los periodistas se tenían bien merecido ser ejecutados por sus excesos, difundir noticias desagradables y malinterpretar a los políticos. Domingo Pérez Gallardo, secretario general del sindicato de periodistas, exigió justicia para los 11 periodistas asesinados. (11) Dos años después los representantes de periodistas, en ocasión del día de la libertad de expresión, volvieron a exigir respeto. Salomón Cruz Gallardo, del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa demandó al gobierno “el cese del hostigamiento, amenazas y agresiones contra periodistas”. Recordó agresiones padecidas por el reportero y el fotógrafo de la revista Proceso, Ezequiel Flores y José Luis de la Cruz, a manos de Marco Antonio Huerta Media, enlace de la PF en Chilpancingo.

Y la respuesta de los legisladores volvió a ser la misma, de reproche al trabajo de los periodistas: en una audiencia pública en la Cámara de Diputados los legisladores del PRD, PAN y PRI se quejaron “de los excesos en el ejercicio público” y denostaron el trabajo de los reporteros. Los acusaron

de tener simpatía por las organizaciones sociales.” En otro acto parecido, pero en Acapulco, los periodistas dijeron que “no hay nada qué festejar si no se aclaran los homicidios “ de sus compañeros de gremio. Enlistaron once casos de asesinatos en los años recientes. (12)

Radio Ñomndaa y Xochistlahuaca

El día 7 de julio de 2011 se reportó la presencia de efectivos de la 35 zona militar para asediar a la Radio Comunitaria de Xochistlahuaca, Guerrero. Dos jeeps y un camión con alrededor de 50 efectivos militares llegaron a la comunidad de Suljaa’ preguntando a los pobladores sobre la ubicación de la radio. Realizaron varios rondines en la periferia y entre las calles del barrio donde se ubicada la cabina de la radio nombrada *La palabra del agua*, *Radio Ñomndaa*, en amuzgo, que reinició transmisiones después de casi un mes de estar fuera del aire. Al medio día se realizó una asamblea en el pueblo. Los militares se retiraron de Xochistlahuaca más o menos a las 14 horas. (13)

El 21 de diciembre de 2011 llegaron al poblado de El Carmen, Xochistlahuaca, Guerrero, unos 50 soldados del 48 Batallón de Infantería. Luego de irrumpir en dos domicilios se llevaron 52 mil pesos, una cámara y un reloj. Lucina Salazar Ramírez declaró que entraron a su casa y torturaron a sus hijos, luego se llevaron a uno de ellos, Luis Maceda. El dinero provenía de la venta de un terreno. Los militares apagaron las luces de la cancha y de la comisaría, y patearon puertas. Iban cubiertos con pasamontañas. A Omar Maceda Salazar, de 23 años lo cachetearon y lo agarraron del cuello, y cuando les dijo que era estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero le dijeron: “tú eres uno de esos ayotzinapos que anda haciendo alboroto allá en Chilpancingo.” Después lo llevaron a una casa deshabitada en donde lo torturaron en una pileta con una bolsa de plástico en la cabeza.” Otro de los golpeados fue el estudiante del Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica, Donald Maceda Ramírez, de 21 años. Su padre dijo que lo tenían boca abajo y con un arma apuntándole en la cabeza. (14)

Movimiento Social Indígena de La Montaña

El 27 de diciembre de 2011 se llevó a cabo un singular acto en la colonia Cuba de Tlapa, organizado por el Movimiento Social Indígena de La Montaña, que surgió cuatro años antes para exigir que bajaran las tarifas de la energía eléctrica. En una de las regiones más pobres del país algunos vecinos recibían requerimientos de pago de la Comisión Federal de Electricidad de hasta 80 mil pesos por un bimestre de servicio. El Movimiento creció y simpatizó con los campesinos ecologistas representados por Eva Alarcón

y Marcial Bautista así como con los normalistas de Ayotzinapa. También con las luchas en contra de la entrada de empresas mineras que explotan los yacimientos de las comunidades. Una vecina y estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional leyó un Pronunciamiento: “han ocurrido crímenes que hasta la fecha no han sido castigados: la justicia está al servicio del mejor postor”, denunció. Evocó a Daniel Castro, fundador del Comité de Gestoría, asesinado en el 2009. Después al diputado Moisés Villanueva, victimado junto con su ayudante Eric Estrada. Rememoró a Juan García Mendoza, hijo de un dirigente de Malinaltepec afín al movimiento por la tarifa justa. Posteriormente fueron asesinados Moisés Villanueva de la Luz y Aristeo Díaz Bazán, maestros de Alcozauca abatidos en una emboscada. Calificó como inconcebible que en pleno siglo 21 “se reediten pasajes tristes de la guerra sucia”. “En un contexto de terror y persecución que se ha vertido sobre México, el Movimiento Social Indígena de La Montaña clama justicia total, imparcial, pronta y expedita, además de la reparación del daño a las familias de los compañeros asesinados.” El Comité entregó reconocimientos a personas destacadas en la lucha. Pidieron la aparición de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista y justicia para los jóvenes de Ayotzinapa. (15)

María Edy Fabiola Osorio Bernaldez

Era defensora de derechos humanos y ambientalista, integrante de la asociación civil Guerreros Verdes. Pagó con la vida oponerse a una obra impulsada por el gobierno del estado. Defendió la laguna de Coyuca de la obra Proyecto Muelle de Pie de la Cuesta, intentó detener la deforestación de los manglares y denunció una serie de violaciones a las normas ambientales cometidas a partir de la construcción de un muelle flotante en Pie de la Cuesta promovido por la Secretaría de Obras Públicas del Estado y ejecutada por la constructora Arnpol. En noviembre del 2011 cuando iniciaron las obras interpuso una denuncia por delitos ambientales en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En respuesta, inspectores de la Profepa colocaron sellos de clausura, pero cinco días después, la constructora continuó con las obras. La ambientalista denunció que la empresa había violado los sellos que colocaron los inspectores de Profepa, pero el delegado de esa dependencia, Joel Tacuba García, arguyó que la empresa había recurrido a un “allanamiento”, recurso legal en el que se deja una fianza y se compromete a realizar todos los trámites ante la Semarnat, sin suspender la obra.

El 31 de mayo del año 2012, María Edy Fabiola Osorio Bernaldez fue asesinada junto a una amiga, por dos sujetos armados que llegaron a su domicilio ubicado en un poblado de Pie de la Cuesta en la zona poniente del

puerto de Acapulco. Su cuerpo fue encontrado boca arriba en la cama con varios impactos de bala en la cabeza. (16)

Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle

Ya nos referimos brevemente a Eva Alarcón y a Marcial Bautista, desaparecidos el día 7 de diciembre de 2011, sólo cuatro días antes de la represión sufrida en Chilpancingo por los de Ayotzinapa. Eva y Marcial fueron capturados por policías y soldados. Sus captores usaron camionetas de lujo privadas, sin símbolos oficiales, vehículos muy parecidos a los usados para desaparecer estudiantes en Iguala tres años después.

Ellos tenían 15 años de activismo en defensa de los bosques de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. Diez años después del asesinato de Digna Ochoa, Eva y Marcial eran los líderes de la OCESPCC. Habían sustituido a Montiel y a Cabrera, que se habían exiliado al temer por su vida. A mediados del año 2011 denunciaron que recibieron amenazas provenientes de policías y militares. El 11 de agosto el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero solicitó a las autoridades estatales que les brindaran medidas de protección. Volvió a hacerlo el 5 de diciembre. No sirvió de nada. El día 7 de ese mes viajaban en un autobús Futura de pasajeros hacia la Ciudad de México, que fue detenido por un convoy de militares que preguntó por Bautista. Ningún pasajero contestó. Poco después, un segundo convoy de camionetas de lujo que iba escoltado por dos patrullas de la policía del estado instaló un retén, “en una acción de protección de los sicarios que vestían con trajes militares y portaban armas de grueso calibre.” (17) “Al parar el autobús subieron hombres que obligaron a bajar a Marcial Bautista. En ese momento, Eva Alarcón, que estaba sentada en la parte trasera, en un intento de evitar la detención de su compañero, dijo que ella también se bajaría del autobús y así lo hizo.” (18)

Entre los pasajeros que viajaban en el autobús hubo quienes identificaron que uno de los que los detuvieron fue el comandante de la Policía Ministerial, Cesáreo Espinoza Palma. El 15 de diciembre fueron interrogados 24 policías municipales y cuatro ministeriales que comprobaron la participación de dicho policía. Pero entre ellos no estaba Cesáreo Espinoza porque ese día pidió “permiso laboral” para no presentarse a trabajar y “hoy, 11 días después, sigue sin aparecer”, denunciaron las hijas de las víctimas, Coral Rojas Alarcón y Victoria Bautista Bueno. Luego de seis reuniones con diferentes autoridades, la Marina, el Ejército y la PF, no les dieron información sobre el paradero de sus padres. “¿Cómo es posible que no haya resultados?” –preguntaron. Eso quiere decir que las instituciones son muy débiles o que están coludidas.” Pidieron audiencia con el presidente Felipe Calderón y no

fueron atendidas. (19)

Frente Libre Hermenegildo Galeana

Cuatro días después de la desaparición forzada de Eva Alarcón y de Marcial Bautista, el 11 de diciembre de 2011, 17 niños, jóvenes y adultos de la comunidad de Cerro Verde, en la sierra de Tecpan de Galeana, fueron secuestrados por un grupo que llegó gritando que eran de la PF y del Ejército. Entre ellos iban dos con uniforme de la policía del estado. Estuvieron secuestrados nueve días. Los tuvieron vendados siempre. Los llevaron amarrados. El dirigente del Frente Libre Hermenegildo Galeana (FLHG), Ignacio Salto Villa, hermano de uno de los secuestrados, denunció el secuestro y declaró que recibió una llamada en la que para dejarlos en libertad le pidieron información sobre familiares y amigos de Marcial Bautista Valle, presidente de la OCESPCC. Después, cuando los 17 campesinos fueron liberados, en sus declaraciones dijeron que los secuestradores les preguntaban por Marcial Bautista, pero ellos dijeron que no lo conocen.

“Por eso, suponen que los secuestradores confundieron a los habitantes de Cerro Verde con campesinos vinculados a la organización de la sierra de Petatlán.” (20) El 14 de septiembre de 2010 fue desaparecido el líder del FLHG Víctor Ayala Tapia. Ese día, a las 10.30 de la mañana, en la comunidad de Papanoa, del municipio de Tecpan de Galeana, seis hombres armados con R15 y AK47 que se transportaban en una camioneta blanca Ford Lobo llegaron a su casa, lo subieron a la fuerza y se lo llevaron con rumbo a San Luis San Pedro. Refieren los testigos que aproximadamente a 100 metros del domicilio donde ocurrieron los hechos se encontraban circulando dos patrullas de la policía preventiva estatal. La organización FLHG es una organización similar a la OCESPCC que tomó durante dos horas el palacio municipal de Tecpan de Galeana el 14 de septiembre de 2009 para pedir que se aprobaran 13 proyectos productivos y obtuvieron la firma del presidente municipal Nadín Torralba. En abril de 2010 elementos de la Marina Armada de México encapuchados ingresaron en la comunidad de La Ola, golpearon a dos menores e hicieron cateos buscando armas y municiones. El FLHG denunció que elementos del Ejército los habían estado investigando. (21). Víctor Ayala Tapia nunca apareció.

Juventina Villa Mojica

¿Cómo calificar la Noche de Iguala, con seis asesinatos, un desollado, 43 desaparecidos, heridos, aterrorizados, y cuando la gran mayoría de las víctimas eran jóvenes de un promedio de 21 años? Entre los adjetivos está atroz

y sus sinónimos: aterrador, horrendo, cruel, inhumano, salvaje... Así son la mayoría de los casos que hemos relatado pero entre ellos destaca el de Juventina Villa Mojica, que nos enseña que sí existen grados de atrocidad y que puede medirse lo aterrador y monstruoso.

La represión habida en estos años contra los miembros de la OCESPCC, personificada en el asesinato de Juventina Villa en compañía de su hijo Reynaldo de 10 años, sobrecoge. Hablamos de 27 asesinatos, 12 de los cuales, cuando menos, eran de la familia de esta lideresa. Agreguemos cinco desapariciones forzadas y decenas de desplazados de la organización que representaba.

Villa Mojica reemplazó a Eva Alarcón y a Marcial Bautista en la dirección de la organización de campesinos ecologistas de Petatlán y de Coyuca (OCESPCC), desaparecidos en diciembre de 2011. Desde 1999 los dirigentes y otros miembros de esta organización han sido víctimas de asesinatos, desapariciones, prisión y exilio. Ya hemos contado que Digna Ochoa fue abogada de esta organización y que sus primeros líderes fueron encarcelados y al quedar en libertad optaron por salir del país, al temer por su vida.

Juventina y su hijo fueron asesinados el 28 de noviembre de 2012 en la comunidad La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, emboscados por un grupo de entre 30 y 40 hombres armados.

La persecución de paramilitares y sicarios en contra de la familia Santana Villa y los pobladores de La Laguna inició a raíz de que defendieron los bosques del ejido Los Huajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente. En la comunidad de La Laguna, de donde fue originaria la líder, desaparecieron a tres jóvenes en el 2005 y posteriormente mataron a 27 personas, hombres, mujeres y menores de edad. También ocurrió el desplazamiento forzoso de los habitantes. La activista responsabilizó de estos hechos a un grupo de narcotraficantes encabezados por José Rauda, Orbelín Hernández, Marcelo Benítez Núñez y Saqueo Peñaloza Castillo, quienes dirigen un grupo paramilitar denominado “Los Gachupines” que opera en los poblados de El Pescado, Hacienda de Dolores y Los Ciruelos en la Sierra Madre del Sur. Juventina **afirmó que este grupo delincencial estaba siendo protegido por el Ejército**, que mantenía un retén en las intermediaciones del poblado El Durazno, considerado un punto estratégico en el trasiego de drogas de la Sierra Madre del Sur y que conecta con la región de Tierra Caliente. La activista también acusó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de indolente y omiso.

«La defensora había señalado a los responsables de estos crímenes con nombre y apellido, y aseguró en su momento que **el ejército les daba protección**, por lo que en diversos medios locales, acusó al gobernador Ángel Aguirre Rivero, debido a que solicitó de manera reiterada protección oficial

para las 43 personas desplazadas por la narcoviolencia en la zona de la Sierra y nunca hubo respuesta», señaló la Red Nacional de comunicación y acción urgente de Defensoras de Derechos Humanos en México.

La ejecución de la líder campesina fue la culminación de una serie de asesinatos, entre los cuales está el de su esposo Rubén Santana Alonso, también dirigente de la OCESPCC. Poco después fue ejecutado Ascencio Villa Santana, otro integrante más de la agrupación mencionada –y familiar de las víctimas–, cuando se dirigía a la comunidad de La Laguna.

En ese contexto fue asesinado Javier Torres Cruz, también dirigente de la OCESPCC, como dijimos antes. Luego los asesinatos fueron en serie, si así se puede decir. Fueron ejecutados los hijos de Juventina, Sergio y Joel, de apellidos Santana Villa, y luego dos de sus sobrinos. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero informó que unos días antes del asesinato de Juventina emitió una recomendación a Martha Elba Garzón Bernal, procuradora general de Justicia del estado, por negligencia en la investigación de los asesinatos y amenazas contra las familias de La Laguna, Hacienda de Dolores y El Pescado.

Un mes antes de su asesinato, Juventina y algunos de sus familiares acudieron a Chilpancingo e interpusieron una queja contra la procuraduría estatal por actos de negligencia en hacer efectivo el acceso a la justicia. Dos semanas después, fue recibida por autoridades, y se trató el problema de inseguridad que se vive en La Laguna, el riesgo y las amenazas que habían recibido, y se solicitó a las autoridades apoyo para reubicar a los pobladores de esa comunidad. Se refugiarían del acoso al que habían estado sometidos por grupos paramilitares y talamontes. La líder decidió sacar de esa zona de muerte a numerosas familias, cuya vida peligraba. Inicialmente solicitó que fueran resguardadas en Chilpancingo o Iguala, pero el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado, desatendió la petición. Entonces la líder propuso algo más fácil de realizar, que unas 45 familias de La Laguna se desplazaran a un lugar más cercano, a la comunidad Puerto de las Ollas, en el mismo municipio.

El domingo 11 de noviembre, 17 días antes de su asesinato, fueron ejecutados dos de sus sobrinos en la misma zona, mientras ella recibía amenazas de muerte.

Humberto Salgado, accedió al desplazamiento y prometió enviar resguardo policial y solicitar la presencia militar para que los habitantes fueran trasladados a Puerto de las Ollas.

Juventina Villa contaba con medidas cautelares emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, entre ellas, la protección de policías estatales. La mañana de su asesinato, “un grupo de 30 policías estatales se había desplazado de la cabecera municipal de Coyuca de Catalán rumbo

al poblado de La Laguna con el propósito de resguardar a la activista y las familias desplazadas por la narcoviencia. No obstante, **el convoy policiaco llegó a destiempo a la zona:** un comando se adelantó y ejecutó a la activista y a su hijo, quienes eran resguardados por otra veintena de policías estatales”; informó el reportero de la revista Proceso. Explicó que el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, le notificó vía telefónica que Juventina Villa subió en una cuatrimoto a uno de los cerros aledaños a La Laguna para realizar una llamada vía teléfono celular, acompañada de dos de sus hijos, Reynaldo de 10 años y una niña de siete. Los acompañaban 10 policías estatales, cinco adelante y los otros atrás. Al llegar a la cima la estaban esperando unos 30 o 40 hombres armados, que le dispararon. Ella murió de inmediato, lo mismo su hijo, y la niña logró huir. “Los policías no pudieron repeler la agresión y optaron por refugiarse.”

Antes del éxodo que preparaban, Villa Mojica y sus hijos fueron al panteón a despedirse de familiares y sus amigos ahí sepultados.

El secretario de Gobierno, Humberto Salgado, culpó a la dirigente ecologista Juventina Villa de provocar su asesinato y el de su hijo Rey Santana, de 10 años, perpetrados el miércoles, debido a que “se salió del perímetro de resguardo en torno a ella”. El veterano periodista Ocampo Arista preguntó al funcionario qué quería decir con ello, a lo que “se negó a especificar cuánto medía ese espacio”. (22)

Cinco años después, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad denunciaron que por los 27 asesinatos y tres desapariciones sólo había un detenido, “aun cuando la familia Santana Villa presentó las denuncias correspondientes en las que dieron nombres y la ubicación de los responsables directos de la violencia.” (23, 24, 25, 26, 27 y 28)

Isabel y Reyna Ayala Nava

Isabel Ayala Nava no era dirigente de su comunidad ni defensora del medio ambiente. Fue ejecutada por dos sicarios que le dispararon a ella y su hermana Reyna desde un automóvil, el 3 de julio de 2011. Le arrancaron la vida para que no hablara, para que no brindara su testimonio como víctima de la “guerra sucia” que el Estado lanzó en Guerrero contra los campesinos y sus apoyadores en los años 70s del siglo pasado. Hubo cientos de víctimas como ella, aunque conocer su experiencia seguramente concitaría un mayor interés, ya que fue pareja del comandante guerrillero Lucio Cabañas. También porque seguramente sus palabras alcanzarían a una poderosa familia, pues el gobernador Rubén Figueroa Figueroa (padre del gobernador del mismo nombre) violó y embarazó a Isabel. No fue una coincidencia que su ejecu-

ción haya ocurrido apenas tres días de haber sido conformada por la legislatura local la Comisión de la Verdad que investigaría la salvaje represión lanzada por los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo en contra de las guerrillas campesinas aparecidas en esa época en ese estado sureño. La Cámara de Diputados local se vio obligada a formar tal comisión ya que a ello la obligó la CIDH, luego de analizar la desaparición por el Ejército de Rosendo Radilla, en 1974, uno de los más de 500 desaparecidos políticos en Guerrero en esos años.

Isabel Ayala Nava era menor de edad, aunque ya madre de una bebé procreada con Lucio Cabañas, cuando ella y la familia del guerrillero fueron detenidos en 1974 por militares que de inmediato los trasladaron al Campo Militar Número Uno en la Ciudad de México, en donde operaba una cárcel clandestina para disidentes políticos. Fue sometida a tres sesiones de torturas, en la segunda de las cuales participó el general Mario Acosta Chaparro. Isabel dice que el militar “le agarró los piecitos a mi niña y le puso la pistola en la cabeza. En esa ocasión, me jalaron de pies y manos y me violaron. Me zamparon a un tambo de agua fría y me amenazaban con matar a mi hija si no decía dónde estaba Lucio.”

Sólo fue entrevistada en una ocasión, por la reportera Gloria Leticia Díaz de la revista *Proceso*, en 2003. Le dijo que “durante su encarcelamiento, vio a muchas personas en el Campo Militar, entre ellas a una maestra que fue novia de Lucio; llevaba tres años en ese lugar cuando ella llegó y seguía ahí cuando salió.

“Isabel se enteró de la muerte de Lucio un año y ocho meses después de ocurrida, cuando Rubén Figueroa Figueroa visitó a la familia en el Campo Militar, ya como gobernador de Guerrero.”

Después del primer encuentro con Figueroa, Isabel fue liberada y presentada ante el gobernador. “Le pregunté por la demás familia y me dijo que se iban a pudrir en la cárcel, que no me preocupara, que yo estaba libre. Le respondí que eso no podía ser, porque entre los encarcelados había niños. Le insistí en que debía sacarlos y entonces me preguntó si yo respondía o iba a pagar por ellos. En mi desesperación le dije que sí. Días después fuimos por ellos al Campo Militar Número Uno, los sacaron en un camión de pasajeros y nos llevaron al hotel Metropol, donde estuvimos por lo menos dos meses. Ahí estuvieron Juana, Bartola con sus tres niños y su esposo, doña Rafaela y mi cuñado Conrado.

“El gobernador se ganó la confianza de Isabel, entonces de 16 años. Enviaba un chofer al hotel para llevar a la muchacha y a su niña a comer o a cenar con él. En esos encuentros, le expresaba su respeto por Lucio, le daba dinero y le facilitaba trámites, como el acta de nacimiento de su hija.

“Un día me mandó traer con uno de sus guardaespaldas. Le avisé a mi

cuñada Bartola, para que me acompañara, pero el tipo ese dijo que tenía que ir sola. En cuanto llegué a sus oficinas, todo mundo se desapareció y él me encerró con llave. Me decía que no iba a salir hasta que ocurriera 'eso'. Yo le decía que no quería y él insistía, y ahí estuvimos hasta las 12 de la noche entre sí y que no... y entonces sucedió la agresión.”

Cuando Isabel advirtió que Figueroa la había embarazado, se presentó en la Casa de Gobierno, en Chilpancingo. Fue recibida por el gobernador. “Con palabrotas, me dijo que le valía mi embarazo, que le hiciera como quisiera.”

El niño nació enfermo y murió a los cuatro meses de nacido.

Con preparación de quinto de primaria y una carrera corta de taquimecanografía, Isabel sobrevivió con sus hijas como comerciante, fotógrafa y agricultora.

Hace 16 años, se casó, procreó a tres hijos más y se estableció en la sierra de Chilpancingo. (29) Su hermana y ella fueron ejecutadas cuando salían de la iglesia a la que acudían los domingos a vender comida.

Rocío Mesino Mesino

En la ofensiva lanzada por el Estado contra lo que consideraba eran sus enemigos, está la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y sus líderes, la mayoría de ellos de la familia Mesino.

Sin proponérselo, esta organización ocasionó la caída del gobernador Rubén Figueroa, hijo del gobernador del mismo nombre, como consecuencia de la responsabilidad que tuvo en la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, en 1996. Terminó la carrera de este personaje pero siguió teniendo una gran influencia en la entidad, desde Huizuco de los Figueroa, que por algo tiene este nombre.

Mesino Mesino fue abatida por un sicario que le disparó en la nuca el 13 de octubre de 2013. Antes sufrió un atentado en el que le dispararon con armas de alto poder, el 4 de agosto. Y el 13 de marzo de 2013 la Policía Ministerial del estado, “con excesiva violencia y sin mostrarle orden de aprehensión, la detuvo y la acusó de un secuestro que no cometió. A los pocos días de la detención, un juez decretó su libertad debido a la ausencia de pruebas en su contra.” La tenían en la mira y por fin lograron asesinarla.

Rocío fue la tercera de la familia Mesino asesinada por su actividad política al frente de la OCSS, organización fundada en los años 90s del siglo pasado que hundía sus raíces en la represión que sufrieron los campesinos en el pasado en la región. Muchos de sus fundadores fueron víctimas durante la guerra sucia.

Su padre, Hilario Mesino Acosta sobrevivió al terrorismo de Estado de la década de los 70s, no así su tío Alberto, que fue desaparecido cuando tenía 20 años. Fue uno entre cientos de desaparecidos políticos en el Guerrero de hace 50 años. “En julio de 1996, Hilario Mesino fue detenido arbitrariamente como consecuencia de sus actividades en defensa de los derechos humanos de los pueblos y comunidades campesinas. Fue incomunicado, torturado y amenazado: el Estado pretendía extraerle una confesión que lo relacionara con el Ejército Popular Revolucionario. Amnistía Internacional lo consideró prisionero de conciencia”, dice la Comisión Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (CMPDH).

Miguel Ángel Mesino Mesino, hermano de Rocío, quien también fue fundador e integrante de la OCSS, fue detenido arbitrariamente en enero del 2005. Por falta de pruebas recuperó su libertad diez meses después y continuó con sus actividades de lucha social junto a las comunidades campesinas hasta el 18 de septiembre de 2005, fecha en la que fue ejecutado. “El homicidio se cometió en presencia de testigos; sin embargo, el caso continúa en impunidad.”

La OCSS agrupa campesinos de la Costa Grande y de la Montaña Baja y se distinguió por la defensa del medio ambiente y de los derechos de sus agremiados. En 1996, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, más de 60 campesinos que iban en camiones a una protesta contra el gobierno fueron emboscados por policías que les dispararon y mataron a 17, a los que les colocaron armas para simular que habían sido abatidos en un enfrentamiento. Desde las filas del gobierno alguien coló un video a un conocido periodista que daba cuenta de que se había tratado de una cobarde emboscada. En ese momento cayó el gobernador Figueroa, aunque ni él ni otros responsables pisaron la cárcel.

Rocío nació en la comunidad del Escorpión, Municipio de Atoyac de Álvarez. Dedicó su vida a exigir al gobierno la libertad de los presos políticos y de conciencia, a criticar y evidenciar los actos de corrupción local, a señalar la fabricación de culpables que se vivía en la región, a defender la tierra y el territorio, y a exigir justicia y verdad para sus compañeros ejecutados.

En el año 2005 fue elegida regidora del municipio de Atoyac de Álvarez, cargo para el que fue reelecta por dos veces consecutivas. Además de las exigencias de justicia, hizo gestiones para conseguir programas de apoyo para campesinos, mujeres y personas con discapacidad. También impulsó la creación de una **policía ecológica** con el propósito de evitar la tala clandestina de árboles y el robo ilegal de especies protegidas. Se enfrentó al menos a dos presidentes municipales de Atoyac, Pedro Brito García y a **Carlos Armando Bello, por corruptos**.

En 2007 un grupo armado disparó una ráfaga de balas con armas de

alto poder hacia su casa: ella salió ilesa. Recibió amenazas de muerte. A pesar de la abrumadora evidencia de riesgo y gravedad en la que se encontraba, en diciembre de 2012, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación le negó la inscripción con el argumento de que no identificaron amenazas que pusieran en riesgo a la peticionaria.

El día 19 de octubre del 2013 Rocío organizó a las mujeres que estaban atendiendo el comedor popular de Mexcaltepec. Supervisaba la construcción de un puente. Unos hombres se aproximaron a Rocío para hacerle preguntas; tras responder, Rocío se alejó. “A los segundos, se volvió a acercarse uno de los dos hombres por atrás de Rocío, el hombre sacó un arma corta y le disparó a una distancia de medio metro.” (30)

Una semana antes había anunciado que se integraría la policía comunitaria en Atoyac. (31)

Maximino García Catarino

Esta es la historia de un dirigente indígena perseguido con saña y maltratado en la cárcel. Estaba al frente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OPFM) y fue injustamente encarcelado. Gracias a una inmediata campaña internacional que exigió su libertad salió de la cárcel dos meses después. Podemos decir que corrió con suerte porque dos años antes, dos dirigentes de OPFM, los indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron asesinados.

García Catarino fue detenido el 21 de enero de 2012 en la comunidad mixteca de Juquila, municipio de Ayutla de los Libres, acusado de asesinar a Juan Teodoro García. Pudo comprobar que el día de este homicidio, cometido en su comunidad, no se encontraba en ese lugar, pues estaba haciendo gestiones en Ayutla, la cabecera municipal. El juez que resolvió su auto de formal prisión no tomó en cuenta este hecho.

Al salir de prisión, exigió al gobernador Ángel Aguirre Rivero detener la persecución contra defensores de los derechos humanos: «Sabemos que hay órdenes de aprehensión contra mis hermanos Jorge Luis, Ambrosio y Marcelino García Catarino, y contra Álvaro y Audencio Ramírez». Dijo que las autoridades pretenden vincular a estas personas con el homicidio que le imputaron a él, «pero el único delito que cometimos fue organizarnos para luchar por obras sociales para nuestro pueblo», le dijo al incansable periodista Sergio Ocampo Arista. (32) Denunció que minutos después de salir de la cárcel de Ayutla de los Libres recibió amenazas de muerte, vía telefónica, de miembros de grupos paramilitares e informantes del Ejército Mexicano en esa zona.

En la liberación de Maximino participó Rupert Knox, de Amnistía Internacional, quien señaló que el caso de Maximino García Catarino resulta ejemplar, ya que se le envió a prisión a partir de un montaje. Explicó que cuando un testigo comparece ante el Ministerio Público, es obligación de la autoridad establecer la credibilidad del mismo, no solamente tomar la información y darla por buena a pesar de que haya contradicciones e irregularidades. “Llevo casi diez años viajando a Guerrero y ya son muchos casos parecidos al de Maximino, a quien enviaron a prisión por un homicidio que no cometió”, se quejó. “Ya es tiempo de que el gobierno corrija el sistema de justicia, que deje de perseguir a defensores de derechos humanos en casos infundados”. (33)

El representante de la fundación alemana Misereor, Eckhard Finsterer, visitó en el penal de Ayutla a Maximino García Catarino y dijo que el indígena, al igual que los otros presos, vivía en condiciones “infrahumanas”. “Se encuentra preso en una celda de 2 por 3 metros en donde cohabita con otros cinco hombres; se trata de condiciones verdaderamente infrahumanas, no tienen espacio para nada”. (34)

* *

Para una mejor comprensión de estos años en Guerrero tomamos en cuenta también los **asesinatos de políticos profesionales**, del sistema:

Justino Carvajal Salgado fue asesinado el 8 de marzo de 2013. Fue síndico de Iguala y sobrino de Félix Salgado Macedonio (poder tras el trono de su hija Evelyn, actualmente gobernadora). Desde su cargo en el ayuntamiento, que presidía José Luis Abarca, estaba a cargo de negociaciones con la organización Unidad Popular. Fue asesinado por un comando en el centro de Iguala. Abarca llegó a la escena del crimen en unos pocos minutos y ordenó a los forenses no dar ninguna información. El crimen nunca fue resuelto, pero Hernández Cardona estaba seguro de que Abarca había estado detrás de éste y así lo denunció en una sesión de cabildo. (35)

“A Justino se le conocía como el eterno aspirante a la alcaldía de Iguala. Cuando Abarca se postuló para ser candidato a alcalde, Justino apoyó a otro. Seguramente Justino volvería a postularse, en 2015, pero la esposa de Abarca quería el cargo. (36). De acuerdo con la hermana de la víctima, Zulma Carvajal: “la envidia, la traición de quienes querían lo mismo que él quería lo mataron para no dejarlo llegar.” (37)

En agosto de 2009, fue asesinado **Armando Chavarría Barrera**, y aunque no fue ejecutado durante la gestión de Aguirre Rivero, lo incluimos para hacer notar que las cúpulas políticas de Guerrero echaban mano con frecuencia de métodos florentinos. En esos años “fueron asesinados, entre

otros personajes, el ex diputado panista Jorge Bajos Valverde; los periodistas Amado Ramírez y Juan Daniel Martínez Gil; el alcalde de Ayutla de los Libres, Homero Lorenzo Ríos; el dirigente del PRD en el municipio de Petatlán, Alvaro Rosas Martínez”, enlistó el veterano periodista Sergio Ocampo Arista.

De haber vivido, Chavarría Barrera hubiese sido un fuerte competidor de Aguirre Rivero como candidato a gobernador. Chavarría tenía una brillante trayectoria política que lo hacía un candidato con posibilidades de ganar la elección, en el muy próximo 2010. Había ocupado distintos cargos de elección popular, fue secretario general de gobierno y encabezaba la cámara de diputados. Dos días antes de su homicidio, como presidente del Congreso, había anunciado que un despacho practicaría una revisión contable a la Auditoría General del Estado, presidida por Ignacio Rendón Romero, acusado de desvíos de recursos y de pedir favores a alcaldes a cambio de aprobar las cuentas de sus ayuntamientos. (38) .El par de sicarios “no fueron matones improvisados pues eran policías ministeriales con armas de cargo, eso lo logramos saber”, denunció su viuda, Martha Obezo Cázares (39)

Hernández Cardona, Unidad Popular de Iguala

El asesinato, en junio de 2013, de Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez, dirigentes campesinos de la Unidad Popular (UP) de Iguala, combina más elementos que los casos anteriores, que lo hacen un antecedente directo de la *Noche de Iguala*. Fueron asesinados por el alcalde del lugar, José Luis Abarca. Aquí desfilan narcopolíticos, militares corruptos, funcionarios represores y políticos en lucha descarnada por el poder. Frente a los homicidios se creó una alianza mafiosa que abarcó al gobierno federal, al estatal, al congreso, a los partidos con registro, a López Obrador y a Morena, al Ejército, etc., que solapó al homicida para que quedara impune.

Lo mismo se intentó hacer en *La Noche de Iguala*, 15 meses después, con la variante de sólo castigar a Abarca y a algunos genizaros municipales, y que fueran absueltos el gobierno de Peña Nieto y de Aguirre Rivero, el Ejército, la Policía federal, etc. El “móvil” oficial de los crímenes fue en ambos casos idéntico: culpar a dos cárteles de delincuentes en disputa por la plaza.

**

El alcalde Abarca se rehusaba a llegar a un acuerdo con UP para entregarle fertilizante e incluir a sus campesinos en los programas de ayudas municipales. El 30 de mayo de 2013 la organización campesina llevó a cabo

una movilización en la carretera Iguala-Cuernavaca para presionar al gobierno. Cuenta Camilo Ruiz Tassinari: “No obtuvieron ese día tampoco ningún compromiso de parte de las autoridades. Hernández Cardona se quedó atrás junto con otras siete personas para cuidar la retaguardia de la caravana de manifestantes. De camino a Iguala, fueron detenidos por dos camionetas con seis hombres armados, quienes los obligaron a bajarse del carro. Inmediatamente, uno de ellos disparó en la pierna de Hernández Cardona.

“Los siete fueron metidos a las camionetas y llevados a un monte. Allí fueron golpeados con machetes y con látigo de alambre. Fueron torturados unas veinticuatro horas. A las seis de la tarde del día siguiente los sicarios comienzan a cavar las tumbas. En la noche llega Abarca y su secretario de seguridad pública. Los dos observan la tortura mientras beben cerveza. El edil le dice a Hernández Cardona: ‘Qué tanto andas chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte.’ Y le da dos tiros.”

De acuerdo con un testigo, “vi cómo Abarca le apuntaba a la cabeza, en la mejilla izquierda, y le disparaba. Una vez caído en la fosa, le volvió a disparar” [a Hernández Cardona], dijo en entrevista con *El País*, Nicolás Mendoza Villa, testigo secuestrado y torturado por órdenes del ex edil de Iguala.

Tras ser secuestrado y torturado, Mendoza pensó que sería el siguiente. “Sólo pedí que arrojaran mi cuerpo cerca de una carretera para que mi familia pudiera hallarlo”, recuerda en conversación con el diario español. Pero durante su traslado pudo escapar por el monte. Hoy vive escondido y con su familia dividida.” (“(40)

**

Arturo Hernández Cardona era también regidor y militante del PRD, y aunque este partido a estas fechas ya había roto prácticamente todas sus ligas con la lucha popular, la UP no se había podido sustraer al ambiente de enormes movilizaciones de masas que hubo en Guerrero en 2013. Se creó un amplio frente de organizaciones que formaron el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), que respaldó la explosiva lucha magisterial contra la reforma educativa del presidente Peña Nieto. De acuerdo con el articulista guerrerense Carlos Pérez Aguirre, el MPG “ha mantenido en jaque al gobierno estatal.” Desde el gobierno federal y los gobiernos del PRD a nivel estatal y municipal vieron a la UP como una organización que escapaba peligrosamente de su control y actuaba contra ellos. La desesperación era grande en las alturas. Aguirre Rivero, “en una generalización irresponsable, señaló que ese movimiento magisterial contaba con vínculos con el narcotráfico y la guerrilla”. (41)

A José Luis Abarca hay que agregar a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, que pretendía suceder a su esposo en el cargo. El matrimonio Abarca-Pineda era un tándem político que tenía vínculos estrechos con to-

dos los factores de poder: el gobernador, del que se decía había financiado su campaña con dinero de los Abarca; los jefes nacionales del PRD, en ese tiempo relevantes; y sobre todo con Lázaro Manzón, el hombre de López Obrador en Guerrero, que había impulsado fuertemente la carrera política de José Luis. La pareja era muy próxima al Ejército que, en un hecho del que no conocemos precedentes, años antes les había regalado un enorme terreno para construir el centro comercial Tamarindos. La “Pareja Imperial” (así era conocida) también estaba involucrada hasta el caracú con los narcos de Guerreros Unidos, principales responsables de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, un año después, según las versiones oficiales. Con la UP se experimentó el achacar los crímenes a la delincuencia organizada, sin éxito.

María de los Ángeles es hermana de dos importantes lugartenientes del grupo criminal de los Beltrán Leyva, Alberto, alias El Borrado, y Salomón, alias El Molón. (42) Iguala es muy disputada por los grupos criminales porque es un punto estratégico para el trasiego de la droga, paso obligado entre Tierra Caliente, Acapulco, Taxco, Cuernavaca y el Estado de México.

La CNDH recogió testimonios de habitantes que cuestionaban el origen de los recursos de la familia Abarca-Pineda, los cuales les permitieron adquirir más de 30 “inmuebles bajo sospecha”. (43)

La necesidad imperiosa de contener las luchas magisteriales y campesinas se juntó con la lucha por el poder municipal, que incluía los jugosos negocios derivados del trasiego de droga y de otros delitos.

**

“La ausencia de los siete activistas campesinos es notada inmediatamente en Iguala, y en la Ciudad de México sus partidarios, ligados a la corriente de René Bejarano, comienzan a presionar por su reaparición. Abarca se da cuenta de que no podrá mantenerlos escondidos mucho tiempo más. Son llevados a un páramo donde asesinan a otro de ellos, pero cuatro consiguen meterse al monte y huir.

A su regreso a Iguala, los cuatro sobrevivientes se separan y se esconden. *Los tres cuerpos aparecen el 3 de junio, rodeados de narcomantas firmadas por Los Rojos*”, grupo delincuencia rival de los Guerreros Unidos.

Dice Camilo Ruiz:

Para los igualtecos es claro que Abarca es el responsable. Todo mundo sabía que el edil tenía un pique con el líder campesino. Circulaban los videos en internet de la trifulca entre Hernández Cardona y la esposa de Abarca, en donde ésta lo amenazaba.

A pesar de lo anterior, la PGR da un carpetazo y evita meterse. Pero

Bejarano insiste y lleva el caso al secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong a mediados de noviembre, para que investigue. El secretario tampoco acepta atraer el caso. En pocas palabras, el PRI tuvo una política consciente de no meterse en el asunto y dejar que Abarca se saliera con la suya.

Cuando los cuerpos aparecen, inmediatamente las organizaciones populares salen a las calles a protestar. La UP toma el ayuntamiento de Iguala y se pertrecha en él. La Normal de Ayotzinapa cierra una autopista. El día 5 Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, tras reunirse con Abarca y con su esposa declara a los medios que no aceptará presiones políticas -es decir, que lo apoya hasta el final. Esta declaración fue reproducida por los principales diarios guerrerenses. El mensaje del “no aceptaré presiones políticas” es transparente: No aceptaré que toquen a Abarca. Los legisladores perredistas locales, y al final Nueva Izquierda [una de las principales corrientes dentro de este partido], mayoriteó el congreso local para evitar que se afectara al alcalde.

Sin duda los *chuchos* [la dirección hegemónica del PRD nacional] sabían lo que sucedió y la responsabilidad directa de Abarca. El PRD hace presión sobre el gobierno federal para que no atraiga el asunto a las instancias federales -lo que consigue fácilmente (contraprestación de haber firmado el Pacto por México).

Diez días después, la UP deja el palacio del ayuntamiento y el asunto empieza a ser lentamente olvidado. Por supuesto, la Fiscalía Estatal nunca hace nada.

El gobierno federal y el PRD son los principales actores del encubrimiento de Hernández Cardona y compañía, pero para entender toda la trama hay que mencionar a otros dos actores, que también terminaron por jugar a favor de Abarca.”

Lázaro Mazón, AMLO y Abarca

Prosigue el relato Ruiz Tassinari: “A los pocos días del crimen, Morena publicó una escueta declaración donde se condena el asesinato de los dirigentes guerrerenses. Ni una sola palabra, tampoco, sobre Abarca. Como se sabe, desde 2011 Morena estaba en los hechos dentro del gabinete del gobierno de Guerrero a través de Lázaro Mazón, compadre de AMLO y gran amigo de Abarca, como él mismo habría de admitir ante la PGR cuando estalló el asunto de Ayotzinapa y tuvo que dejar el cargo. Mazón era secretario estatal de salud. Fue Mazón mismo quien postuló a Abarca para edil de Iguala, a pesar de las sospechas, hechas públicas desde la precampaña, de que estaba

ligado al narcotráfico.

“Hay que ser ingenuo para no ver en toda esta trama algo más que una simple omisión, un lapsus –seguimos citando a Camilo Ruiz. Mazón sabía sin duda de las conexiones criminosas de Abarca. ¿Hasta qué punto el pejista era parte de ellas? Eso es una cosa que todavía no se sabe. Lo que no hay que dejar de resaltar, es que tras los asesinatos de 2013, López Obrador no declaró nada ni les exigió a los militantes de su partido que salieran inmediatamente del gobierno de Guerrero. AMLO arrojó a los asesinos con su silencio reconfortante. Por si fuera poco, Lázaro Mazón había sido destapado el 9 de junio de 2014 como el candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero. Era el gallo del Peje. En el ensayo general de la masacre de Ayotzinapa [así define Ruiz Tassinari a los crímenes contra la UP], AMLO movió sus piezas... contra los normalistas.”

**

En 2023 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer, en su VI informe, que, de acuerdo con información oficial, desde el año 2012 José Luis Abarca y su policía estaban coludidos con narcos, así como otros alcaldes y policías municipales de la región. También lo estaban algunos jefes militares del lugar. El subtítulo de este informe con el número “5.1.1.” es tan elocuente como tremendo, al asegurar la existencia de una **“Colusión de sectores del ejército en Iguala con el narcotráfico y el conocimiento de la colusión de otras autoridades.”** (subrayado en el original). “Las escuchas telefónicas [...] en 2014, muestran que había colusión con GU de mandos militares, tanto del 27 BI como del 41 BI de Iguala.” “En diversas declaraciones del testigo J. se dice que los miembros del 41 y en particular el comandante recibía dinero de la organización criminal y así mismo tenían reuniones a las que acudían con jefes de la organización. Varios de los soldados del 41, según esta declaración, eran pagados por la organización [criminal]. Existen otras conversaciones en este mismo sentido...” “Además, tal y como puede verse en las actas de la Coordinación Guerrero Seguro donde participaban Ejército, Marina, Policía Federal, PGJ, PGR, Seguridad pública Estatal y Gobierno de Guerrero-, **todas las autoridades de ámbito estatal y federal tenían conocimiento previo de la colusión con la Delincuencia Organizada de autoridades y policías municipales de Iguala y varias ciudades cercanas** (Cocula, Tepecoacuilco, Huitzucó, entre otras), y varios alcaldes de la zona aparecen en distintos documentos de SEDENA de 2013 y 2014 señalados de ser parte de la delincuencia organizada.” “Las autoridades militares y CISEN conocían la connivencia y cooptación por parte del narcotráfico de diferentes presidentes municipales de la zona hacía al menos dos años”, es decir al menos desde 2012, antes de la agresión contra la UP y los chicos de Ayotzinapa. (44)

Lo que dicen los documentos citados por el GIEI, aunque ya era públicamente conocido, es brutal: **los gobiernos y policías municipales que participaron en 2014 en la desaparición de los estudiantes, así como los jefes militares y algunos soldados en Iguala estaban corrompidos por el narcotráfico desde años antes.**

También López Obrador y Lázaro Mazón contaban con esta información, ya que el segundo era parte del gobierno de Aguirre Rivero. Aun así, impulsaron a José Luis Abarca para que fuera presidente de Iguala en 2012.

Pocos meses después de la Noche de Iguala, Ramón I. Centeno escribió:

“López Obrador no jaló el gatillo de las pistolas que dispararon a los normalistas, ni tampoco dio la orden a los verdugos para que lo hicieran. Pero lo que el líder de Morena sí hizo fue facilitar que la mafia local llegara a la alcaldía de Iguala cuando tuvo la oportunidad de obstruirlo. AMLO prefirió desestimar las advertencias de la vieja militancia del PRD en Iguala sobre los vínculos criminales de Abarca...”

En el gobierno municipal de Abarca, Luis Mazón, hermano de Lázaro, quedó como suplente del alcalde, mientras que su hermana Fabiola fue designada secretaria de Desarrollo Social.

“Cuando AMLO aún estaba dentro del PRD, también apoyó al cacique Aguirre en su campaña electoral de 2010 para gobernador de Guerrero. Aguirre se había pasado al PRD porque el PRI no lo quiso lanzar como su candidato. El PRD inmediatamente lo recibió. Aguirre, en su tiempo como gobernador sólo continuó la dominación priísta sobre Guerrero pero bajo las siglas del PRD. Por si fuera poco, AMLO hace poco había proclamado a Luis Mazón, el padrino político del narco-alcalde de Iguala, como candidato de Morena al gobierno de Guerrero para la elección de 2015.” (45)

**

Las evidencias y pruebas de que los asesinatos de los tres de la UP había sido un crimen de Estado ejecutado por el presidente de Iguala eran abrumadoras, pero la versión oficial lo exculpaba. Aun así, el gobierno del Estado hizo dos cosas: sostener que los crímenes eran obra del crimen organizado y aterrorizar y forzar al exilio a los cuatro campesinos sobrevivientes para que no dijeran cuál había sido la verdad. (46)

**

El 6 de junio, el vocero del gobierno de Aguirre, José Villanueva anun-

ció que el crimen organizado sería una línea de investigación. Dos días después “la senadora perredista Dolores Padierna Luna advirtió que al sumar como línea de investigación el crimen organizado, las autoridades pretenden dar ‘carpetazo’ al caso de la desaparición de siete integrantes de la organización Unidad popular de Iguala.” Dolores Padierna –cercana a Hernández Cardona- afirmó que al culpar al crimen organizado, se evita que “las investigaciones continúen.” (47)

A un lado de los cadáveres de los tres dirigentes de UP, el asesino Abarca y sus secuaces arrimaron mantas del cártel de delincentes Los Rojos, rival de GU. El plan era presentar las ejecuciones como consecuencia de una reyerta entre estos grupos delincuenciales.

Algo parecido se hizo en septiembre de 2014, para explicar la desaparición de los 43, y despojar así la agresión de su contenido político contrainsurgente, lo que veremos en el siguiente y último capítulo.

FUENTES Y REFERENCIAS

1. SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz), Guerrero: Segundo asesinato de ecologista en la Sierra de Petatlán, 04/06/2011.
2. SIPAZ, 9/9/2011.
3. Ferrer, Sergio, “Demanda Comité de La Montaña el regreso de los ecologistas y justicia”, El Sur, 28/12/2011.
4. Ocampo Arista, Sergio, La Jornada, 30/11/ 2012.
5. SIPAZ, Guerrero: matan dos sobrinos de lideresa ecologista, 13/11/2012.
6. Ocampo Arista, Sergio, Asesinan a balazos a dos dirigentes campesinos en Atoyac, La Jornada, 17/11/2013.
7. Lleva 14 días desaparecido un activista de Salgado Parra y Arcos, y nadie hace nada, El Sur, Jul 6, 2012.
8. Amapola Periodismo, Noche de Iguala: Aguirre, el gobernador ausente, 23/09/ 2019.
9. “También García Luna debe comparecer, plantea Abel Barrera”, El Sur, 8 junio de 2013.
10. Red contra la Represión y por la Solidaridad, Taller de Desarrollo Comunitario y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. Comunicado conjunto con Asociación Nacional de Abogados Democráticos, 18-21/4/2011.
11. Contreras, Karina, El cese del hostigamiento y agresiones, exigen periodistas en Chilpancingo, El Sur, 8/6/2011.
12. Pacheco, Anarsis y Ramírez, Rosalba , “El cese del hostigamiento y agresiones, exigen periodistas en Chilpancingo, ELSUR, 8.6.2013.
13. Enlace Zapatista, 13.julio de 2011.
14. Fueron estudiantes los golpeados por el Ejército el 21 de diciembre en El Carmen, redacción, El Sur, 28/12/2011.
15. Ferrer, Sergio, Demanda Comité de La Montaña el regreso de los ecologistas y justicia para Ayotzinapa, 28/12/2011.
16. Consorcio Oaxaca, Red Nacional de Defensoras de DH repudia el asesinato a la defensora Fabiola Osorio Bernaldez, 12/06/2012.
17. Betancourt Radilla, Rosendo, Revelan presunta participación de un comandante de la Policía Ministerial en la desaparición de los ecologistas, El Sur, 26/12/2011.
18. Betancourt Radilla, Rosendo, Real atención a víctimas, demanda la hija de Eva Alarcón, la ecologista desaparecida en 2011”, El Sur, 7/12/2017.
19. Betancourt, Rosendo, Presentan una queja ante la Coddehum las hijas de los ecologistas desaparecidos, El Sur, 24 /12/ 2011.
20. Escobar, Brenda, Siguen en un hotel bajo resguardo los 17 secuestrados en la sierra de Tecpan, El Sur, 28/12/2011. Escobar, Brenda, Declaran campesinos de Tecpan que sus secuestradores llegaron gritando que eran de la AFI y militares, El Sur, 24 /12/2011.
21. COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD, Boletines de Prensa.14/09/ y 10/10/2012.
22. Ocampo Arista, Sergio, La Jornada, 30/11/ 2012.
23. sin embargo, A Juventina la mataron, con su hijo, por defender los bosques; 5 años, y Guerrero no hace justicia, 01/12/2017 .
24. Flores Contreras , Ezequiel ,Tenían vigilancia y aun así asesinan a activista y su hijo en Guerrero, Proceso, 28/11/ 2012.
25. Animal Político, ‘Muerte anunciada’, asesinato de activista guerrerense: ONG, 30/11/2012.
26. Ocampo Arista, Sergio, Asesinan a dirigente ecologista y a uno de sus hijos en Gue-

- rrero, La Jornada, 29/11/2012.
27. Verdebandera, Líder ecologista asesinada en Guerrero, 29/11/2013.
 28. Quadratín, En la impunidad, asesinato de Juventina Villa, 28/11/2013.
 29. Díaz, Gloria Leticia, Cuando Isabel, última pareja de Lucio Cabañas, relató su tortura en el Campo Militar Número Uno, Proceso, 22/06/2022.
 30. CMPDH., Ejecución extrajudicial-Defensoras comunitarias, 14.07.2022.
 31. Ocampo Arista, Sergio , Asesinan a balazos a dos dirigentes campesinos en Atoyac, La Jornada, 17/11/2013.
 32. La Jornada, 22/03/2012.
 33. Esteban, Rogelio Agustín, Pedirá Amnistía Internacional reformas al sistema judicial de Guerrero, Milenio, 22/03/2012.
 34. Cervantes, Zacarías, Vive en condiciones infrahumanas el dirigente mixteco en la prisión de Ayutla, El Sur, 13/03/2012.
 35. Ruiz Tassinari, Camilo, El asesinato de los dirigentes de UP en 2013, Ensayo de la matanza de Ayotzinapa, Pluma, no. 27.
 36. Hernández, Fernando y Albarrán, Eduardo, "Asesinan a Justino Carvajal, síndico de Iguala y sobrino de Salgado Macedonio", El Sur, 9 marzo 2013.
 37. El Sur, redacción, 6/09/2023.
 38. Ocampo Arista, Sergio, Matan al presidente del Congreso de Guerrero; aspiraba a la gubernatura, La Jornada, 21/08/2009.
 39. Ramírez García, Rosalía, "Ministeriales mataron a Chavarría", El Sur, 22/08/2023.
 40. sin embargo- MX/APRO, Nicolás Mendoza dice que vio que el Alcalde disparaba al perredista Arturo Hernández Cardona,15/11/2015.
 41. Pérez Aguirre, Carlos, Crimen de Estado o Estado criminal, El Sur, 8/06/2013.
 42. Sánchez, Óscar , Lo que se sabe de los Abarca, matrimonio involucrado en caso Ayotzinapa, El Sur, 25.8.2020.
 43. Mauleón, El Universal, 25/08/2020.
 44. GIEI, VI, págs. 104 y siguientes.
 45. Centeno, Ramón I., La sangre de Ayotzinapa que salpicó a Morena, Pluma, número 27.
 46. Pacheco, Anarsis, "Crimen organizado, entre las líneas de investigación que sigue el gobierno en el caso HC", EL SUR, 8.6.2013.
 47. Ramírez García, Rosalba, La línea del crimen organizado, para dar carpetazo a los asesinatos de Iguala: Padierna, El Sur, 9/6/2013.

La confabulación

IX

La represión en Chilpancingo contra Ayotzinapa en 2011 explica la Noche de Iguala. Los altos funcionarios encargados de la represión política, meses después del golpe en la capital guerrerense, en 2012, extrajeron conclusiones: pese a lo doloroso que había sido para los estudiantes perder a dos de sus compañeros, y las torturas y heridas sufridas por otros, Ayotzinapa seguía de pie. En el objetivo de postrarlos, la brutalidad en la capital de Guerrero fue un fracaso. Apenas un mes después de diciembre de 2011 se juntaron entre 7 mil a 9 mil personas en apoyo a los jóvenes. En octubre de 2012 los normalistas de Michoacán llevaron a cabo un potente movimiento que venció al gobierno. Y, lo más importante, lo que hemos llamado una situación pre insurreccional se mantenía en Guerrero y alrededores. *Era necesario descargar un nuevo golpe contra Ayotzinapa, más vasto y más letal.*

Otra lección fue que el gobierno federal había salido indemne del ataque en Chilpancingo, en donde la PF compartió protagonismo con la policía ministerial pero no la responsabilidad. Los altos funcionarios federales debieron considerarlo un dato de gran interés, que los alentó a ir más a fondo en la tarea de tundir al normalismo rural.

La decisión de reprimir en gran escala a los estudiantes de Ayotzinapa fue tomada desde la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012). La Noche de Iguala fue ideada dos años antes por un gobierno panista y la ejecutó un gobierno federal priista con la coadyuvancia de un gobierno local perredista-lópezobradorista. La oración anterior refleja la realidad de que, tratándose de defender el statu quo capitalista, la “derecha” y la “izquierda” se unen.

Enrique Peña Nieto fue proclamado presidente en 2012 y asumió el gobierno en diciembre de ese año. Durante la transición entre los mandatos de Calderón y el del nuevo mandatario, “los equipos de ambos se reunieron varias veces para hablar de los temas más sensibles en materia de seguridad nacional, es decir, los relacionados con la estabilidad, la gobernabilidad y la seguridad”, afirma Anabel Hernández. En el marco de esas reuniones la gente del presidente saliente entregó a sus sucesores un *documento clasifica-*

do como confidencial en el que se resumen los asuntos de mayor atención en materia de “seguridad nacional”. El texto, fechado en noviembre de 2012, se titula “Temas de atención prioritaria para el arranque de la administración 2012-2018”.

Observa la escritora que en el documento, entre los “temas prioritarios”, no están los cárteles de la droga. “Sin embargo, la situación en Guerrero y específicamente las movilizaciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos destacaban en el punto número dos de las prioridades de seguridad nacional”, dice Anabel, que tuvo acceso al escrito de 17 páginas, en el que se “pone énfasis en el ‘activismo de normalistas de Ayotzinapa’ y de comunidades como la CECOP. La persistente actividad de grupos subversivos en el estado son también temas de seguridad nacional.”

(1) El análisis de este documento confirma lo que hemos venido sosteniendo: para la casta política lo peligroso y amenazante son las masas organizadas y en movimiento. Los narcotraficantes y las bandas de delinquentes ni siquiera aparecen entre sus preocupaciones. Frecuentemente actúan en contubernio autoridades y facinerosos para hacer negocios ilegales o para perpetrar actos de represión política. Los distintos partidos políticos tienen diferencias entre sí pero en la tarea de reprimir están sólidamente unidos (y en otros asuntos sustanciales).

En las reuniones entre los equipos de Calderón y Peña hablaban el mismo lenguaje y compartían las mismas inquietudes. El título del texto revela un deseo de colaboración de los panistas con los priistas, a los que les indican sus tareas más urgentes.

El lenguaje es revelador. Literalmente una amenaza a la seguridad de un país podría provenir de un ejército extranjero o de un grupo terrorista, pero no de comunidades campesinas, como las del CECOP, que sólo se oponían a la inundación de sus tierras para la construcción de una presa. Los gobernantes mexicanos importaron de Estados Unidos lo de “seguridad nacional”, expresión acuñada durante la “guerra fría”, y fue la lucha internacional contra el “comunismo”. En la unión americana una de las instituciones gubernamentales medulares es la de “*home security*” (seguridad interior). En México, a la fecha y desde hace décadas, existe como parte de la administración pública un Consejo de Seguridad Nacional conformado por la Sedena, la Semar, la FGR, el CISEN (actualmente CNI), etcétera. Para las autoridades mexicanas un problema de “seguridad nacional” significa aquella comunidad, organización, gremio o escuela que se moviliza tenazmente por sus derechos. No necesariamente tiene que ser una organización armada ni que inscriba en su ideario derrocar al Estado; para estas fechas en Guerrero las organizaciones guerrilleras estaban debilitadas, divididas y prácticamente inactivas. El temor de los que piloteaban el Estado eran los

numerosos movimientos de comunidades campesinas e indígenas en defensa de sus territorios y bosques; la multitudinaria acción de gremios como el de los maestros; la aparición de miles de policías comunitarios y que grupos estudiantiles agregaran a estas multitudes enardecidas sus audaces tácticas de lucha, sus punzantes consignas y la iniciativa de coordinar y unir movimientos aislados.

Es un asunto muy serio el que en noviembre de 2012 el gobierno federal considerara a los normalistas de Ayotzinapa como un grave problema. El Estado al hacer diagnósticos no es una escuela de filosofía que se limita a gestar conocimientos y a amar su sabiduría. El considerar a estos jóvenes un peligro para el país fue una condena de muerte que se cumplió cuando desde el gobierno creyeron que se habían presentado las condiciones adecuadas. Entre las personas de carne y hueso que pergeñaron la sentencia mortal contra los jóvenes guerrerenses y los comuneros de La Parota estuvieron Genaro García Luna, que era secretario de Seguridad Pública, y Luis Cárdenas Palomino, en ese tiempo al frente de la PF. Hoy ambos están encarcelados, el primero por narco y el segundo por torturas.

**

**

La sucesión de protestas en cascada como las de 1988, la huelga del año 1999 en la UNAM, los levantamientos del EZLN en Chiapas en 1994 y del pueblo de Oaxaca en 2006, etcétera, modificó las características que debían ofrecer los políticos y gobernantes a la clase empresarial. El que fueran de mano dura y no les “temblara la mano” a la hora de ordenar represiones pasó a convertirse en una virtud o más bien una necesidad. Felipe Calderón afianzó el apoyo de los grandes capitales a su tembeleque administración al continuar el aplastamiento del pueblo oaxaqueño en 2006-2007 (iniciado por el presidente Vicente Fox) en colaboración con un gobernador del PRI. Peña Nieto como mandatario del estado de México labró su carrera a la presidencia con el prestigio entre las élites por haber arrollado a los comuneros de Atenco con presos, dos asesinatos, torturas, abusos y violaciones sexuales en contra de 26 mujeres. Poco antes, un gobernador mexiquense acuñó una frase en ese tenor: “los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas.” En Guerrero, en abril de 2011 asumió la gubernatura Ángel Aguirre Rivero y en su curriculum lo más llamativo eran sus actos represivos cuando fue gobernador interino.

Peña Nieto llegó a Los Pinos en medio de los torbellinos sociales habidos en una región del país que hemos descrito en el capítulo seis. Para la clase dominante una de las principales tareas del priista era aplacar el descontento y movimiento social. Comenzó su gestión presidencial con la

fuerza que le dio aventajar al candidato de la oposición, AMLO, por más de seis puntos, y sobre todo por la alianza que estableció con el PAN y el PRD para llevar a cabo al menos cinco grandes “reformas”, una de ellas en contra del magisterio y otra para profundizar la privatización de la industria energética.

Simultáneamente, el flamante gobierno federal estableció una estrecha comunicación y colaboración con el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, con el que se reunió en cuatro ocasiones en 17 días de su primer mes de gobierno. El 7 de diciembre de 2012 el guerrerense conversó en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. El 14 de diciembre Aguirre se encontró con el nuevo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la ciudad de México. Pocos días después, ambos personajes volverían a encontrarse, esta vez en Acapulco. Y el día 24 el presidente Peña Nieto y el sureño se vieron. Las crónicas periodísticas o los boletines oficiales informan que los temas que trataron fueron seguridad y programas sociales (2). Para el nuevo gobierno nacional y para el de Guerrero era urgente lanzar una ola represiva que sofocara la situación de gran efervescencia social. Podemos inferir que allí se acordó lo que expusimos en el capítulo VII: en el año 2013 hubo alrededor de 50 asesinatos políticos selectivos sólo en esta entidad federativa. La poda alcanzó a muchos de los más importantes líderes sociales y comunitarios.

Pero los gobernantes consideraron que esa cantidad de sangre derramada era insuficiente y así llegamos al año de 2014, a la noche aciaga del 26 de septiembre.

Los hombres que odian a los normalistas

Lo que determinó la decisión del Estado de hacer con Ayotzinapa una carnicería fue en primer lugar la necesidad de golpear con gran dureza para enfriar la temperatura política y social que podría evolucionar hacia una situación de grave peligro para el gobierno. El objetivo era anular un sector de la sociedad que se consideraba podría ser muy activo y peligroso si las protestas escalaban. En ese sentido **la Noche de Iguala fue un golpe preventivo**. Pero en la lucha de clases juegan también otros factores, como el rencor, el odio, el sentimiento de venganza. Diego Enrique Osorno me lo recordó para este caso particular. El presidente y sus hombres (sí; todos varones) y el gobernador habían sufrido amargos reveses en pasadas experiencias con normalistas rurales. Se sentían humillados y habían alimentado deseos de revancha.

La escuela normal rural de El Mexe en el año 2000 tiene un agrio significado para Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, ambos altos

funcionarios del gobierno de Hidalgo, a principios de siglo, lugar en la que está el centro educativo. Catorce años después, desde sus altas posiciones en el gobierno nacional, como secretario de Gobernación y procurador de la República, respectivamente, creyeron que había llegado el momento de cobrar facturas.

En el año referido mis correligionarios del POS tuvieron una destacada participación en la huelga en la UNAM empezada el año anterior. Seis de mis compañeros –dos de ellos mujeres- habían sido encarcelados. Ello concitó un gran interés en amigos extranjeros de la Cuarta Internacional. Para ellos redacté un breve boletín que enviaba periódicamente a unas 50 direcciones. El número 8, fechado el 1 de marzo, dice así:

El sábado 19 de febrero de 2000 tuvo lugar una semi insurrección en el municipio de Francisco I. Madero, en el estado de Hidalgo, donde se ubica la escuela de El Mexe. En el informe anterior hice referencia a los presos de esta escuela, que eran 70 u 80. Los normalistas rurales tuvieron que ponerse en movimiento porque las autoridades venían atacando su educación. Se les rebajó el presupuesto y se intentó cambiar planes de estudio. A principios de año los del Mexe estaban en movimiento. A diferencia de la UNAM, a la que asisten multitudes de estudiantes y académicos, en estas escuelas las matrículas son de cientos, y están internados. Precisamente una de las causas que detonó el conflicto fue que las autoridades les habían quitado el presupuesto para alimentarse, lo que para una amplia mayoría significa una invitación a abandonar la escuela. Era parte de un plan para ir liquidando este tipo de educación que, en el contexto de más de 20 años de crisis agrícola nacional (agravada a niveles superlativos por la devastación causada a la economía de los campesinos por el TLCAN o Nafta), hace que estas escuelas sean reductos de organización y lucha campesina muy radicalizadas. Por ejemplo, los estudiantes han conseguido que se estudie “marxismo-leninismo”. Los del Mexe se estaban movilizandando y recibiendo solidaridad de los normalistas de otros estados y de la misma población. Las movilizaciones eran nutridas y también la represión, que se desató simultánea a la de la UNAM [en la que hubo más de un mil presos]. La movilización normalista-popular iba en crecimiento. El 18 de febrero las autoridades lanzaron una nueva ofensiva represiva, para aplacarla definitivamente. “Deportaron” a unos 650 estudiantes de otras entidades federativas que estaban apoyando a sus compañeros. Y en la madrugada siguiente detuvieron violentamente a unos setecientos que estaban en “plantón” frente al palacio de gobierno, en Pachuca, la capital del

estado. Luego de ello, temprano en la mañana, se dirigieron cientos de policías a romper la huelga en la escuela, así como a capturar y a golpear fieramente a los estudiantes y padres de familia presentes. A las 8 a.m. creyeron que su misión había sido cumplida y que habían logrado doblegar al movimiento.

Apenas supieron lo que había pasado los pobladores del pueblo más cercano, a cuatro kilómetros, se organizaron con rapidez. Más de mil llegaron a la escuela, donde se habían quedado unos 120 policías a resguardar las instalaciones. Se dirigieron entonces a retomarla, mientras quemaban cuatro o cinco patrullas policiales y dejaban inservibles a unas ocho más. Los policías, aterrorizados, huyeron: unos al monte, otros prefirieron tirarse a un canal de aguas negras y 68 fueron capturados por la población que, iracunda, los llevó a la plaza del poblado. Allí los desnudaron y ataron. Al respecto, Ana Ortiz Angulo me ilustró que en el México Antiguo, cuando había una batalla, los prisioneros no eran inmediatamente ejecutados. En una plaza eran previamente desnudados, lo que simbolizaba la anulación de su jerarquía y dignidad. Luego se les sacrificaba. Algo parecido ocurrió en Tepatepec hace unos días. Los 68 policías fueron exhibidos con sus vientres prominentes, músculos flácidos y roídos calzoncillos durante unas 10 horas. La humillación no fue sólo de los infelices genizaros, sino para el gobierno, que tuvo que negociar la liberación de sus subalternos. Pronto quedaron en libertad la gran mayoría de estudiantes y padres de familia y fueron aceptadas buena parte de las demandas estudiantiles. El presidente Ernesto Zedillo y el gobernador hidalguense sufrieron una derrota humillante menos de dos semanas después de la ocupación policial de la UNAM.

El funcionario que coordinó el asalto a la normal fue el entonces subsecretario de Gobierno de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación (ministro de Interior) a nivel federal en 2014.

Enrique Peña Nieto, como gobernador del estado de México, y Luis Enrique Miranda, que era su secretario de gobierno, padecieron en 2008 una derrota ante los estudiantes de Tenería casi tan denigrante como la de sus congéneres hidalguenses. Miranda fue el hombre de más confianza del presidente Peña y se encargaba de la contención de los movimientos sociales.

En Tenería 2008 el gobierno mexiquense de Peña llegó a acuerdos con estos estudiantes, para el otorgamiento de plazas de trabajo, pero acto seguido el gobernador los declaró anulados.

De acuerdo con César Navarro Gallegos:

Ante la falta de palabra del gobernador, los estudiantes hicieron paños escalonados y luego se declararon en huelga en el mes de agosto. También secuestraron vehículos de varias empresas como medida de presión. El 14 de septiembre helicópteros sobrevolaron la normal y 400 granaderos rodearon la escuela. “Ante el inminente asalto a la normal y el desalojo de sus estudiantes, habitantes de cinco pueblos cercanos se movilizaron en su auxilio y formaron una barricada humana que se interpuso a los granaderos para impedir la toma de la Normal.

“En el interior de la escuela se encontraban, junto a los estudiantes de Tenería, cientos de jóvenes de otras normales rurales que habían sido convocados por la FECSM para apoyar a sus compañeros, así como campesinos de varias comunidades que habían determinado oponerse, con todos los medios a su alcance, al ataque de los granaderos. Frente al previsible enfrentamiento y la gran concentración de estudiantes y pobladores, el gobierno se vio obligado a recular y reconocer los acuerdos inicialmente convenidos sobre el ingreso, las plazas docentes, el presupuesto y el funcionamiento de la escuela-internado. Como en otros conflictos, la batalla de Tenería resultó victoriosa por la solidaridad y apoyo de los pueblos y comunidades de donde proceden los normalistas.” (3)

Meses después ocurrió en el vecino Michoacán un movimiento similar que el gobierno fue incapaz de contener. De acuerdo con Navarro Gallegos, a quien vuelvo a citar:

Más de mil 500 policías federales, estatales y municipales tomaron por asalto el 15 de octubre de 2012 las instalaciones de la Normal de Arteaga, la Normal Indígena de Cherán y la Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío. La represión policial dejó decenas de lesionados, varios heridos con armas de fuego y 176 estudiantes de Tiripetío fueron detenidos.

La causa fue la intención del gobierno de imponer un plan de estudios en el que se enfatizaba en la enseñanza del inglés y en las nuevas tecnologías. Los normalistas no se oponían a esos aprendizajes, sin embargo, pensaban en un plan de estudios más acorde a sus necesidades educativas y sus tareas docentes en escuelas de pueblos y comunidades. Por ello plantearon la elaboración de un plan de estudios que integrara sus propuestas, el cual no fue aceptado. Ante la re-

iterada negativa del gobierno para escuchar sus argumentos, optaron por la realización de “paros” para impulsar el diálogo.

La represión desató una amplia movilización popular en defensa y solidaridad con los normalistas. Miles de maestros democráticos de la sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se movilizaron para demandar el cese de la represión y la liberación de los detenidos. Igualmente, pobladores de comunidades indígenas y campesinas se alzaron en apoyo de los jóvenes, muchos de ellos sus hijos. Durante varias semanas la entidad fue escenario de un intenso descontento social, alentado con la incorporación de organizaciones populares y cientos de ciudadanos. Simultáneamente, normalistas rurales y maestros en otros sitios del país realizaron marchas y actos públicos de condena a la represión de los estudiantes michoacanos. La movilización magisterial, comunitaria y popular en Michoacán, más el respaldo manifestado por maestros y normalistas en otras entidades, finalmente obligó al gobierno a poner en libertad los estudiantes y se convino con los normalistas posponer temporalmente la reforma al plan de estudios.”

Además de los rencores contra los normalistas, entre la clase dominante y sus agentes políticos se les ha *estigmatizado*. Luis Hernández Navarro recogió las declaraciones de la entonces lideresa oficialista de los maestros, Elba Esther Gordillo, a quien “como a tantos otros dirigentes sindicales y funcionarios educativos, no le gustaban las normales rurales. En agosto de 2010, se pronunció por cerrar a estas escuelas: ‘No se olviden que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros; si no las cerramos, van a seguir con lo mismo’”, dijo.

“Las declaraciones de Gordillo hicieron escuela”, dice Hernández Navarro. “Cuatro años después, el 12 de octubre de 2014, Sarbelio Molina, ex dirigente de la Sección 18 del SNTE, afirmó que ‘las escuelas normales de todo el país son un peligro para México, de allí podrían salir nuevos revolucionarios como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, más en un momento como este cuando hay descontento social general’”.

De no poner un freno a los normalistas -dijo- éstos podrían sumarse al fenómeno de manifestaciones de inconformidad social que se vive en toda la geografía de México, y convertirse en una guerrilla en el estado de Guerrero. (4).

* *

Estamos en Guerrero, a mediados de 2014. Es una situación en la que seg-

mentos significativos de la población protestan, se organizan y en la que de seguir así podrían tambalearse gobiernos. Existe temor entre la casta política de que los estudiantes normalistas acompañaran y acaudillaran a esas masas soliviantadas. También se les odia dentro de una ideología racista y clasista que los denigra y llama a exterminarlos.

Ahora estamos en Iguala el 26 de septiembre del mismo año, a las 10 de la noche. La blitzkrieg (guerra relámpago) contra los estudiantes se ha desatado. En los primeros capítulos vimos que esta emboscada repite los patrones de la represión de Chilpancingo 2011, a saber:

- Uso de estrategia militar,
- Policías que acuden a reprimir con equipo y vestimenta profesional,
- Ráfagas de fusiles de alto calibre,
- Persecuciones de jóvenes,
- Negación de atención médica pública y privada para los numerosos heridos,
- Asesinato de jóvenes que eran líderes estudiantiles,
- El Ejército con sus insignias aparece al final, cuando la obra ha sido terminada, al parecer para supervisar el trabajo e intimidar a las víctimas sobrevivientes (aunque en Iguala soldados que suponían que nadie los veía patearon los cuerpos agonizantes de dos estudiantes).

Además, en Iguala utilizaron balas de uso exclusivo de la SEDENA y camionetas de lujo, sin insignias, muy probablemente propiedad del Ejército.

Existen más pruebas de la participación de la institución castrense y de la PF:

Llamadas desde el Campo Militar del teléfono de un estudiante asesinado

Julio César Mondragón fue uno de los estudiantes asesinados. Su cuerpo apareció en la mañana del 27 de septiembre visiblemente torturado y su rostro, desollado. Pero el costoso celular que portaba (regalo de su esposa, que lo había comprado usado) seguramente despertó el instinto de rapiña de uno de sus verdugos, que lo robó y lo usó durante más de seis meses. Al investigar las llamadas salidas o recibidas del teléfono de Julio César, provenían del Campo Militar en la ciudad de México y del CISEN.

El asesino de Mondragón era un militar o un miembro del CISEN. El criminal no sabía que no basta con cambiar el chip de un teléfono móvil para que sea inidentificable, porque conserva el IMEI (International Mobile System Equipment Identity), un código pregrabado en estos teléfonos que identifica al aparato de forma exclusiva a escala mundial y es transmitido al comunicarse. “Es la huella de identidad del dispositivo móvil, equiparable

a la huella digital de las personas”, explican Francisco Cruz, Félix Santana Ángeles y Miguel Ángel Alvarado, autores del libro *La guerra que nos ocultan* (5) Ellos descubrieron que la actividad del número telefónico “siguió registrando acciones y coordenadas hasta el 4 de abril de 2015”, seis meses después. “Las coordenadas que generaron la actividad después [...] condujeron a un viaje sin desvíos hacia las entrañas de uno de los campos militares más importantes del país, en la Ciudad de México.

“Anotados en un documento confidencial que la empresa Telcel entregó a la PGR el 31 de agosto de 2015, esas llamadas forman parte de las 31 actividades que registró ese teléfono...” En cinco de las llamadas el teléfono estaba en el CISEN y en siete en el campo Militar número uno.

Dijimos que el Ejército había infiltrado en la Normal de Tixtla a tres soldados que se hacían pasar como estudiantes y los espían. La revista *Proceso* hizo el hallazgo. Obviamente la SEDENA violó la ley al vigilar una escuela y más con espías, y debiera ser llamada a cuentas por eso. Uno de estos soldados, Julio César López Patolzin, de 25 años, está en la lista de los 43 desaparecidos pero, a diferencia de la enorme mayoría, su teléfono tuvo actividad días después del 26 de septiembre... desde las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en Iguala. (6) Lo que admite sólo dos posibilidades:

1. El soldado-espía sobrevivió a la desaparición y estuvo en el 27 Batallón, en donde usó su teléfono, es decir, confirma la participación de esta fuerza armada en La Noche de Iguala.
2. Si López Patolzin fue ejecutado, lo hizo el Ejército, uno de cuyos miembros se apropió de su aparato telefónico y luego lo usó en esa instalación militar.

En ambas posibles el Ejército es represor. El espía terminó siendo una prueba irrefutable de la participación de la Sedena en el crimen.

A pesar de las pruebas, cuatro meses después, en enero de 2015, el procurador Murillo Karam afirmó: “no hay una sola evidencia de la participación del Ejército en los sucesos de Iguala”. (7) Esta mentira forma parte fundamental de lo que este funcionario consideró la “verdad histórica” sobre Iguala.

El procurador de Peña Nieto no se imaginaba que siete años después, el gobierno de AMLO, que había considerado que la versión sobre Ayotzinapa de su antecesor es una construcción falsaria, iba a presentar una tesis sobre Iguala en la que también exime de responsabilidad al Ejército (e igualmente traslada la motivación de la carnicería a narcos afectados en sus intereses). Es el Informe de la Comisión de la Verdad, escrito por Alejandro Encinas,

subsecretario de AMLO, y presentado el 18 de agosto de 2022. El GIEI y el Comité de familiares de los 43 lo descalificaron.

El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas no pudo mantener la mentira sobre Ayotzinapa en su versión 4T ni diez días. El 26 de agosto de 2022, en la conferencia matutina de ese día, ante AMLO que lo miraba estupefacto, pronunció lo que hemos colocado como epígrafe en este capítulo:

Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel José Rodríguez Pérez. (8)

Aunque antepuso las palabras “se presume que”, no quedan dudas sobre la intervención directa del Ejército en Iguala, al provenir la revelación del funcionario que más sabe sobre este crimen. Sobrecoge lo tremendo de su denuncia, con ejecuciones a sangre fría y el nombre y apellido del jefe militar que las ordenó (y que poco después de la cobarde degollina fue ascendido a general).

Sin embargo, el dicho de Encinas no fue recogido casi por ningún medio y periodistas como Loret, López Dóriga y Ciro Gómez no escribieron al respecto. ¿Por qué el subsecretario no incluyó estos hechos en su Informe? ¿Qué más sabe el señor Encinas y que no ha revelado a las familias y al público?

El gobierno federal y el mismo Encinas jamás volvieron a mencionar lo dicho y esperan que la opinión pública dé otra prueba de amnesia.

La conspiración

Iguala 2014 fue una acción concertada entre numerosas instituciones del Estado, atrás de las cuales también hay responsables individuales.

En el centro de la conjura estuvo el Ejército y el gobierno de Peña, aunque pareciera que la operación corrió a cargo de la Policía ministerial de Guerrero y algunas policías municipales, con intervención destacada de la PF. Los delinquentes del cártel GU se encargaron sobre todo de la fase final de la operación.

Aquí nos detenemos en las fuerzas participantes más importantes, sin que pretendamos describir todos sus movimientos en ese día.

La Policía Ministerial, tan activa en Chilpancingo 2011, volvió a estarlo en 2014. “Policías ministeriales estuvieron en la vía de ingreso a Iguala desde el Palacio de Justicia y en la zona de Juan N. Álvarez hasta la Bode-

ga Aurrera, es decir, en los escenarios donde se dieron las desapariciones. **Policías ministeriales** hablaron con policías municipales en el escenario del Palacio de Justicia, justo en el momento en que se estaban dando las agresiones contra los normalistas, con palos, piedras, gases lacrimógenos y disparos, destruyendo los vidrios y llantas del autobús para obligar a los jóvenes a bajarse.” (9) Los normalistas que tripulaban el llamado quinto camión, fueron “perseguidos en un periodo de entre las 11h y las 00h30 de la madrugada del 27 de septiembre, entre otros, por **policías ministeriales** en un carro blanco”. Esta fuerza cumplió el papel de coordinación de las distintas fuerzas atacantes a través de “El caminante, probable Policía Ministerial”, según el GIEL. Este personaje mantuvo 102 llamadas telefónicas esa noche e igualmente fungió coordinando las comunicaciones “entre el aparato del Estado y GU.” (10)

Atrás de esta policía estaba el **gobernador Ángel Aguirre**, muy probablemente su sobrino Ernesto y el **procurador Iñaki Blanco**.

Acerca de la **policía municipal de Iguala**, el teléfono de su jefe muestra “comunicaciones fundamentalmente con el alcalde Abarca, su esposa y un número importante de policías municipales y de tránsito. Pero, además, FF se comunicó con Policía Federal, con El Caminante, [...] así como el teniente J.G., jefe de SIIO de SEDENA. (11)

Policía Federal

Así como lo hizo en Chilpancingo, en Iguala esta policía disputó protagonismo con otras. “Luis Pérez Martínez, estudiante de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ declaró el 27 de septiembre de 2014 ante el Ministerio Público que luego de que salieran de la central de autobuses de Iguala en dirección a Tixtla, los policías municipales con un vehículo tipo patrulla les obstaculizaron la circulación, [...] y que al momento... llegaron elementos de la Policía Federal y ellos fueron los que dispararon en contra de mis compañeros, hiriendo a varios... y resultó muerto uno de ellos, por lo que los demás compañeros se bajaron de los autobuses y salieron corriendo para protegerse de las balas de los federales, por lo que se pusieron atrás de los autobuses y otros se tiraron al piso... los federales empezaron a recoger los casquillos para no dejar evidencias de los hechos” (12)

La PF también fue la atacante del “Quinto Camión” en el que se transportaban los muchachos, aunque para suerte de los 14 chicos que iban en éste, se bajaron del vehículo, corrieron más rápido que sus perseguidores y encontraron refugio en la colonia aldeaña.

La Visitaduría de la PGR consideró “necesario y trascendente evaluar la participación de la Policía Federal en Iguala”. “La mayoría de los casquillos

que se encontraron en las escenas de crimen no son de las armas de las policías municipales de Iguala y Cocula, y la Policía Federal portaba armamento del mismo calibre esa noche.” (13)

LD, uno de los policías federales, declaró a la PGR que “ordené al oficial de guardia suboficial AEH informara a la ciudad de México, es decir a través de tarjeta informática a las diferentes áreas a donde informamos de todo acontecimiento relevante”, y entre los que recibieron sus comunicaciones estaba “el titular de la coordinación estatal de la policía federal en Guerrero”. **Implicados: Miguel Ángel Osorio Chong**, secretario de Gobernación, bajo cuyo cargo estaba en ese sexenio la PF, **Luis Miranda**, brazo derecho de Peña Nieto en contención de movimientos sociales, y Omar García Harfuch, coordinador estatal de la policía federal en Guerrero, que recibía en tiempo real la información.

Huitzucó

Esta policía estuvo en el ataque habido en el “Puente del Chipote”, en donde desaparecieron todos los estudiantes. Un testigo escuchó un diálogo entre un policía igualteco y dos elementos de la PF al que al arribar al lugar preguntaron: “¿Qué pasa con los chavos?”, a lo que contestó. “Se los van a llevar a Huitzucó. Allá que el Patrón decida qué va a hacer con ellos”. Como si la respuesta fuese obvia, el agente de PF dijo: “Ah, ok, ok. Está bien”.

Implicado: Rubén Figueroa, ex gobernador de Guerrero, obligado a renunciar en 1995, luego de la matanza de 22 campesinos de la OCSS. Muy probablemente él sea “El Patrón”. Existe otro hecho que fortalece la tesis de que Huitzucó tuvo que ver con la desaparición de algunos jóvenes. Uno de los soldados infiltrados, Julio César López Patolzin, tuvo activo su teléfono a las 22: 21 horas, cerca o en el Palacio de Justicia, lugar en el que tras el ataque a uno de los buses los estudiantes fueron desaparecidos. “Posteriormente, a las 23.47 se le envía un mensaje [a López Patolzin] de dos vías desde las coordenadas que corresponden a la antena de la calle Pinos, en Huitzucó.” (14). No fue posible determinar en dónde se encontraba a esta hora el espía, pero el hecho de que muy probablemente algún militar se haya comunicado con él desde Huitzucó, permite suponer que fue un sitio de concentración de algunos de los chicos que estaban desapareciendo.

CISEN

El centro de espionaje nacional de la época tenía una sede en Iguala que estaba a tan solo 200 metros del Palacio de Justicia, en donde fueron desaparecidos algunos jóvenes. Como dijimos, el Centro también les hacía se-

guimiento a los normalistas y, lo mismo que pasa con la SEDENA, sólo reporta hasta las 21:21, es decir, esta institución se sumó al llamado “apagón informativo” a partir del comienzo de los ataques. (15) El espionaje estaba dirigido por Eugenio Ímaz, era parte de la SEGOB e informaba directamente a Peña Nieto.

Del análisis de las llamadas telefónicas entre las distintas fuerzas participantes, el GIEI dice que “el 27 BI no llevó a cabo sus actuaciones de forma aislada, sino en el contexto de comunicaciones con los **responsables superiores**, aunque no se conozca su contenido.” Agrega que “las actividades de información y seguimiento fueron ordenadas por DN1 (se refiere al secretario de Defensa, **general Salvador Cienfuegos**) y llevadas a cabo por la ZM35, 27BI, 41 BI, 50 BI”; o sea, los comandantes de la zona militar asentada en Chilpancingo y en los batallones de infantería próximos. “Todo ello muestra un comportamiento coordinado, de ocultar los hechos o, en su caso, de no proporcionar la información existente. Incluso la adulteración de bitácoras, de números de las patrullas lo demuestra.

“Todas las corporaciones conocían en tiempo real lo que estaba sucediendo”. (GIEI vi 35) Se dio una “actuación conjunta de autoridades en el ámbito estatal y federal durante la llegada al centro de Iguala y el ataque a los estudiantes”. “Cuando el GIEI preguntó a un testigo protegido implicado en los hechos cómo eso fue posible, señaló: “Teníamos el control de todo, la organización era el Estado...” (16). La revelación es tan cínica como exacta: se echó mano de instituciones estatales para confabularse contra jóvenes inermes. Con un añadido: la fórmula debe incluir a la Delincuencia Organizada: **Fue el Estado + D.O.**

En contra de las versiones de Murillo Karam y la de Encinas-AMLO, que plantean que la SEDENA, la PF, Aguirre, etc., no tuvieron nada que ver, existen testimonios en los que altos funcionarios aceptaron que la *Operación Iguala* fue su obra.

Algunos familiares de los futbolistas adolescentes del equipo Los Avispones tuvieron un encuentro cinco meses después con Osorio Chong, Murillo Karam, Rosario Robles y Ángel Aguirre, en la ciudad de México, que pudo ocurrir gracias a “contactos personales”. Uno de esos familiares narró que:

Mi hermano estaba muy enojado y se le acercó al gobernador Ángel Aguirre y le dijo:

–Usted no siente nada porque no le tocaron a ningún familiar pero si hubiere sido un hijo suyo quizás aquí demostraría que realmente lo siente.

Aguirre se quedó así como diciendo: ‘te entiendo...’

Entonces dice Osorio: –Nosotros le dijimos a Aguirre que tuviera

cuidado y vean, las cosas se le salieron de las manos.

Y entonces yo digo:

O sea que también ustedes sabían [que los normalistas iban a ser atacados]. Aguirre dice que él le decía a ustedes y ustedes a él, entonces, ¿de qué se trata?

Si ustedes ya sabían cómo iba a estar la situación en Iguala [sabían que los normalistas iban a ser atacados], les digo: ‘¡eso no es válido!’. Y uno me dice: mira, es que los confundieron... [los agresores creyeron que Los Avispones eran estudiantes normalistas].

Y yo le digo: ¿Y si hubiesen sido los normalistas [los agredidos], sería válido para ustedes que los hubieran acabado en ese momento? (17)

Existe otro testimonio, también recogido por un familiar de Los Avispones, que revela que algunos policías ministeriales sabían con anticipación lo que se preparaba. ”Un testigo nos dijo que llamó a un conocido de la policía ministerial para preguntarle si sabía algo de lo que estaba sucediendo, le contesta por qué y fue cuando le dijo que su sobrino estaba en Iguala y que el autobús había sido atacado. Entonces la reacción de él fue decirle: *¿por qué no me dijiste que iba a ir?* ¿Si tú me lo hubieras dicho yo te hubiera dicho que no fuera! (18)

Hay más indicios de que se trató de una confabulación orquestada por el Estado. La periodista Peniley Ramírez tuvo acceso a la versión original del Informe del subsecretario Encinas, es decir, no tiene las numerosas tachaduras del reporte que éste hizo público.

En uno los diálogos telefónicos que sostuvo el alcalde de Iguala José Luis Abarca y que fueron interceptados, existe uno en el que hace alusión al presidente Peña Nieto, que habría estado buscando cómo salir del atolladero:

“El 29 de septiembre [de 2014, el presidente municipal José Luis] Abarca avisó a sus contactos en el Ejército que Tomás Zerón, enviado por Enrique Peña Nieto (EPN), le había propuesto que pidiera licencia y desapareciera. Dijo que le había ofrecido que se declarara autor intelectual de los asesinatos y que luego lo sacarían del país.”

A lo cual respondió Abarca:

“El pendejo de EPN mandó a su sirviente Tomás Zerón a dar una ‘solución’, que me la paso por los huevos: [ésta consiste en] que pida mi licencia y desaparezca.

[...]

Hasta están recibiendo órdenes del gobierno de México porque están

involucrando a Alfa y no quieren manchar su buena imagen.”

Lo relevante de los dichos de Abarca, una de las personas que más saben sobre el crimen, es que le atribuye al gobierno federal y directamente al presidente, la responsabilidad de Iguala.

En el siguiente diálogo entre el Tilo y El Gil, dos jefes de GU, aparece igualmente que la autoría de Iguala fue del gobierno, su partido y que el móvil fue político:

“Y mira dónde terminaron, por el capricho de tus jefes, por la ambición de seguir en el poder.”

[...]

“El que de veras mandó matar a los chavos lo tienes a un lado pero ni modo que digan que él fue, pues cómo cocho, el partido no se puede manchar, por eso quieren echar culpas a otros pa’que esos se libren.”

(19)

En un país como México, que viene de un añejo régimen en el que el PRI era la organización política casi única y aplanadora, la gente se refería al tricolor (todavía hoy algunos lo hacen) como “el partido”.

La confabulación vino desde el gobierno federal, e involucra al entonces presidente EPN y a Luis Miranda, al secretario de Gobernación, Osorio Chong, a la PF y a su coordinador en Guerrero, Omar García Harfuch; al CISEN y a la SEDENA. En Guerrero, al gobernador Aguirre y al procurador Iñaki Blanco, a presidentes municipales, empezando por el de Iguala y a los miembros del cártel Guerreros Unidos. Al ex gobernador y cacique Rubén Figueroa, casi dueño del municipio llamado “Huizuco... de los Figueroa”. La búsqueda de los principales responsables debe subir por la cadena de mando y llegar hasta las cimas.

¿A dónde llevaron a los desaparecidos?

No sé sabe a qué sitios los llevaron y existen muchas hipótesis sobre su destino. Lo único cierto es que no fueron quemados en el basurero de Cocula, como dice el gobierno de Peña Nieto. El GIEI demostró, ayudado por técnicos y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que eso fue un invento.

Entre las hipótesis más fuertes está que un grupo de muchachos fue llevado al 27 BI. Cuando no aparecieron los 43, sus madres y padres, auxiliados por muchos, fueron a Iguala en los últimos días de septiembre de

2014 y caminaron por calles y todo tipo de lugares. “Vecinos” de Iguala les dieron esa información que ha sido una de las bases, durante este tiempo, de su convicción de que la institución castrense fue la principal responsable. (20). De acuerdo con el abogado de los 43, Vidulfo Rosales, un testigo, que ha confirmado su dicho ante el MP y el poder judicial, 25 de los jóvenes fueron llevados al XXVII Batallón (21).

Otra hipótesis es que un grupo de ellos fue llevado a Huitzucó, como hemos visto.

Otra fuerte posibilidad es la planteada por el ex subsecretario Alejandro Encinas, sobre el destino de seis de los jóvenes, asesinados por orden del ahora general José Rodríguez.

Por otra parte, existe una llamada telefónica entre El Gil, jefe de plaza de GU, y Francisco Salgado Valladares, director de Seguridad Pública Municipal, en la noche fatídica. Se tiene la certeza de que un grupo de estudiantes fueron llevados a la cárcel municipal y que estuvieron en sus barandillas. El Gil le pidió al jefe de policía que le entregara a esos normalistas pues los llevaría “a una fosa”. (22)

Existen más versiones. Esta parte de la investigación es la que tiene más zonas oscuras. Al respecto dijeron madres y padres de familia de los desaparecidos en 2022:

“En la actualidad el caso llegó al punto que las líneas de investigación nos conducen a los archivos militares. Es aquí donde se esconden los nombres de los que cometieron el crimen atroz. Es aquí donde se guardan las pruebas que dan cuenta de lo que pasó el día 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala. Es aquí donde se encubre a los criminales que desollaron el rostro de un estudiante. Es aquí donde se oculta a los gorilas que desaparecieron a 43 estudiantes cuyo anhelo era ser profesores. (23)

De acuerdo con Luis Hernández Navarro, “el Ejército se niega a entregar 800 folios de reportes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de la zona norte en Iguala.” “La información que rechaza compartir está relacionada con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. [...]” Cuando Alejandro Encinas era subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), “admitió la existencia de estos fojas.” “En una adenda señaló que él tenía 18 folios de los 800 e hizo públicos varios relacionados con el caso.” (24)

A este punto, está claro que el Ejército impide dilucidar el caso. La cuestión es que en México, de acuerdo con la Constitución, el presidente es el comandante supremo de la institución castrense, es decir, el asunto

no se esclarece ni se hace justicia debido a que AMLO no hace valer sus facultades, lo que podría hacerlo pasar a la “historia como el encubridor de los militares” “y por eso Ayotzinapa no se aclara”, como ha dicho Ricardo Ravelo (25). Además de cómo se valorará a López Obrador en los libros del futuro, podría estar incurriendo en el delito de encubrimiento.

En cuanto a comenzar a hacer justicia en este crimen mayúsculo, es llamativo que el Informe Encinas-AMLO haya contradicho los trabajos del fiscal especial, Omar Gómez Trejo, quien tenía la confianza de los familiares de los 43, y venía haciendo equipo con el GIEI en las investigaciones. Este fiscal solicitó y obtuvo en 2022 que fueran giradas 83 órdenes de aprehensión. Sin embargo, dado que el informe de AMLO-Encinas absuelve al gobierno de Guerrero y a los militares, el presidente consiguió que la FGR se retractara y solicitara no se persiguiera a 21 de ellos, lo que mostró a quiénes estaba protegiendo el presidente: a cinco funcionarios de Guerrero, entre ellos el ex procurador Iñaki Blanco y la magistrada Lambertina Galeana, claramente implicados. La mayoría de los otros eran militares.¹¹

El móvil de Iguala fue “contrainsurgente”

Empecé a preparar este libro hace algunos años debido a que el GIEI y la gran mayoría de reporteros y escritores independientes, todos ellos honrados, sostenían que los motivos de Iguala eran los narcos, que habrían agredido a los estudiantes hasta matarlos debido a que éstos, involuntariamente, habían afectado sus intereses, al apoderarse de un autobús que contenía droga y/o dinero de su propiedad. Tal móvil es esencialmente el mismo del gobierno de Peña Nieto y su procurador Jesús Murillo Karam, cuya “verdad histórica” sostiene que el grupo delictivo Guerreros Unidos agredió a los estudiantes al confundirlos con miembros de una banda rival, Los Rojos, que habrían llegado a Iguala a despojarlos de esa “plaza”.

En octubre de 2014 puse por escrito la tesis de que la carnicería de jóvenes de Ayotzinapa de 2014 fue una represión política, la más sangrienta en México en muchos años. (26)¹²

11 El episodio en el que AMLO frenó las investigaciones de Gómez Trejo, que terminó con la renuncia del fiscal, y que ocasionó que el grupo de expertos extranjeros haya decidido cesar sus trabajos y dejado el país, ha sido magistralmente reconstruido y narrado por John Gibler en “La instrucción: Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa”, Quinto Elemento, 26/09/2023

12 Entre los pocos autores que sostuvieron una tesis similar a la de este libro, está Sergio González Rodríguez, escritor de obras valientes y atinadas como Huesos en el desierto, acerca de las llamadas muertas de Juárez. Sin embargo su material sobre Ayotzinapa, Los 43 de Iguala (Anagrama, 2015), aunque en la forma se parece a este texto, lo considero muy distinto. González Rodríguez sustituye el análisis de la realidad concreta, con las luchas de las masas y sus dirigentes, así como las reacciones de los gobernantes, por los estereotipos de la “guerra fría”, algunos fantásticos, como el creer que en México había más de 25 mil agentes de la CIA y que en Iguala se enfrentaron los intereses de Washington con los de China y la intervención de la guerrilla colombiana de las FARC. Llega a

A fines de junio de 2023 comencé a redactar este libro y semanas después el GIEI publicó su VI y último informe, que sostiene por primera vez, luego de siete años de darle seguimiento al caso, que una importante razón que llevó al Ejército a atacar a los muchachos fue “contrainsurgente”.

Sostiene el grupo de expertos que la institución militar llevó a cabo durante mucho tiempo (no determina cuánto) un **“seguimiento contrainsurgente” contra la escuela**. La “Inteligencia militar de SEDENA tenía desde hacía tiempo como objetivo a la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y [hacía] seguimiento de los jóvenes, de sus comités y asambleas, sus acciones y movilizaciones políticas, en base a un enfoque contrainsurgente. Las movilizaciones y asambleas de los jóvenes de Ayotzinapa estuvieron monitoreadas por agentes de inteligencia militar infiltrados entre los estudiantes [...]. Los documentos de SEDENA muestran el nivel de detalle de dichos informes, así como los objetivos y focalización en personas y actividades.” (27)

El GIEI no da más información sobre tales informes de los espías del Ejército, pero sí evalúa que los uniformados, al tener tal objetivo “contrainsurgente”, cayeron en “una discriminación, una imagen negativa de los estudiantes como parte de la guerrilla en Guerrero y una falta de reconocimiento de su ciudadanía.” (¿?) Considera que esta “visión estereotipada” fue la que los llevó a desatar contra ellos un **“ataque masivo y un ocultamiento de los hechos a gran escala, como el que tuvo lugar posteriormente en este caso.”**

En México, nunca antes una institución con tanta autoridad moral como el GIEI había hecho una denuncia tan directa y cruda contra el Ejército mexicano. El “ataque masivo” contra los jóvenes campesinos con casi cincuenta víctimas letales se debió a que los consideraba subversivos.

La otra “condición” que para el GIEI condujo al Ejército a la Operación Iguala es tan escandalosa como la primera: *“la colusión del narcotráfico y la delincuencia organizada con mandos y miembros del 27 BI de Iguala, junto con otras policías, agentes del Estado y autoridades.”* (28) Esta asociación criminal se desprende de la investigación por el gobierno de EU del trasiego de drogas entre Iguala y Chicago. Las escuchas telefónicas presentadas en el proceso judicial en ese país, en 2014, muestran que GU estaba coludido con mandos militares.

También existen testimonios y declaraciones ante la FGR y aportados ante el juez por testigos protegidos que confirmaron estos hechos. En diversas declaraciones del testigo J. se dice que los miembros del 41 batallón comparaciones injustas y desproporcionadas como sostener que las acciones que llevan a cabo los normalistas cuando secuestran autobuses o piden dinero a los ciudadanos son equivalentes a los delitos de los cárteles de drogas.

y en particular su comandante recibían dinero de la organización criminal y tenían reuniones con jefes de GU. (29) “Esta colusión [entre militares y narcos] es parte de las condiciones que facilitaron que se llevase a cabo la desaparición de los estudiantes”, concluye el GIEI. (30)

Pareciera que para el GIEI lo sustancial del caso está resuelto: instituciones estatales cancerosas, amafiadas con delincuentes, llevaron a cabo la represión política más grande en décadas. Sin embargo, el GIEI se empeña en poner un obstáculo.

Continúa la teoría fantástica del quinto autobús

La afirmación del GIEI de julio de 2023 acerca de que Iguala fue un golpe represivo es **incompatible con la teoría del quinto camión**, que incoherentemente sigue apareciendo en su texto de la fecha mencionada. En las mismas páginas escritas por el GIEI existen dos explicaciones encontradas, que chocan entre sí. En una los estudiantes aparecen como víctimas de un Estado que espía, persigue, asesina y desaparece a los disidentes políticos; y en otra los jóvenes aparecen como víctimas del infortunio, al haber afectado involuntariamente los intereses de fieros delincuentes. Aquí los chicos son asunto de nota roja.

El GIEI, desde sus primeras pesquisas, elaboró la “hipótesis” de que la motivación que condujo al grupo delictivo GU a ordenar al Ejército y policías que les entregaran a los chicos para matarlos y desaparecerlos fue que los normalistas, sin saberlo, se habían apoderado de un autobús cargado de droga de su propiedad que tenía como destino la ciudad de Chicago, en los EEUU. A este vehículo se le conoce como el “quinto autobús” porque antes de secuestrarlo los estudiantes tenían cuatro. Al llegar a la central de autobuses de Iguala, el viernes 26 de septiembre de 2014, los de Ayotzinapa, que llevaban dos vehículos de la empresa Estrella de Oro, se apoderaron de tres más, dos de la compañía Costa Line, y *un quinto, el Estrella Roja 3278*.

Dijo el GIEI en 2016:

Este 5to autobús, que salió por la puerta de atrás de la Central camionera... y después fue parado por policía federal... Los estudiantes que iban en ese 5to autobús sobrevivieron a los hechos pero fueron perseguidos y sufrieron disparos por parte de policías... hasta conseguir salvarse. La opacidad de la existencia de este autobús, las contradicciones evidentes del testimonio del chofer, así como una carta encontrada con su firma que confirma el testimonio de los normalistas, fueron parte de las cuestiones que llevaron al GIEI a plantear

la hipótesis... de que dicho autobús podría haber sido un medio de transporte de la heroína que se produce en la zona... (31) El GIEI basa su teoría en el hecho real de que existía trasiego de heroína de Iguala a Chicago. La Fiscalía de esa ciudad acusó a un capo de GU por trasladar narcóticos a Illinois, escondiéndolos en autobuses comerciales de pasajeros que viajaban de México a Chicago.

La teoría del 5to. autobús carece de asidero factual y de lógica.

Es cierto que existen compañías de autobuses que ofrecen el transporte de pasajeros de Iguala a Chicago, y no es el caso de la empresa Estrella Roja, cuyos vehículos dan servicio a la cercana ciudad de Jojutla, vecina a Cuautla, Morelos, a 200 kms. El bus Estrella Roja 3278 era de tercera clase, modelo 2001, tenía una edad respetable de 13 años y carecía de comodidades, es decir, era inadecuado para llevar a cabo un viaje de 3 mil 500 kilómetros con pasajeros.

De ser cierto el dicho del GIEI, luego de que 14 normalistas se bajaron de este vehículo y que continuó su viaje, éste debió haber sido hacia Chicago a dejar su preciosa carga; sin embargo, fue a Jojutla.

De ser cierto lo del 5to. autobús cargado de drogas, éste hubiese sido el blanco y objetivo de los atacantes. Empero, las mayores agresiones las sufrieron los vehículos que los estudiantes tripulaban desde su escuela, en Tixtla.

El GIEI dice que el autobús presentado para las indagatorias no era el de la Noche de Iguala. Sin embargo, pesquisas llevadas a cabo por medios serios e independientes como la revista *Proceso* y *Amapola Periodismo* concluyeron que sí. El autobús Estrella Roja 3278 ha mantenido las mismas placas, el mismo número de serie y el mismo número económico.

La revista *Proceso* basó sus conclusiones en una investigación de *Forensic Architecture*. Dice que “a pesar de que existe una conexión entre organizaciones criminales en Iguala con el tráfico de drogas en Chicago, esta investigación ha querido demostrar que todavía no se puede probar que un cargamento ilícito estuvo en el Estrella Roja 3278, ni que este autobús hubiera sido modificado durante el proceso de la investigación para encubrir a los responsables.” (32)

Amapola Periodismo publicó que “el peritaje acerca de si este camión tenía un habitáculo para esconder drogas, arrojó que no. (33)

En la teoría del camión cargado de drogas, el que los estudiantes se hayan apoderado de éste, es lo que provocó la violenta respuesta de los capos de GU y de sus socios policiales y militares. Sin embargo, los tiempos no cuadran: los chicos llegaron a bordo de dos camiones a la central de Iguala

a las 21:09. Tardaron unos minutos en apoderarse de otros tres autobuses, entre cinco a diez minutos, por muy rápido, es decir, a las 21:19. A esa hora salieron de la terminal y a esa hora, según tal teoría, un capo de GU, al enterarse de que perdía su autobús, dio la orden de recuperar la carga y de acabar a los chicos. A las 21:30 empezó el ataque armado contra ellos por policías de cuando menos cuatro corporaciones distintas. De ser cierto que el capo ordenó recuperar la carga, el tiempo no da. En diez minutos no se pueden trasladar desde sus sedes hasta las calles del centro de Iguala policías que iban perfectamente pertrechados. Sólo ponerse el equipo antimotines lleva más de diez minutos.

Lo más importante es que esto contradice la propia investigación del GIEI, que afirma que la preparación para el ataque era “**desde hacía algunas horas**”, por parte de “policías de Iguala así como de ciudades cercanas y con policías coludidas con la delincuencia organizada y Guerreros Unidos. [...] **Debido a esa preparación**, esas policías llegaron poco después de que los jóvenes salieran de la estación de autobuses y se iniciara el ataque”, sostiene el GIEI. Pero en la teoría del 5to. autobús, los ataques, comenzados a las 21:30, fueron el resultado de un hecho fortuito, de un accidente, ocurrido a las 21:19, cuando los estudiantes se apoderan sin saberlo de un vehículo que contenía heroína.

En cuanto a las contradicciones entre una carta escrita por el chofer y sus declaraciones, el chofer aclaró que él la había firmado pero no escrito. ¿Cómo? En México muchos empresarios, como los rufianes de Estrella Roja, obligan a sus empleados al contratarlos a firmar en blanco papeles que después pueden ser convertidos en renunciaciones que los eximen de indemnizarlos. El referido manuscrito fue hecho por un ejecutivo de la compañía de autobuses.

El GIEI afirma que el Estrella Roja, luego de que los estudiantes se bajaron de éste, fue custodiado por patrullas policiales hasta la caseta de pago, a unos 30 kms. Sin embargo, los videos del hecho no sostienen lo anterior. Sin estudiantes a bordo, la unidad dejó de ser del interés de los atacantes.

El Estado represor puede ser más brutal

Hemos dejado para el final el argumento que el GIEI considera más fuerte sobre el quinto camión. Dice que “la hipótesis de que este autobús podría estar cargado de heroína o dinero del narcotráfico” fue la “motivación de un ataque tan brutal, con gran potencia de fuego, debido a la importancia de los intereses que se veían amenazados con esa acción.”

No obstante, la brutalidad es una característica del Estado represor

mexicano, no es exclusiva de los criminales, como hemos visto aquí en distintos pasajes. Agreguemos ahora la matanza en Acteal, que rivaliza en crueldad con Ayotzinapa y supera en barbarie a las matanzas de los narcos.

El levantamiento del EZLN encontró como respuesta, para que no se extendiera a Guerrero, las matanzas en Aguas Blancas y en El Charco, en los años 1996 y 1998, a las que nos hemos referido. Fue en Chiapas donde el gobierno de Ernesto Zedillo y los militares cometieron atrocidades sin precedentes, el 22 de diciembre de 1997, en la población de Acteal, municipio de Chenalhó: 45 indígenas tzotziles fueron asesinados. “34 eran mujeres, 16 de ellas niñas, y cuatro niños; 26 personas más resultaron heridas, en su mayoría niños que quedaron con lesiones permanentes.”

De acuerdo con Carlos Fazio, fueron masacrados por unos 80 hombres armados, entre los que había personal de la Brigada de Policía Militar y de la Secretaría de la Defensa Nacional vestidos de civil. En una operación que se extendió durante siete horas, las víctimas fueron asesinadas con disparos de fusiles FAL y G3, estos últimos también usados en la Noche de Iguala. “Oficialmente, el responsable de la matanza fue el grupo paramilitar Máscara Roja, de filiación priísta, preparado y entrenado por el Ejército Mexicano”. “El grupo de civiles armados actuó respaldado por militares, policías judiciales y de seguridad pública del estado, que se encontraba a menos de 200 metros de distancia de la comunidad.”

Fazio explica que la carnicería fue un “castigo ejemplar dirigido a diluir por la vía del terror la resistencia civil. Respondió a una lógica contrainsurgente de guerra difusa contra el EZLN, sus bases de apoyo y las organizaciones civiles y eclesiales solidarias, pero fue también una reacción racista, autoritaria y patológica del gobierno zedillista y los militares contra el ejercicio de las autonomías indígenas.” Cuatro mujeres embarazadas, asesinadas con armas de fuego, *fueron mutiladas con machetes y sus vientres profanados, para extraer sus fetos*. El que la enorme mayoría de las víctimas fueran mujeres, niñas y niños, así como el sadismo, merece estudiarse con las nuevas herramientas desarrolladas por las feministas y sus teóricas. Son facetas del Estado contrainsurgente, que sacó a flote sus impulsos más salvajes y su odio profundo contra las mujeres. Algo tan diabólico sólo se repitió con el desollamiento del estudiante normalista Julio César Mondragón, en Iguala 2014.

Pocos días después de Acteal, se conoció el Plan de Campaña Chiapas 94 de la Sedena, que vino a demostrar que la operación fue “un crimen de Estado.” “Redactado por quien se ostentaba bajo el nombre clave de S-3 –presumiblemente el general Mario Renán Castillo–, dicho plan tenía como objetivo destruir la voluntad de combatir del EZLN, aislándolo de la población civil” “en beneficio de las operaciones del Ejército.” (34)

La solidaridad de clase salvó a los chicos del 5to. autobús

Cuando 14 estudiantes se apoderan del Estrella Roja 3278, el conductor les solicita detener la marcha de la unidad al salir de la central de autobuses para poder entregarle a un familiar unas cosas, a lo que acceden y se detienen 11 minutos. Este hecho coadyuva a salvar sus vidas. Al atrasarse, este autobús ya no va en fila junto a los cuatro vehículos que llevan a sus compañeros en una ciudad que a las 9 de la noche está saturada de tráfico. Los policías ministeriales y de la PF que los esperan para herirlos, capturarlos y desaparecerlos están desconcertados porque este autobús, que debió haber pasado hace ya más de diez minutos, no aparece. El quinto camión se queda atorado en el tráfico a 150 metros del Palacio de Justicia, en donde está un autobús Estrella de Oro rodeado de patrullas. Los estudiantes *descienden* para ver que sucedía con sus compañeros, cuando en ese instante aparece un policía federal, quien al bajar de su patrulla les dice con finura: “¡hijos de su puta madre, alto!”. Los estudiantes estaban fuera del autobús cuando uno de ellos gritó: ‘¡corran paisas!’” y fueron perseguidos por policías que les dispararon (35). Estos estudiantes se salvaron debido a que escaparon antes de que sus agresores lograran detener al autobús con la mayoría o todos ellos *dentro*, como sí lograron hacerlo con los dos vehículos Estrella de Oro, en los cuales los chicos fueron desaparecidos. Estos dos autobuses actuaron como calabozos.

El haber permitido que el 5to. autobús se haya detenido para que el chofer pudiera resolver un asunto familiar, los salva. Pudieron haberse rehusado. Su cortesía nació de su solidaridad de clase. Dentro del proletariado todos tenemos un familiar, amigo, conocido o vecino que es chofer. El operador del Estrella Roja, al ver su unidad secuestrada repentinamente por los normalistas, supo que sus planes de los siguientes días cambiaban. Y los muchachos quisieron ayudarle.

La buena estrella de los 14 de Ayotzinapa fue la mala suerte para los pasajeros de la unidad de Los Avispones de Chilpancingo, que fue confundido con ese quinto autobús y por eso los agentes policiacos le dispararon a matar.

Su moral y la nuestra

William Shakespeare enseña que un gran crimen obliga al asesino a cometer uno más, luego otro y otro... De esta antigua ley no se salvan los criminales de Ayotzinapa y quizá hubiesen asombrado al dramaturgo.

La Noche de Iguala causó una conmoción nacional e internacional inesperada para los gobernantes. Les fue urgente darle un “cierre” al asunto. Una semana después, el 4 de octubre de 2014, fue encontrada una fosa común con 28 cadáveres en reciente estado de descomposición en Pueblo Viejo, cerca de Iguala. El fiscal de Guerrero Iñaky Blanco declaró que correspondían a los estudiantes, pues así lo habrían confesado algunas personas detenidas. El diario de Guerrero, *El Sur*, tituló así la noticia: “Jefe del crimen organizado ordenó que mataran a los normalistas que detuvo la policía: Iñaky” Blanco, procurador de Guerrero (36).

La madre de uno de los chicos desaparecidos recuerda cómo vivió la noticia:

Sin que nos lo dijeran abiertamente comprendimos que su intención era ponernos sobre aviso de que ahí podían estar algunos de nuestros hijos. Nos aclararon que de 15 días a dos meses estarían en posibilidades de decirnos quiénes eran. Para nosotras fue lo peor, porque imaginamos que ahí se encontraban varios de nuestros hijos. Por más que nos negábamos a creerlo siempre terminábamos llorando... Esta forma de difundir los hallazgos fue muy cruel, porque para mí era recibir puñaladas. Todo era sufrimiento y mucho coraje, porque se notaba que lo que decían las autoridades lo hacían con la intención de herirnos. Nos trataron como seres que no valemos nada, como si nuestro dolor como padres y madres les creara más problemas porque se empeñaban en hacernos sufrir y en manifestarnos con sus actitudes de enojo y desprecio. (37)

Para echar abajo esta estratagema fue decisivo el accionar del EAAF. El equipo argentino de forenses, exigió que la entrega de restos mortales debería hacerse conforme a los más altos estándares.” (38) Las autoridades dieron marcha atrás.

En 2023 supimos que el testigo protegido J. señaló que la aparición de las fosas de Pueblo Viejo se dio de forma coordinada “entre GU con autoridades estatales, para tratar de hacer ver que en realidad eran los cuerpos de los normalistas.” (39)

Restaba saber de quiénes eran esos cadáveres, provenientes de personas que tenían pocos días de haber sido asesinadas, para que fuera creíble que eran de los estudiantes. Las investigaciones del GIEI arrojaron que “dos testigos señalaron en sus declaraciones que después del ataque a los normalistas, desaparecieron muchos indigentes que estaban habitualmente en las calles...” (40)

La causa Ayotzinapa también debe hacer justicia a estas personas asesinadas.

Los normalistas desaparecidos

Los alumnos de Ayotzinapa eran espiados por los soldados infiltrados y estaban bajo el escrutinio de la Policía Federal y otras agencias. El resultado fue que el GIEI nunca encontró en sus archivos, así como en las minutas de Guerrero Seguro que los jóvenes estuviesen involucrados en el narcotráfico. (41) Sin embargo, escritores de derecha y la misma CNDH han hecho numerosas insinuaciones baratas acerca de los jóvenes.

Los estudiantes objeto de este libro eran parecidos al resto de jóvenes mexicanos: les gustaba el fútbol, el rock, la música, los videojuegos. Uno de sus parámetros para juzgar a sus compañeros era si les gustaba “echar relajo” o “desmadre”, entendiendo si tenían sentido del humor, de la diversión y de causar gracia.

También tenían muchas diferencias con otros jóvenes. Comenzando porque eran pobres. Muy pobres. Sobre José Ángel, uno de sus compañeros recordó que en su habitación en la escuela, que compartía con otros dos, “no hay un solo mueble, ni camas, sólo pliegos raídos de hule espuma”.

Una de las madres recordó que a su hijo “le falta un dedo, cuando estaba chiquito lo mordió el molino, estaba moliendo mi cuñada y él metió el dedo en la banda.”

A Magallón le decían así porque su familia tiene un grupo musical con ese nombre, es de música tropical de la Costa Chica, y se la pasaba cantando cumbias, tocaba trompeta y tarolas.

La mayoría de ellos trabajaba en algo en sus pueblos. Ayudaban en las labores del campo, otro hacía pan en la madrugada, uno más cortaba cabello.

Algunos eran bilingües, provenientes de comunidades indígenas. Eran los más pobres. Muchos de ellos hubiesen preferido no estudiar en Ayotzinapa pero su pobreza no les dejó alternativa.

Eran diferentes porque la escuela les ofrecía, a los que quisieran, formación política en la “Casa activista”. Alrededor de 10 de los 43 formaban parte de ella y los conocimientos que adquirieron los hacían destacar. A uno de ellos le encantaba la lectura y tenía una memoria prodigiosa. En una ocasión se pasó “diez minutos declamando, fue admirable”, recuerda uno de sus condiscípulos. Otro de estos muchachos politizados es recordado porque “argumentaba muy bien”. A uno más le decían Shaggy, “se parece al de Scooby Doo y, como Shaggy, se enoja mucho con la desigualdad.”

Uno de los chicos “dejó una sobrina de un año, de su hermana soltera, de la que él era figura paterna.”

Al llegar a la escuela “Jorge Antonio estaba llenito pero luego adelgazó”, dice su madre.

El papá de Cristian, de 18, es un jornalero que ganaba 600 semanales, “siempre y cuando tuviera trabajo”, aclara.

El papá de Felipe Arnulfo, “articula con suma dificultad algunas palabras” en español, y las demás las traduce otro padre. Es un campesino de Ayutla.

Pero otros padres, “no están, no existen.”

La de Ayotzinapa es una escuela en la que, mientras estás en una clase, pueden tocar a la puerta de la aula unos vecinos de Tixtla, que le explican a los alumnos que tienen un enfermo y necesitan donadores de sangre. “El Frijolito fue el primero en ponerse de pie, fuimos seis a donar, pero los médicos sólo aceptaron al primero porque el resto padecían de anemia, gripa, dolores musculares...” (42)

El padre de Christian Tomás Colón Garnica es albañil o trabaja en el campo, y su madre hace chocolates para venderlos con pan. Christian es de Tlacolula, Oaxaca, y dos meses antes de su desaparición había cumplido 18 años. Su pueblo carece de drenaje y pavimentación. La mayoría de las casas son de madera y lámina. En su casa hay una mesa con imágenes religiosas y veladoras encendidas.

Cristian estudió en el CETIs y se especializó en computación, que es una de las cosas que le apasionan. El 16 de julio de 2014 partió a la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos y dejó una caja de libros: -le gustaba leer mucho, le gustaba mucho estudiar, casi no veía televisión-. La tarde del 23 de septiembre habló por teléfono con su familia por última vez, dijo que tenía amigos y que estaba contento de estar en esa escuela, que trabajaban en el campo y le gustaba vivir ahí. Tenía planeado visitar a su familia en diciembre.

Sus padres se enteraron de su tragedia hasta tres días después, por un pequeño radio que tienen. Al día siguiente su padre tomó rumbo hacia Ayotzinapa. Su esposa le siguió cuatro días después. Sus vecinos la apoyaron para trasladarse.

“Ahora ya estoy muy cansada para ir a las marchas, pero rezo y le pido a dios que regrese y que les dé fuerzas a ustedes para seguir luchando, para que el gobierno no se salga con las suyas”, le dijo la mamá a Juan Magariño de la Cruz. (43)

* * *

Los normalistas que fueron desaparecidos pelearon un largo tiempo en condiciones sumamente desventajosas. Según el agente de inteligencia militar EM, resistieron arriba del autobús más de una hora. “Los agentes policiales de Iguala rodearon al autobús y golpearon las ventanas hasta romperlas. A las 23:00 horas aún intentaban bajar a los estudiantes del autobús. Las personas que venían abordo estaban muy agresivas y arrojaban piedras. Llegaron otras tres camionetas de la Policía Municipal a apoyar, estos últimos llegaron más agresivos ya que les aventaron dos granadas lacrimógenas por las ventanillas del autobús, después de eso empezaron a bajarse personas jóvenes que gritaban ‘AYOTZI VIVE’, ‘AYOTZINAPA VIVE.’” (44)

Ciudad de México, mayo de 2024.

FIN

FUENTES Y REFERENCIAS:

1. Hernández, Anabel, *La verdadera noche de Iguala, Mx.*, Grijalbo, pp 51-53.
2. <https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngelAguirreRivero>, consultado el 08/04/2024.
3. Navarro Gallegos, César, *Tlachinollan, XXI Informe*, junio 2014/junio 2015, Tlachinollan.
4. Hernández Navarro, Luis, *Tlachinollan, Ayotzinapa y el normalismo rural, XXI Informe*, junio 2015, págs. 95 y ss.
5. *Op. cit.*, págs. 348-9 y 356.
6. Flores Contreras, Ezequiel, “El enigma del normalista-soldado”, *Proceso*, 11/oct/2015.
7. Villamil, Jenaro, *Ayotzinapa, la mentira histórica al desnudo*, *Apro*, 18.08.2015.
8. AMLO, conferencia de prensa, 26/08/2022, minutos 48.36 – 48. 48.
9. GIEI, II, pág. 79.
10. GIEI, VI, págs. 59 y ss; 67.
11. GIEI, VI, *Análisis técnico sobre localización, relaciones comunicacionales y desplazamientos*, pág. 67.
12. GIEI, II, pág. 58.
13. GIEI.
14. GIEI, II, 74.
15. GIEI, VI, pág. 96.
16. GIEI, VI, pág. 36.
17. GIEI, II, pág. 46.
18. GIEI II, págs. 42-43.

19. Ramírez, Peniley, Ayotzinapa, el encubrimiento, Reforma, 24/9/2022.
20. Tlachinollan, El Naufragio de la Verdad, XXVIII Informe, agosto 2022, págs. 90 y ss.
21. Quadratín Guerrero, entrevista, abril 2024.
22. Tlachinollan, El Naufragio de la Verdad, XXVIII Informe, agosto 2022, págs. 101-102.
23. Declaración de las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa, 13/08/2022.
24. Hernández Navarro, Luis, Ayotzinapa, lejos de la luz al final del túnel, La Jornada, 16/1/2024.
25. Astillero, FB, Conversación con Julio Hernández López y Julio Ronquillo, 8/03/24.
26. Ruiz, Cuauhtémoc, “Ayotzinapa, estos son los responsables”, Pluma, invierno 2014.
27. GIEI, VI, pág. 114.
28. GIEI, VI, pág. 103.
29. GIEI, VI, pág. 104.
30. GIEI, VI, págs. 104-106.
31. GIEI, II, págs.15-16.
32. Huerta, Irving, Ayotzinapa: Registros e imágenes debilitan la hipótesis del quinto autobús, Proceso, 26/09/2019.
33. Mosso, Lenin “Yo ya dije todo lo que sé”: chofer del quinto camión de la noche de Iguala, Amapola Periodismo, 1/03/ 2020.
34. Fazio, Carlos, Acteal: disculpa e impunidad, La Jornada, 7/09/2020.
35. Tlachinollan, XXI Informe, agosto 2015, pág. 143.
36. Tlachinollan, La investigación del caso Ayotzinapa, junio 2015, 160 -161.
37. Tlachinollan, XXI Informe, pág. 185.
38. Tlachinollan, XXI, 162.
39. GIEI, VI, págs. 256 y ss.
40. GIEI, VI, 256 y ss.
41. GIEI, VI, 29.
42. Tlachinollan, XXI Informe, 2015)
43. Magariño de la Cruz, Juan y López Vázquez, Carlos Alberto, Pluma, invierno 2015)
44. GIEI, II, págs.75 y 124.

Un gran libro, riguroso, estremecedor y bien escrito: Aldo Casas

Sobre el libro Ayotzinapa, imbatible, y el Estado contrainsurgente, escribió el teórico marxista argentino Aldo Casas:

Hoy pude comenzar a leer el borrador del libro. Y una vez que comencé no pude dejar de leer hasta terminarlo. Me parece un gran libro: riguroso, estremecedor, bien escrito. Mientras lo leía no pude evitar recordar el impacto que me produjeron hace muchos años “Operación Masacre” y “¿Quién mató a Rosendo”, del inmenso Rodolfo Walsh. El libro “Ayotzinapa, imbatible...”, me permite entender un poquito mejor el fascinante, complejo y trágico mundo que es México. O tal vez sería mejor decir que me permite saber cuánto desconozco del mismo.

La *Noche de Iguala* (septiembre de 2014), en la que seis personas fueron asesinadas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos, generó un sinnúmero de artículos, libros e investigaciones. Sin embargo, en ninguna publicación se recreó el contexto político y social. Y esto es uno de los aportes al tema que contiene el libro de Cuauhtémoc Ruiz, que sostiene la tesis de que la situación de Guerrero en los años 2012 y siguientes era de gran efervescencia y protesta social, lo que condujo al Estado a cometer una represión política mayúscula. Mediante una investigación exhaustiva se demuestra la cara violenta de los gobernantes, tanto en los años recientes como hace décadas. Aparece la responsabilidad y participación del Ejército, la Policía Federal y otras policías en Iguala, auxiliados por delincuentes.

En este texto no cabe el móvil de que los crímenes fue que los normalistas afectaron involuntariamente los intereses de narcotraficantes. Tras esa máscara aparece el rostro cruel, descarnado y sanguinario del Estado, que cometió una matanza como la de Tlatelolco en 1968, ahora en la ciudad de Iguala, 46 años después.